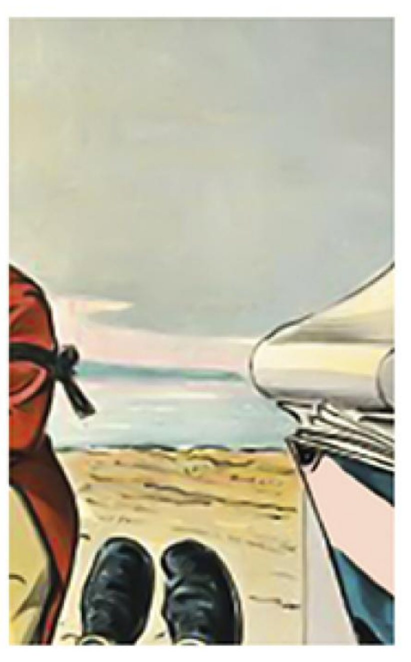
Augusto Zamora R.

Malditos libertadores

Historia del subdesarrollo latinoamericano











Siglo XXI / Serie Historia

Augusto Zamora R.

Malditos libertadores

Historia del subdesarrollo latinoamericano



En la historia de América Latina hay un lugar común compartido por todos los análisis, con independencia de la ideología desde la que operan, y es que la responsabilidad del subdesarrollo del continente proviene de la época colonial y su protagonista, el malvado Imperio español. Pero en historia y geopolítica no hay ni imperios malvados ni benevolentes, solo imperios que ejercen el imperialismo. Este interesado relato, más que historia, es un mito inventado por las oligarquías para perpetuarse en el poder y que les sirve de pretexto para esconder su culpabilidad en todos los horrores que han provocado desde el momento mismo en que tomaron el poder. Un mito exitoso, debe admitirse, pues fue asumido de forma acrítica por las izquierdas, que, de esa forma, se convirtieron en justificadores de las barbaridades de las oligarquías latinoamericanas, desde el siglo XIX hasta el presente. De ese modo, las oligarquías han podido mantener inalterable el *statu quo* nacido de la independencia, es decir, el modelo neocolonial, que facilita el expolio de sus países por la potencia de turno a cambio de apoyarlas en el control de los países y en la salvaguarda de su obscena acumulación de riqueza.

De esos mitos y de sus consecuencias trata este *Malditos libertadores* que, analizando, desde los extremos hasta el centro, la labor de libertadores como Simón Bolívar, pasando por dictadores como Pinochet, hasta dirigentes políticos como Jair Bolsonaro, nos invita a mirar al pasado para desenmascarar la «versión oficial» y pensar el futuro del continente latinoamericano. Augusto Zamora R. reivindica el derecho de la memoria que se le ha negado al pueblo latinoamericano para que este pueda marcar un nuevo rumbo que ayude a corregir esta situación.

Augusto Zamora R., exembajador de Nicaragua en España, ha sido profesor de Derecho internacional público y Relaciones internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido, asimismo, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, además de profesor invitado en distintas universidades de Europa y América Latina. Fue director jurídico del Ministerio del Exterior y jefe de gabinete del ministro del Exterior de 1979 hasta 1990. Formó parte del equipo negociador de Nicaragua en los procesos de paz de Contadora y Esquipulas, desde su inicio hasta la derrota electoral del sandinismo. Abogado de Nicaragua en el caso

contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia, ha participado en numerosas misiones diplomáticas. Miembro de número de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, ha colaborado, tanto en España como en Iberoamérica desde hace más de una década, en diarios como *El Mundo* o *Público* y revistas como *PAPELES de Relaciones Ecosociales y Cambio Global*. Entre sus obras cabe destacar *El futuro de Nicaragua* (1995; 2.a ed. aumentada, 2001), *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (1999), *El derrumbamiento del Orden Mundial* (2002), *La paz burlada. Los procesos de paz de Contadora y Esquipulas* (2006), *Política y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos* (2016; 3.a ed. aumentada 2018) y *Réquiem polifónico por Occidente* (2018).

Diseño de portada
RAG

Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España

Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028

www.sigloxxieditores.com

ISBN: 978-84-323-1977-8

INTROITO SIN MÚSICA

Llevo escribiendo este libro treinta años. Lo he escrito, reescrito, vuelto a escribir y, aun así, no he logrado que se haga pasado descompuesto. Oprobiosamente, los hechos de que trata (históricos, económicos, políticos) siguen tercamente de actualidad, como si de una historia detenida se tratara. Como un círculo vicioso y fatal del que no parecemos capaces de salir. Reflexionar sobre este bucle es imprescindible para poder salir de él. Para reflexionar, necesitamos partir de nuevos presupuestos o, como se diría en los tiempos de la ortodoxia revolucionaria, de nuevos paradigmas.

Malditos libertadores es un esfuerzo sostenido para intentar encontrar respuestas a una pregunta: ¿por qué, después de más de dos siglos de independencia, sigue Latinoamérica atada al subdesarrollo y el atraso? Como miles o centenares de miles de latinoamericanos he deambulado por el camino –trillado hasta la trivialidad– de cargar las culpas al imperialismo. Respuesta parcialmente correcta, pero, al tiempo, tramposa. Al cargar las culpas sobre el imperialismo se ha exculpado, de una manera u otra, a la casta oligárquica que domina los países desde antes de la independencia. Por otra parte, la deificación de los llamados libertadores ha impedido (¡los dioses no se critican, se alaban!) hacer análisis iconoclastas de las causas del fracaso de una región que, hoy, debería ser de las más ricas y desarrolladas del mundo, pero que es lo opuesto. Para aportar un grano de esfuerzo de deshacer la mitología, que en Latinoamérica se presenta como historia, es este trabajo.

En los últimos meses de 2019, cuando estaba entregando esta investigación a la editorial, se sucedieron hechos sorprendentes e inesperados como la explosión social en Chile o las inéditas protestas masivas en Colombia. También el resurgir de fantasmas que nunca se han ido, como el golpe de Estado en Bolivia, que ha servido para recordar que una parte de los ejércitos latinoamericanos sigue fiel a su amo, Estados Unidos. Aquí intentamos aproximarnos a una explicación, que podrá ser más o menos certera, pero que aspira, modestamente, a aportar elementos de análisis a la nueva realidad regional.

El mundo vive su mayor proceso de cambio desde la Segunda Guerra Mundial. El poder del mundo occidental declina y resurgen con fuerza indetenible potencias asiáticas como China e India y una euroasiática, como Rusia. El poder de Estados Unidos se contrae y, puede que en una década o dos, este país deba enterrar, por las buenas o por las malas, su sueño de hegemonía mundial. Esta situación beneficia enormemente a Latinoamérica. No es solo ya el imbatible poder comercial de China y el militar y energético de Rusia. Es que el poder de las oligarquías que dominan casi todos nuestros países depende en medida extrema del sostén que les brinda Estados Unidos. Si ese poder languidece, el de las oligarquías perece. Cuando llegue ese momento, será la hora de los pueblos. Debemos, desde ahora, ir ensanchando el camino. Esa hora está cada día más próxima.

PRELUDIO
De historias limitadas y eliminadas

Que la historia la escriben los vencedores es verdad antigua. Que todo el mundo sepa o asuma este hecho es otro menester. De la historia contada por el vencedor a los tópicos denigrantes sobre los vencidos no hay más que un paso. El cine, las novelas, el «boca-a-boca» y hasta escritores o investigadores que pasan por muy serios y muy hondos, pueden caer en la trampa. Es más cómodo asumir un tópico que investigarlo. Ya no se diga recurrir a uno para sostener ideas o prejuicios que, sin ese tópico, morirían solos. Hay tópicos divulgados tan prolijamente que el cine ha convertido en verdad. Así, en Estados Unidos se da por hecho incontestable que los «pieles rojas» tenían por costumbre arrancar las rubias cabelleras a los «rostros pálidos» que colonizaban sus tierras. El tópico era útil a dos fines. Por una parte, servía para mostrar el nivel de salvajismo y barbarie de los pueblos amerindios (lo que justificaba su exterminio). Por otra, permitía exaltar el heroísmo, la abnegación, el sufrimiento y los peligros que pasaron los «pioneros» para fundar el Gran Estado. El antropólogo estadounidense Marvin Harris ha negado el tópico y afirmado que la verdad histórica es que fueron «rostros pálidos» quienes iniciaron la bárbara costumbre de arrancar cabelleras de indios, las cuales exhibían como trofeos. Los «pieles rojas», en venganza, copiaron la costumbre, pero no pudieron escribir la historia.

La Inquisición española y, en general, la «leyenda negra» de España son, quizá, uno de los mayores tópicos de la Historia moderna y, tal vez, la más exitosa campaña de propaganda contra un enemigo externo que haya habido jamás. A pesar de los siglos pasados, Inquisición y «leyenda negra» siguen siendo el telón de fondo de los años de apogeo del Imperio español. La Inquisición existió, eso es indudable, como cierto es que perpetró innumerables atropellos y crímenes. Más difícil es contemplarla como un instrumento político, antecedente del Terror durante la Revolución francesa, de la Cheka bolchevique y de la suma de CIA y FBI en Estados Unidos, es decir, una maquinaria represiva al servicio de una «razón de Estado». En los siglos XV y XVI, fue el instrumento del que se sirvió la monarquía española para imponer un poder absoluto. Como señaló el historiador

francés Marcel Bataillon, «la represión española se distinguió menos por su crueldad que por el poder del aparato burocrático, policial y judicial del que dispuso».

¿Qué hay de cierto en todo lo que se atribuye a la Inquisición? ¿Solo se dio en España la caza de brujas? ¿Cómo actuaron las Iglesias protestantes? Según informa una revista de divulgación científica y cultural, un trabajo realizado por 29 especialistas concluyó que la «tenebrosa» Inquisición española «solo» condenó a la hoguera a 59 mujeres entre los siglos XVI y XIX, de los 125.000 procesos abiertos por el Santo Oficio. En Italia quemaron a 36. Sin embargo, en el resto de Europa (en su mayor parte protestante), tribunales civiles condenaron a 100.000 brujas, de las que 50.000 fueron quemadas. En esa misma línea, el historiador alemán Wolfgang Behringer, concluyó que la persecución de supuestas brujas causó en toda Europa entre 40.000 y 60.000 víctimas, de las que 500 corresponderían al total de ejecutadas en España, Italia y Portugal. Según Behringer, en Francia se habrían ejecutado a 4.000 mujeres y en Alemania cuando menos a 25.000. Pero ¿cuántos vinculan la quema de brujas a Alemania, Holanda o Inglaterra? Más singular aún. El último proceso por brujería llevado a cabo en Europa no se dio en España, sino en la muy impoluta Suiza, donde una humilde mujer llamada Anna Göldi (o Göldin) fue declarada bruja y decapitada el 18 de junio de 1782. Al gran inquisidor Torquemada lo conocen muchos, pero muy pocos a Matthew Hopkins, que, entre 1644 y 1646, durante la Guerra Civil inglesa, ordenó la ejecución de unas 200 brujas, es decir, una media de dos por semana. Torquemada, a su lado, debió parecer un aprendiz. Por demás, en cuanto a intolerancia religiosa, qué mejor ejemplo de *la noche de San Bartolomé,* en 1572, cuando el rey francés ordenó asesinar a todos los protestantes de París, lo que dejó más de 3.000 muertos.

«Libertad, igualdad, fraternidad» es el lema que identifica y unifica a todas las corrientes de pensamiento modernas, sobre todo a las liberales. Pocos saben que el lema que resume el ideario de la Revolución francesa –la revolución de la libertad y los Derechos del Hombre y del Ciudadano– fue propuesto en diciembre de 1790 por Maximilien Robespierre, inventor del Terror y archifamoso por utilizar la guillotina como remedio a los males de la Francia revolucionaria. En un discurso sobre la organización de las milicias nacionales, Robespierre propuso, sin éxito, inscribir en los

uniformes y banderas «El pueblo francés» y «Libertad, Igualdad, Fraternidad». Aunque su propuesta no fue aprobada, el lema siguió rodando hasta convertirse en el lema de la *nation française.* En Francia, con excepción de su pueblo natal, no hay estatuas ni calles que recuerden al revolucionario jacobino, inventor del lema del país que lo niega. Por demás, Olympe de Gouges, autora teatral y militante revolucionaria, no satisfecha con la declaración revolucionaria que limitaba los derechos al macho, publicó, en 1791, una *Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana* que era, simplemente, una copia literal de la *Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,* aprobada por la Asamblea Nacional en agosto de 1789. Su propuesta, que incluía el derecho de voto para las mujeres, fue considerada intolerable. Un asambleísta revolucionario, de apellido Chaumette, exclamó, exaltado: «¿Desde cuándo le está permitido a las mujeres abjurar de su sexo y convertirse en hombres?». En 1793, Olympe de Gouges fue declarada rebelde, condenada a muerte y ejecutada. «Cosas veredes, amigo Sancho.»

En 1808, el pueblo de Madrid se levantó contra el ejército napoleónico. Se hizo célebre la consigna de los sublevados de que «la Virgen del Pilar no quiere ser francesa». Se usa para significar el contenido reaccionario y ultramontano de la rebelión española contra Napoleón. Pero la primera sublevación clerical y reaccionaria contra las ideas revolucionarias no ocurrió en España, sino en Francia, más concretamente en la región de La Vendée. En 1793, al grito de «Viva la religión», centenares de miles de campesinos, baja nobleza y clero se levantaron contra la Convención revolucionaria. La sublevación dio pie a los jacobinos para derrocar a la Convención y establecer el Comité de Salud Pública, presidido por Robespierre. La guerra fue breve, pero sumamente sangrienta. Los ejércitos revolucionarios arrasaron La Vendée y sus alrededores. Según últimas investigaciones, los muertos habrían sido, al menos, 150.000 vendeanos. El jefe de los ejércitos revolucionarios, el general Westermann, escribió eufórico al Comité: «¡La Vendée ya no existe, ciudadanos republicanos! Ha muerto bajo nuestra libre espada, con sus mujeres y niños». ¿Cuántos vinculan estos episodios con los orígenes del liberalismo? Casi nadie. El liberalismo triunfó en Francia, se extendió por Europa, alcanzó América y se hizo mito romántico. Todo lo negro se resumió en Robespierre, el

hombre que salvó a la revolución de la anarquía y el caos. Lo demás se relegó al desván.

En esta línea podríamos seguir y no terminar. Los ejemplos citados sirven para ilustrar cuánto y durante cuánto tiempo puede tergiversarse un hecho, episodio o época. Tal ha ocurrido con la historia latinoamericana, que, de tan deformada, más se aproxima a la mitología que al relato verídico de los hechos realmente acontecidos. Hechos que han marcado a sangre y fuego la deriva de esta inmensa región. De esos mitos y de sus consecuencias trata este trabajo, que, como el dios Jano, tiene un rostro que mira al pasado y otro que mira al futuro. Se han evitado, en lo posible, las conclusiones y las recetas. No existen de carácter general, aunque, como cuando se construye una casa, hay pasos, pesos y materiales que no pueden evitarse sin riesgo de que haya derrumbe.

El filósofo estadounidense de origen español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, alias George de Santayana, dijo que «los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo». A los pueblos latinoamericanos hasta el derecho de la memoria se les ha negado. Este trabajo escarba en el pasado. A lo que salga.

I. UNA REGIÓN ENDOGÁMICA, AISLADA, ALARGADA, BIDIMENSIONAL

> Imaginad una vasta hoja de papel en la que líneas rectas, triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos y otras figuras, en vez de permanecer fijas en sus lugares, se moviesen libremente, en o sobre la superficie, pero sin la capacidad de elevarse por encima ni de hundirse por debajo de ella […]. En un país de estas características, comprenderéis inmediatamente que es imposible que pudiese haber nada de lo que vosotros llamáis género «sólido»; pero me atrevo a decir que supondréis que nosotros podríamos al menos distinguir con la vista los triángulos, los cuadrados y otras figuras, moviéndose de un lado a otro tal como las he descrito yo. Por el contrario, no podríamos ver nada de ese género, al menos no hasta el punto de distinguir una figura de otra. Nada era visible, ni podía ser visible, para nosotros, salvo líneas rectas…
>
> Edwin A. Abbott, *Flatland.*

Latinoamérica ocupa, aproximadamente, 20 millones de kilómetros cuadrados y está poblada por unos 620 millones de habitantes. Duplica, por tanto, la superficie de Europa (considerada erróneamente un continente, aunque es, realmente, una península de Eurasia) y triplica el tamaño de Oceanía. Es una región extremadamente alargada, de norte a sur, en un continente de por sí largo. De Ciudad de México a Santiago de Chile hay 6.613 kilómetros en línea recta, pero de Tijuana –ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos– a la argentina Ushuaia –la ciudad más austral del mundo– hay 10.750 kilómetros. De Lisboa a Pekín hay 9.700 kilómetros; de Túnez a Ciudad del Cabo, 7.700 kilómetros y de Melbourne, en Australia, a Nueva Delhi, 10.200 kilómetros. El diámetro de la tierra mide 12.742 kilómetros. Esta largura contrasta con su angostura. La parte más ancha, que va de Guayaquil, en Ecuador, a Recife, en Brasil, apenas supera los 5.000 kilómetros de distancia, con la particularidad de que, entre Guayaquil y Recife es virtualmente imposible viajar por tierra. No hay carreteras ni caminos que las unan. Entre Guayaquil y Recife hay una geografía vacía de vías de comunicación, dependiendo las poblaciones de los ríos amazónicos.



Latinoamérica, una vasta región-isla en el único continente-isla del planeta.

Latinoamérica es una región inserta en el continente más aislado del mundo, pues entre América y el resto del planeta están los dos mayores océanos, el Atlántico y el Pacífico. Esta condición geográfica, única en el mundo, hace del continente americano un continente-isla, en el sentido más estricto. No está próximo a ningún otro ni hay forma de llegar a él que no sea por mar o aire tras largas jornadas navegando o luengas horas volando. Australia podría parecérsele, pero solo desde el desconocimiento

geográfico. De la villa australiana de Somerset a Daunan, en Papúa-Nueva Guinea, hay 154 kilómetros; de Darwin a Timor Oriental, 650 kilómetros. Nada que ver con los miles de kilómetros que separan nuestro continente-isla del resto del mundo. Este aislamiento geográfico es el elemento material, cultural y psicológico más relevante e influyente en el pasado, presente y futuro de Latinoamérica. Determinó, por ejemplo, que el continente que llamamos América fuera el último en ser poblado (hace unos 35.000 años, es decir, 120.000 después de iniciarse la expansión de la especie humana, según cifras que se manejan y que no constituyen la última verdad sobre el tema) y el último en ser incorporado a la dinámica mundial (2.000 años después de iniciarse la conocida, desde el siglo XIX, como «ruta de la seda»).

Latinoamérica es una región-isla pues, aunque limita físicamente con Estados Unidos, la frontera con el mundo anglosajón, más que frontera, es un muro, que el actual presidente estadounidense, Donald Trump, quiere hacer más impenetrable que nunca. A diferencia de otras fronteras, no es línea de intercambio, integración, mestizaje. Es frontera violenta entre la pobreza y la riqueza, entre la bonanza y el infortunio, entre dominantes y dominados. Es el reverso, lo opuesto a lo que suelen ser las fronteras, salvo en caso de países en guerra, como la indo-paquistaní o la argelino-marroquí. Lo entenderemos más claro si comparamos la frontera mexicano-estadounidense con la frontera entre Canadá y Estados Unidos. ¿Cuántos centenares de kilómetros de vallas, alambradas, trampas, drones o cámaras de vigilancia, cuántos miles de guardias hay en los 8.891 kilómetros de frontera existentes entre esos dos países? Lo imprescindible; en vastas zonas, nada ni nadie. La parte más notable de la frontera más larga del mundo es, vista desde el aire, una larga línea deforestada de seis metros de ancho –tres metros al lado de cada país– que marca la divisoria entre Canadá y Estados Unidos, conocida como The Vista (La Vista), no dejando de ser chiste amargo que parte relevante de la línea divisoria entre dos países anglosajones lleve un nombre español. La integración, confluencia, confianza entre los dos países es tal que hay una biblioteca en Quebec, la biblioteca Haskell, por cuyo interior pasa la línea fronteriza entre Canadá y Estados Unidos. La sección de libros infantiles se encuentra en territorio estadounidense; el resto de libros, en territorio canadiense.

Si la frontera entre Estados Unidos y Canadá es el cielo, la frontera entre México y Estados Unidos es el infierno. Al norte de Latinoamérica, una inmensa muralla política, económica, social y cultural separa –no une– dos mundos. Es ese abismo entre pobreza y riqueza lo que hace de nuestra región una región-isla, separada del resto del mundo por dos océanos y del mundo anglosajón por la pobreza, el atraso, el racismo y la xenofobia. Se puede argumentar que no es así, que los hispanos o latinos son una minoría de creciente importancia. Numéricamente es correcto. Políticamente no es nada claro. Haciendo realidad el dicho de que no hay peor cuña que la del mismo palo, una parte importante de hispanos es derechista, abomina de sus orígenes y hace piña con quienes nos quieren siempre de rodillas. Lo cierto es que, del norte, han llegado el expolio económico, las intervenciones, los golpes de estado, el control ideológico e informativo, la invasión cultural… El sur aporta emigrantes, emigrantes, emigrantes… Un muro a derribar.

Prácticamente todo, en Latinoamérica, está condicionado por su geografía, que determina desde cosas nimias hasta cuestiones colosales. Una de ellas es que los habitantes de Latinoamérica –del continente todo en general– no tienen relación directa con el resto de continentes del mundo. No hay, en consecuencia, ningún contacto permanente, próximo, inevitable, con otros pueblos y civilizaciones, como el que hay, por ejemplo, de Europa con África y Asia o de India con Oceanía, y viceversa. El estrecho de Gibraltar, en su parte más estrecha –valga la redundancia–, tiene 14,4 kilómetros de largo y desde Constantinopla pueden verse las costas de Asia Menor. Viajar de Managua a Madrid lleva 11 horas, que se hacen 16 si el vuelo es de Santiago de Chile. Latinoamérica está lejos del mundo y el mundo lejos de Latinoamérica.

EL AISLAMIENTO ES ATRASO

La historia abunda en hechos demostrativos de que, en el aislamiento, se prospera poco. El desarrollo cultural de las sociedades es producto de relaciones, intercambios, mestizajes, comercio, viajes y, demasiadas veces, de imposiciones. Roma conquistó Grecia y, a su modo, se hizo griega, y de esa mezcla surgió el acervo grecolatino, sobre el que nació y se desarrolló Europa y del que los latinoamericanos somos parte, guste, no guste o

disguste, porque España y Portugal trajeron a Roma y Grecia con ellos (también a árabes, fenicios y visigodos). Ninguna cultura progresa aislada. Esa es la razón de fondo que explica por qué los pueblos americanos –como otros pueblos aislados del mundo– no desarrollaron la rueda y apenas los metales y la escritura o no lograron pasar del estado de pueblos nómadas recolectores-cazadores. No había relación entre ellos y la que había –por ejemplo, en el istmo mexicano de Tehuantepec– era entre pueblos de similar nivel de desarrollo, que aportaban escasas novedades unos a otros. No podían, por tanto, salir de un estado de estancamiento derivado de su aislamiento, aunque tuvieran logros espectaculares en arquitectura. Estaban, por eso mismo, inevitablemente condenados a ser sometidos por culturas más avanzadas, como había ocurrido durante miles de años en otras geografías del mundo. Asiria fue conquistada por Babilonia que luego fue conquistada por Persia. Roma destruyó Cartago y conquistó Grecia y luego Egipto. El emperador Qin Shihuang –promotor de los prodigiosos guerreros de terracota– sometió, uno a uno a otros reinos hasta crear el imperio chino. Dominar a otros parece ser parte sustancial de la especie humana, de la misma manera que la búsqueda de recursos y riquezas ha sido, son y serán causa de guerras (miren, los que dudan, las guerras criminales contra Iraq y Libia o la feroz política de Estados Unidos contra Venezuela, tres países riquísimos en petróleo y gas). Como escribe Hans Magnus Enzensberger, «Los animales luchan entre sí, pero no hacen la guerra. El ser humano es el único primate que se dedica a matar a sus congéneres de forma sistemática, a gran escala y con entusiasmo».

Los pueblos aborígenes americanos habían vivido sus propias conquistas (aztecas sobre tlascaltecas; incas sobre decenas de pueblos; los mayas entre ellos mismos) porque, a fin de cuentas, la especie humana es lo que es y en el aislado continente sin nombre los procesos históricos no iban a seguir derroteros diferentes a otras sociedades. El principio del fin del aislamiento llegó en 1492, cuando las naos españolas arribaron a islas que creyeron Asia, un acontecimiento que es un hecho histórico, quizás el más importante de la historia moderna. Un hecho que cambió la historia del mundo para siempre y sin posibilidad alguna de reversa, pues los hechos históricos pueden estudiarse, pero no pueden cambiarse. Como todo hecho humano, tiene sus claros, sus oscuros y sus áreas polémicas, ninguna de las cuales puede reducir, minimiza o negar su condición de acontecimiento

histórico enorme. Histórico, vale repetir, que debe verse y entenderse según se veían y entendían las cosas hace 500 años, no pasándolo por el tamiz del siglo XXI. En 1928, en su famoso laudo sobre la isla de Palma, el juez Max Huber señaló que un hecho debe juzgarse según el derecho existente en el momento del hecho. Bajo ese prisma deben entenderse los hechos históricos. Según lo vigente en un momento dado y específico, no con los valores que puedan existir en tiempos posteriores.

El aislamiento geográfico tuvo otra consecuencia para los pueblos del aún continente sin nombre que no siempre es entendido en su justo rigor. Los pobladores que llegaron desde Siberia lo hicieron decenas de miles de años antes de que el aumento de población y de los intercambios comerciales fueran un cóctel explosivo para el mayor horror sufrido por la especie humana, más devastador, incluso, que las peores guerras de entonces: las pestes. La primera gran epidemia de la que existen registros históricos es la llamada «plaga de Justiniano», en referencia al emperador bizantino Justiniano I, que sufrió la plaga, pero pudo sobrevivir a ella. Según parece, la peste se inició en el 541 D.C. y se prolongó durante los siglos VI y VIII por casi todo el mar Mediterráneo, provocando 25 millones de muertos. Más próxima en el tiempo a la conquista de América fue la epidemia de peste negra que, llegada de Asia en barcos mercantes europeos, arrasó Europa, de Lisboa a Moscú, entre 1346 y 1353 (Ole J. Benedictow reconstruyó la tragedia en su obra *La peste negra, 1346-1353,* de 2011). Otros brotes se sucedieron en 1366, 1374 y 1400. En algunas regiones perecieron dos tercios de sus habitantes. Quienes sobrevivían quedaban de alguna manera «vacunados» o con mayores niveles de resistencia a la enfermedad y heredaban a sus descendientes genes más resistentes que, vistas las otras epidemias, no debían resistir nada.



El triunfo de la muerte, de Pieter Brueghel el Viejo (1562-1563), cuadro inspirado en la epidemia de peste o muerte negra del siglo XIV.

La mitología latinoamericana presenta como hecho premeditado lo que fue un proceso biológico y no intencionado, resultado de algo que hoy sabemos, pero que, en el siglo XVI, nadie sabía: que todos y cada uno de nosotros somos portadores de millones de bacterias y virus que han evolucionado fuera, dentro y encima de nuestros cuerpos. Los conquistadores no sabían que eran portadores de virus desconocidos por los pueblos aborígenes americanos; que todos y cada uno de ellos cargaban una herencia genética de miles de años, resultado de la convivencia, desde la cuna común en África, de la especie humana con las enfermedades. Hay datos abundantes de esta fatal e inevitable relación. Por ejemplo, se sabe hoy que los agricultores del antiguo Egipto padecían de esquistosomiasis, un gusano que penetra en la piel y se instala en el aparato digestivo y produce graves trastornos (aún en 1950 la mitad de la población egipcia padecía de esquistosomiasis: se puede concluir que hace miles de años era

endémica). La malaria era omnipresente y mataba al 30 por 100 de egipcios, faraones incluidos. La peste y la viruela causaban estragos en la población egipcia, que eran mayores en periodos de hambre.

Era una cuestión inevitable que, más tarde o más temprano, pueblos de Eurasia arribarían al continente aislado y llevarían con ellos las enfermedades que les habían acompañado durante decenas de miles de años. Como el sida hace unas décadas o el ébola hoy, debe entenderse que las enfermedades son consustanciales a la vida y los humanos las portamos allí donde vamos. El horrendo drama de los pueblos aborígenes americanos fue que debieron padecer en pocas décadas lo que los pueblos euroasiáticos habían padecido a lo largo de miles de años. Las enfermedades han seguido a colonos y conquistadores a lo largo de la historia. El continente americano no iba a ser una excepción (bajo el reinado de Akenatón, los hititas vencieron a un ejército egipcio; según la crónica «los prisioneros de guerra fueron llevados a Hatti, los prisioneros trajeron la peste a Hatti. A partir de ese día, la gente muere en Hatti»). Una epidemia de viruela arrasó Santo Domingo entre 1518 y 1519 y mató a casi toda la población local, sin distinguir clases ni etnias. La tropa de Hernán Cortés la llevó a México y, luego de provocar estragos en los indígenas mesoamericanos, fue portada al Imperio Inca en 1525, donde pereció buena parte de la población de las zonas cálidas, no así los habitantes de los Andes, que se vieron protegidos por el frío y la altura. A la epidemia de viruela le siguieron las de sarampión (1530-1531); tifus (1546) y gripe (1558). Otras enfermedades como la sífilis, la difteria o la peste neumónica también hicieron estragos entre la población indígena. Ahora bien, ¿pasaba solo en las Indias? En absoluto. Las pestes continuaron dos siglos más causando estragos en Europa.

Una epidemia de peste bubónica, llegada de Flandes, devastó Sevilla, entonces la principal urbe de Europa, entre los años 1587 y 1589. Resurgió en 1603, extendiéndose por toda España en 1604. Otra epidemia asoló España de 1646 a 1652, sobro todo Andalucía. No era solo España la afectada. La península italiana fue arrasada por la gran peste de 1656, con una mortandad tan severa que, en algunas regiones, la tasa de mortalidad afectó al 50-60 por 100 de población. Una epidemia de peste devastó Inglaterra, sobre todo Londres, entre 1665 y 1666, matando a más de 100.000 personas. La Gran Peste de Viena, de 1679, mató a casi 80.000 personas y, pese a su nombre, afectó poblaciones en buena parte de Europa

Central. La peste que afectó la región de Marsella, en Francia, en 1720, dejó más de 100.000 muertos sobre una población de 400.000 personas. Ello, a pesar de las estrictas medidas de salubridad ya existentes, que incluían una cuarentena obligatoria para personas y mercancías.

La última acontecida es la pandemia de gripe de 1918, cuyo foco estuvo en Estados Unidos y, con la entrada de este país en la Primera Guerra Mundial, se expandió por Europa y luego por el resto del mundo. Perecieron alrededor de 30 millones de personas, algo así como el 35 por 100 de la población mundial de esos años. Un dato a considerar es que la pandemia de gripe causó mayor mortandad en poblaciones aisladas, como ocurrió en Fiji, donde pereció el 30 por 100 de población, o Samoa Occidental, con un 40 por 100 de fallecidos. En Estados Unidos, foco original, las muertes no llegaron al 1 por 100. Se trataba de poblaciones que, como las indígenas americanas, habían tenido escaso contacto con pueblos euroasiáticos y, por tanto, no habían desarrollado resistencia a la gripe.

Entender la dinámica de la historia es preciso para salir del estancamiento en que viven sectores relevantes en América Latina, todavía atascados en la primera mitad del siglo XVI. La historia, como diría Hegel, es tesis, antítesis y síntesis. Un hecho produce otro que niega el anterior, pero del que surge algo nuevo (no siempre mejor). Roma produjo una cultura soberbia e ingenieros prodigiosos, pero no matemáticos ni científicos relevantes. El sistema numerológico romano, a base de letras, no permitía operaciones complejas; tampoco logró el desarrolló del cero, imprescindible para operaciones complejas (los mayas descubrieron el cero, pero el aislamiento y posterior desaparición de su civilización hicieron de ese descubrimiento algo inútil). Las matemáticas las desarrollaron científicos musulmanes a partir de su sistema simplificado –que hoy utiliza el mundo entero y que conocemos como números árabes– y de haber incorporado el cero, inventado en India. Los científicos indios, a su vez, habían recibido la ciencia griega de manos de los ejércitos de Alejandro Magno, lo que dio impulso a su desarrollo. La historia del cero es ilustrativa: de India pasó a Persia, de Persia al mundo árabe y de los árabes a los europeos y al mundo. Las culturas humanas, al menos las mediterráneas y euroasiáticas, fueron resultado de miles de años de yuxtaposición y allí donde los choques, mezclas e influencias mutuas eran más intensas, solían desarrollarse los

mayores centros de investigación y cultura. Ese fenómeno sigue siendo igual hoy que hace miles de años. La prosperidad de Estados Unidos se ha basado, desde sus orígenes, en la incorporación de millones de personas de todos los rincones del mundo. La revolución bolchevique arrasó el orden feudal ruso y construyó uno nuevo, bajo el puño de hierro de Stalin, de quien dijo Winston Churchill que «encontró a Rusia con arado y la dejó equipada con armas atómicas». En Latinoamérica debemos aherrojar con cadenas el pasado para poder construir nuestro futuro. Encerrar el siglo XVI en los libros de historia, para dedicarnos a construir el siglo XXI.

UNA REGIÓN ENDOGÁMICA

Condicionada por la geografía, Latinoamérica es una región-isla y, como suele ocurrir en las islas, es una región endogámica, que se relaciona, se mezcla, se pelea y se ama con ella misma. Su aislamiento geográfico la obliga a relacionarse esencialmente con ella misma y, por razones migratorias, con Estados Unidos y Canadá, y, últimamente, con países europeos, sobre todo España e Italia, en razón de vínculos históricos y de origen. Excepción hecha de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales, la región no tiene, prácticamente, relaciones con el resto de población mundial, ni siquiera turística, pues Asia y África están demasiado lejos y el precio de los boletos de avión excede la capacidad de pago de una vasta mayoría de latinoamericanos. Está, además, el hecho psicológico de que, ausentes del imaginario popular por su misma lejanía, pocos piensan en viajes a continentes que creen exóticos e inalcanzables y con los que no hay comunicación directa. Australia y Nueva Zelanda, por el hemisferio sur, también son territorios remotos. De Santiago de Chile a Melbourne hay 12.300 kilómetros y, aunque existan unos pocos vuelos, las relaciones son residuales. Por eso están obligados a viajar en la misma, vasta región. Se viaja de la colonial ciudad de Lima a conocer la colonial ciudad de Cartagena de Indias o la colonial Habana. De la colonial Puebla a la colonial ciudad de Granada de Nicaragua.

Pasar de Chile a Argentina es como pasar –por decir algo– de Castilla a León; se van a encontrar las mismas cosas, con distinto acento, pero los acentos distintos no hacen surgir ideas ni visiones nuevas y diferentes. La

literatura es tan similar que es correcto referirse a ella como literatura latinoamericana, pues no existen literaturas nacionales –salvo cuando nacionalismos miopes y sin sustancia quieren sacarlas como conejo de chistera–. Hay, obviamente, autores nacionales que tocan temas nativos, pero ¿hace eso una literatura nacional en el sentido en que lo son la francesa, la rusa o la china? Obviamente, no. Roberto Bolaño abordó el tema a raíz de un –otro– debate sobre quiénes eran los cuatro mejores poetas de Chile. Bolaño escribe que estaba metido en una discusión de este tipo:

> Hasta que llegó el poema de Nicanor Parra, que dice así:
>
> *Los cuatro grandes poetas de Chile*
> *Son tres*
> *Alonso de Ercilla y Rubén Darío.*
>
> Como ustedes saben, Alonso de Ercilla fue un soldado español, noble y bizarro, que participó en las guerras coloniales contra los araucanos y que de vuelta en su Castilla natal escribió *La Araucana,* que para los chilenos es el libro fundacional de nuestro país y que para los amantes de la poesía y de la historia es un libro magnífico, lleno de arrojo y lleno de generosidad. Rubén Darío, como ustedes también saben, y si no lo saben no importa –es tanto lo que todos ignoramos incluso de nosotros mismos–, fue el creador del modernismo y uno de los poetas más importantes de la lengua española en el siglo XX, probablemente el más importante, nacido en Nicaragua en 1867 y muerto en Nicaragua en 1916, que llegó a Chile a finales del siglo XIX y en donde tuvo buenos amigos y mejores lecturas pero en donde también fue tratado como un indio o como un cabecita negra por una clase dominante chilena que siempre se ha vanagloriado de pertenecer al cien por ciento a la raza blanca. Así que cuando Parra dice que los mejores poetas chilenos son Ercilla y Darío, que pasaron por Chile y que tuvieron experiencias fuertes en Chile (Alonso de Ercilla en la guerra y Darío en las escaramuzas de salón) y que escribieron en Chile o sobre Chile, y en la lengua común que es el español pues dice la verdad […].

En realidad, la región latinoamericana se ha caracterizado por una pobre producción intelectual, que es otra de las señas del fracaso de los países en los 200 y más años de independencia. Excepción hecha de la literatura y la música –cuya calidad y cantidad sería necio negar–, Latinoamérica ofrece poco más. Fuera de esos ámbitos, no hay trabajo intelectual que destacar, y esa pobreza es, al tiempo, consecuencia y causa esencial de su

subdesarrollo. La ciencia es un erial, la técnica, un meteoro. Es así que la región ha dado diecisiete premios Nobel, de los cuales seis son de literatura, seis de la paz, tres de medicina y dos de química. No obstante, solo dos de ellos (los argentinos Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir) desarrollaron el grueso de sus investigaciones y carreras en su país natal. Los demás lo hicieron en Gran Bretaña y Estados Unidos, cuyas nacionalidades adoptaron. Latinoamericanos como tales solo quedan dos.

La singular macroendogamia latinoamericana tiene muchos aspectos positivos, pero, como toda endogamia, contiene otros terriblemente negativos. Como sabemos del estudio básico de la historia, las civilizaciones suelen surgir del choque de unas con otras, de las influencias recíprocas, del contraste, la oposición de visiones multifacéticas sobre el mundo y sus contornos. En la Grecia clásica, formada por ciudades-estado, se efectuaban intensos intercambios de todo tipo entre ellas y con los pueblos de Egipto, Persia, Asia Menor y la península itálica. Francia fue zona de paso, espacio de encuentros y guerras, geografía que limitaba con hispanos, germanos, ítalos, eslavos, de la misma forma que las guerras y rivalidades entre las ciudades-estado italianas propiciaron el Renacimiento. Del contraste y las luchas con los diferentes surgen ideas y visiones nuevas y ese contraste, conflicto, lucha, termina finalmente en fusión, en algo nuevo. Incluso las guerras de religiones entre católicos y protestantes produjeron un renacimiento de ideas como Europa no había visto en siglos. La Hispania romana, inserta de lleno y de pleno derecho en el mundo multifacético del *Mare Nostrum* produjo filósofos, poetas y emperadores. La España de los Austria, autoaislada del resto de Europa, llevó al Imperio español a la decrepitud y el atraso.

En Latinoamérica, el aislamiento geográfico, la macroendogamia y el modelo neocolonial surgido de las mal llamadas independencias hizo esos fenómenos imposibles de realizarse. Sociedades tan extremadamente parecidas necesitaban, bien de choques telúricos como la Revolución francesa o las invasiones napoleónicas en Europa –que forzaron cambios antes nunca considerados–, o de clases dominantes ilustradas para producir transformaciones de raíz, como la tuvo Estados Unidos en sus orígenes y luego la tendrían Japón, con la Restauración Meiji, o Alemania, con Bismarck a la cabeza. En Latinoamérica no hubo ni lo uno ni lo otro. Fue así que, tras la separación de España, los países se hundieron en el mayor

oscurantismo, en guerras civiles y cainitas, cuartelazos y sumisión al imperialismo británico, perdiendo el impulso que había llegado de España, en la segunda mitad del siglo XVIII, de la mano del despotismo ilustrado y las expediciones científicas que buscaban situar al mundo hispánico a la altura de sus rivales europeos. Las oligarquías se entregaron a Inglaterra y la geografía impuso el aislamiento –fomentado también por Londres–, de manera que no hubo más que autocolonización con lo británico, cuyo representante más conocido fue Domingo Faustino Sarmiento, defensor del racismo y del sometimiento a lo inglés y, de muchas formas, del complejo de inferioridad respecto de los anglosajones, al convertirse en profeta de la –supuesta y para él real– superioridad británica respecto de lo ibérico.

La geografía marca, entre otros tantos y tan cruciales temas, la ruta de las migraciones. Según el *IV Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas,* de 2017, «Entre 2012 y 2015, de las 7,2 millones de personas que emigraron desde países de las Américas, el 48 por 100 se trasladaron hacia Canadá y Estados Unidos, el 34 por 100 hacia América Latina y el Caribe y un 18 por 100 hacia países europeos de la OCDE». En otras palabras, el 82 por 100 de latinoamericanos emigraron a países americanos. No hay emigración a Asia, muchísimo menos a Oceanía o África.

Otra cuestión debe recogerse. Si uno viaja por Europa, cambiar de país, en la casi totalidad de casos, implica cambiar de idioma. Hay más idiomas que países. El americano –con el respeto que se merecen las lenguas autóctonas– es un continente de tres idiomas vehiculares, con una gota del francés. Español, inglés y portugués son las lenguas que usa la práctica totalidad de sus habitantes, haciendo un contraste inmenso con otros continentes. Latinoamérica se comunica en dos: español y portugués, aunque el portugués está limitado a Brasil. Ello implica que esa vasta región se mueve dentro de dos grupos culturales, el hispano y el portugués, al que debe sumarse el inglés de la región caribe. Tres grupos culturales en una región que triplica el tamaño de Europa es un hecho único en el mundo, marcado por la diversidad. El castellano se ha expandido a tal punto que, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, lo hablarán 100 millones de personas en ese país para mediados del siglo XXI, lo que convertiría a Estados Unidos en el segundo país hispanohablante, después de México. Puede uno viajar de Nueva York o California hasta la Patagonia sin cambiar

de idioma, aunque sí de acentos y giros localistas. Al contrario de lo que ocurre en Europa, que es una península de Estados-nación (mejor o peor constituidos), Hispanoamérica es una nación dividida en dieciocho fragmentos –diecinueve, si contamos Puerto Rico, colonia de Estados Unidos–, producto de la calamidad que fueron las desgraciadas guerras de independencia.

Esta quizá sea la diferencia más visible entre Europa y Latinoamérica. Europa es la tierra donde germinaron los nacionalismos (derivados fácilmente a fascismos) vinculados al idioma nacional. La idea de «una lengua, un Estado», sigue martirizando a buena parte de los pueblos europeos, lo que ha hecho de este mal llamado continente la zona del mundo con más países en proporción a su extensión (el continente americano, con 42,5 millones de kilómetros cuadrados lo integran 35 países; Europa, con diez millones de kilómetros cuadrados, la forman 54 Estados) y con posibilidades de continuar la fragmentación. Valón contra flamenco, catalán contra castellano, ucraniano contra ruso y húngaro, sardo contra francés, serbocroata escrito en cirílico contra serbocroata escrito en latino… El tema idiomático-nacional que ha desangrado y fragmentado Europa está completamente ausente en Latinoamérica. Pasa aquí lo contrario. Los países y sus costumbres son tan parecidos, que se copian unos a otros; a falta de mayores distinciones, los países disputan si la empanada –que se come de Chile a Uruguay– tiene tal o cual origen o si Gardel es uruguayo o argentino. ¡El pisco es peruano, no chileno y el vigorón –combinado de yuca, charrasca y ensalada de repollo– es nica, no tico! En Europa estas cuestiones serían un chiste, comparadas con el listado de matanzas étnicas, trasvases de población o pseudopruebas para identificar la «raza europea superior». Estonios, letones y lituanos «étnicamente puros» niegan derechos civiles y políticos a los lituanos, letones y estonios de origen ruso porque, para ellos, son rusos invasores, no compatriotas y así, un sinfín de discriminaciones, agravios y negación de derechos humanos básicos en nombre de la etnia idiomáticamente identificada. Son escenarios imposibles de imaginar en Latinoamérica, posiblemente –seguramente– la región más «mixturada» del mundo. En Latinoamérica la gente se ha matado por ideas: liberales contra conservadores, revolucionarios contra oligarcas…

Mixtura. La mezcla de casi todo. El periodo colonial, aún manteniendo una oligarquía hispana, de criollos y peninsulares, fue el periodo del mestizaje, al punto que vastas regiones de las Indias vieron nacer sociedades mayoritariamente mestizas («Azevedo Bandeira da, aunque fornido, la injustificable impresión de ser contrahecho; en su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro y el indio», escribe Jorge Luis Borges en su cuento «El muerto». Lo de judío lo habrá escrito para no poner portugués o español). Conquistadores y primeros colonos, que llegaban solos, rápidamente se juntaron con las indígenas, iniciando un proceso que continúa hoy. Ante la magnitud del fenómeno, en 1514, el rey Fernando el Católico emitió una Real Cédula legitimando los matrimonios mixtos de españoles e indígenas. Esta Real Cédula tenía motivos varios. Por una parte, favorecía la legitimación del dominio español, al casarse los conquistadores con princesas indígenas; por otra, venía a darle legalidad a una situación de hecho, que preocupaba a la Iglesia; por último, contribuyó a esclarecer el estatus legal de los indígenas que, por la Real Cédula, quedaban en pie de igualdad con los españoles.



Familia mestiza, en Nueva España, en el siglo XVIII.

Consecuencia del tolerante sistema colonial –que no imitó ni aplicó ningún otro imperio europeo–, no hay región del mundo más «mixturada» que Latinoamérica, aunque esa afirmación general requiera de precisiones. Hay una Latinoamérica mestiza, que es dominante en México, Centroamérica –excepción hecha de Guatemala–, Ecuador, Perú o Chile. Hay una Latinoamérica negra y mulata, sobre todo en los países del mar Caribe; hay una Latinoamérica indígena, mayoritaria en Bolivia y Guatemala. Hay, en fin, una Latinoamérica blanca, asentada sobre todo en el Río de la Plata y en las castas dominantes de países como Colombia, Brasil y Venezuela. No hay, casi, relación entre las castas dominantes blancas y los pueblos indígenas, mulatos o negros, salvo si hablamos de relaciones de servidumbre. El siglo XVII todavía perdura, en esa y otras formas de la organización social, económica, política y cultural.

Latinoamérica, como el resto del continente, es, masivamente, cristiana, y, hasta la invasión de iglesias evangélicas promovida por la CIA desde la década de los sesenta del siglo XX –para contrarrestar a la entonces poderosa Teología de la Liberación–, abrumadoramente católica. Excepción hecha de Argentina –donde viven notables minorías judías y musulmanas–, los pueblos latinoamericanos carecen de relación con otras religiones, no, al menos, como se ha dado en Europa y otras regiones del mundo. Endogamia, mestizaje, aislamiento… Para escribir una patología de lo latinoamericano.

DEL AISLAMIENTO Y OTROS TRASTORNOS MENTALES

Latinoamérica, como el resto del continente-isla americano, está separado del resto del planeta, es decir, comparte el aislamiento con el resto de países, pero esta realidad geográfica debe también ser matizada. Casi desde sus orígenes como Estado independiente, Estados Unidos ha sido el destino final de decenas de millones de emigrantes, situación que se mantiene, hasta el presente, incluyendo los movimientos masivos de centroamericanos pobres, a los que el presidente Donald Trump les ha declarado la guerra. En los siglos XIX y primera mitad del XX, Estados Unidos fue la tierra de promisión de unos 50 millones de europeos y, en menor medida, de asiáticos. Los latinoamericanos van por aparte, porque han construido su propio mundo y sus propios supermercados.

Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo otro flujo, pero, más importante que esos flujos, fue el hecho de que Estados Unidos pasó a capitalizar una nueva modalidad migratoria, la educativa, de parte relevante de las elites del mundo, atraídas por el prestigio de las universidades, institutos tecnológicos y escuelas de economía. Según la afamada agencia británica de noticias BBC, en los años sesenta había 50.000 estudiantes extranjeros en universidades y centros superiores de Estados Unidos, cifra que ascendió a medio millón en el año 2000 y a un millón en 2015. Cifras mareantes que dejaban al país beneficios por valor de 42.000 millones de dólares y –algo muchísimo más importante– aquella marea de estudiantes extranjeros permitía (y sigue permitiendo) a empresas, gobiernos, centros de investigación y universidades tener un caladero interminable de cerebros de primer orden, con los que alimentar la condición de Estados Unidos como primera potencia mundial y país líder en ciencia, tecnologías y un largo etcétera. En otras palabras, Estados Unidos, merced a la calidad de sus centros de enseñanza, ha vencido el aislamiento geográfico convirtiéndose en meca de los estudios superiores a nivel mundial, de forma que al país llegan estudiantes de casi todos los países del mundo, con visiones distintas y nuevas de las cosas, que impiden el anquilosamiento y la endogamia, errores fatales que, en otras partes del mundo, castran la inteligencia y matan la creación (como ocurre, por ejemplo, en España, donde la endogamia académica es endémica). El sistema permite a Estados Unidos, además, y como colofón final, el premio de esparcir por el planeta una pléyade de graduados que dejan el país agradecidos y enamorados de él y que, luego, están prestos a servir a los intereses estadounidenses en sus países de origen, con lo cual Estados Unidos hace el que es, sin duda, el mejor negocio del mundo. No en vano Karl Deutsch, en su obra *El análisis de las relaciones internacionales,* afirmaba que, en Estados Unidos, «las universidades representan hoy una de las industrias más grandes del país». Y, además, sirve como fuente de financiamiento para otros fines. Según recogía el diario *Miami Herald,* «muchos estudiantes extranjeros pagan su matrícula completa, lo que permite a las universidades usar parte de ese dinero para ayudar a subsidiar a estudiantes estadounidenses». Un negocio más que redondo, tanto, que ha sido incluido en la lucha entre China y Estados Unidos por la hegemonía mundial. El gobierno chino, en julio de 2019, «desaconsejó» a sus ciudadanos viajar o estudiar en Estados Unidos,

medida que ha causado preocupación en las universidades de este país, pues China aporta el mayor contingente de estudiantes a las universidades estadounidenses, con un gasto medio de 65.000 dólares anuales por estudiante.

Otro hecho contribuye a mitigar fuertemente el aislamiento geográfico en Estados Unidos: su inmensa red de bases militares, que le obliga a mover a centenares de miles de oficiales y soldados a lo ancho y largo del mundo. Según declarara en julio de 2018 el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, general Joe Dunford, «hoy, más de 300.000 estadounidenses están desplegados o estacionados en 177 países». Naciones Unidas está integrada por 198 países, lo que dejaría solo a 21 países sin presencia de tropas estadounidenses. Aunque puede haber una fuerte dosis de exageración en las cifras del general Dunford, lo cierto es que Estados Unidos posee unas 700 bases militares en el extranjero, con una media de 150.000 soldados, de los cuales 70.000 están en Japón y Corea del Sur. En lo que interesa, este hecho ha permitido que millones de estadounidenses conozcan la mayor parte del mundo y que, de una u otra forma, trasladen sus niveles de conocimientos del extranjero a su país, lo que mantiene un permanente y rico flujo de información y conocimientos del «mundo exterior».

No hay nada similar en Latinoamérica. En cuanto a lo militar, porque la región, en su condición general de neocolonia, no envía tropas fuera, las recibe de Estados Unidos. En cuanto a la enseñanza, la baja calidad de sus universidades solo atrae a estudiantes de la propia región y la inexistencia de centros de investigación de prestigio provoca el fenómeno contrario: la gente más preparada, como consecuencia de la falta de perspectivas y oportunidades en sus países de origen o en otros del área, se ven obligados a emigrar a Estados Unidos o Europa, en busca de futuro. De esa guisa, América Latina sufre una sangría constante de cerebros, que pasan a engrosar las ya nutridas filas de los centros de investigación de países desarrollados. Entre los tantos efectos que la diáspora de inteligencia produce es que los países latinoamericanos nunca han logrado crear núcleos de pensamiento e innovación que merezcan tal nombre. América Latina ha sido, es y seguirá siendo una consumidora neta de educación y cultura extranjera, esencialmente estadounidense, de la misma forma que seguirá dependiendo de la ciencia y técnica foránea.

El tema trasciende los aspectos meramente académicos. Ser educado, total o parcialmente, en Estados Unidos, pasó a convertirse en una opción con connotaciones políticas y sociales para las clases dominantes, al considerar que, siendo Estados Unidos la potencia hegemónica en el continente, enviar a sus hijos e hijas a educarse a universidades estadounidenses les daría, no solo mayor estatus social, sino ser bien vistos por los gobernantes de Washington a la hora de optar a cargos públicos relevantes en sus respectivos países. Las universidades estadounidenses llegaron a ser para los civiles latinoamericanos –con las diferencias del caso– un equivalente de lo que fue la Escuela de las Américas para los militares. Si ser graduados de esta escuela garantizaba ascensos y altos cargos a los militares (los dictadores Hugo Banzer, de Bolivia, Efraín Ríos Montt, de Guatemala, y Leopoldo Galtieri, de Argentina, fueron graduados de la Escuela de las Américas), ser graduado de una universidad de Estados Unidos abría en pampa las puertas de los gobiernos. Casi interminable es la lista de presidentes y ministros latinoamericanos graduados de universidades de Estados Unidos.

Cinco de los últimos seis presidentes de México estudiaron en universidades estadounidenses. También lo hicieron Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, de Colombia, Jamil Mahuad, de Ecuador, Eduardo Rodríguez, de Bolivia, y José María Figueres, de Costa Rica, por mencionar unos cuantos. Todos ellos fieles servidores de las políticas que emanaban de Washington. Entre los últimos presidentes o expresidentes de la lista figuran el argentino Mauricio Macri, quien hizo estudios en Columbia; Sebastián Piñera, en Harvard e Iván Duque, en Georgetown. En México, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), fundamental pues en su mandato se firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que desmanteló la industria y el campo mexicanos, 15 de los 36 ministros que tuvo Salinas eran graduados de universidades estadounidenses (excluimos a los ministros militares y a los políticos profesionales del Partido Revolucionario Institucional [PRI] que gobernó México casi seis décadas). Para situarnos en el presente, el colapso económico argentino se ha dado bajo la batuta del entonces ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, graduado de la Universidad de California, Luis Caputo, exdirectivo de JP Morgan para Latinoamérica y Marcos Peña, educado en Maryland. La enseñanza universitaria, «una de las industrias

más grande del país», como la calificó Karl Deutsch, es una máquina de fabricar presidentes y ministros latinoamericanos.

No hay nada de casual es esta dinámica. Como señala Deutsch, «los miembros de las elites extranjeras pueden volverse un poco más receptivos a los deseos de otro país si son educados allí, especialmente en sus escuelas y universidades de prestigio». El círculo de servidumbre a través de la educación universitaria (incluso desde la primaria) no ha dejado de crecer. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), en 2017 había 79.552 estudiantes latinoamericanos en universidades estadounidenses, preparándose una mayoría de ellos para ser, en sus países de origen, la perfecta «voz de su amo». ¿Por qué son contados con los dedos de la mano los que buscan Europa para estudios superiores, como ocurría en el siglo XIX? La razón es simple. En el siglo XIX mandaba Inglaterra y las oligarquías habían establecido una relación simbiótica con el imperio británico. Ellas dejaban que los británicos expoliaran sus países a cambio del apoyo británico a sus intereses de casta. Enviar a estudiar a sus hijos a la metrópolis imperial garantizaba el fortalecimiento del vínculo entre oligarquías e imperio. Por otra parte, Francia era vista como la cúspide de la modernidad y la innovación culturales, lo que hizo de París la meca de escritores y artistas. Desaparecidas esas visiones, al erigirse Estados Unidos como poder sustituto del británico, las elites cambian de amo, pero no de idioma y cambian las universidades británicas por las estadounidenses. Graduarse en ellas era una forma de obtener el *nihil obstat* del nuevo imperio a su mantenimiento como casta/clase dominante, así como a sus aspiraciones políticas. De esa guisa pasan a convertirse en portavoces nativos del *american way of life,* de forma que los pueblos son sometidos, de manera inmisericorde, a la misma y monótona cantinela, de Estados Unidos como poder omnímodo ayer, hoy y siempre. Siempre siervos, peregrinando a Washington, a buscar la bendición del imperio a sus ambiciones políticas, como antaño los mal llamados «libertadores» peregrinaban a Londres, en busca de limosnas del anglosajón a sus afanes de clase.

De la geografía y la hegemonía política y económica del Imperio se desprende otra, más sutil, pero más difícil de combatir: la hegemonía propagandística, cuyo rostro más visible es el peso abrumador de las multinacionales de las telecomunicaciones en los programas televisivos, del

río Grande a la Patagonia. Las empresas de cable, aunque el dueño de la empresa sea Carlos Slim –por poner un ejemplo– son simples vehículos transmisores de canales estadounidenses, que pueden ocupar hasta el 80 por 100 del total de canales distribuidos por cable. Tal ocurre con las transmisiones deportivas, que son un virtual monopolio de ESPN y Fox – que igual transmiten los partidos de Champions que el campeonato universitario estadounidense de softball– o los canales de cine, casi todos estadounidenses. A ello debe agregarse la venta de programas «enlatados», casi todos ellos series de televisión, que dominan la programación de los países, excepción hecha de las telenovelas latinoamericanas, que son un fenómeno imbatible.



Anuncio publicitario con parte de las cadenas de Estados Unidos que transmiten en español para toda Hispanomérica.

En 1970, las empresas de Estados Unidos invirtieron 100 millones de dólares en canales en español. En 2014, solo la cadena Fox invirtió 3.600 millones de dólares. El volumen de inversiones hace su peso abrumador y –casi– sin competencia. La presencia de canales de otros países –Televisión Española Internacional, Russia Today, Deutsche Welle…– es casi

testimonial y con audiencias minoritarias, tanto por ser canales de programas del país de origen, como por no estar dichos canales en el *ethos* psicológico-cultural de los latinoamericanos. Son países lejanos, ajenos, de los que conocen poco o conocen nada y que no forman parte de su imaginario. Una generalidad de latinoamericanos es, sencillamente, devoradora insaciable de programas estadounidenses porque así nacen programados desde la cuna y esto es así porque carecen de opciones. La geografía impone ordalías y, quizá, una de las más crueles y mortales sea esta, porque los pueblos viven sometidos a un lavado permanente de cerebro y se trata de una trampa sin alternativas a mano, que hace a los pueblos carne de manipulación contra ellos mismos y sociedades enlatadas en los parámetros políticos que bajan de Washington.

El mundo, tal como lo conocemos, es tridimensional: alto, largo, ancho. En *Flatland* (traducida al español como *Planilandia*), la singular obra de Edwin A. Abbott, sus habitantes pueden moverse de izquierda a derecha y hacia adelante y hacia atrás, pero no hacia lo alto, pues, siendo su mundo bidimensional, de ancho y largo, no conocen la dimensión tercera de lo alto. No pueden mirar por encima de ellos. Algo así ocurre en Latinoamérica. Se viaja de norte a sur y de sur a norte, es decir, hacia adelante y hacia atrás, y de este a oeste, o sea, de izquierda a derecha y viceversa, pues esos son las dimensiones geográficas y mentales en las que se manejan, aunque haya minorías que entiendan la tercera dimensión e intenten explicarla. No hay movimiento hacia lo alto, salvo en etapas determinadas, que, casi de inmediato, son atacadas por gobiernos de Spaceland, el mundo tridimensional que los observa… Latinoamérica es bidimensional, está como en un túnel, dentro del cual es posible el movimiento de izquierda a derecha o de delante hacia atrás, pero no es posible mirar ni hacia arriba ni hacia abajo; por tanto, no es posible imaginar ni pensar que pueda existir algo por encima. Tampoco por debajo. Por esa razón el pensamiento latinoamericano está condicionado, encajonado, sumido en una visión bidimensional, donde las referencias mentales, como las líneas aéreas, se dirigen masivamente a Estados Unidos y, cuando se busca algo diferente, se mira a ciertos países europeos, pero casi siempre desde una visión bidimensional, que lleva a copiar o a trasladar mecánicamente, como se ha hecho desde el siglo XIX, categorías, esquemas y valores a la región, sin terminar de asumir que, por más herencia europea que se tenga,

Latinoamérica no es Europa y, mucho menos, podrá ser un equivalente de Estados Unidos. A lo más, una mala copia. Hasta que se termine de entender esta situación, en América Latina seguirá siendo realidad los versos de Vicente Huidobro:

> Los cuatro puntos cardinales son tres: el sur y el norte.

Lo dicho. En Latinoamérica, la geografía determina una suma de cosas, desde mínimas a colosales. Entender estas singularidades es esencial para entendernos a nosotros mismos y nuestra visión del mundo, dominada por el peso demoledor de Estados Unidos y el aislamiento respecto del resto de pueblos y países del planeta. Desde el aislamiento en el que viven los países latinoamericanos, una mayoría de sus habitantes cree, con la fe ciega del fanático, que Estados Unidos es el principio y el fin de todo y que lo que allí se discute y decide se hace ley en el mundo. Combatir esa deformación psicológica, política y cultural es tarea primordial en el arduo camino hacia la liberación de Latinoamérica de su situación de neocolonia. Quizá el mayor reto.

II. UNA INDEPENDENCIA PARA DESTRUIRLO TODO

En 2010, en Buenos Aires, Bogotá y México se iniciaron los movimientos independentistas, dirigidos, todos ellos, por criollos de buena cuna. En 1810, España entera combatía, en durísimas condiciones, la invasión napoleónica, lo que impedía que quienes dirigían la resistencia contra el invasor pudieran hacer nada para frenar a los independentistas. En julio de 1808 había acontecido la batalla de Bailén, primer triunfo de las armas españolas –y europeas– contra un ejército del Gran Emperador. En julio de 1812, un ejército combinado hispano-luso-inglés derrotaba a los franceses en la batalla de los Arapiles. Tenía España, en esos años, un ejército aguerrido y fuerte, que había podido parar los pies a Napoleón, hasta lograr su expulsión de España en junio de 1813, tras la batalla de Vitoria. Por el Tratado de Valençay, de diciembre de ese año, se puso fin a la guerra y el rey Fernando VII fue restaurado en el trono de España. Años después, refiriéndose a la invasión de la península –según recoge Ronald Fraser en su obra *La maldita guerra de España*– Napoleón declararía:

> Esta maldita guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. Todas las circunstancias de mis desastres se relacionan con este nudo fatal: destruyó mi autoridad moral en Europa, complicó mis dificultades, abrió una escuela a los soldados ingleses […] esta maldita guerra me ha perdido.

Pese a la victoria, los ocho años de guerra habían dejado devastada España. La ruina era general, tanto por los estragos propios de la guerra y el saqueo que sufrió el país a manos francesas, como por el hambre, las epidemias y plagas que asolaron la población. Las guerras de independencia americanas se dieron contra un Imperio quebrantado, en ruinas y sin recursos para responder al desafío de las oligarquías criollas, que aprovecharon la postración del país para desgajarse de España.

Esa parte de la historia es desconocida para la gran mayoría de latinoamericanos. Según la historiografía oficial –escrita por los criollos vencedores y repetida como loros por tirios y troyanos, incluyendo en primer término a las izquierdas– los libertadores se alzaron con resonantes

victorias sobre poderosos ejércitos «españoles», en gestas heroicas comparables a las de los héroes de la Ilíada o la Odisea.

Cuando los fastos de celebración de los 200 años del inicio de los procesos de independencia en las colonias iberoamericanas, las «gestas libertadoras» se magnificaron hasta el delirio, como si, con la independencia, los países nacidos de estas hubieran alcanzado el nirvana o el paraíso terrenal. Fueron, como tantas cosas en la región, exuberantes en sus formas y exultantes hacia los libertadores. El acontecimiento estuvo lleno de singularidades, aunque algunas de esas singularidades no merecieron atención alguna, bien porque no había (y sigue sin haber) conciencia de ellas; bien por no darles importancia alguna; bien por ocultar los datos.

Una de esas singularidades olvidadas es que Latinoamérica fue la primera región del mundo en lograr su independencia de tres potencias coloniales: Francia, Portugal y España, en ese orden. Los países que integran la región están entre los Estados independientes más antiguos del mundo, anteriores en su formación a Italia, Alemania, o Polonia, ya no se diga de los países que emergieron como consecuencia del proceso de descolonización impulsado por Naciones Unidas a partir de 1945, como India, Singapur o Australia. Cuando se firma la Carta de Naciones Unidas, en junio de 1945, 19 de los 51 Estados firmantes son latinoamericanos. De los 32 restantes, solo 10 países pueden indicar una fecha de su nacimiento como Estados independientes anterior a la de los Estados latinoamericanos. Las excepciones eran Cuba y Panamá, independizados formalmente en 1898 el primero y en 1903 el segundo, pero que habían pasado, sin interludio, a control directo de Estados Unidos, sin gozar de ningún periodo de independencia real. La otra singularidad es que Latinoamérica se independiza en momentos en que se inicia, en otras zonas del mundo, el proceso de colonización por parte de un puñado de potencias europeas, con Inglaterra y Francia a la cabeza.

Dicho de otra manera, Latinoamérica se independiza de España justo cuando vastas regiones del mundo, incluso continentes enteros, van cayendo bajo el dominio de unas pocas potencias europeas. El siglo XIX será el gran siglo del colonialismo y del imperialismo europeos y, también, el gran siglo del capitalismo, hijo predilecto de la Revolución industrial y de la Revolución francesa y, ambas, motores del colonialismo y del

imperialismo (y de la emigración y las distintas revoluciones científicas y técnicas que se han desarrollado desde entonces, incluida la última basada en la informática, con el enfrentamiento entre Estados Unidos y China por Huawei y el sistema 5G, considerado el Santo Grial de las telecomunicaciones de este siglo XXI). Latinoamérica, aparentemente, quedó exenta de esas dos lacras, que tantas calamidades produjeron a los países y pueblos colonizados, y pasó a formar parte del reducido club de Estados independientes que formaban la sociedad internacional decimonónica.

Esas dos singularidades, sumadas, deberían haber posibilitado el surgimiento de un conjunto de países ricos, fuertes y desarrollados, o, cuando menos, de unos Estados adecuadamente ricos, que velaran por lo suyo y tuvieran una positiva presencia internacional. No ocurrió así. La relevancia económica de Latinoamérica, en el conjunto de la economía mundial, ha venido sufriendo un constante retroceso, siendo hoy la región menos significativa del mundo, solo superada en la minusvalía económica, comercial, científica y técnica por África, el continente más devastado, expoliado y maltratado por el brutal colonialismo europeo. Las cifras no permiten engaños al respecto. Latinoamérica representaba el 12,4 por 100 de producto interior bruto (PIB) mundial en los años cincuenta. En 1980, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), bajó al 7,2 por 100, cifra en la que ha seguido instalada, pues, en 2017, la región seguía representando un modesto 7 por 100. Latinoamérica permanece estancada económicamente desde 1980, con la Argentina de Mauricio Macri situada en un sumidero y el Brasil del ultraderechista evangélico Jair Bolsonaro instalado en la recesión. En opinión del BM, los motivos principales de este círculo vicioso que no termina son dos: un crecimiento modesto y la persistencia de enormes desigualdades entre ricos y pobres. Cabría señalar otra causa. Como señaló Paul Rosenstein, en un informe de 1961, citado por Karl Deutsch, entre 1952 y 1961, «fluyó más dinero desde América Latina hacia Estados Unidos que en la dirección opuesta». Como constata Deutsch, «como los empréstitos privados y públicos los integran los países deudores, y como las ganancias provenientes de las inversiones privadas se repatrían, hay una transferencia neta de riqueza del país en desarrollo al país desarrollado». La descapitalización perpetua.

El caso de Brasil es ilustrativo. A principios del siglo XXI, el gigante sudamericano hacía alardes de ser la décima economía mundial, presentando datos macroeconómicos deslumbrantes. En 2006, su economía creció el 3,7 por 100, superando el registro de 2,9 por 100 de 2005. En 2007, las estimaciones preliminares de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentadas en diciembre de 2007, calculaban el crecimiento de Brasil en el 5,3 por 100. Entre 2000 y 2006 su PIB creció un impresionante 21,7 por 100. Examinando más de cerca la situación, aparece el típico modelo latinoamericano. El crecimiento brasileño estaba impulsado por los buenos precios internacionales de las materias primas, y también por la afluencia masiva de inversión extranjera directa, que aumentó un 25 por 100 en 2006, alcanzando los 18.000 millones de dólares. Macroeconómicamente, todo perfecto. Pero en Brasil, el servicio de la deuda externa –que ascendía en diciembre de 2007 a 194.000 millones de dólares– absorbía el 36 por 100 de las exportaciones; el 36,3 por 100 de la población vivía en la pobreza y, de ellos, el 8 por 100 con menos de un dólar al día, el paro era del 10 por 100, la criminalidad una de las más altas del mundo, la deuda pública equivalía casi al 50 por 100 del PIB y la renta *per capita* era de 6.000 dólares, una quinta parte de la que posee la Unión Europea (UE). A pesar de esas realidades, Brasil quería codearse con los grandes del mundo y, en medio de la euforia económica de esos años, fue hecho sonado que Rusia y China invitaran a Brasil a formar parte del exclusivo club de grandes potencias emergentes, junto con India, en lo que sería llamado BRIC y, luego, con la incorporación de Sudáfrica, BRICS.

Formar parte de los BRICS no cambiaba la situación real de Brasil, que carecía –y sigue careciendo– de los presupuestos básicos para poder ser una potencia mundial al nivel, no ya de Rusia o China –tampoco se pueden pedir milagros– sino tan siquiera como la India de entonces (la de hoy es mucho más poderosa, en tanto Brasil ha retrocedido dramáticamente). Su desarrollo científico y técnico está en un segmento muy bajo, sus industrias funcionan la mayoría de ellas comprando patentes extranjeras, y su economía sigue descansando en la exportación de materias primas o productos con escasa transformación, como demuestran los datos. Por otra parte, habría que considerar que Brasil entró en los BRICS en 2009, cuando era presidente Luiz Inácio Lula da Silva, político progresista que apostaba

por un Brasil autónomo y con perfil propio en el mundo. ¿Habría sido invitado Brasil de haber tenido como presidente, no al prestigioso y admirado Lula, sino a un personaje como Jair Bolsonaro, quien ha pedido el establecimiento de bases militares estadounidenses en su territorio y que quiere meter a Brasil en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)? Habría que dudarlo, pues un país con esos perfiles no encaja en absoluto en los propósitos que se persigue desde los BRICS. (El expresidente Lula lo dijo de forma implícita en entrevista a Russia Today, del 4 de octubre de 2019: «En el momento que tienes presidentes que no se respeten, que no respeten su soberanía y que sigan lamiendo las botas de los estadounidenses, como lo hizo Fernando Henrique Cardoso con Clinton y como hace Bolsonaro con Trump, el país no avanzará […] ¡Este país tiene que ser soberano!». Los BRICS son, en esencia, países soberanos que trabajan conjuntamente para apuntalar un mundo multipolar y hacer frente al unilateralismo de Estados Unidos. ¿Cómo podría caber el Brasil de los Bolsonaro y compañía?)

En 2007, Brasil alcanzó la cifra récord de 160.649 millones de dólares en exportaciones, equivalente a un 16 por 100 más de lo exportado en 2006. La causa de ese crecimiento sorprendente radica en los altos precios internacionales de los llamados *commodities,* que significaron el 65 por 100 de las exportaciones totales. *Commodities,* como define el Diccionario panhispánico de dudas, es un anglicismo innecesario que se emplea para referirse a productos básicos o materias primas. Salvo en volumen de exportaciones de materias primas, Brasil sigue siendo periferia.

En el año 2012 los sueños de gran potencia empezaron a desvanecerse a golpe de realidades. Entre 2012 y 2016, el crecimiento de la economía brasileña fue negativo y el país pasó, de esperar crecimientos próximos al 4 por 100, a un decrecimiento del -0,47 por ciento hasta 2019, en la que ha sido «la peor recesión de la historia brasileña», como comentó Darío Mizrahi, en mayo de 2019. El PIB de Brasil fue, en 2018, de 1,8 billones de dólares, es decir, casi un 30 por 100 menor de lo que era en 2011. Por su parte, el FMI estimó que Brasil terminaría 2018 con un PIB *per capita* de 9.343 dólares, un 42 por 100 menor que en 2011, cuando era de 13.295. Habría que retroceder a 2009 para encontrar un PIB *per capita* inferior. Las cifras de Brasil en este último periodo pusieron de manifiesto la fragilidad de su modelo de desarrollo, que no pocos analistas –de esos que suelen

confundir los sueños con las realidades– creyeron que era más sólido de lo que realmente era. Los análisis sobre el último batacazo de Brasil llegan a las mismas conclusiones que los anteriores: el enorme crecimiento de la economía brasileña en la primera década del siglo XXI fue resultado, fundamentalmente, de la exportación de materias primas –casi todas de origen agropecuario–, cuyos precios en los mercados mundiales alcanzaron máximos históricos gracias al tirón del mercado chino y, por efecto derivado de ese tirón, por el aumento del consumo interno. En suma, la economía brasileña reveló otra vez su verdadero rostro, el de economía primaria cuyo éxito o fracaso dependía del aumento o descenso de sus productos en el mercado mundial. Por demás, la pobreza extrema en América Latina ha tenido en Brasil su peor evolución, como indicó el informe *Panorama Social de América Latina 2018,* presentado por la CEPAL en enero de 2019. En Brasil, el país más poblado de la región, entre 2015 y 2017 el porcentaje de población en pobreza extrema pasó del 4 por 100 al 5,5 por 100, el crecimiento más alto de la región. En términos regionales, la población en esa situación pasó de 57 millones en 2002 a 63 millones en 2018.

Nada ilustra mejor la situación de un país que el trato que da a su infancia. Según un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), titulado *Niños y Niñas en América Latina y el Caribe 2018,* de 193 millones de niñas, niños y adolescentes que hay en la región, 72 millones viven en la pobreza, 187.000 mueren cada año y 24.500 adolescentes de entre 10 y 19 años son víctimas de homicidio.

Latinoamérica ha pasado, finalmente, de ser una geografía receptora neta de inmigración a ser una región emisora de emigrantes, dentro de los cuales se encuentran los sectores más preparados y la gente más dinámica. Pocos hechos muestran de forma más evidente el fracaso de los Estados latinoamericanos que contemplar la riada de gente que, desde hace décadas, los abandona. Tampoco hay nada que exprese con mayor dramatismo el fracaso de dichos Estados. Según un informe especial de la American Immigration Law Foundation (AILF), titulado *A Humanitarian Crisis at the Border,* entre 2.000 y 3.000 cadáveres de emigrantes latinoamericanos (hombres, mujeres y niños) fueron hallados en las proximidades de la frontera suroeste de Estados Unidos entre 1995 y 2007. La AILF señaló que al menos 1.000 de ellos fueron encontrados en el sur del Estado de Arizona,

una cifra que sería –según expertos citados en el informe– diez veces superior al número total de víctimas que dejó el desaparecido muro de Berlín a lo largo de sus 28 años de existencia. ¿Ha cambiado la situación? Sí, a peor. El gobierno de Donald Trump ha declarado la guerra a la inmigración latinoamericana, hecho que tiene su reflejo en el número de víctimas. Según el Proyecto Migrantes Desaparecidos, entre 2014 y 2018 –último dato a mano– se habían contabilizado casi 2.000 migrantes muertos, una cifra, que, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), podría subestimar el número real de migrantes muertos en la frontera con Estados Unidos.

El aumento del número de víctimas ha sido proporcional al incremento de los controles migratorios por parte de las autoridades estadounidenses, al obligar a los emigrantes a buscar rutas cada vez más peligrosas para intentar su ingreso en Estados Unidos. Incluso agencias oficiales del gobierno estadounidense, como la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO, en inglés), consideran que el aumento de víctimas es consecuencia directa del incremento de las restricciones y la vigilancia. También consecuencia indirecta del desastre de los Estados latinoamericanos, incapaces de ofrecer trabajo y esperanza a sus poblaciones. Según la ONU, en 2018 la emigración latinoamericana sumaba 37 millones de personas, cifra que se entenderá mejor comparándola con la emigración africana, que ascendía, ese año, a 34 millones de personas. Ahora bien, tomando en cuenta que Latinoamérica tiene unos 620 millones de habitantes y África 1.260 millones –el doble de habitantes, que se dice pronto–, comprenderemos que Latinoamérica es la región del mundo que mayor número de personas expulsa de sus países de origen.

Más de dos siglos después de su independencia, la región se halla en el furgón de cola de la economía, el comercio y el desarrollo científico-técnico mundiales, sobre todo de este último, lo que compromete seriamente su futuro y perspectivas.

La crudeza de los datos sobre el atraso no ocupó ningún lugar de honor en el torrente de actos conmemorativos de los 200 años de vida independiente, ni lo ocupa en ningún discurso, salvo en gobiernos de izquierda y progresistas que, sin embargo, repiten machaconamente las glorias de los llamados «libertadores». Como ha venido ocurriendo desde principios del siglo XIX, el aluvión de fastos que anualmente se repiten para conmemorar

las independencias, solo sirven para ocultar un hecho difícilmente soslayable, y es que la independencia de España y de Portugal terminó en fraude, pues solo significó cambiar el tipo de dominación y de amo. El blando imperialismo ibérico fue sustituido, casi sin transición, por uno más taimado, cruel y rapaz, como fue el imperialismo informal de Gran Bretaña, menos visible pero más incisivo e implacable. La nueva forma de dominio penetrará tan profundamente en la estructura política, económica y social, que los nuevos Estados van a ser conformados para satisfacer las demandas de la nueva metrópolis, con olvido de sus propios intereses. Tan hondo calará el imperialismo informal, que este imperialismo aún perdura, no en cuanto al país dominante (los británicos fueron sustituidos en el siglo XX por Estados Unidos y en el XXI por un conglomerado de países, algunos europeos, que no podían faltar al festín pantagruélico que supusieron las privatizaciones de la era del neoliberalismo promovido por Estados Unidos y Gran Bretaña), sino en cuanto al modelo económico y social. La dominación británica, además, aisló a Latinoamérica de los cambios mundiales que sacudieron a Europa y al mundo en el siglo XIX, y que cambiaron el rostro del planeta en lo bueno y en lo malo. Pasando el tiempo, este aislamiento determinó que la región se fuera quedando en el furgón de cola de la economía mundial y completamente al margen de las revoluciones industriales y científico-técnicas que, desde el siglo XIX, han moldeado y transformado, como nunca en su historia, a la humanidad, proceso que continúa hoy a velocidad vertiginosa.

El origen del imperialismo informal y de otros muchos desastres, que siguen afligiendo y mantienen entrampados a los países, se encuentra en la cuna misma de la independencia, es decir, en el periodo inmediato, anterior y posterior, a las guerras contra el dominio de España. Está también en aquel reducido grupo de criollos, hijos casi todos de las oligarquías nativas, buena parte de ellos educados en Europa como europeos, que, al tiempo que profesaban un profundo sentimiento antiespañol –no obstante serlo ellos mismos–, eran admiradores devotos del poder británico, lo que les llevó a actuar, consciente o inconscientemente, como agentes del imperialismo inglés. Fue así cómo su sentimiento antiespañol –y el deseo de imitar miméticamente a los independentistas estadounidenses– les impulsó a buscar la independencia sin detenerse a medir costos ni analizar las precarias circunstancias internas y externas que existían para la región. Fue

así también cómo su anglofilia los llevó a entregar los países y las economías a los intereses británicos, hasta el punto de renunciar, antes aún de haberse consumado la derrota de España, a cualquier planteamiento de construcción nacional autónoma. Los Estados emergentes pasaron a convertirse en simples apéndices de los intereses comerciales, económicos y políticos de Inglaterra, hecho que determinará su evolución posterior y explica parte sustancial de su fracaso actual como Estados.

Los grupos dominantes que tomaron el poder en los países recién creados, estuvieron más pendientes de satisfacer al poder extranjero y defender sus intereses de clase que preocupados por crear Estados fuertes y pueblos educados y felices. Su preocupación fue crear Estados que sirvieran a sus intereses de clase y a los intereses de la metrópoli tutelar: el Estado oligárquico, clasista, excluyente, anclado en el siglo XVIII, en el que las oligarquías de comerciantes y terratenientes se perpetuarían a sí mismas y donde los ciudadanos serían como los peones en sus grandes haciendas, masas para cumplir con lo que decidiera el gobierno oligarca de turno. Siendo más fácil imitar que crear, dichas oligarquías se dedicaron con afán a copiar las ideas y conductas, inglesas en economía, francesas en modas y arte. En suma, a imitarlas miméticamente, para sentir que ellos, criollos, aunque vivieran como exiliados en aquel aislado continente, eran sus pares en América, aunque les separara no solo el océano Atlántico, sino todo lo demás, salvo religión y cultura. Ellos, además, tenían una misión que realizar, expuesta de manera clara por uno de los personajes más singulares del siglo XIX argentino, Domingo Faustino Sarmiento, autor de una obra que tuvo un gran impacto en la región: *Facundo o civilización y barbarie,* escrita por fascículos durante su exilio en Chile y publicada como libro en 1845. En sus páginas exclama Sarmiento: «De eso se trata, de ser o no ser salvaje». Luego, en el capítulo II de su obra, escribe:

> Si un destello de literatura nacional puede brillar momentáneamente en las nuevas sociedades americanas, es el que resulta de la descripción de las grandiosas escenas naturales y, sobre todo, de la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena, entre la inteligencia y la materia.

¿Y que entendía por «civilización»? Simplemente, la imitación mecánica de lo que entendían por europeo, que era lo británico y lo francés (no lo español o portugués). De ahí la importancia de volver al pasado para poder

entender mejor el presente. A pesar de haber transcurrido casi dos siglos, la historia de la región sigue anclada en sus orígenes y continúa pagando con creces los errores cometidos por las clases oligárquicas que tomaron el poder, en sustitución de España y Portugal. Errores que siguen vigentes y son repetidos una y otra vez, década tras década, prolongando en el tiempo la postración y haciendo más profundo el atraso y el dolor de Latinoamérica.

III. «LIBERTADORES» AL SERVICIO DE SU MAJESTAD BRITÁNICA

Los libertadores se alimentaron de las ideas de Francisco de Miranda, un personaje singular que pasó casi dos décadas en Europa, sobre todo en Inglaterra, donde fue confidente del Foreign Office, del que llegó a recibir salario, dedicando buena parte de su tiempo a la *dolce vita.* Su condición de propagandista de la independencia movió a un puñado de criollos a buscarlo como guía, de forma que la peregrinación a Londres se hizo natural. Allí llegan a visitarlo Bolívar y San Martín, O'Higgins y Mariño, los que luego regresan a sus provincias de origen dispuestos a difundir en la región las ideas independentistas, empapadas y deformadas por la influencia anglosajona. Los criollos que permanecen en América son, más que patriotas, representantes de su estamento social, de terratenientes, funcionarios y comerciantes. Desprecian y temen a los estamentos inferiores, que constituyen la abrumadora mayoría de habitantes, razón por la cual solo en casos extremos deciden armarlos e incorporarlos al proyecto de independencia, como tropa barata y carne de cañón. En Buenos Aires, los diputados criollos llaman desdeñosamente «cuicos» a los representantes de indios y mestizos del Alto Perú; en Venezuela califican de «castas infames» a mestizos, zambos y negros. Cuando cae en desgracia, Bolívar es llamado «Longaniza» o «el zambo», motes racistas que traslucen el desprecio que sienten los criollos por quienes no descienden de europeos. El desprecio es tanto más intenso cuanto más minoritarios son los blancos, de forma que, allí donde su número es más reducido, la segregación y el racismo se convierten en política institucional, como forma de mantenerlos sometidos. El criollo Domingo Faustino Sarmiento hace en su ya citado libro *Facundo o civilización y barbarie* que es menester recordar por el gran impacto que tuvo en las oligarquías gobernantes de la región, una disertación sobre los resultados del mestizaje y sobre las razas que pueblan los países iberoamericanos, a los que culpa de la desgraciada situación de los países:

> [La fusión] que ha dado mulatos y zambos, ha resultado un todo homogéneo que se distingue por su amor a la ociosidad e incapacidad industrial, cuando la educación y las exigencias de una posición social no vienen a ponerle espuela y sacarlo de su paso

habitual. Mucho debe haber contribuido a producir este resultado desgraciado la incorporación de indígenas que hizo la colonización. Las razas americanas [los indígenas] viven en la ociosidad y se muestran incapaces, aun por medio de la compulsión, para dedicarse a un trabajo duro y seguido. Esto sugirió la idea de introducir negros en América, que tan fatales resultados ha producido. Pero no se ha mostrado mejor dotada la raza española cuando se ha visto en los desiertos americanos abandonada a sus propios instintos.

Acto seguido, el «ilustre» argentino compara esas razas con la colonia alemana o escocesa, y siente «compasión y vergüenza» por sus propios compatriotas. Cita luego al escritor británico Walter Scott, quien había comentado –según cita Sarmiento– que las vastas llanuras de Buenos Aires estaban pobladas por «cristianos salvajes conocidos por el nombre de huachos (por decir gauchos)». Y termina la disertación con una propuesta:

Sería bueno proponerle a la Inglaterra, por ver nomás, cuántas varas de lienzo y cuántas piezas de muselina daría por poseer estas llanuras de Buenos Aires.

Domingo Faustino Sarmiento es un racista contumaz y, además, un anglófilo declarado, que cree que los anglosajones forman una raza superior a la hispana, lo que lleva a concluir, por lógica elemental, que Sarmiento –hispano de origen– se considera a sí mismo un ser inferior comparado con un anglosajón. Por extensión, todos los hispanoamericanos lo son (también los brasileros, que comparten tronco común) y, dada su inferioridad racial, es ley natural que vivan como pueblos sometidos al inglés. De hecho, esto era algo que venía ocurriendo desde 1810, cuando los oligarcas de Buenos Aires aceptaron firmar un acuerdo de libre cambio –del que hablaremos luego– con los ingleses, que entregaba a Su Majestad británica el control de la economía porteña y, por ende, la del país *in statu nascendi,* creando el neocolonialismo.

De su portentoso racismo y xenofobia da cuenta una carta dirigida por Sarmiento a Bartolomé Mitre, en 1873, durante la atroz guerra de la Triple Alianza (formada por Argentina, Brasil y Uruguay) contra Paraguay, que casi aniquiló al pueblo paraguayo:

Estamos por dudar de que exista el Paraguay. Descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto a falta de razón. En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes de los cuales ya han

> muerto ciento cincuenta mil. Su avance, capitaneados por descendientes degenerados de españoles, traería la detención de todo progreso y un retroceso a la barbarie…

Sarmiento, curiosamente, se adelanta en el tiempo a las teorías racistas que harán su aparición en Europa occidental a partir de mediados del siglo XIX, sobre todo después de la publicación, en 1853, de los dos primeros volúmenes de la monumental obra de Joseph-Arthur, conde de Gobineau –y su obra más célebre–, el *Ensayo sobre las desigualdades de las razas humanas,* obra que sirvió de piedra angular de las teorías racistas que proliferarían en Europa desde mediados del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Gobineau escribió que los negros poseían «unas facultades intelectuales mediocres… casi nulas» y los «amarillos» eran una raza mejor que la negra, pero «de segundo orden» e inferior a la raza blanca aria. Para el señor conde, la caída de las civilizaciones se debía a la degeneración de la raza original, al mezclarse con otras razas de inferior calidad:

> Pienso, pues, que la palabra degenerado, al aplicarse a un pueblo, debe significar y significa que este pueblo no posee ya el valor intrínseco que antiguamente poseía, porque no circula ya por sus venas la misma sangre, gradualmente depauperada con las sucesivas aleaciones.

Curiosamente, el racista Gobineau es mucho más benevolente con la «raza» española, blanca al fin, de lo que es el propio Sarmiento. Según Gobineau,

> En cuanto a la fuerza del puño, los ingleses aventajan a todas las demás razas europeas; al paso que los franceses y los españoles poseen una capacidad superior de resistencia a la fatiga, a las privaciones, a los rigores de los climas más duros.

Gobineau tuvo éxito en su época y su obra fue recibida con beneplácito en Alemania, por cuanto el diplomático y ensayista francés había sostenido en el capítulo XVI de su obra («Recapitulación; caracteres respectivos de las tres grandes razas; efectos sociales de las mezclas; superioridad del tipo blanco y, dentro de este tipo, de la familia ariana») que «las razas germánicas […] transformaron, en el siglo V, el genio de Occidente» y que «nada [hay] de verdadera civilización en las naciones europeas cuando las ramas arias no han dominado». La defensa de la superioridad de la raza aria da fama a Gobineau en Alemania y, entre otros hechos, le permite

desarrollar una estrecha amistad con Richard Wagner. El teórico del racismo escribió más obras y fue de los primeros en tratar el tema de la decadencia de las civilizaciones. No obstante, sus posiciones racistas le han excluido de cualquier tipo de reconocimiento en su Francia natal. ¿Cómo podría haberlo, después de las atrocidades perpetradas por los blancos contra tantos pueblos indefensos del mundo? No obstante, lo que es impensable en Francia o Alemania ocurre en Argentina. Sin desconocer los méritos de Sarmiento como ensayista y pensador, su extremo racismo, su clasismo rayano en la xenofobia, lo deberían excluir del Parnaso político e intelectual en Argentina, pero ocurre lo contrario. Sarmiento sigue siendo considerado *pater patriae* y, con tales padres ¿qué hijos pueden esperarse? Tiene uno derecho a pensar que, si esos son los «padres fundadores», ¿qué podía nacer de ellos sino complejos de inferioridad, traición y obediencia al anglosajón? Sarmiento llevó su anglofilia al paroxismo en su –casi– póstuma obra *Conflicto y armonías de las razas en América,* publicada en 1883, en la que resume con estas palabras lo que, a su juicio, sería la salvación de las repúblicas iberoamericanas:

> La América del Sur se queda atrás y perderá su misión providencial de sucursal de la civilización moderna. No detengamos a Estados Unidos en su marcha: es lo que en definitiva proponen algunos. Alcancemos a Estados Unidos. Seamos la América, como el mar es el Océano. Seamos Estados Unidos.

Facundo o civilización y barbarie había aparecido antes de la oleada de racismo e imperialismo que barrerá Europa Occidental en la segunda mitad del siglo XIX; pero *Conflicto y armonías de las razas de América* lo hace en pleno paroxismos racista y colonialista, de lo que Sarmiento debía estar enterado, pues era persona informada y al día de los devenires de Europa, de donde –debió sentir– llegaba una confirmación del aserto de sus ideas racistas y de su exacerbado sentimiento de clase. Pero podría ser un error atribuir al pensador argentino un ideario exclusivo y propio. El éxito que tuvo *Facundo o civilización y barbarie* entre las elites latinoamericanas obedecía a que la obra de Sarmiento era una magnífica justificación de las políticas de explotación y opresión que ejercían sobre sus pueblos, compuestos, masivamente, por indígenas, negros y mestizos. Sarmiento dijo lo que querían escuchar las oligarquías y estas lo coronaron como su apologeta. Don Faustino era el perfecto hombre colonizado por el Imperio

británico y el Imperio británico era, entonces, amo y señor de casi toda Latinoamérica.

Los nuevos Estados se formarán sobre esas dos improntas infames. Por una parte, en sujeción y dependencia económica, comercial y psicológica a una potencia extranjera. Por otra, en la exclusión de las vastas mayorías no blancas –a las que oprimen y, sobre todo, temen– de todo lo que pueda ser progreso, riqueza y desarrollo. No hay, en las oligarquías, intención de llevar educación a los pueblos, proteger sus economías o salvaguardar los intereses básicos de los países. Temen educar a los pueblos, pues los pueblos educados amenazarían su dominio de clase (la anécdota del terrateniente nicaragüense que, preguntado sobre la educación de la gente, respondió: «Si los pobres aprenden a leer, ¿quién me limpiará las botas?») y no se plantean modificar el modelo neocolonial, pues de ese modelo obtienen sus rentas.

Los países nacerán, por tanto, como sociedades duales, fracturadas, sociedades que funcionan, como define Michel Albert en su obra *Capitalismo contra capitalismo,* desde «la segregación fáctica, el "*apartheid* económico"», sociedades «que se mueven definitiva y cruelmente en dos velocidades. [Sociedades] donde las categorías de gentes viven, de hecho, en dos planetas diferentes que cada año se alejan un poco más uno del otro». Volvamos a Sarmiento y su *Facundo,* obra que es fuente copiosa de información sobre Argentina y, por extensión, sobre las sociedades iberoamericanas después de la independencia:

> En la República de Argentina se ven dos civilizaciones distintas en un mismo suelo: una naciente, que, sin conocimiento de lo que tiene sobre su cabeza, está remedando los esfuerzos populares de la Edad Media; otra, que, sin cuidarse de lo que tiene a sus pies, intenta realizar los últimos resultados de la civilización europea. El siglo XIX y el siglo XII viven juntos; el uno dentro de las ciudades, el otro, en las campañas.

Esta visión entre el campo «bárbaro» y la ciudad «civilizada» la reitera Sarmiento en carta a Mitre, de 1861:

> Tengo odio a la barbarie popular […]. La chusma y el pueblo gaucho nos es hostil […]. Mientras haya un chiripá no habrá ciudadanos, ¿son acaso las masas la única fuente de poder y legitimidad? El poncho, el chiripá y el rancho son de origen salvaje y forman una división entre la ciudad culta y el pueblo, haciendo que los cristianos se

degraden […]. Usted tendrá la gloria de establecer en toda la República el poder de la clase culta aniquilando el levantamiento de las masas.

(Una nota histórica sobre la contradicción que presenta Sarmiento entre el campo y la ciudad. En la Edad Media, en buena parte de Europa se decía que «el aire de la ciudad hace libres a los hombres», una frase que tenía su origen en Germania: «Stadtlu macht frei». El origen de la frase respondía a una norma jurídica, que establecía que un siervo que pudiera pasar día y medio en una ciudad, quedaba liberado de la servidumbre. Los nobles se rebelaron contra la norma, que fue derogada por Federico II en 1232. No era, precisamente, novedosa, la idea de don Faustino, quien se hubiera opuesto a la norma).

La oposición entre campo y ciudad no es sino el reflejo de la división entre las oligarquías comerciantes y terratenientes, establecidas en Buenos Aires, los siervos –gauchos en Argentina, peones, campistos o llaneros, según cada país– y los indígenas y negros todos, sin excepción. Este dualismo, descrito de forma temprana por Sarmiento, aunque ha experimentado variaciones, sigue vivo de muchas formas y explica buena parte de la inestabilidad, la violencia y la fragmentación social que sufren los países. Las diferencias políticas, en las décadas posteriores a la independencia, no van a reflejar solamente una contradicción de ideas –como ocurre en países integrados como los europeos–, sino que manifestarán el antagonismo entre dos mundos, dos sociedades, donde el bienestar de una minoría proviene de la opresión y la explotación de la mayoría. No hay, o son escasos, puentes y medios que permitan el trasvase y distribución de la riqueza nacional de la minoría a la mayoría para incorporarla al proceso de desarrollo nacional. Por eso mismo, Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del mundo.

En México, un libro escrito por once periodistas dirigidos por Jorge Zepeda y editado en 2007, *Los amos de México,* recordó el hecho. Once multimillonarios, en este país de 40 millones de pobres, poseían el 10 por 100 del PIB mexicano y el 50 por 100 del mercado de valores (esa exorbitante concentración de riqueza explica por qué México, como tantos otros países de la región, necesitaba y sigue necesitando de las remesas de sus emigrantes para nivelar sus cuentas). ¿Algo ha cambiado en 2019? Nada. Todo sigue más o menos igual, como igual o similar es la situación

en otros países latinoamericanos. En un artículo de 25 de septiembre de 2017, el periodista Federico Soria denunciaba que el 35 por 100 del territorio nacional de Argentina pertenecía a 1.250 terratenientes, mientras el 37 por 100 de la población no tenía un mínimo pedazo de tierra. En Chile, en julio de 2018, cuatro empresas controlaban el 65 por 100 del sector bancario y dos empresas el 94 por 100 del sector forestal, mientras la empresa matriz de estas dos empresas forestales, Copec, controlaba el 63,6 por 100 de la distribución de combustibles. Como señaló Ben Ross Schneider, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), «la poca variedad de productos que elaboran los latinoamericanos –y la poca tecnología que agregan a los procesos– está vinculada a la existencia de grandes conglomerados familiares que dominan la economía». Hoy, como hace dos siglos. Países con la historia petrificada.

La distribución de la riqueza nacional ha sido, desde el siglo XIX, una premisa esencial para lograr el éxito en la formación de los Estados modernos. Es decir, el desarrollo de los países ha estado vinculado con niveles cada vez mayores de distribución de la riqueza nacional entre sus habitantes. Los países latinoamericanos, desde la independencia, han seguido –y siguen– en la dirección opuesta, de forma que, cada año, baten todos los récords mundiales de desigualdad, como pone de manifiesto anualmente el coeficiente Gini. Este coeficiente es una escala entre 0 y 1 que sirve para medir el nivel de distribución de los ingresos en un país; 0 quiere decir que todos sus habitantes reciben los mismos ingresos; 1, que una persona se queda con todos los ingresos del país y el resto no recibe nada. En el presente, la desigualdad permanece inalterable, al punto que ocho de los diez países más desiguales del mundo son latinoamericanos, como puso de manifiesto un reciente estudio del BM:

Los 10 países más desiguales del mundo (índice de Gini)	*(Valor más alto, país más desigual)*
Sudáfrica	0,63
Haití	0,60
Honduras	0,53

Colombia	0,53
Brasil	0,52
Panamá	0,51
Chile	0,50
Ruanda	0,50
Costa Rica	0,49
México	0,49

Fuente: BM, *Taking on Inequality,* 2010.

Doscientos años de independencia han dado para poco en este y otros campos, demostración de cuán varada se encuentra la región, si bien es necesario precisar que su variedad marca notables diferencias entre unos países y otros y, dentro de los países, entre las distintas regiones que los integran, sin olvidar los esfuerzos que han hecho los pocos gobiernos progresistas y revolucionarios que han logrado permanecer en el poder el tiempo suficiente para hacer menos ofensivas esas desigualdades, como ha ocurrido en Cuba, desde 1959, se intentó en Nicaragua, entre 1979 y 1990, se hizo en Venezuela, con Hugo Chávez, y sigue haciéndolo Bolivia con Evo Morales.

Los libertadores fueron actores activos de ambos procesos. Por su extracción de clase, no dudan en construir las instituciones de los nuevos Estados sobre el racismo y la exclusión. Tampoco dudan en «britanizar» las luchas de independencia, poniéndose al servicio de Inglaterra, aunque para ello tengan que ofrecer como recompensa sus propios países. Así, O'Higgins solicita el apoyo de Inglaterra ofreciendo «el oro desentrañado de las montañas de este país a cambio de la industria de [los] laboriosos» ingleses. San Martín, héroe en la batalla de Bailén, primera gran derrota de los ejércitos napoleónicos, pasa de España a Inglaterra de la mano de lord Macduff, quien le consigue pasaporte y le introduce en los círculos

independentistas promovidos por Londres. Bolívar mismo, aunque no desconoce el precio que conlleva la alianza con la potencia británica («formado una vez el pacto con el fuerte, ya es eterna la obligación del débil», llega a escribir), no duda en exaltar el apoyo que recibe de Londres, afirmando, con notoria ingenuidad, que «la alianza de Gran Bretaña nos dará una grande importancia y respetabilidad. A su sombra creceremos y nos presentaremos después entre las naciones civilizadas y fuertes». Bolívar, incluso, ofrece Centroamérica a cambio del apoyo inglés, conocedor del viejo sueño británico de dominar el istmo para construir un canal interoceánico. En su empeño por destruir el dominio español, Simón Bolívar llega a más y pide, en su célebre Carta de Jamaica, la intervención extranjera, inaugurando uno de los mayores cánceres de la región:

> La Europa misma, por miras de sana política, debería haber preparado y ejecutado el proyecto de la independencia americana; no solo porque el equilibrio del mundo así lo exige; sino porque este es el medio legítimo y seguro de adquirirse establecimientos ultramarinos de comercio.

Desde esa temprana época la injerencia extranjera quedará incrustada en el quehacer político de los países latinoamericanos, cuyas oligarquías convertirán a Inglaterra, durante el siglo XIX, en árbitro de los asuntos domésticos y en aliado contra los movimientos que amenazaran su hegemonía. Estados Unidos, en el siglo XX, sustituirá a la potencia británica, creándose una simbiosis oligarquías-Imperio que determinará el futuro de la región. Una simbiosis que se empieza a gestar en los años previos a la independencia, cuando los hijos de las oligarquías criollas inician la peregrinación a Londres para requerir la injerencia extranjera con la que arrebatar el poder político a la Corona española. La fórmula que se adoptará sigue vigente (como ha recordado, dramáticamente, el caso de Venezuela, hoy, con una oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro pidiendo abiertamente la invasión de Venezuela por tropas estadounidenses), aunque las circunstancias históricas mundiales, en el presente, hayan atemperado su funcionamiento y, en algunos casos, impedido su puesta en práctica. En virtud del acuerdo tácito alcanzado en el periodo de independencia, Inglaterra apoyaría a las oligarquías locales a conquistar el poder a cambio de que las oligarquías aceptaran el expolio de los países por Inglaterra.

La simbiosis oligarquía-Imperio funcionará tan bien y llegará a incrustarse tanto en la mentalidad oligárquica que, cuando Estados Unidos sustituye a Inglaterra como potencia hegemónica en el continente, el relevo se hace sin transiciones ni traumas. La presencia del poder extranjero llegará a ser tan natural que los mismos pueblos, consciente e inconscientemente, aceptarán sin chistar la tutela extranjera durante siglo y medio. Aún ahora, el inconsciente colectivo sigue asumiendo la injerencia extranjera como una cuestión natural dentro de los países. Así, la región es escenario de hechos que, si ocurrieran en Europa, darían lugar a graves conflictos diplomáticos. En 1945, el embajador de Estados Unidos encabezó campañas y manifestaciones contra Juan Domingo Perón en Argentina. La Embajada de Estados Unidos hizo lo mismo contra Hugo Chávez, en Caracas, en 2002. En 2006, el embajador de Estados Unidos en Managua era el líder *de facto* de la oposición contra el Frente Sandinista. En enero de 2019, el presidente Trump reconoció como «presidente» de Venezuela a un sujeto patético cuyo nombre omitimos por un mínimo de decoro. Y las derechas oligárquicas iban y van tras los interventores. En Nicaragua, el canciller del país llegó a declarar, en 2006, que el embajador de Estados Unidos solo había ejercido «su libertad de expresarse» y que el diplomático podía decir cuanto quisiera porque, en definitiva, «Estados Unidos donaba al país más de 500 millones de dólares anuales» (de lo que se deduce que, para aquel canciller, Nicaragua había sido comprada a precio de saldo y, por tanto, el embajador gringo podía hacer y deshacer).

No debe sorprender tal fenómeno. La tutela extranjera había sido legitimada desde la cuna de los países por los padres de las patrias *in statu nascendi.* Si los propios libertadores habían desfilado por Londres, solicitando la intervención británica para alcanzar sus fines, con un Miranda a sueldo del gobierno británico y con Bolívar reclamando que los europeos intervinieran para borrar el nombre de España, ¿por qué no podían sus sucesores en los gobiernos hacer lo mismo con otras potencias y para el mismo fin? ¿Cuántas veces no volverán a ver los países de América Latina a políticos nativos pulular por capitales extranjeras, mendigando la intervención foránea para ayudarles a alcanzar, conservar o recuperar el poder y las prebendas que ambicionan o han perdido? ¿Cómo se podían construir auténticos Estados nacionales si estos ya nacían hipotecados a una potencia extranjera y gobernados por oligarquías cuyo único propósito era

perpetuar su estirpe y clase en el dominio de los países? ¿Sobre qué bases forjar esos Estados si serían, primero Londres y después Washington, los sitios desde donde se determinarían su economía y su política, es decir, su vida y su destino?

El deslumbramiento que lo británico produce en la oligarquía dominante tiene otro efecto, además del injerencismo. Es el fenómeno psicológico que será denominado autocolonización. Por este fenómeno, según explica el fallecido Eduardo Haro Tecglen, «el colonizado asume o trata de asumir las costumbres y actitudes del colonizador, hasta convertirse en su satélite». El autocolonizado siente veneración por el colonizador, al que admite como ser superior –lo que lleva implícito reconocerse a sí mismo como ser inferior–, y la admisión de esa superioridad le lleva a asumir los valores del colonizador como propios, aunque esos valores correspondan a una realidad ajena. Menosprecia lo suyo por considerarlo inferior y, por tanto, indigno de respeto. Un episodio, recogido por Tony Smith en su obra *Los modelos del imperialismo,* permite ilustrar esta actitud. Es la afirmación del diputado brasileño Joaquim Nabuco:

> Cuando entro a la Cámara [de diputados], estoy enteramente bajo la influencia del liberalismo inglés, como si estuviera trabajando bajo las órdenes de Gladstone [...]. Soy un liberal inglés [...] en el Parlamento brasileño.

¿No hay en las palabras del diputado Nabuco un eco de las expresadas por Sarmiento en el Congreso de Argentina? «Llego feliz a esta Cámara de Diputados donde no hay gauchos, ni negros, ni pobres. Somos la gente decente, es decir patriotas».

La historia latinoamericana, desde la independencia, está llena de Nabucos y Sarmientos, cuya actitud mental, política y psicológica es diametralmente opuesta a la del colonizador, siempre atento a cuanto beneficie a su país. Es lo que quería expresar el célebre ministro inglés lord Palmerston, autor, al parecer, de la no menos célebre afirmación de que «Inglaterra no tiene amigos o enemigos, solo tiene intereses». Igual ocurrirá cuando el dominio británico sea sustituido por el estadounidense, como ilustra el siguiente suceso. En 1925, un grupo de políticos nicaragüenses se reunió con el ministro (embajador) de Estados Unidos en Managua, para solicitar el apoyo estadounidense a sus personales ambiciones. El ministro

comentó después: «Aquí se piensa muchas veces que nosotros venimos a servir los intereses de los unos contra los otros; pero se equivocan. Nosotros servimos los intereses de nosotros mismos». Décadas después, el presidente Ronald Reagan recordaría esa verdad en 1983: «Nosotros no estamos en el mundo para defender los intereses de los demás. Estamos para defender nuestros intereses». En la cabeza de don Joaquim Nabuco y de sus pares, ese tipo de criterios jamás habría encontrado sitio.

Por demás, como señala Karl Deutsch en su obra ya citada *El análisis de las relaciones internacionales,* la autocolonización es fomentada por el colonizador de múltiples formas, como promoviendo la educación en la metrópoli de las elites gobernantes, el otorgamiento de becas a sectores dirigentes reales o potenciales, y con la penetración ideológica a través de los medios de comunicación (en Latinoamérica, la televisión procedente de Estados Unidos, sobre todo por cable, constituye un monopolio *de facto*). Así garantizan la transmisión de los valores coloniales y la reproducción de una minoría ilustrada que gobierne según la línea e intereses del poder colonial.

El autocolonizado garantiza un dominio ideal. Nativos del país gobiernan y se encargan de perpetuar el control de la metrópoli, sin necesidad de tropas coloniales o de una represión continua (que, cuando ha hecho falta, se ha usado sin escrúpulos, como demostraron las atroces dictaduras fomentadas por Estados Unidos desde principios del siglo XX. Puede consultarse al respecto el libro de Marcos Roitman, *Por la razón o la fuerza,* publicado en 2019). De la misma manera, nunca han faltado minorías intelectuales –o que se hacen pasar por tales– ni escritores ilustres que se convierten en portavoces, hoy como ayer, de los valores colonialistas. Los defienden con vehemencia desde presuntos criterios de libertad y modernidad, bien desde sus propios países, bien aposentados en los países ricos de cuyos intereses y valores son estandartes, punta de lanza y hasta candidatos presidenciales, que, de tan separados que viven de sus pueblos, suelen terminar derrotados. Para mantener sus lealtades, en los países ricos se les llena de honores y premios, se les integra en sus academias y foros, con lo cual profundizan el fenómeno de la autocolonización, porque ¿no es el sueño más querido del siervo verse convertido en señor y ser tratado como tal por el amo que antes le daba de latigazos?

Entre 1841 y 1894, periodo en que Inglaterra impuso un «Reino Mosco» en el Caribe nicaragüense, el elegido era investido «rey» por el capitán de un navío inglés, que le vestía con una casaca y adornaba con abalorios y baratijas, en lo que era, a ojos del inglés, un remedo y una burla. Remedo y burla que bastaban para que los naturales le creyeran ungido por su Graciosa Majestad y la defendieran a muerte. No les daba, su umbral de conocimiento, para percibir el sarcasmo sangrante del acto. No tendrán umbral la miríada de tiranuelos y presidentillos que ocuparán los solios en las derruidas repúblicas para distinguir la burla del agasajo, de tan apurados que solían andar por obtener las bendiciones de sus admirados amos, a los que imitaban hasta en las muecas, aunque nunca les igualaran.

Desde los orígenes, las oligarquías latinoamericanas han procurado educar a sus hijos en las metrópolis, como parte indispensable del proceso para reproducirse como clase y como gobierno: en el siglo XIX, en Londres y París; en el XX, en Estados Unidos. Desde hace un siglo, Washington mantiene cuotas en universidades y academias militares para recibir en ellas a los designados de cada país. Se cuentan por centenares, como ya vimos –y es preciso repetir, repetir y repetir–, los presidentes y ministros que han estudiado en Estados Unidos y que, ya en el cargo, han sido obedientes cumplidores de lo aprendido. Y por decenas de miles los militares que han realizado cursos en academias estadounidenses, particularmente en la hoy desaparecida Escuela de las Américas, donde eran entrenados para oprimir y asesinar a sus propios pueblos.

IV. INDEPENDENCIAS PARA DESTRUIR, NO CONSTRUIR

De la imprevisión y ausencia de visión de futuro que tenían los libertadores, y las oligarquías en general, da cuenta un hecho que marcará el destino de los nuevos países: las derrotas de los maltrechos y aislados ejércitos realistas abren las puertas a la anarquía, el caos y, peor aún, las guerras civiles. De México a Argentina, las oligarquías se dividen por obtener el control del poder y, en ese afán, hunden a los pueblos en interminables guerras fratricidas, que se prolongarán a lo largo del siglo XIX y, en algún caso como Colombia, hasta el XXI. Mientras Bolívar avanza, sin mirar atrás, sobre Bogotá y cruza los Andes, Venezuela se sume en una guerra atroz de todos contra todos que, con 100.000 muertos sobre una población inferior al millón de habitantes, la dejará arruinada y desangrada para el resto del siglo. Entre 1821 y 1846, México se hunde en una atroz espiral destructiva. Tiene 27 gobiernos con 72 gobernantes, lo que es aprovechado por Estados Unidos para arrebatarle, en 1847, la mitad del territorio heredado de España. Bolivia, a lo largo del siglo XIX, tiene 28 gobiernos y 5 guerras, entre ellas la Guerra del Pacífico, que la priva de su salida al mar, hasta el presente. Perú, entre 1821 y 1851, tiene 21 gobiernos. La República Federal Centroamericana naufraga en 1836, a causa de las guerras civiles y las mezquindades de las oligarquías, mientras Inglaterra se queda con Belice y ocupa la Mosquitia de Nicaragua, donde, en 1856, una nueva guerra civil hace posible que un puñado de filibusteros se apodere del país, con la intención de anexar Centroamérica a Estados Unidos. La unidad centroamericana logra vencerlos, pero Nicaragua queda arrasada. En Argentina, las guerras civiles se prolongan hasta 1860, para desembocar en el peor conflicto conocido por América Latina, la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Este era, paradójicamente, el único país que se había librado del caos y las guerras. Único país, también, que había sentado las bases de un Estado fuerte, con reforma agraria, educación pública y proteccionismo económico. La guerra agravará la crisis económica argentina y destruirá Paraguay por cien años.

Bolívar tiene conciencia tardía del caos en que se hundían, uno tras otro, los países latinoamericanos, y la solución que propone al desastre reinante,

provocado por él mismo y sus pares de otros países, hace aún mayor la perplejidad respecto de su idea sobre el futuro de la región. La solución de Bolívar es poner a los nuevos países bajo tutela extranjera, hasta la resolución de las crisis intestinas. «Los Estados americanos han menester de los cuidados de gobiernos paternales que curen las llagas y las heridas del despotismo y la guerra», afirma Bolívar en la Carta de Jamaica. Primero pidiendo la intervención foránea y luego proponiendo la tutela extranjera sobre los países emergentes, ¿qué idea tenía Bolívar de la independencia hispanoamericana? ¿La guerra contra España había sido un simple cambiar las cadenas? ¿Alguien se imagina, en el Estados Unidos de los años de independencia, a Thomas Jefferson o a George Washington pidiendo la tutela extranjera para el naciente Estado? Ciertamente, los independentistas estadounidenses necesitaron de Francia y España, sin cuya intervención hubiera sido imposible lograr la derrota de Inglaterra. Pero no es menos cierto que, en las negociaciones de París entre las potencias europeas sobre Estados Unidos, los negociadores estadounidenses terminaron arreglando bilateralmente sus diferencias con Inglaterra para garantizar, justamente, la independencia real de su país, dando con un palmo en las narices a los dos países que habían hecho posible esa independencia. Los próceres estadounidenses nunca se plantearon cambiar un dominio por otro, es decir, pasar del dominio británico al franco-español. Su objetivo fue siempre, como lo demostraron en París, tener un país para ellos mismos. No se trataba tanto de derrotar a Inglaterra por derrotarla, sino de crear un país independiente, la defensa de cuyos intereses ocupó siempre (y ha seguido ocupando) un lugar señero en la mente y los planes de los dirigentes de Estados Unidos, lo que ha sido un factor determinante de su éxito como clase dominante y como país. En Latinoamérica, por el contrario, se buscaba la derrota de España sin más, razón por la cual no se dudó en bendecir la injerencia extranjera –británica, para ser precisos– antes, durante y después de las guerras de independencia. Por ese motivo, los intereses nacionales no ocuparon nunca un lugar similar al que poseían en Estados Unidos y sí, en cambio, quedó formando parte del *ethos* nacional la reverencia casi idolátrica al poder foráneo.

Otro efecto terrible dejó la independencia, cual fue la fragmentación de los dominios de España en 15 países, división que hizo mayor la ruina de los nuevos Estados y dio pie a conflictos bélicos, intervenciones extranjeras

y la rapiña de territorios. En el caso de Centroamérica, determinó que aquellos reducidos Estados fueran presa de oligarquías cavernarias y ambiciones extranjeras, que, a la postre, dejarán como resultado la desarticulación de los países del istmo, convertido en campo de batalla de los intereses de estadounidenses e ingleses.

Tres países resultaron beneficiarios netos de la desastrosa independencia hispanoamericana: Inglaterra, que queda como potencia hegemónica y aprovecha el caos imperante para imponer su *diktat* económico y comercial, consolidar su dominio sobre Belice y Guyana, y apoderarse de la Mosquitia de Nicaragua y del archipiélago de las Malvinas de Argentina; Estados Unidos, que logra triplicar su territorio a expensas de España primero y México después; y Brasil, que merced al ejército sabe evitar la fragmentación de su vasto territorio y, desde São Paulo, impulsa una política de expansión territorial que le permitirá ampliar sus dominios a costa de casi todos los países vecinos, hasta convertirse en el más extenso Estado de Sudamérica, como se verá más adelante.

Un factor determinante del futuro de la región es que la independencia latinoamericana no es resultado de causas endógenas, por más que los historiadores nativos, sobre todo en el siglo XIX, hayan querido presentar aquel proceso como una gesta nacida de las entrañas de los pueblos «oprimidos» por España. No es que no existieran causas objetivas que habrían llevado en un momento dado –como ocurrirá en Cuba a partir de 1860– a plantear la independencia como parte de un proceso natural de maduración de las sociedades iberoamericanas. Pero a principios del siglo XIX esas causas no existían, entre otras razones porque las colonias españolas vivían un periodo de prosperidad o resurgimiento a causa, sobre todo, de las reformas internas y extendidas a América durante el reinado de Carlos III y la época del despotismo ilustrado. Estas reformas habían provocado una recuperación notable de España como potencia mundial y contribuido a mejorar la economía y la administración de los vastos dominios que conformaban la Corona española, de América a Filipinas.

Por lo demás, algunos episodios históricos permiten sostener que no solo no existía un sentimiento independentista en la vasta mayoría de la amplia mixtura que formaba la población hispanoamericana, suma de españoles, criollos, mestizos, mulatos, zambos, indígenas, negros y europeos de la más variada procedencia, sino todo lo contrario. En el siglo XVIII se había

consolidado un fuerte sentimiento de identidad y pertenencia a un corpus político propio y singular, una patria grande, que llevaba a las autoridades y habitantes de aquellos extendidos dominios a defender sus territorios y la Corona con un ardor y un empeño envidiables. Las páginas de la historia hispanoamericana están llenas de pequeñas, medianas y enormes victorias militares sobre Inglaterra, que resultarían imposibles de explicar –sobre todo las que se dieron entre 1760 y 1807– de no existir un fuerte espíritu de vinculación al sistema imperante y, por qué no decirlo (rompiendo otro tabú de la mitología regional), a lo que representaban España y la Corona. Los dominios españoles se defendían unos a otros, comerciaban y se movían dentro de un espacio común que se aceptaba como tal. El aporte que llegaba de España era variable, según la magnitud del conflicto, pero las provincias, por lo general, se defendían con lo que tenían y les llegaba de otras provincias, sobre todo en el Caribe. Dicho de otra manera, España nunca necesitó de ejércitos de ocupación, del estilo del ejército cipayo inglés en la India, sino que cada provincia, capitanía general y virreinato poseía sus propias milicias, que formaban parte de un cuerpo general armado para la defensa de las Indias españolas. Estaban formadas las milicias por gentes del país, hecho que basta por sí mismo para explicar el grado de fusión que se habían alcanzado durante la colonia entre España y las Indias, un tema herético que rara vez los historiadores latinoamericanos quieren contar. Si lo hicieran, rompería uno de los mayores dogmas de la mitología regional –presentada como historia– que muestra el periodo colonial como un periodo odioso de opresión y expolio de los «españoles» sobre los ¿indios? (¿y los criollos y mestizos qué?).

Entre 1741 y 1807, Inglaterra realizó esfuerzos denodados por apoderarse de plazas y sitios estratégicos en América, para quebrantar el dominio español y expulsar a España como gran potencia colonial continental y mundial. Se inició la campaña con el intento inglés de tomar Cartagena de Indias, dando lugar a la primera de una serie de encarnizados combates entre españoles y británicos en plazas españolas en el continente americano. La invasión e intento de ocupar Cartagena fue la mayor derrota sufrida a lo largo de su historia por la flota imperial británica. Para el ataque, Inglaterra juntó la flota más grande jamás vista por el mundo –186 buques–, solo superada siglos después por la que desembarcó en Normandía. Los defensores de Cartagena eran apenas unos 3.600 hombres, frente a los

27.000 soldados británicos. Pese a ello, la invasión fue derrotada tras encarnizados combates, y los ingleses sufrieron tales pérdidas que tuvieron que incendiar varios barcos por falta de tripulación. La anécdota la dejó el presuntuoso jefe de la flota británica, el almirante Vernon, quien, antes de cazado el oso, había enviado a Londres una carta dando cuenta de su victoria. El rey Jorge II, al recibir la carta, ordenó acuñar monedas en las que aparecía el jefe español de Cartagena, Blas de Lezo, de rodillas ante un triunfante Vernon. Cuando en Londres se supo la verdad, Jorge II ordenó retirar las monedas y borrar de la historia inglesa la humillante derrota de Cartagena de Indias, una de las mayores de la historia británica.

Un intento similar ordenó Inglaterra sobre La Habana, en 1762, de la que se logra apoderar después de feroces combates, de lo que da cuenta el número de bajas de los contendientes, que son 1.000 de hispano-cubanos y casi 2.000 entre los británicos. La Habana permaneció bajo control inglés once meses, siendo devuelta a España a cambio de la Florida. No hubo, pese al atinado gobierno inglés, que abrió un periodo de prosperidad en la isla, intento alguno de rebelión contra España, que, de haberse dado, le habría hecho casi imposible recuperar su mayor dominio caribeño (la sublevación de las colonias británicas en América se iniciaría doce años después, en 1775).

Entre 1762 y 1780, los ingleses intentan apoderarse del río San Juan (un viejo sueño acariciado desde los tiempos de Cromwell), en la provincia de Nicaragua, viéndose en ambos casos frustrados sus intentos. En la primera, de 1762, son derrotados por una jovencita de 19 años, de nombre Rafaela Herrera, que había quedado al mando de la fortaleza de la Inmaculada por la muerte de su padre, jefe de la misma. Atemorizados por la flota inglesa y privados de castellano (capitán), muchos de los defensores hablaron de rendirse. Cuenta la historia que, en aquella coyuntura, la jovencita Herrera exclamó: «Los cobardes que se vayan y los valientes que se queden a morir conmigo». Ante tal arrojo, la tropa se aprestó a la defensa, disparando ella el primer cañón, «con tan feliz acierto –cuenta el historiador José Dolores Gámez– que del tercero logró matar al comandante inglés y echar a pique una balandrita». Por la noche, hizo empapar lonas de combustible y echarlas al río, hacia las naves inglesas, que levaron anclas, asustadas por lo que creyeron fuego griego. Dos días después levaban anclas, derrotados. Los defensores de la fortaleza celebraron la victoria al grito de «Viva Carlos

III», no «Viva Nicaragua», entidad política que entonces no existía, salvo bajo la forma de provincia integrada en la Capitanía General de Guatemala, que era parte de la Corona española.

En el segundo ataque inglés, de 1780, los invasores llevan entre su oficialidad al capitán Horacio Nelson, entonces de 22 años. Es la más grande fuerza expedicionaria enviada contra el castillo, contando los ingleses con centenares de zambos mosquitos para el ataque. El castillo de la Inmaculada, por su parte, se encuentra reparado y dotado de una fuerte guarnición de castellanos, criollos, pardos y negros. Al amanecer del 12 de abril de 1780, sigue relatando el historiador Gámez, «el enemigo tocó una diana y saludó el pabellón con un hurra prolongado. Los españoles izaron también su bandera, dieron un viva a Carlos III y rompieron los fuegos». Los combates son durísimos y la oficialidad del castillo decide resistir «hasta el último extremo». No obstante, para el 19 de abril habían agotado las balas de cañón, salvo 63 reservadas para casos extremos. La situación se torna imposible el día 21, pues los sitiados no pueden mantener el aprovisionamiento de agua. Sin municiones ni agua, el 22 de abril tiene lugar la rendición. Sin embargo, la victoria inglesa es pírrica. Sus pérdidas han sido tan graves, en hombres y barcas, que no pueden moverse de la fortaleza. Los escasos refuerzos que llegan de Jamaica no bastan para suplir las bajas. Finalmente, la disentería se ensaña con las tropas y se ven obligados a retirarse meses después. Entre las bajas inglesas, dicho sea de paso, se cuenta Nelson, afectado seriamente de disentería. De los 200 hombres que había llevado el capitán Nelson al asalto del castillo de la Inmaculada, solo sobrevivieron 10, lo que da medida de la ferocidad de la lucha.

Puerto Rico enfrentó, en 1797, la siguiente gran ofensiva británica sobre dominios españoles. Inglaterra envió 68 buques y 14.000 hombres. Frente a ellos había, según la mayoría de historiadores puertorriqueños, unos 6.000 defensores. Los combates se prolongan del 18 de abril al 1 de mayo, cuando los ingleses se ven obligados a volver a sus barcos, después de sufrir fuertes pérdidas y ante el temor de verse rodeados por las tropas hispano-puertorriqueñas. Para el escritor puertorriqueño Luis López Nieves, «la historia de esta invasión es probablemente la más dramática de todas» las invasiones extranjeras sufridas por la isla. El impacto dejado entre sus habitantes fue tan grande que, aún hoy, cantan la copla que recuerda el

heroísmo del sargento mayor del Toa, Pepe Díaz, quien, relata López Nieves, «reunió a 50 milicianos voluntarios de su pueblo y acudió al rescate de la capital. En el puente de Martín Peña, tras una lucha heroica cuyos detalles no se conocen, Pepe Díaz recibió de frente la descarga de un cañón y murió». La copla que siguen cantando en Puerto Rico dice así:

En el puente de Martín Peña
mataron a Pepe Díaz,
el soldado más valiente
que el rey de España tenía.

Las últimas en el tiempo fueron las invasiones inglesas de Buenos Aires, entre 1806 y 1807, que terminaron igual que las anteriores en otros puntos de la geografía americana de España. No obstante, por su proximidad en el tiempo a las guerras de independencia, las dos invasiones de Buenos Aires merecen una recapitulación. La primera, de 1806, terminó con la conquista de Buenos Aires y la derrota inglesa merced a los soldados y pertrechos enviados por Montevideo, al mando de Santiago de Liniers, español de origen francés. Episodio singular protagonizó Manuel Belgrano, quien, tras la rendición del cabildo bonaerense al invasor inglés, se retiró «casi fugado», según expresara él mismo, a la banda oriental del Plata, decidido: «Queremos al antiguo amo o a ninguno». El ejército de Liniers se refuerza con la caballería de Juan Martín de Pueyrredón y los voluntarios de Martín de Álzaga, rico comerciante de origen vasco. Juntos acorralan a los ingleses y logran su rendición.

La flota inglesa, pese a la derrota, no abandona el Río de la Plata, a la espera de refuerzos. Estos llegan al mando del general Whitelocke, a finales de 1806. Con las nuevas tropas, toma Montevideo y prepara la segunda invasión de Buenos Aires. Ante el peligro que se cierne sobre la ciudad, Liniers emite una proclama para crear unos cuerpos urbanos que asumieran su defensa. La proclama, de septiembre de 1806, decía, entre otras soflamas:

Es justo temor de que veamos nuevamente cubiertas nuestras costas de aquellos mismos bajeles enemigos que poco hace hemos visto desaparecer huyendo de la energía y vigor de nuestro invencible esfuerzo; la lisonjera y bien fundada esperanza de conservar en toda su opinión las victoriosas armas de nuestro muy amado soberano; y el mantenimiento y sostén de la alta gloria con que se acaba de cubrir esta felicísima

provincia por el incomparable ardor con que habéis vencido y sojuzgado los escuadrones enemigos que osaron profanar con el estruendo de sus armas este afortunado suelo, me hacen esperar sin el menor motivo de zozobra que correréis ansiosos de prestar vuestro nombre para defensa de la misma patria que acaba de deberos su restauración y libertad. […]

Así, para que no decaiga un solo punto la gloria de que para siempre habéis cubierto al suelo americano, para mantener con dignidad la alta reputación de las armas del rey católico, y para asegurar la quietud tranquila de vuestros hijos y la posesión de vuestros bienes, exige el respeto a la religión, la lealtad al soberano y el amor a la patria, de que sois tan dignos habitantes, el que renazcan en América los antiguos e inextinguibles timbres de las provincias de la monarquía española, resucitando aquí sus hijos aquel antiguo esplendor que ha constituido el carácter distintivo de su fidelidad y de su gloria. […]

Vengan, pues, los invencibles cántabros, los intrépidos catalanes, los valientes asturianos y gallegos, los temibles castellanos, andaluces y aragoneses; en una palabra, todos los que llamándose españoles se han hecho dignos de tan glorioso nombre. Vengan, y unidos al esforzado, fiel e inmortal americano, y a los demás habitadores de este suelo, desafiaremos a esas aguerridas huestes enemigas que, no contentas con causar la desolación de las ciudades y los campos del mundo antiguo, amenazan envidiosas invadir las tranquilas y apacibles costas de nuestra feliz América.

¿Puede creerse que, en esos años, anidaba alguna idea clara, determinada o precisa de independentismo? ¿No habrían firmado o repetido la proclama de Liniers los ejércitos y milicias que habían defendido tan heroicamente La Habana, Puerto Rico, Cartagena de Indias o el río San Juan de Nicaragua? Un ardor que, en el caso de Buenos Aires, hizo exclamar al derrotado general Whitelocke, delante de la corte marcial que lo juzgaba por la terrible y humillante derrota militar sufrida en el Plata:

No hay un solo ejemplo en la historia que pueda igualarse a lo ocurrido en Buenos Aires donde, sin exageración, todos los habitantes, libres o esclavos, combatieron con una resolución y una pertinacia que no podía esperarse ni del entusiasmo religioso o patriótico, ni del odio más inveterado o implacable.

La realidad es que los generales ingleses derrotados en Cartagena, Puerto Rico o el río San Juan de Nicaragua habrían podido repetir las mismas palabras. Los hechos, en este sentido, se acumulan en los libros de historia, censurados o desfigurados durante 200 años para mantener la mitología oficial. Así, la resistencia en el castillo de la Inmaculada Concepción, en

Nicaragua, en 1780, fue tan feroz que, habiendo agotado las balas sus defensores, tomaban las inglesas y las devolvían con sus cañones. De no haberse quedado sin suministro de agua, la resistencia habría sido hasta la muerte. Pero para entonces, las pérdidas humanas inglesas eran tan graves que los invasores debieron retirarse. Una victoria pírrica que no impidió que el San Juan siguiera siendo español.

En todas aquellas invasiones que se prolongaron por medio siglo, españoles, criollos, zambos, mestizos, indígenas y negros combatieron, hombro con hombro, contra los invasores, defendiendo algo que era más que un dominio colonial. Que era, ya, el germen de patria, pero in *statu nascendi,* verde, inmaduro, razón por la cual la identificación seguía estando en la pertenencia a un ente superior cuya capital estaba en Madrid. Por tal motivo, en ninguno de los sitios atacados por los ingleses se dio conato alguno de rebelión o secesión. Fue, como señalan los episodios recogidos, lo opuesto. Una defensa heroica y férrea de todas y cada una de las plazas frente al invasor extranjero, dato tanto más relevante cuanto que España mantenía poca tropa peninsular en América, de manera que el grueso de sus ejércitos americanos lo formaban gente del lugar. De esta realidad hay tantos ejemplos que sería cansino relatarlos. Con pardos y mestizos, el capitán general de Guatemala forma el ejército que expulsa a los ingleses de la Mosquitia, reduciéndolos a Belice. Bernardo de Gálvez recluta, en 1779, tropa en México, Canarias, Cuba, Puerto Rico y Dominicana para las campañas militares contra Inglaterra en Luisiana y Florida, con resonantes victorias. Fuerzas milicianas, recursos y armas llegan a Buenos Aires de Uruguay y Paraguay, para la defensa de la ciudad rioplatense ante la segunda invasión inglesa, en 1807. Tropas de Cuba y Puerto Rico llegan a Nueva Granada, para combatir las primeras intentonas de Bolívar y Miranda… Ciertamente, aquella América española unida era fuerte, invencible y respetada. Nunca pudo el inglés obtener triunfos principales ni retener mucho tiempo sus conquistas, y sí, en cambio, sufrir algunas de sus mayores derrotas en Cartagena, Puerto Rico o Buenos Aires, derrotas tan devastadoras para el orgullo inglés que las borraban de su historia. Esto es parte de la historia hurtada a los pueblos hispanoamericanos o que es contada con tales niveles de deformación que, en vez de escuchar el relato real de lo acontecido, les cuentan relatos

mitológicos que concuerden con la «historia oficial», que oficial será, pero no historia.

V. ESPAÑA, COMO LA ANTIGUA ROMA…

En este punto es necesario hacer una inflexión. España era, indudablemente, un Imperio, y sus dominios americanos, colonias. Pero ¿qué clase de Imperio, qué tipo de colonias? Tentado es irse por la parte más fácil y asimilarlo a otros Imperios que han existido en la época moderna, como el británico o el francés. No parece acertado hacer una equiparación mimética. En muchos sentidos, el Imperio español, como el portugués en América, más recuerdan al Imperio romano que no a los imperialismos modernos. América fue tierra de expolio de riquezas y explotación de los pueblos indígenas –como lo fue Hispania a manos romanas–, pero fue también tierra de emigración, colonización y esperanza. Desde las primeras naos que trajeron a Colón y sus hombres, las Indias fueron tierra de explotación y promisión. La administración colonial extrajo cuando pudo y también llevó con ella cuanto pudo, desde la lengua y la religión hasta la cocina, la arquitectura, los cultivos y las tradiciones. Roma invadió y expolió Hispania y Lusitania, pero también la colonizó con su gente, le dio su lengua y su cultura, y la hizo parte de su propia entidad. A la Europa romanizada se la llama la Europa latina, para distinguirla de la Europa germánica, la eslava y la griega. España y Portugal invadieron y expoliaron sus dominios americanos, pero también los colonizaron con su gente y los hicieron parte de su corpus.

De la misma manera que había actuado Roma siglos atrás, España «hispanizó» sus dominios y Portugal «portugalizó» Brasil. Millones de ibéricos cruzaron el océano Atlántico para establecerse en una nueva patria que sería, de una vez y para siempre, la suya. Roma fue madre de pueblos que hoy exhiben sin complejos su herencia latina. España fue otro tanto, pero la deformación deliberada y perversa de la historia hispanoamericana hace que, cada 12 de octubre, como rito pagano, la mitología antihispana inventada por las oligarquías criollas sigan retumbando sobre los huesos disueltos de Cortés y Pizarro, demostración clara del anquilosamiento de ideas en buena parte de la población y, sobre todo y deplorablemente, en sectores dizque de izquierdas, que repiten como loros el momificado ideario de las oligarquías decimonónicas. ¿Alguien se imagina a los griegos

llorando cada año a grito partido la caída de Constantinopla? ¿Alguien, a los alemanes de hoy denostar contra franceses, suecos o flamencos por las matanzas de la Guerra de los Treinta Años, en el siglo XVII, que despoblaron buena parte de los principados germánicos? Por supuesto que no. Son historias de hace 550 y 450 años de la que se ocupan los historiadores, pues todos esos países han evolucionado y en tres o cuatro siglos han pasado multitud de hechos. En América Latina un episodio de hace cinco siglos sigue siendo actualidad porque los países no evolucionan en sus ideas, ni conocen su historia. Se quedaron varados en el tiempo, resultado de la suma de traumas que provocaron las fallidas independencias.

Los iberos que cruzan la mar océana no eran una pléyade desquiciada del tipo del capitán Kurtz, el personaje siniestro que retrata Joseph Conrad en su magistral novela *El corazón de las tinieblas,* el europeo brutal y criminal que expolia y destruye un continente para su propio provecho, inmerso en la «danza de la muerte y el comercio», que Hannah Arendt usa como referente en su análisis del imperialismo, en su conocida obra *Los orígenes del totalitarismo.* No eran Leopoldo II, el criminal rey belga que hizo del Congo el mayor muestrario de atrocidades hasta la llegada del nazismo (a fin de cuentas, como dijo Hannah Arendt, el nazismo fue la aplicación de los métodos del colonialismo en Europa). Un hecho puede ilustrar la diferencia: cuando se independizó Brasil, ningún portugués se sintió obligado a regresar; cuando se independizaron Angola y Mozambique, millones de portugueses regresaron a Portugal. África no era su patria. Tampoco regresaron a España los españoles de Hispanoamérica. Ni siquiera lo hicieron todas las autoridades coloniales. Los colonos que habían arribado a las Indias eran como los que describe el poderoso Neruda, en su *Canto General:*

> […]
> Las barcas van apretadas de garras
> y barbas rojas de Castilla.
> Son Arias, Reyes, Rojas, Maldonados,
> hijos del desamparo castellano,
> conocedores del hambre en invierno
> y de los piojos en los mesones.
>
> […]

No salieron de los puertos del Sur
a poner las manos del pueblo
en el saqueo y en la muerte:
ellos ven verdes tierras, libertades,
cadenas rotas, construcciones,
y desde el barco, las olas que se extinguen
sobre las costas de compacto misterio.
[…]
Eran pueblo, cabezas hirsutas de Montiel,
manos duras y rotas de Ocaña y Piedrahita,
brazos de herreros, ojos de niños
que miraban el sol terrible y las palmeras.

El hambre antigua de Europa, hambre como la cola
de un planeta mortal, poblaba el buque,
el hambre estaba allí, desmantelada,
errabunda hacha fría, madrastra
de los pueblos, el hambre echa los dados
en la navegación, soplan las velas:
[…]
«Más allá, más allá, lejos del piojo,
del látigo feudal, del calabozo,
de las galeras llenas de excremento.»

Y los ojos de Núñez y Bernales
clavaban en la ilimitada
luz el reposo,
una vida, otra vida,
la innumerable y castigada
familia de los pobres del mundo.

Eran gentes así las que llegaron, huyendo del hambre, las servidumbres, las guerras… Según recoge Manuel Lucena –en el capítulo «La interdependencia entre América y Europa», en el tomo II de la obra *Historia de Iberoamérica*–, «a fines de la tercera década del siglo XVI había unos 150.000 habitantes blancos en Hispanoamérica», que a finales del siglo XVII «sobrepasarían el millón». En 1680, embarcaban tantos portugueses a Brasil que la Corona debió adoptar medidas para evitar la despoblación. Esa gente pobló cuanto pudo un continente inmenso, fundó ciudades y pueblos que llamaron Granada, León, Valladolid, Córdoba,

Guadalajara, Segovia… es decir, como sus sitios de origen, en los que construyeron iglesias, universidades, oficios, y se mezcló con indígenas y negros para inventar el mestizo y el mulato, aunque solo fuera porque, de cada 100 emigrantes, solo 10 eran mujeres (los británicos nunca se mezclaron). Se hicieron americanos y, cuando era menester, tomaban las armas para defender sus tierras, ciudades y bienes de los invasores ingleses, holandeses o franceses. Fundaron países y después, cuando más necesaria era la unión, rompieron lo que habían defendido 300 años, siguiendo a un grupo de iluminados aventureros que no tenía otro propósito que destruir el dominio de Madrid, logrando ellos hacer en pocos años lo que Inglaterra no había podido en siglos: liquidar a España como potencia mundial, privándola de sus dominios americanos. Este hecho será factor fundamental para la constitución de Inglaterra como potencia hegemónica mundial en lo que resta del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial.

En este punto, es pertinente abordar otro tópico hispanoamericano: el de la responsabilidad con lo que ocurrió en América durante la conquista y la colonia. El tópico es culpar a España y a sus conquistadores y colonizadores, reduciéndolo todo a una cuestión geográfica. Según este tópico, los responsables serían la España peninsular y los españoles que habitaban y siguen habitando la España de hoy. Se trata de una verdad a medias. La parte verdadera es que España extrajo cuanta riqueza pudo de sus dominios americanos, sobre todo metales preciosos. Lo hizo sobre la servidumbre de los indígenas y la esclavitud de los negros, y millones de ellos perecieron por el exceso de trabajo, el maltrato y las pésimas condiciones en que vivían. Una verdad que es imposible negar. La otra mitad es que del expolio se beneficiaron también los descendientes de españoles, los llamados criollos, como ilustrara ampliamente Severo Martínez Peláez en su conocido ensayo *La patria del Criollo.* Una mayoría de conquistadores murió en América. Pedrarias Dávila, de viejo, en Panamá; Almagro, ejecutado en Lima; Pizarro, asesinado en la misma ciudad; Ponce de León, de una herida, en Cuba. O se quedó a vivir en los territorios conquistados, transformándose de conquistadores en colonos. Por ejemplo, Bernal Díaz, soldado de Hernán Cortés, quien se quedó a vivir en Guatemala, donde escribió su *Historia verdadera sobre la conquista de la Nueva España,* cuya vida resume poética y magistralmente Ernesto Cardenal en *El Estrecho Dudoso:*

En Santiago de los Caballeros de Guatemala
hay un viejo regidor. Un viejo conquistador
de barba blanca, con una hija por casar,
casi sordo y casi ciego. Apenas oye las campanas
lejanas, como las campanas de Medina del Campo.
[…]

Irá escribiendo con su pluma, despacio, despacio,
corrigiendo los errores con cuidado, como el piloto
que va descubriendo las costas, echando la sonda…

Ya es tarde. El cuarto se está oscureciendo.
Las campanas de Santiago de los Caballeros de Guatemala
suenan lejanas, lejanas, como las campanas
de Medina del Campo.

Serán estos colonos los beneficiarios del sistema colonial. Una minoría seguirá, como Bernal Díaz, siendo pobre, pero los más forman el estrato más alto de la jerarquía social colonial, levemente por debajo del funcionariado nombrado por la Corona. Se convertirán, con el paso de los siglos, en las oligarquías que tomarán el poder con la independencia y que, para obviar sus propias responsabilidades, escribirán a su antojo la historia de sus respectivos países. Bolívar era de la aristocracia caraqueña y hacendado millonario, y esos millones pagaron su vida y lujos en Europa; Santander era otro latifundista; O'Higgins era hijo del virrey del Perú, de quien heredó una inmensa fortuna; San Martín era hijo y sobrino de gobernadores provinciales, y de su origen da cuenta que estudiara en el Real Seminario de Nobles de Madrid… Para las oligarquías, achacar todas las culpas a España les posibilitaba autoeximirse de responsabilidad por los inmensos desatinos y los desastres que habían provocado ellas mismas y que –aún hoy– continúan provocando en sus países. A fin de cuentas, como se ha indicado al inicio de este libro, escribir la historia es privilegio de los vencedores. Era fácil, también, desde el monopolio de la ideología y el poder que detentaban esas oligarquías, presentarse a sí mismas como salvadoras de sus respectivas patrias, aunque su primer oficio había sido –y ha seguido siendo– atender sus intereses de clase, y el segundo, atender los intereses de la potencia protectora, Inglaterra en el siglo XIX, Estados Unidos, desde el siglo XX.

Otro grupo que se beneficia de la explotación de indígenas y negros es el de los mestizos, estrato ascendente en la sociedad colonial a medida que aumentaba su número, y aliados imprescindibles de los criollos en el mantenimiento del sistema de opresión de los indígenas. Según Lucena, los mestizos eran un estrato «que tenía acceso a la propiedad media de bienes o vivía en la pobreza y se ocupaba de las actividades agrícolas como granjeros independientes, militares como mandos subalternos o comerciales como minoristas. También eran jornaleros y artesanos». Mestizos y mulatos fueron, por siglos, elemento principal de los ejércitos que los libros de historia hispanoamericana refieren como «españoles», dando a entender que en esos ejércitos no participan criollos, mestizos y mulatos cuando, en muchos casos, constituían el grueso de las fuerzas «españolas». Un ejemplo contribuiría a aclarar el hecho. Los zambos mosquitos (hoy llamados miskitos) y los negros creole de la costa caribe de Nicaragua siguen llamando a los habitantes del centro y Pacífico del país «españoles». Durante la colonia, Inglaterra abrió establecimientos en el Caribe, desde donde hostigaba los asentamientos y ciudades españoles y reclutaba a mosquitos y creoles para atacar los puestos avanzados de España. Para mosquitos y creoles, los habitantes de la provincia de Nicaragua eran, simplemente, «españoles», adjetivo que se debe entender en un sentido cultural, no étnico o racial, un calificativo que siguen empleando casi 200 años después del fin del dominio español.

VI. NO REVOLUCIÓN, UNA CATASTRÓFICA CONTRARREVOLUCIÓN

El proceso de independencia de las colonias españolas no tenía, por más que se quiera tapar la historia, raíces endógenas, ni había, como se puede colegir de la fiereza con que españoles y americanos combatieron al invasor inglés, sentimientos separatistas ni antiespañoles. El examen de los hechos obliga a sostener lo contrario: que el sentimiento que prevalecía era de lealtad a España y de unidad y solidaridad con el resto de dominios que formaban el Imperio español. Esta afirmación contradice la mitología oficial que se estudia como historia en la región, donde el periodo colonial de 300 años se presenta y analiza como si la colonia hubiera durado dos días.

Por otra parte, si fuera cierta la fábula que se repite desde la independencia, de que en las colonias existía un potente sentimiento independentista y antiespañol, ¿por qué Miranda, Bolívar o San Martín suplicaban la intervención británica? ¿Por qué invocaban que Europa en su conjunto debía asumir la tarea como propia? Porque sabían que, sin una intervención de la poderosa Albión, su movimiento sería derrotado. ¿Por qué no se aprovecharon las invasiones inglesas de 1806 y 1808 para independizarse, si lo tenían todo en la mano? O lo ocurrido en Venezuela, según recoge Juan Guasch, en su obra *Bolívar, el eterno traicionado.* Según Guasch, Bolívar había regresado a Caracas en 1806, a integrarse en «la fastuosa vida de los altos círculos criollos». «Vuelve a hacerse cargo de sus propiedades y todo el tiempo que este trabajo le deja libre lo dedica a la vida social». Cuando llega la noticia de la invasión de España por Napoleón y la imposición de José I como rey, hay conmoción y rechazo al usurpador. Poco después, arriba al puerto de La Guaira un buque francés, del que desembarcan oficiales «con la pretensión de tomar juramento de fidelidad a favor del rey José I, de las autoridades españolas. La voz de lo sucedido en España corre entre el pueblo. La primera reacción de las colonias es idéntica a la de España». Luego de dar vivas a Fernando VII, «el pueblo se reúne en las calles y las plazas de La Guaira y marcha contra los franceses», que «a duras penas consiguen de nuevo ganar la goleta y ponen rumbo al

mar para nunca más volver». Esto ocurre en 1808, dos años antes del inicio de las guerras de independencia.

Porque nadie, salvo un ínfimo grupo de iluminados, pensaba en la independencia. Este es un punto a guardar para el análisis. ¿Alguien de los defensores de la mitología oficial puede explicar, por ejemplo, cómo se pasa, en Buenos Aires, de una defensa heroica y feroz de la provincia en 1807 frente a los ingleses a apoyarse, tres años después, en los ingleses para combatir a España? ¿Cambiaron de bando los pueblos o solo lo hizo un grupo oligárquico? La respuesta, de tan evidente, sale sola: cambiaron de bando las oligarquías, que, aprovechándose de su poder económico y político levantaron ejércitos de siervos engañados para que combatieran y murieran por sus ambiciones oligárquicas. El siglo XIX y buena parte del XX de los países latinoamericanos verá, una y otra vez, repetirse el modelo: el gamonal de turno levantando a sus peonadas para llevarlos a las guerras intraoligárquicas, como denunciaba en un poema el nicaragüense Pablo Antonio Cuadra (oligarca él):

> De dos en dos,
> de diez en diez,
> de cien en cien,
> de mil en mil,
> descalzos van los campesinos
> con la chamarra y el fusil.

El poema de Cuadra recuerda el cuento de Borges «Biografía de Tadeo Isidoro Cruz», quien, como debía un muerto –que diría Borges–, «fue destinado a un fortín de la frontera norte. Como soldado raso participó en las guerras civiles; a veces combatió por su provincia natal; a veces en contra». Guerra oligárquicas sin ideología, donde los gauchos (la peonada) combatían donde le decían debían combatir, a veces por una bandera, otras contra esa bandera. Así habrían sido arreados por los oligarcas a las guerras contra otros como ellos que luchaban por España.

En este punto es preciso hacer un alto. La tropa de los «libertadores» la formaban campesinos reclutados por latifundistas, esclavos negros a los que les ofrecían la libertad si combatían, indios movilizados muchos de los cuales no hablaban siquiera el castellano. ¿Sabían realmente por qué iban a la guerra? Resulta dudoso, entre otras cuestiones, porque eran masivamente

analfabetos. ¿Qué pensaban realmente de ellos los criollos oligarcas que sí sabían lo que buscaban? Domingo Faustino Sarmiento puede servir de ejemplo, puesto que, en Argentina, lo es de muchas cosas. En una carta a Bartolomé Mitre, de 1861, después de otra guerra civil, Sarmiento expresa: «Se nos habla de *gauchos*… La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos». ¿Sería creíble pensar que los criollos que llevaron adelante las guerras de independencia pensaran algo diferente? Hechos vergonzosos indican que lo que pensaba Sarmiento era general en la oligarquía argentina, como recoge Luz Marina Mateo, del Departamento de África de la Universidad de La Plata, en su artículo «En la línea de fuego. Los negros y las políticas de negación», de enero de 2015:

> En 1801 ya había formaciones milicianas –las compañías de pardos y morenos– que durante las invasiones inglesas tuvieron activa participación en la defensa de Buenos Aires. Cuando San Martín viene de España y se hace cargo del ejército del norte, de los 1.200 hombres con que contaba, 800 eran negros libertos.
>
> La abolición de la esclavitud llega con la libertad de vientres en 1813 y, posteriormente, con la Constitución de 1853. […] La abolición, si bien fue muy importante, quedó en una libertad formal; como a los que habían sido favorecidos por esa medida no se les dio las herramientas necesarias para poder iniciar una vida autónoma, la mayoría terminó volviendo a su vida anterior, sometidos al poder y dinero de sus patrones, o mendigando en las calles.
>
> En Buenos Aires, la epidemia de fiebre amarilla de 1871 tuvo efectos devastadores. Por entonces los negros vivían en las zonas del sur de la ciudad en condiciones paupérrimas. El ejército valló esos barrios para que no pasaran a los barrios de los blancos que era donde estaba la capacidad de atención médica de la fiebre amarilla. Esto contribuyó muy fuertemente a la disminución importantísima de los negros del Buenos Aires del siglo XIX.

Así que los negros, en 1807, combaten contra los ingleses por España y en 1810 sus patrones los llevan a la guerra contra España con apoyo inglés. Una vez utilizados, los echan a la basura y vuelven a su condición de siervos. Por último, aprovechan las guerras civiles y una epidemia para hacerlos desaparecer del mapa étnico argentino. Los gauchos no parecen

haber corrido mejor suerte y los indígenas fueron víctimas de genocidios planificados por las oligarquías. Entonces ¿a quiénes libertaron los llamados libertadores? La respuesta parece clara: se libertaron a sí mismos.

Retomemos ahora el hilo. El movimiento independentista fue, por tanto, de principio a fin, efecto de causas que tenían su vértice en las disputas de poder en Europa, que nunca, en ningún momento, tomaron en cuenta la opinión de las oligarquías nativas y, menos todavía, a los habitantes de las colonias. Tan poco contaban esas oligarquías que, en 1792, París propuso a Londres un plan para independizar la América española a fin de dejarla abierta a las mercancías británicas y francesas. La propuesta quedó en nada porque, en breve tiempo, ambos países volvieron a guerrear a muerte. Londres, único lugar al que acudía la reducida minoría criolla que pensaba en la independencia, variaba su posición según fuera España aliada o enemiga de Francia. Miranda, Bolívar, O'Higgins o Mariño no eran más que piezas insignificantes en un juego que, seguramente, jamás llegaron a entender y al que, finalmente, se prestarían siguiendo los compases marcados por Inglaterra.

Tampoco existía un sentimiento independentista que mereciera tal nombre. La historiografía oficial, desde la independencia, se aplicó a magnificar los brotes aislados que se dieron en algunos puntos, todos posteriores a 1808, año de la invasión napoleónica de España, ninguno de los cuales progresó. Es más fácil medir el espíritu reinante en las colonias iberoamericanas si se compara con lo que ocurrió en Estados Unidos. Según narra Philip Jenkins en su *Breve historia de Estados Unidos,*

> entre 1766 y 1775, la oposición a los impuestos aumentó considerablemente, y los disidentes crearon una vigorosa red de propaganda y resistencia organizada, basada en los clubes clandestinos de los Hijos de la Libertad […]. Entre 1765 y 1767 una muchedumbre de bostonianos protagonizó violentas protestas contra la Ley del Timbre […]. A partir de 1772 Boston se convirtió en el centro de una red de «Comités de Correspondencia», en continuo desarrollo, que compartían información y planeaban acciones conjuntas mediante las que promover la identidad de una Norteamérica unida en contra de la represión británica.

En 1774 se celebró un Congreso Continental en Filadelfia y, en 1775, los agravios y disturbios habían vuelto la situación casi ingobernable. En abril de ese año se sucedieron las primeras escaramuzas que, andando los meses,

se transformaron en guerra abierta entre un tercio de la población de las colonias y el poder inglés. Siguiendo la cronología, la resistencia a los abusos de Inglaterra se inicia con disturbios en 1765, es decir, diez años antes de que empiecen a dispararse los primeros fusiles.

No hubo, en Iberoamérica, nada equivalente y, menos, ningún congreso previo, ninguna coordinación, preparación o proyecto de futuro para aquellos inmensos dominios, que se extendían desde el Oregón hasta el sur del mundo, que diría Neruda. David S. Landes, en su obra *La riqueza y la pobreza de las naciones,* resume las circunstancias en que se dio la independencia latinoamericana:

> En Latinoamérica, la independencia no procedió de la ideología colonial ni de la iniciativa política, sino de las carencias y los reveses de España (y Portugal) en casa, y de las rivalidades y guerras europeas. Cuando España se reveló incapaz de gobernar allende el mar, los hombres fuertes del Nuevo Mundo se aprovecharon de ese vacío y se apoderaron del poder, encontrando solo esporádicamente focos de resistencia. La independencia les cayó del cielo, sorprendiendo a las entidades informes, rudimentarias, que solo pretendían cambiar de amo.

No existió relación alguna entre los dirigentes y los grupos independentistas encaminada a mantener la unidad de los dominios españoles. Bien al contrario, la anarquía que, por negligencia o ceguera, producen las guerras de independencia, propició la balcanización de la región. Su efecto más inmediato fue desatar la voracidad de las oligarquías nativas, que veían en el movimiento independentista la ocasión de crear sus propios Estados, no con la visión de modernidad que había abierto la Revolución francesa y que alumbraba en Europa el movimiento de las nacionalidades, sino con la visión dieciochesca de principados y reinos gobernados por una clase aristocrática. Fue así el modo en que, en vez de alumbrar Estados modernos, crearon arcaicos Estados oligárquicos, que pasaron a gobernar como si de grandes haciendas se tratara. Estados cuyo fin no era la modernidad propiciada por el liberalismo triunfante en Europa, basada en la educación, elevada a derecho en la *Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano,* de 1789 y en la *Constitución revolucionaria* de 1793; tampoco extender los valores de libertad, igualdad y fraternidad que emanaban de la Europa posnapoleónica; menos aún promover el desarrollo industrial y el bienestar de los respectivos pueblos. Su propósito

era, simplemente, preservar los privilegios de clase y conservar el poder para usufructo y goce de aquellas oligarquías reaccionarias.

Arrastrados por los sucesos europeos y por la voluntad de una minoría de oligarcas, las provincias son llevadas a las guerras contra el poder español sin más idea que la independencia por la independencia. No hay, como en Estados Unidos, ideólogos o grupos concienciados que trabajen pensando en preservar la unidad como base de la fuerza y la prosperidad de aquellos inmensos dominios. Todo se ejecuta de forma improvisada, a marchas forzadas y al socaire de los acontecimientos europeos. No hay más visión que el acto inmediato al que hacer frente en el día a día. Los libertadores no miran hacia atrás ni tampoco hacia adelante. Su filosofía era el *carpe diem* multiplicado al cubo y aplicado a la política. Las oligarquías tienen más claro sus propósitos. Las mueve la avaricia. Si se independizan –piensan–, podrían organizar las economías a su antojo, subir o bajar impuestos, decidir cuánto, qué y con quién comerciar, quedarse con todo lo que deseen tomar, con los países como botín, en un sistema que multiplicaría sin fin sus beneficios y las perpetuaría para siempre en el poder. Solo así se explica la prisa que se dieron en entregar sus países al saqueador británico y su renuncia a sentar bases mínimas para construir Estados fuertes. Así pasó lo que pasó, y de aquellos polvos, estos lodos.

Por tal motivo, las situaciones esperpénticas se suceden una tras otra. La independencia de México fue resultado del cambio de bando de Agustín de Iturbide, realista convencido que, de tan reaccionario que era, prefirió abanderar la independencia mexicana antes que aceptar la progresista Constitución aprobada en Cádiz en 1812. La Constitución de Cádiz, entre otras tantas reformas, había determinado la eliminación del mayorazgo, declarado la libre propiedad, establecido la libertad de prensa, eliminado la Inquisición y puesto en marcha la desamortización de bienes propios y baldíos. Estas últimas dos disposiciones la llevaron a chocar con los sectores más reaccionarios del clero y con las clases latifundistas, sectores que eran determinantes en la Nueva España. La «conspiración de la Profesa», por la iglesia mercedaria donde se celebró, ha quedado en los anales de México como episodio surrealista. La secuencia es la siguiente. Para 1817 había sido aplastada la lucha independentista de Hidalgo y Morelos, y muertos o perseguidos sus seguidores. El pronunciamiento liberal de Rafael de Riego, en 1820 –como veremos más adelante–, y la

restauración de la Constitución de 1812 sacuden a los sectores más reaccionarios del Virreinato de Nueva España, entre ellos Iturbide, quienes replican organizando una conspiración, con el objetivo de impedir que las reformas liberales llegaran al Virreinato. El Plan de la Profesa contempla la destrucción de los restos de fuerzas insurgentes, la independencia de España y el establecimiento de una monarquía absoluta, encabezada por Fernando VII, que debía garantizar todos sus privilegios. Cálculo no esperado, Iturbide encuentra la ocasión para satisfacer su conservadurismo y su ambición de poder, trasmutándose en líder independentista y proclamándose luego emperador. Por estos hechos nadie, en México, rinde honores a Iturbide, quien fue el verdadero artífice de su independencia.

Colombia presenta otro caso de esquizofrenia histórica, pues venera como *pater patriae* a Simón Bolívar y a su mayor enemigo, Francisco de Paula Santander, quien incluso participó en un complot para asesinar al primero. El venerado como libertador escapó por los pelos saltando por una ventana. En Venezuela, los mayores enemigos de las fuerzas independentistas no eran los españoles, sino los más pobres entre los pobres, los célebres llaneros dirigidos por otro llanero, de origen asturiano, José Tomás Boves.

Y si en México Iturbide encabeza el mayor acto reaccionario de la historia mexicana, sus pares en Venezuela –la aristocracia esclavista y latifundista conocida como los mantuanos– habían organizado, en 1808, una Junta Suprema, siguiendo las instrucciones de la Junta constituida en Sevilla, pero formada por dos marqueses y cinco condes, todos criollos, para garantizar el control absoluto de la provincia y la defensa férrea de sus privilegios. Como señala Juan Bosch, en su conocida obra *De Cristóbal Colón a Fidel Castro,*

> la minoría mantuana quería el poder político para mantener su posición de privilegio. La burguesía [francesa del siglo XIX], encarnada por Napoleón [Bonaparte], era en ese momento una clase progresista, la más avanzada del mundo, y los banqueros temían a esa burguesía tanto como un banquero norteamericano del año 1965 podía temer a Mao Tse Tung o a Fidel Castro.

Bolívar, mantuano él mismo, recoge Bosch, recibió el título de «Libertador» de otros mantuanos. «Estos detalles dan idea de las razones por las que la masa del pueblo no se sentía comprometida con la tarea de crear la república, y lo que es peor, ni los poderdantes ni Bolívar creían que

esa masa tuviera nada que ver en la creación de la república.» Son esas oligarquías archirreaccionarias las que toman el poder en los países que, luego, contribuirán a crear para satisfacer sus ambiciones de clase y poder. Por tal motivo, asimilar las guerras de independencia a movimientos revolucionarios es una de las mayores falacias construidas sobre la historia latinoamericana. Fueron exactamente lo contrario, el mayor movimiento contrarrevolucionario de la historia continental, como ilustra el caso del México de Agustín de Iturbide. Que así ocurriera tiene una lógica irrefutable. ¿Iban aquellas oligarquías a encabezar una revolución para destruirse a sí mismas? ¿Cuándo las oligarquías latinoamericanas han encabezado nada que huela a reforma, no digamos ya a revolución? Si quitamos a los escritos de los libertadores sus diatribas contra España, ¿qué queda? ¿Qué tenía que ver aquel movimiento sin norte con el torbellino que sacudió Francia en 1789 y liquidó de forma fulminante el *Ancien Régime*? ¿O con el ilustrado y autóctono movimiento independentista de Estados Unidos?

Dos hechos históricos permiten, desde el tiempo, medir el talante y los intereses de las oligarquías criollas, uno anterior y otro parte misma de los movimientos independentistas. El anterior es la sublevación indígena dirigida, en el Virreinato del Perú, por José Gabriel Condorcanqui. Descendiente de los emperadores incas, Condorcanqui se rebela, en 1780, contra el dominio blanco, se proclama Inca y cambia su nombre por el de Túpac Amaru. Al frente de un ejército de miles de hombres, ejecuta al corregidor de Tinta, Antonio Arriaga, y derrota a las tropas virreinales en Sangarara. La rebelión se extiende y el Virreinato cruje. Pero las fuerzas a las que hace frente son poderosas, y Túpac Amaru es derrotado por Gabriel de Avilés en 1781, gracias a los refuerzos enviados desde Lima y –atención– a la ayuda de Mateo García Pumacahua, cacique de Chinchero, Maras, Guayllabamba, Umasbamba y Sequecancha, que apoya la causa virreinal con pertrechos y hombres. Contra el rebelde Túpac Amaru, por tanto, no se unieron solamente españoles y criollos, sino también mestizos e indígenas, que desempeñaron un papel relevante en la derrota de la rebelión. Pumacahua era un indígena integrado en el sistema de privilegios, tanto que, en 1802, fue electo alférez Real de los Indios Nobles del Cuzco, aunque en sus años finales abrazará la causa independentista. La muerte atroz sufrida por Túpac Amaru y su familia debía servir de escarmiento a

quienes pensaran rebelarse contra el dominio virreinal. Un ejemplo más, de los tantos a citar, de que el sistema colonial tenía bases firmes en amplios segmentos sociales, incluidos los indígenas.

El otro hecho es la sublevación, en el Virreinato de la Nueva España, del sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, que inicia su lucha en 1810 al grito de «¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII!». Aunque la rebelión deriva en reclamos independentistas, la reacción virreinal es contundente. Para 1817, los rebeldes están aniquilados y las clases dominantes, firmes en sus privilegios. No existía interés entre los oligarcas y sectores beneficiados del sistema colonial en alterar el orden pacífico en el que vivían desde hacía tres siglos.

Las sublevaciones de Túpac Amaru y de Hidalgo y Costilla comparten ciertos elementos comunes que las hicieron extremadamente peligrosas para el sistema de dominación virreinal: se trató de sublevaciones populares, apoyadas por indígenas y campesinos, que amenazaban seriamente el orden imperante. Por tal motivo, no hubo fisuras entre peninsulares, criollos, mestizos e indígenas españolizados en el momento de enfrentar unas rebeliones que amenazaban su estatus y poder, sobre todo por parte de los criollos. Ellos eran quienes ostentaban el poder real, aunque el formal lo tuvieran peninsulares. Por tal motivo, solo las oligarquías criollas tenían poder y medios para poner fin al dominio formal de España. Solo ellos y únicamente ellos podían oponerse a los aires de reforma que llegaban de la península. Disponían, en aquellos momentos históricos, de dos opciones. Abrazar el reformismo que se había plasmado en la Constitución de Cádiz de 1812, o bien oponerse a él declarando la independencia. Optaron por lo segundo. Independencia, antes que reformas. Esa fue, quizá, la única idea clara que llegaron a tener. Al menos, la única idea clara que pudieron transmitir.

VII. DIVIDIR PARA NO VOLVER A UNIR

De la avaricia y ausencia de sentido de Estado que tenían las oligarquías da cuenta su conducta. Antes aún de consolidarse la independencia de España, los líderes independentistas empiezan a intrigar unos contra otros, cuando no a matarse entre sí o ser víctimas de las intrigas de las oligarquías reaccionarias, como le ocurre a Sucre, asesinado en 1830 cuando se dirigía a Quito, de lo que se libra Bolívar en Bogotá. Los procesos de independencia en muchas regiones son de un patetismo desolador. Centroamérica se independiza como efecto del desmoronamiento del poder español en México. El sentimiento independentista en Centroamérica era tan exiguo que, cuando la pequeña flota corsaria de Louis Aury –enviada por Buenos Aires y Chile para promover la independencia del Reino de Guatemala– arribó al castillo de Omoa, actual Honduras, en 1820, sufrió una derrota contundente. El Virreinato de Lima fue independizado a la fuerza, por ejércitos que llegaron de Buenos Aires y Nueva Granada. Quito estaba en el camino de Bolívar hacia Lima y San Martín llegó incluso a evitar una batalla con un ejército realista, porque este lo dirigía un amigo suyo. Paraguay era, simplemente, un país excéntrico y su independencia fue fruto de la inercia, pues los ejércitos enviados por Buenos Aires para independizarlo a la fuerza cayeron derrotados uno tras otro.

Una última cuestión esperpéntica que hay que anotar. Los libertadores son presentados como las grandes figuras que lucharon por la unión hispanoamericana. La realidad, vista libre de prejuicios y de juicios preconcebidos, nos revela que fueron ellos los que desintegraron la región y la sumieron en la anarquía, el caos y las guerras oligárquicas. Las provincias hispanas de América estaban, en 1809, en paz y unidas, defendiéndose como un solo puño de los invasores ingleses. Estaban rotas y en el caos en 1825. ¿No es la visión tradicional de ese periodo, tan esencial en la historia regional, la traducción política del quebrar uno los platos para después erigirse en adalid del pegamento que volverá a unir los pedazos? ¿O la del provocador del caos que después se presenta como promotor de la ley y el orden? ¿No debió Bolívar quedarse en Venezuela, para detener la guerra social que la disolución de la autoridad española estaba provocando

en el país? ¿No pudo darse cuenta ninguna de estas figuras señeras en la historia continental, San Martín, O'Higgins, Bolívar, que sus cruzadas estaban sumiendo a las provincias en una crisis sin fin, en guerras civiles sangrientas y ruinosas, sin más ganador que Londres y sin otro perdedor que sus propios pueblos, a los que estaban condenando al infierno?

Es este aluvión de esquizofrenia lo que ha hecho del surrealismo un elemento común en la región. Algo tan común como trágico. Porque como la historia regional está llena de episodios negros unos, grises otros, no hubo más remedio que llenar las páginas de los libros de historia con una espiral interminable de disparates. Así, ¿qué suerte corrieron los héroes de la defensa y reconquista de Buenos Aires, Liniers y Álzaga, episodios que tanto fulgor merecen en la historia de Argentina? Les pasó algo muy latinoamericano: fueron fusilados por oponerse a los grupos independentistas. A Liniers, incluso, se lo fusiló con el propósito adrede de impedirle que llegara a Buenos Aires, donde gozaba de enorme popularidad y donde podía neutralizar a los minoritarios independentistas. En Argentina se han visto obligados a celebrar el episodio de las invasiones inglesas omitiendo –casi– a sus protagonistas, para borrar que sus propios defendidos los fusilaron después. A propósito de historias mal contadas, Liniers, el héroe de Buenos Aires, aquel aclamado con tanta adoración por la población que hasta fue nombrado virrey, comentará de las guerras de independencia:

> La conducta de los de Buenos Aires con la Madre Patria, en la que se halla debido al atroz usurpador Bonaparte, es igual a la de un hijo que, viendo a su padre enfermo, pero de un mal del que probablemente se salvaría, lo asesina en la cama para heredarlo.

¿Qué se pensaría de Canadá, Australia o Nueva Zelanda si, cuando Inglaterra entra en guerra con Alemania en 1914, estos dominios, alentados por agentes alemanes, hubieran decidido declarar la guerra a Inglaterra y proclamarse independientes? Canadá tenía entonces 200 años de ser colonia británica, Australia y Nueva Zelanda, menos de siglo y medio. No ocurrió nada parecido. Por el contrario, los tres dominios se volcaron en ayuda a la madre patria y decenas de miles de sus hijos lucharon y murieron en Europa defendiendo la política de Londres, que poco o nada interesaba a territorios tan lejanos. Solamente en la batalla de Galípoli, en la actual Turquía,

considerada una de las más sangrientas de la Primera Guerra Mundial, entre marzo de 1915 y enero de 1916, perecieron 7.300 australianos y 2.400 neozelandeses, junto con 25.000 ingleses, 10.000 franceses, 1.700 hindúes y 100.000 turcos. En el presente, el vínculo se mantiene, como pudo observarse en la Guerra de Afganistán, país invadido en 2001 y del que tuvieron que salir derrotados en 2014. Desde el inicio de la invasión y hasta septiembre de 2019, habían muerto 3.582 soldados de la coalición atlantista, de los cuales 3.103 eran de ejércitos anglosajones: 2.438 estadounidenses, 455 británicos, 158 canadienses, 41 australianos y 11 neozelandeses, es decir, más del 80 por 100 del total de bajas mortales de las fuerzas invasoras y derrotadas por los talibanes.

La fidelidad de los dominios británicos a su tierra de origen fue un enorme espaldarazo moral, económico, militar y de recursos a Inglaterra, y esa vinculación y fidelidad sigue vigente en este siglo XXI en campos que van más allá de lo militar. Véase, si no, el sistema UKUSA, padre de ECHELON, un sofisticado y eficaz sistema de espionaje por satélite, dirigido por Estados Unidos e integrado por Gran Bretaña, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. ¿Cuál hubiera sido el curso de la historia si los dominios americanos se hubieran conservado unidos y concurrido a la defensa de España frente al invasor? No pasó así. Los flamantes próceres olvidaron que la unión hace la fuerza y optaron por el divide y vencerás. El problema radicaba en que los grandes derrotados no fueron España y los españoles –aunque también–, sino los propios pueblos, los países, la región entera, que más de dos siglos después sigue pagando la maldición que sobre ella hicieron caer los que fueron, más que libertadores, liberticidas.

Se puede cerrar este capítulo, en fin, con uno de los episodios más surrealistas del periodo de independencia, que ilustra los niveles de improvisación, desconcierto y carencia de metas claras que tenían los padres de las futuras patrias. El 6 de julio de 1816, en los albores de la Declaración de la Independencia de Argentina, Manuel Belgrano propone, en una reunión secreta del Congreso independentista, un llamado Plan del Inca. Se trataría, según Belgrano, de designar, para ocupar el trono de las Provincias Unidas de Sudamérica, a un descendiente del último de los Incas. No era Belgrano el padre de la idea, sino el general José de San Martín, que poco tiempo atrás había mencionado esa alternativa después de fracasar su propuesta original de nombrar a un príncipe Borbón para que

ocupara el trono americano, de la misma manera que el hijo del monarca portugués había creado el Imperio del Brasil como Pedro I. El «admirable» Plan del Inca –como lo había calificado San Martín– tenía un problema: la capital del nuevo Imperio debía ser Cuzco. Así que, después de varios días de debates, el plan es rechazado, pues no hubo respuesta a otra pregunta esencial: ¿por qué instalar una monarquía inca-peruana que gobernara Buenos Aires? Suena a chiste, a chiste malo, amargo, pero tal episodio da idea de cuáles eran los niveles de desarrollo político de los padres de los Estados hispanoamericanos.

En Centroamérica fue todavía más patético. Realista la gran mayoría de cabildos y población, al socaire de las guerras de México se reúne un congreso en Guatemala. Los delegados de las cinco provincias deciden, en 1921, declararse independientes, sin más precedentes que unos motines de criollos exaltados en San Salvador y Granada de Nicaragua. Por Nicaragua asiste a la reunión –y firma el Acta de Independencia– Miguel de Larreynaga, un señor que tiene tan poca idea de las consecuencias de lo que están decidiendo que ni siquiera regresa a Nicaragua. De Guatemala pasa a Chiapas, donde obtiene un trabajo de burócrata, y allí se quedará hasta su muerte. En Nicaragua, en fin, se tiene a la castellana Rafaela Herrera como heroína de la patria (la llaman «la niña de Nicaragua»), aunque Nicaragua no existía como país, ni Rafaela defendió a Nicaragua del invasor inglés, sino que luchó por España y por su rey. Estas son las derivas que da el contar las historias acomodándolas como mitologías. Producen disparates.

VIII. INDEPENDENCIA PARA LA RUINA GENERAL Y LA CORRUPCIÓN

El detonador real del proceso independentista fue la invasión de España por Napoleón en 1808 y el cautiverio por el gran emperador de la familia real española (la portuguesa tuvo la visión de refugiarse en Brasil). Invasión y cautiverio desarticulan España y dan origen a la Guerra de Independencia contra el invasor francés. España se desangra y arruina en esta guerra, que un grupo de oligarcas de las colonias aprovecha para asestar una puñalada en la espalda del invadido reino. Cinco años atrás, en 1803, en Trafalgar, España había perdido la flor y nata de su flota de guerra, quedando por tal causa casi imposibilitada, desde entonces, para hacer presencia efectiva en sus dominios americanos, toda vez que el único medio de conseguirlo era con una potente fuerza naval. Los ejércitos que responden a la Corona española son pequeños y están armados pobremente. El mismo Bolívar es sabedor de esa realidad: «¡Qué demencia la de nuestra enemiga, pretender reconquistar América, sin marina, sin tesoros y casi sin soldados!».

Los datos oficiales de las batallas mitificadas por la historia hispanoamericana (que en Europa habrían sido consideradas escaramuzas por la escasa cantidad de soldados participantes) así lo indican. En la segunda batalla de Carabobo, en 1821, se enfrentaron 6.500 combatientes independentistas, incluido un batallón inglés, contra 4.300 realistas. La desigualdad de la preparación y el armamento puede medirse por el número de bajas en la batalla: 2.908 realistas muertos por unos 200 entre los independentistas. Es decir, entre los primeros las bajas superaron el 60 por 100, lo que en términos militares es asombroso. Una situación similar se había producido en Maipú, Chile, en 1818, donde combatieron 5.300 realistas con 12 piezas de artillería contra 4.900 independentistas y 21 piezas de artillería. Perecieron 2.000 soldados realistas y 1.400 fueron hechos prisioneros (aniquilación total), por 1.000 muertos independentistas. En Ayacucho se repitió el guion. Los realistas, que eran 8.300 hombres, tuvieron 1.800 muertos, por 309, de 5.600 soldados, los independentistas.

Más que ejércitos, las fuerzas realistas parecían responder al patrón de tropas milicianas, y el enorme número de bajas lo explicaría la mala

preparación de los soldados y la escasez de armamento. Por lo demás, había españoles, indígenas, mestizos, negros y mulatos en ambos bandos. Aquellas batallas correspondían más al cuadro de una guerra civil, no al de una guerra entre invasores e invadidos. Tampoco era una lucha entre opresores y oprimidos. En realidad, los únicos oprimidos eran los milicianos reclutados por los dos bandos, para que dirimieran, matándose con saña, una pugna por el poder entre grupos oligárquicos que dominaban las colonias, en nombre de España los unos, en su propio nombre y en el de Inglaterra los otros. Así quedó sembrada la semilla de las guerras fratricidas.

Para tener cabal idea de lo disparatado de tantas bajas, basta revisar las cifras de dos batallas anteriores en el tiempo, pero casi contemporáneas. En el combate de Somosierra, cerca de Madrid, en 1808 se enfrentaron 20.000 soldados españoles y 45.000 franceses. España tuvo 250 bajas, entre muertos y heridos, por 138 los franceses. En la célebre batalla de Bailén combatieron, ese 1808, 33.000 soldados españoles contra 24.000 franceses. El saldo fue, entre los españoles, de 1.000 bajas, entre muertos y heridos, por 2.000 muertos los franceses. En la batalla de Arapiles, de 1812, donde combatieron 51.900 soldados aliados contra 47.000 franceses, los muertos totales rondaron los 2.000 hombres. Murieron más soldados realistas en Carabobo (2.908) que en Bailén y Arapiles, aunque en Carabobo fueran solo 6.500 los combatientes frente a 33.000 en Bailén y 98.900 en Arapiles. Y los oficiales que dirigían las tropas en España y en América habían sido formados en las mismas escuelas. En la batalla de Bailén combatió José de San Martín, como oficial del ejército español. Carlos de Alvear y José Manuel Carrera habían combatido también por España contra Napoleón.

Sin marina ni recursos y sumida en crisis interna, era imposible que España pudiera presentar otra forma de resistir que recurriendo a los recursos que estaban a disposición de los virreinatos y capitanías, entre ellos el reclutamiento de ejércitos milicianos, como el que preparó el capitán general de Guatemala contra el intento de Louis Aury de organizar un foco independentista en Centroamérica. Los dirigentes independentistas, en tanto, tenían de su lado a la mayor potencia naval del mundo.

Las guerras de independencia, para mantener el estilo, no terminan por sucesos en las colonias, sino por otro que ocurre en España. Haciendo un esfuerzo mayúsculo, la Corona había preparado un formidable ejército –

puede que el primero que mereciera tal nombre–, formado por 10 batallones, que debía zarpar a América en 1820, al mando del general Rafael de Riego. La historia se tuerce, en ese momento, de manera definitiva, pues el general Riego, en vez de tomar rumbo a América, se rebela contra el rey Fernando VII y dirige sus tropas hacia Madrid. Con Riego se abre el llamado Trienio Liberal, que finalizará en 1823 con una nueva invasión francesa –esta pedida y consentida, los Cien Mil Hijos de San Luis–, que restablece en el poder a la desastrosa monarquía de Fernando VII. Privados de refuerzos y recursos, los restos del poder español en América estaban condenados.

De esa manera, la independencia de las colonias españolas terminará como había empezado, siendo un subproducto de los conflictos y crisis europeos. La invasión de la península por Napoleón desarticuló España. El desgobierno provocado por la invasión despertó, en los grupos oligárquicos de las colonias –alimentados por la avaricia y los intereses británicos–, la idea independentista. España, arruinada por la guerra contra Napoleón, habría podido derrotar la rebelión de no estar ella misma sumida en una profunda crisis interna por las luchas entre absolutistas y liberales. El levantamiento de Riego dio el tiro de gracia, quedando abandonadas las colonias, salvo las insulares, Cuba y Puerto Rico, que permanecieron fieles a España.

El resultado fue devastador para ambas partes. España e Hispanoamérica perdieron. Del poder hispánico que, sumando sus fuerzas en la península y en América, había podido derrotar una y otra vez las invasiones inglesas e incluso vencer al ejército napoleónico en Bailén, no quedaron sino trozos convertidos en republiquillas de opereta. Latinoamérica pasa a formar parte del imperio informal inglés, en manos de oligarquías comerciantes y terratenientes, con escasa ilustración y desvinculadas del resto del mundo. España se sumirá en el peor siglo de su dilatada historia, que la hará desaparecer como potencia y la arrastrará a un caos de levantamientos y asonadas militares, guerras civiles y enfrentamientos mortales entre progresistas y conservadores, que terminará llevando a la Guerra Civil de 1936. Merced a su reingreso en el concierto europeo en 1986, España se ha convertido en un gran país. Latinoamérica, sin embargo, sigue atada a las cruces que se plantaron en el periodo de independencia.

En el campo económico, la independencia tiene efectos devastadores. Durante la colonia, se habían creado grandes mercados regionales, que Manuel Lucena llama «mercado común indiano», que, por las dificultades que imponía la orografía americana, se realizaba por medio de comunicaciones marítimas. La fortuna y prosperidad de unas regiones dependía en gran medida del intercambio con las otras. El cacao venezolano fluía a México, que pagaba con monedas de plata y harina, de lo que carecía Venezuela. De Charcas salía trigo, aceites y paños de Cuzco y Quito, y salazones de pescado a los virreinatos de la Plata y Nueva Granada. De Nicaragua salía tabaco y añil a México y tabaco, miel, sebo y brea a Portobelo. Del Callao enviaban vino, azúcar y trigo a Guatemala y México. Todo este sistema quedó desarticulado con la independencia y fue causa principal del colapso económico que sufrieron los nuevos países entre 1820 y 1870, pues se vieron privados, de repente y sin alternativas, de mercados y proveedores. No terminó allí el daño económico. La independencia determinó la pérdida de los «situados» (antecedentes de lo que, dentro de la Unión Europea, se llaman «fondos de cohesión»), que, explica Lucena, consistían

> en unos envíos, más o menos periódicos, de dinero desde las regiones más ricas de Hispanoamérica hacia las más pobres, sobre la construcción teórica de que Hispanoamérica era una estructura unitaria en la cual los reinos más prósperos debían ayudar a los pobres, pues estos tenían unas funciones muy específicas en la defensa del conjunto, por lo que debían recibir una compensación económica.

De las cajas de México y Lima, las capitales más ricas, salían decenas de ducados para las zonas más pobres. México tenía a su cargo la defensa del Caribe. La caja de Lima cubría «los gastos de fortificación de Suramérica», dice Lucena. Lima, desde el siglo XVI, sufragaba los gastos de Chile en la guerra contra los araucanos, de la misma forma que financiaba la plaza de Cartagena de Indias. El sistema de situados murió con la independencia. Los entonces «fondos de cohesión» dejaron de fluir. Moría el sistema y moría la economía de los nuevos países. Los libertadores sabían muy poco de economía y bastante menos de los fondos de cohesión. Pero sabían mucho de la corrupción que se expandía como peste en las alzadas oligarquías independentistas.

Los empréstitos que, generosamente, ofrecía Inglaterra fueron un festín para los –supuestamente– patriotas levantados contra España. Podríamos llenarnos de datos de aquel festín, que no solo terminó de arruinar a los nacientes Estados, sino que infectó, como cáncer incurable, a las elites gobernantes. Eran, además, sobornos encubiertos para propiciar la ruina de España a favor de los intereses imperiales británicos, algo que Simón Bolívar conocía muy bien, como recoge Carlos Marichal, en su obra *Historia de la deuda externa de América Latina.* Mientras Bolívar, aguardaba un crédito y armas de Londres, en mayo de 1823, escribió a Antonio José de Sucre:

> Inglaterra es la primera interesada en el éxito de esta transacción ya que desea formar una liga con todos los pueblos libres de América y de Europa contra la Santa Alianza, para ponerse a la cabeza de los pueblos y dirigir el mundo. No es interesante para Inglaterra que una nación europea como España mantenga una posesión como Perú en América. Prefiere que sea independiente con un poder débil y un gobierno frágil. Es por eso que bajo un pretexto cualquiera, Inglaterra apoyará la independencia de Perú.

El «libertador» Bolívar sabía, por tanto, que el dinero y las armas británicas fluían para garantizar la principal ambición británica, que era, nada menos, que «dirigir el mundo» y, por tanto, dominar las provincias hispanas de América. Había, pues, claridad en los «libertadores», de que el apoyo británico no pretendía proveer prosperidad a los nacientes países, sino utilizarlos para sus ambiciones imperiales. ¿Algo ha cambiado en la mentalidad de las elites dominantes en la patria de Bolívar? Parece que muy poco, a tenor del episodio vivido en enero de 2019, cuando un compatriota del «libertador» se autoproclamó presidente de Venezuela, pues así lo había dispuesto Estados Unidos, quien pidió luego la intervención militar de tropas estadounidenses para que le entregara el poder que él, por sus propios medios, era incapaz de obtener.

Tampoco desconocían Bolívar y otros líderes independentistas el fin que estaba teniendo buena parte de los empréstitos otorgados por bancos ingleses. Así lo recoge Éric Toussaint, en su artículo «La deuda y el libre comercio como instrumentos de subordinación en Latinoamérica desde su independencia», de julio de 2016:

> Desde el comienzo de la lucha por la independencia Simón Bolívar, así como otros dirigentes independentistas, se lanzó a una política tanto de endeudamiento interno –que evidentemente terminó beneficiando a las clases dominantes locales– como de endeudamiento externo ante Inglaterra y sus banqueros. Con el fin de poder pedir préstamos en el exterior puso como garantía una parte de las riquezas de la nación y tuvo que suscribir acuerdos de libre comercio con Gran Bretaña. La mayor parte del dinero concedido en los préstamos jamás llegó a América Latina puesto que los banqueros retenían unas enormes comisiones, tipos de interés realmente abusivos y vendían los títulos claramente por debajo de su valor nominal. Algunos de los encargados de las misiones latinoamericanas, con mandato de los líderes independentistas, también retuvieron sus jugosas comisiones en el caso de que no hubieran robado pura y simplemente una parte de las sumas prestadas. Y del resto, una parte importante sirvió para la compra de armas y de equipamiento militar a comerciantes británicos y a precios prohibitivos. En cuanto a lo que llegó a Latinoamérica, una pequeña parte de los préstamos, fue incluso malversada por algunos miembros de las nuevas autoridades, de los jefes militares y de las clases dominantes locales. Una serie de citas de Simón Bolívar acompañadas de comentarios de Luis Britto indican claramente que el Libertador fue tomando conciencia de la trampa de la deuda en la que él y los nuevos Estados independientes habían caído. […]
>
> El cónsul inglés, sir Robert Ker Porter tomaba nota de sus conversaciones con Simón Bolívar en su diario y en la entrada del miércoles 15 de febrero de 1827, hacía constar que: «Bolívar confiesa la existencia de una deuda interna de 71 millones de dólares, en papel, para ser pagada por el gobierno. Cientos de individuos han especulado intensamente y en su mayor parte usurariamente sobre los bonos, comprándolos de los necesitados por el 5, el 25 y el 60 por ciento, y me informan en forma creíble que difícilmente hay un empleado del estado que conserve efectivo, porque todo lo ha traficado en esta inmoral y antipatriótica especulación: el vicepresidente Santander (me cuentan) tiene dos millones de estos bonos, que probablemente compró por 200.000 dólares.

Cabe expresar perplejidad sobre la benevolencia con que se sigue tratando, aún hoy, la abominable conducta de aquellas elites, corruptas hasta la médula y desde la raíz, llamadas a dirigir los nuevos países, elites que, mientras enviaban a sus pueblos al infierno, aprovechaban la ocasión para enriquecerse de forma obscena, robándose o traficando con los préstamos que contrataban para la «lucha por la libertad». Perplejidad también en cuanto al empeño de ciertas izquierdas de disculpar, incluso ante los hechos más evidentes, a los llamados «libertadores», que, desde la pasividad, cuando no desde la complicidad o la participación, fueron parte del primer

saqueo masivo y descarado de las arcas públicas por las oligarquías nativas. Malversación y robo de unos préstamos que luego los pueblos tendrían que pagar –y siguen teniendo que pagar, si no, pregunten en Argentina– a costa de su miseria y de la condena al mayor de los atrasos.

Un episodio, uno de centenares, sirve para ilustrar el impacto de aquel primer saqueo en el devenir de los países, recogido por H. Perriere, J. I. Pascual y G. Cascallar, en su artículo «Una dependencia anunciada: la influencia británica y la deuda en la formación de la economía argentina», de diciembre de 2018. Los autores escriben:

> La presencia inglesa tendía a reforzar la política de la oligarquía porteña en el sentido de acelerar la acumulación capitalista a expensas del resto del país. Es por este vínculo que Peña llama a esta oligarquía como «anglo criolla», una oligarquía preocupada por sus ganancias, sin importarles los proyectos políticos que la Corona británica perseguía en el Río de la Plata.
>
> Para Vitale, a principios del siglo XIX, las formas de penetración foránea del capital extranjero en América Latina también fueron indirectas, a través de empréstitos para financiar obras de infraestructura y el control sistema de créditos, del transporte marítimo, la exportación de maquinarias para la industria minera y agropecuaria. Esto se agravó con la firma del primer empréstito de Rivadavia, en 1824 con la Baring Brothers, por un total de 1.000.000 de libras cuya finalidad fue mejorar el puerto y el dragado del Río de la Plata. Sin embargo, sus fines se ven limitados:
>
> La primera transacción con el Estado argentino fue el empréstito de 1824, que viene a ser algo así como el ideal de usurero universal. De este empréstito de 1.000.000 de libras, solo recibió 560.000 en letras, que acabaron de pagarse en 1904 después de haberse abonado 8 veces el importe recibido.
>
> Si bien luego de la Primera Guerra Mundial, empieza a declinar el predominio británico y Estados Unidos surge en las décadas posteriores como potencia imperialista hegemónica, los rasgos semicoloniales se mantuvieron en todo el siglo XX y se continúan en la actualidad.

Poco más que comentar. Un empréstito contraído en 1824 que se terminó de pagar en 1904, después de haber sido abonado ocho veces. ¿Se entiende la moraleja?

Chile es otro ejemplo a recordar. Como recoge Andrés Sanfuente, en su trabajo *La deuda pública externa de Chile entre 1818 y 1935,* «La dependencia financiera del exterior ha acompañado siempre a Chile. Durante la colonia española, constituyó uno de los pocos territorios de la dominación hispánica que fue un importador neto de capital». Tras la

independencia, el país quedó en bancarrota y buscó empréstitos en el exterior, lo que no consiguió hasta 1822, de Inglaterra, por un millón de libras esterlinas. Sin saber cómo emplear el dinero y desconociendo el mercado financiero londinense, el dinero quedó en Londres hasta 1824, debiendo emplearse 160.000 libras en pagar intereses acumulados del empréstito. La Memoria de Hacienda de 1834, del gobierno chileno, se expresó así del empréstito: «se negoció también con obligaciones onerosas un empréstito extranjero de 5.000.000 de pesos que llegó a nuestro poder considerablemente disminuido, para ver invertir su mayor parte, por una fatalidad inexplicable, en objetos improductivos, y sin provecho alguno del Estado». La Memoria de Hacienda de 1842 vuelve al tema en estos términos: «inútil cuando menos sea deplorar ahora la grabosa carga que impuso al país una deuda contraída sin necesidad y malversada después por impericia». Chile no terminó de pagar el empréstito hasta 1856. Como comentan Sergio Villalobos y otros autores en su *Historia de Chile,* «Junto con nacer a la vida independiente, el país había iniciado el largo capítulo de la deuda externa».

La independencia traía, de raíz, la ruina, la sumisión al imperialismo británico y la alianza entre las oligarquías criollas y los Imperios. De aquella combinación atroz de corrupción, saqueo y dependencia extranjera solo podía surgir lo que hubo, hay y seguirá habiendo mientras Latinoamérica no subsane los males de raíz que, desde sus orígenes independientes, la mantienen encadenada al subdesarrollo y el atraso. Tarea dura, difícil, pero no imposible. ¿O sí?

IX. SOBRE LOS DESPOJOS, LA RAPIÑA DE TERRITORIOS

Deshecho el Imperio español y quedando sus partes sumidas en guerras civiles y anarquía, pronto fueron presa fácil de ambiciosos y poderosos (y no tan poderosos) vecinos y no vecinos. En un puñado de décadas, los Estados hispanoamericanos que colindan con vecinos codiciosos pierden territorios. De todos, el caso más dramático es el de México, país americano que recibe el mayor patrimonio territorial de España: más de 4 millones de kilómetros cuadrados, desde el Misisipi hasta Oregón, entonces tierra de nadie (es decir, de sus pueblos indígenas, a los que nadie reconocía nada).



Dominios americanos de España en 1808.

Recordemos que en 1794 Estados Unidos quiso fijar sus límites con España, designando a tal propósito a su embajador en Londres, el diplomático Thomas Pinckney, quien viajó a Madrid para dicho fin. El

tratado fue negociado íntegramente por Manuel Godoy, quien actuaba como primer ministro de la Corona y que no quiso que nadie más se ocupara del tema. Godoy, haciendo gala de una ineptitud extrema como gobernante, firmó el tratado de límites de 1795, conocido como Tratado de San Lorenzo. Este tratado fijaba la frontera entre Estados Unidos y los dominios de España en el río Misisipi y concedía a Estados Unidos libertad de navegación por dicho río. Establecía, asimismo, como límite en las Floridas el paralelo 31, dejando en poder de Estados Unidos lo conquistado por Bernardo de Gálvez en 1781 y territorios que pertenecían a pueblos indígenas aliados de España. En todo caso, España conservaba más de la mitad del territorio que luego será de Estados Unidos. La generosidad de Godoy –por no darle su verdadero adjetivo, que era estupidez– dejó pasmado Pinckney, quien había esperado unas negociaciones duras y difíciles. En vez de eso, se encontró con que Godoy le entregaba un territorio tan vasto que, de un plumazo, literalmente, Estados Unidos vio duplicado su territorio.

Si hacemos excepción de África y los archipiélagos que bañan los mares del Sur, pocas veces en la historia una región había sufrido la rapiña territorial que sufrieron los territorios y las repúblicas que sucedieron a España como Estados independientes. Esa es otra de las tantas medallas a colgar del pecho invicto de los «libertadores».

El primer zarpazo territorial lo dio Estados Unidos, aprovechando el caos que habían provocado las guerras de independencia americanas. En 1818, viendo a España batallar desde México hasta Chile (en 1818, Bolívar intenta tomar Caracas; San Martín, ese mismo año, invade Perú y en abril derrota a los realistas en Maipú), el presidente Jackson ordena, en mayo de 1818, atacar la escasa guarnición hispana de Pensacola, que, tras capitular, es evacuada a La Habana. El ataque da lugar a un tenso intercambio epistolar entre Estados Unidos y España, y a negociaciones sobre este territorio. El 22 de febrero de 1819 se firma el tratado –llamado «continental» en Estados Unidos– que fija los límites entre los dominios de España y Estados Unidos. España se ve obligada a vender las Floridas a ese país y a reconocerle soberanía sobre las Montañas Rocosas y sobre la costa septentrional del océano Pacífico, territorios jamás ocupados por España ni por ninguna potencia europea, menos por Estados Unidos. A pesar de todo, en Madrid hay una fuerte oposición a aceptar un tratado tan oneroso, pese a

las presiones de Estados Unidos para su ratificación. Como ya hemos dicho, un hecho inesperado, la rebelión de Rafael de Riego en enero de 1820 tiene el efecto de determinar la pérdida de las colonias, lo que hace comprender en Madrid la inutilidad de su dominio sobre el deshabitado territorio de las Floridas. En octubre de 1820 el rey Fernando VII firma la orden de transferencia, y en febrero de 1821 se procede al intercambio de los instrumentos de ratificación. Sin hacer nada, salvo aprovechar la ocasión, Estados Unidos obtiene jugosos y extensos territorios de España. El primer efecto continental de las guerras de independencia hispanoamericanas es servir en bandeja a Estados Unidos un jugoso pastel en territorios, con las Floridas como guinda.

La historia territorial de México es de sobra conocida. Este país fue víctima fácil y propiciatoria de la mayor guerra de conquista realizada por Estados Unidos, que le permitió apoderarse de la mitad del territorio mexicano, se desarrolló entre 1846 y 1847, y estuvo precedida por la anexión de Texas (1845). Fue, casi, como quitarle un caramelo a un niño. Desde su independencia de España, México sufría una constante inestabilidad política a causa de la lucha entre federalistas y centralistas, conservadores y liberales, provincias lejanas y ambiciones políticas. Esta inestabilidad alentaba los abusos de las potencias extranjeras, como ocurrirá entre 1838 y 1839 con la llamada Guerra de los Pasteles, un conflicto que enfrentó a México y Francia por las reclamaciones hechas por esta última por daños a unos nacionales suyos, entre los que estaba un pastelero de Veracruz, que reclamaba por el robo de unos pasteles. Fuerzas francesas atacaron México, que resultó derrotado y se vio obligado a pagar 600.000 pesos para librarse del agresor. La peor secuela de esta guerra fue poner al descubierto la penosa debilidad militar mexicana. De la gravedad de la crisis crónica que vivía México desde la independencia da cuenta el hecho de que, entre 1821 y 1846, el país conoció 27 gobiernos con 72 gobernantes. Y desde que estalla la crisis en Texas, en 1836, hasta la crisis final en 1847, México tuvo 13 gobiernos, a una media de uno cada ocho meses. Ni siquiera la guerra contra Estados Unidos llevó a las clases oligárquicas mexicanas a detener aquella espiral destructiva, de forma que, entre 1846 y 1847, México vio pasar cuatro gobiernos con siete gobernantes, lo que da idea del nivel de anarquía existente. La guerra contra México fue, por tanto, un paseo militar para Estados Unidos, que arrancará,

por el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, la mitad del territorio heredado de España. No pareciendo suficiente lo cedido en 1848, México vendió a Estados Unidos, en 1853, otro pedazo de territorio mexicano, el valle de Mesilla, que Estados Unidos quería por ser la ruta más idónea para el ferrocarril que iba a California. El traspaso se hizo a cambio de 10 millones de dólares (se conoce, dicho sea de paso, como la «Compra de Gadsden», por el sujeto que promovió la adquisición de esa franja territorial por Estados Unidos).

Menos espectacular, pero no menos productivo y agresivo, fue el avance de Brasil sobre los territorios de los países vecinos, especialmente Bolivia, Perú y Paraguay. El vasto territorio amazónico, de difícil acceso y desconocido, fue desde temprano causa de conflictos entre España y Portugal. En 1750 intentaron resolver las disputas, firmando un acuerdo de límites que dividía los respectivos dominios desde la cuenca del Orinoco al norte hasta la llamada Banda Oriental (actual Uruguay) al sureste y establecía el fin del reparto de Tordesillas. (A título de curiosidad, este tratado, como señala Jean Claude Roux en su artículo «De los límites a la frontera: o los malentendidos de la geopolítica amazónica», contiene la primera definición de la figura jurídica del *uti possidetis,* pues dice el tratado en su parte preambular que «cada una de las partes conservaba las tierras ya poseídas, salvo concesiones mutuas que permiten un intercambio de territorios en litigios».)

El tratado de 1750 no termina de resolver los problemas, por lo que fue sustituido por otro en 1761. Con todo, los problemas siguieron subsistiendo, debido a que, por una parte, España no prestaba mucha atención al inmenso territorio amazónico y, por otra, Portugal sí lo hacía, fomentando la colonización del interior, aprovechando la enorme red de vías fluviales existentes. Los problemas limítrofes entre ambas potencias llevan a situaciones de guerra. En 1762, tropas españolas invaden Rio Grande do Sul, a lo que responde Portugal construyendo el fuerte de Santa Rosa del Iténez y, después, la fortaleza de Fuerte Príncipe. España, apoyada por Francia, demanda a Portugal el retorno al Tratado de Tordesillas. En 1776, España decide hacer una demostración de fuerza y envía una flota de guerra y 9.000 soldados, que arrasan las posesiones portuguesas al sur de Brasil. La crisis se cierra con la firma, el 1 de octubre de 1777, del Tratado de San Ildefonso, que establece unos límites imprecisos en muchas partes, pero que

se tomarán como los límites oficiales entre los dominios españoles y portugueses en América, incluso después de la independencia de esos dominios.



Límites entre España y Portugal en 1777.

El Tratado de San Ildefonso mantenía el protocolo de 1750 sobre los derechos de navegación. También Portugal y España acordaron, como señala Roux, formar «una comisión que tenía que reconocer y balizar la

delimitación. Pero este reconocimiento nunca llegó a término debido a diversas razones; sin embargo, esta delimitación teórica sobre más de 6.000 kilómetros fue aceptada durante 150 años por las cancillerías suramericanas». Roux, además, recoge lo que muchos debieron pensar en la época de la firma del tratado, que «este tratado representaba un gran éxito diplomático para Portugal visto que justificaba también sus usurpaciones en territorio español».

La independencia de los dominios de España y Portugal abrió un nuevo capítulo, marcado por el distinto destino que siguen. Mientras Brasil logra mantenerse unido y, bajo la férula de Pedro I, se proclama el Imperio del Brasil, los dominios españoles se fragmentan como cristal de azúcar, sumiéndose en guerras y crisis internas. Habiendo desaparecido el poder de España, Brasil no tenía vecinos poderosos, excepción hecha de Argentina, que pudieran frenar su expansión hacia el oeste, animada por el gobierno imperial y sustentada en una alta natalidad, que favorecía la emigración hacia dicha zona.

Largo y extenuante sería recoger la multiplicidad de conflictos limítrofes y territoriales que se abrieron entre Brasil y sus vecinos. Todos ellos, exceptuando de nuevo a Argentina, vieron cómo su territorio se encogía y el de Brasil se ensanchaba. La víctima principal fue Bolivia, el desgarro más doloroso lo sufrió Paraguay, pero el primer lugar en la lista le correspondió a la República Oriental del Uruguay.

La llamada Banda Oriental había sido motivo de continuas disputas entre España y Portugal, saldadas siempre a favor de la primera. En 1816, aprovechando las guerras de independencia en el antiguo Virreinato de La Plata, fuerzas luso-brasileñas inician la expansión y ocupación de la Banda Oriental y la región de Misiones, así como acciones de hostigamiento en las provincias de Mendoza y Entrerríos. En 1821, la entonces llamada Provincia Oriental del Río de la Plata fue anexionada por Portugal a Brasil con el nombre de Provincia Cisplatina. En 1825, apoyados por Argentina, un grupo de patriotas uruguayos –«los 33 orientales»– inició la lucha por la segunda independencia, que provoca la Guerra del Brasil, que enfrentó a argentinos y uruguayos con los imperiales brasileños. La guerra terminó en febrero de 1827 tras la batalla de Ituzaingó (llamada en Brasil batalla de Passo do Rosário), donde el ejército rioplatense causó una durísima derrota al ejército brasileño. La intervención de Inglaterra llevó a las partes a firmar

un tratado, por el cual se reconocía la independencia de Uruguay. Los límites definitivos se firmarán en 1851, después de concluir la Guerra Grande (1839-1851), conflicto civil que había desbaratado Uruguay. Estos tratados (cinco en total) fueron negociados en condiciones en extremo desventajosas para Uruguay, que había enviado su delegación a Brasil para negociar los límites y solicitar ayuda económica y militar para reconstruir lo destruido por la guerra civil. Establecen los límites en el norte en el río Cuareim, lo que implicaba renunciar definitiva y formalmente a los territorios de las Misiones Orientales que, según lo estipulado en el Tratado de San Ildefonso de 1777, pertenecían a la Corona española. Estos límites provocaron un sentimiento amargo en la población uruguaya, que no dudó en calificar de «robo» la pérdida de los territorios del norte. En 1861, diez años después de firmados, Uruguay intentó declararlos nulos, pero nada había ya que hacer. Los límites habían quedado establecidos para siempre.

En el momento de su independencia de España, Paraguay tenía una extensión aproximada de 653.000 kilómetros cuadrados. En el presente, su extensión es de 403.702 kilómetros cuadrados. La causa de la amputación se encuentra en el más brutal y sanguinario conflicto que jamás haya conocido Latinoamérica, la llamada Guerra de la Triple Alianza, que enfrentó, entre 1865 y 1870, a la República del Paraguay con Brasil, Argentina y Uruguay. Guerra desigual, peleada por los paraguayos con un heroísmo y un sacrificio tal que perdieron la vida dos tercios de su población. De 1.525.000 habitantes que tenía Paraguay en 1864, apenas sobrevivieron unas 300.000 personas, de las cuales solo 28.000 eran varones. Las causas que desataron esta guerra son múltiples y los investigadores siguen discrepando en sobre quién hacer recaer la responsabilidad de aquella tragedia militar y humana. Lo cierto es que en 1862 vencía el plazo de 6 años establecido en el Tratado Berghes-Paranhos entre Paraguay y Brasil y el Tratado Vásquez-Guido entre Paraguay y Argentina, en virtud de los cuales estos Estados buscaban resolver las controversias territoriales que les oponían. Los tratados no dieron fruto y los conflictos volvieron a reabrirse. Mientras tanto, Brasil, manteniendo su política de colonización como forma de hacer presencia en territorios que no le correspondían, había establecido las colonias de Dorados y Miranda en la margen derecha del río Apa, una zona neutralizada por el tratado de 1856. Al mismo tiempo, una guerra civil enfrentaba a blancos y colorados

en Uruguay, siendo los colorados apoyados por el Imperio del Brasil. El gobierno paraguayo, temeroso de que un triunfo colorado diese el control de Uruguay a Brasil –lo que entendía como una amenaza al equilibrio de la zona–, entra en guerra con Brasil. Necesitando cruzar territorio argentino para situar sus tropas en tierras uruguayas, el mariscal Francisco Solano López pide permiso a Argentina, que lo niega. Solano decide, no obstante, cruzar, lo que lleva a Buenos Aires a declararle la guerra. Uruguay, entre los dos gigantes, hace lo mismo. La guerra terminará en el combate de Cerro Cotá con la derrota total de Paraguay. No hubo piedad hacia el Estado vencido. Argentina y Brasil le arrancaron 160.000 kilómetros cuadrados, casi a partes iguales, y le impusieron un pago de 200.000 libras esterlinas que, dada la destrucción absoluta del país, debió ser refinanciado múltiples veces, hasta convertirse en una deuda de 3.220.000 libras. En Paraguay, incluso la cabaña de ganado vacuno estuvo a punto de extinguirse. La guerra de la Triple Alianza contra Paraguay constituye la página más negra de la historia regional.

A Bolivia, entre 1863 y 1867, la negociación con Brasil le significó la pérdida de 300.000 kilómetros cuadrados, pese a lo cual los problemas no terminaron. La segunda amputación correspondió al territorio del Acre, con una superficie aproximada de 200.000 kilómetros cuadrados, luego de una pequeña guerra promovida por colonos y autoridades brasileñas en 1902. Pese a los grandes esfuerzos que hizo el gobierno boliviano para preservar el territorio, su debilidad y el nulo apoyo internacional inclinaron la balanza hacia Brasil. El conflicto terminó con el Tratado de Petrópolis de 1903, que consagraba la anexión a Brasil del territorio del Acre. A cambio, Bolivia recibía el bolsón de Abuna, de 890 kilómetros cuadrados, y 2.000.000 de libras esterlinas, a emplear, supuestamente, para abrir una vía férrea.

La anexión del Acre tuvo una fuerte repercusión en Perú. Se suceden incidentes entre recolectores de caucho y choques armados en los puestos fronterizos. Desde Lima se envían refuerzos, pero la asimetría de poder y medios es excesiva. Brasil mueve sus tropas con barcos de vapor, que llegan sin inconvenientes, en tanto que Perú debe atravesar pésimos caminos y accidentes geográficos enormes. Se impone, finalmente, la ley del más fuerte y se firma un compromiso en 1904, que establece el cese de las hostilidades y la neutralización de los territorios en disputa. Las comisiones mixtas encuentran dificultades en sus trabajos, lo que provoca

nuevas tensiones, que llevan a intervenir al papa Pío X. Finalmente, en 1909 se firma el tratado de límites, que entrega a Brasil 155.600 kilómetros cuadrados y a Perú 15.000. Brasil lograba extender su territorio casi al borde de la poderosa cordillera de los Andes. Señala Roux: «Mediante este acuerdo, Brasil acababa, después de la incorporación del Acre, su dominio sobre los más ricos sectores en caucho y desplazaba su soberanía más arriba de los ríos no navegables para los vapores».

Con menos violencia y más astucia, Brasil logró firmar tratados limítrofes favorables con Colombia y Venezuela, que le aportaron las últimas adquisiciones de territorio, hasta configurar el Brasil actual. Alcanzar acuerdos entre Colombia y Brasil fue tarea laboriosa, pues los contactos se iniciaron en 1826 pero no llegaron a puerto hasta 1907, con la firma del Tratado de Bogotá de 21 de abril de ese año, acuerdo que fue completado con el Tratado de Límites y Navegación Fluvial firmado el 15 de noviembre de 1928. Los acuerdos de límites entre Venezuela y Brasil fueron los más pacíficos y prácticos de todos los firmados por Brasil. Ambos países iniciaron negociaciones en 1853 y, en 1859, suscribieron el tratado de límites de 5 de mayo de ese año. La facilidad con que se negocia el acuerdo obedece a que el gobierno venezolano decide renunciar voluntariamente a territorios ocupados *de facto* por Brasil, lo que despeja las negociaciones. Al final, optan por buscar accidentes geográficos, en este caso ríos, tomando como referencia las cuencas hidrográficas de los ríos Orinoco y Amazonas. De esa guisa, los territorios bañados por ríos nacidos en la región y que desembocan en el Orinoco, corresponderán a Venezuela. A su vez, los territorios bañados por ríos nacidos en la región y que desembocan en el Amazonas, serán de Brasil.

Una diferencia sustancial separaba a Brasil de sus vecinos hispanoamericanos, que será, a la postre, razón del éxito brasileño y causa del fracaso hispanoamericano. Esa diferencia sustancial la señala Roux, en su trabajo ya citado:

> La política de Brasil en la Amazonía tenía que dedicarse al control de la navegación a favor de sus dependientes, proteger a los colonos tanto en territorio propiamente brasileño como en las zonas fronterizas en litigios, finalmente Brasil extendía su soberanía *de facto* hasta los límites río arriba de la navegación a vapor. Al contrario, los Estados andinos estaban desgarrados por sus querellas y creían disponer para su

> único provecho del apoyo de Brasil. En verdad, a falta de recursos financieros, eran tan frágiles políticamente como incapaces de oponerse militarmente a Rio.

Puede expresarse de otra manera. Las tan alabadas guerras de independencia hispanoamericanas destruyeron el poder colonial español, pero, sobre todo, destruyeron algo más importante: destruyeron una entidad que era un poder mundial, no tan fuerte y moderno como Inglaterra o Francia, pero sí una potencia con capacidad para defenderse y hacerse respetar en el concierto europeo de grandes Estados. Como se ha visto, a lo largo del siglo XVIII y principios del XIX, la fuerza combinada de Hispanoamérica y España causó derrotas a británicos y portugueses en América y a Napoleón en España. Destruido el Imperio español, los pedazos desgajados fueron presa fácil de sus vecinos más poderosos. Estados Unidos obtuvo las Floridas y la mitad de México, Brasil arrancó pedazos a todos sus vecinos. En total, más de 3.000.000 de kilómetros cuadrados del territorio heredado de España se perdieron en las décadas posteriores a la independencia de los países hispanoamericanos. Merced a las conquistas territoriales, Estados Unidos pudo llegar a convertirse en un gran país y, posteriormente, en un Imperio regional –luego mundial– gobernando sobre republiquitas incapaces de nada, convertidas en neocolonias.

Eso sí, la entereza y el valor que las oligarquías derrocharon en las guerras civiles o la rapiña de territorios de países hermanos (México sobre Chiapas, que era de la Federación Centroamericana; Chile sobre Bolivia y Perú; Perú sobre Ecuador; Argentina sobre Paraguay; Colombia sobre Nicaragua…), esa entereza estuvo ausente para defender sus territorios de las potencias mayores. El daño no terminaba ahí. Las disputas territoriales envenenaban las relaciones entre los países y eran origen de nuevas calamidades. Cuando la disputa terminaba en conquista del fuerte sobre el débil, el rencor entre los pueblos estaba servido y quedaba allí, como agua estancada pudriéndolo todo. Bolivia mantiene abierta las heridas que dejó la Guerra del Pacífico (1879-1884), que la privó del mar (no deja de ser significativo que Bolivia, el Estado fundado por Bolívar, haya sido el país más atribulado y desafortunado en una región de por sí atribulada y desafortunada). En Perú, los demagogos siguen presentando a Chile como enemigo, efecto de la misma guerra. La Guerra del Chaco (1932-1935) entre Bolivia y Paraguay

fue, en verdad, una guerra entre la Royal Dutch Shell, establecida en Paraguay, y la Standard Oil, radicada en Bolivia, por los supuestos yacimientos petrolíferos que creían existían en la zona limítrofe en disputa. «La guerra de los soldados descalzos», como fue llamada, provocó la muerte de casi 100.000 soldados –de hambre y enfermedades la mayoría– y dejó en la ruina a ambos países. Honduras y Guatemala estuvieron a punto de ir a la guerra en la década de los veinte porque la United Fruit, establecida en Guatemala, entró en conflicto con la Cuyamel Fruit, radicada en Honduras, por las tierras fronterizas en disputa entre ambos países, que las dos fruteras querían para extender el cultivo del banano. El conflicto terminó en 1929, cuando la United Fruit adquirió la Cuyamel. Un escritor guatemalteco denunció el hecho en una obra titulada *No es guerra de hermanos, es guerra de bananos.*

Los zarpazos territoriales de Estados Unidos y Brasil no fueron los únicos. Inglaterra consolidará su dominio sobre Belice y se apoderará, en 1831, de la Mosquitia de Nicaragua, que Nicaragua podrá recuperar en 1894, en un acto casi milagroso. Los ingleses se harán fuertes en la Guyana venezolana y ocuparán, en 1833, las islas Malvinas, de donde España los había expulsado en 1774, lo que dará pie a una guerra en 1982, perdida por Argentina. La situación más extrema y esperpéntica ocurrió en República Dominicana, que fue ocupada por Haití entre 1822 y 1844, año en que los dominicanos lograron proclamar la independencia nacional.

¿Habría atacado Estados Unidos al Virreinato de la Nueva España –y con ello a todo el poder hispanoamericano– de haberse conservado la unidad y el poder que de ella emanaba? ¿Habría intentado ocupar las Floridas a costa de entrar en guerra con la mayor potencia regional? Habría sido una decisión harto arriesgada para Estados Unidos. De hecho, en 1813, en plena guerra contra Gran Bretaña, el presidente Jackson ordenó tomar un pequeño fuerte español en Florida para prevenir una acción inglesa, pero dejando claro, en sus instrucciones, que no debía entrarse en guerra contra España.

¿Habría retomado Inglaterra las islas Malvinas, la Guyana o la Mosquitia? ¿Londres hubiera impuesto los nefastos tratados de libre cambio? ¿Habría invadido Haití República Dominicana? ¿Habría Portugal, primero, y el Imperio de Brasil, después, avanzado sobre la Amazonía como lo hicieron después de 1810? Todo eso tendría que ponerse en duda. Recordemos que, poco tiempo antes, en 1776, una potente fuerza española de ejército y flota

había castigado duramente las posesiones portuguesas al sur de Brasil. La historia no tiene vuelta atrás y es ejercicio inútil especular. Especular. No soñar con lo que pudo haber sido y no fue porque unos iluminados, al servicio de un poder imperial, decidieron destruirlo todo…

X. INDÍGENAS, EL BOTÍN DE GUERRA DE LAS OLIGARQUÍAS

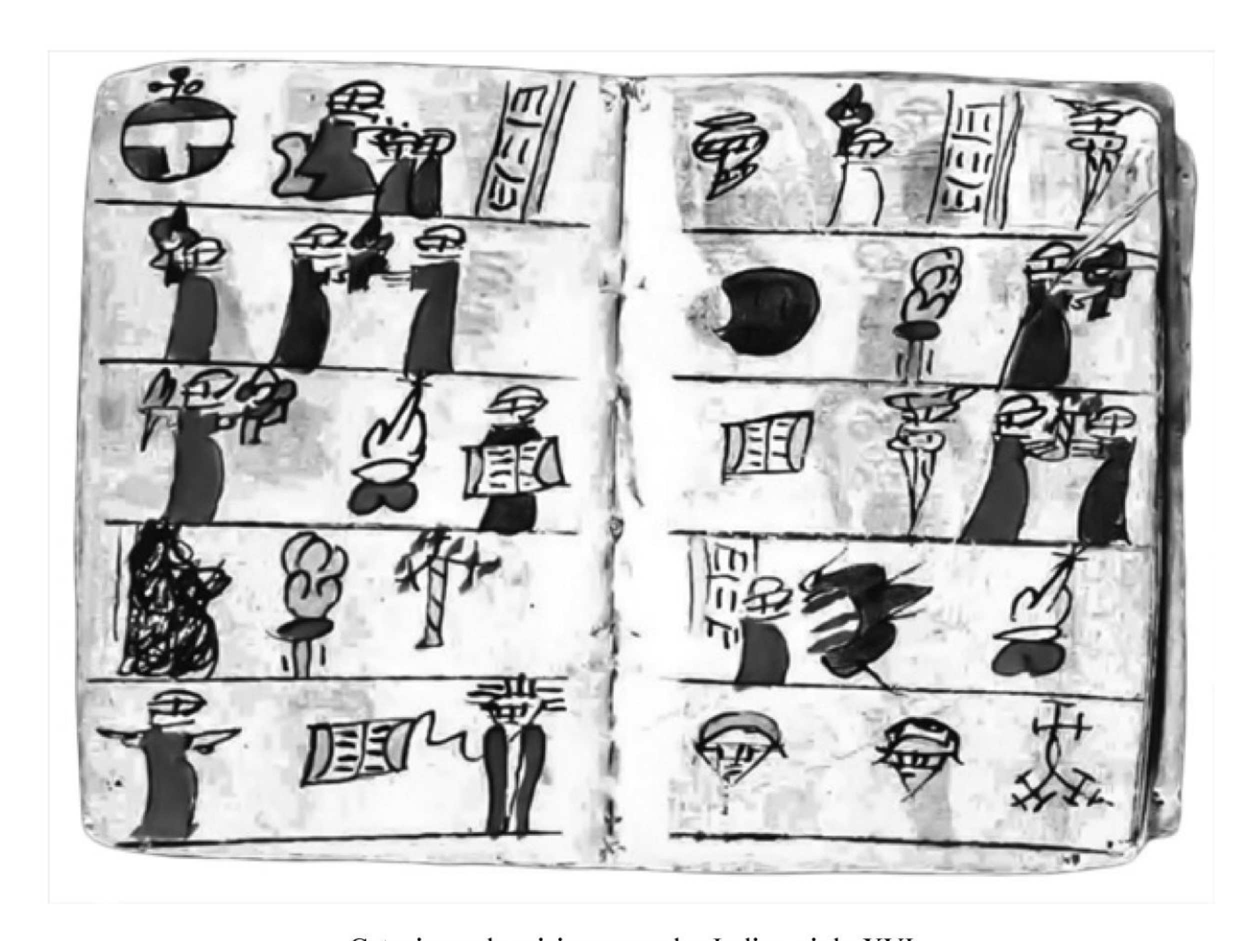
No solo territorios y libertad se perdieron. La independencia dejó otro grupo perdedor: los pueblos indígenas. Hay que, en este tema, desmantelar dos mitos construidos por las oligarquías, y que han perdurado como quistes malignos en el *ethos* histórico de la región. El primero, que los indígenas eran explotados hasta la infamia por los «españoles», cierto las primeras décadas, falso los siglos siguientes. Las comillas ayudan a destacar un hecho medular: a medida que avanzaba la colonia, criollos y mestizos fueron ocupando cuotas más grandes de poder económico y social; los «españoles» explotadores de indios eran, mayoritariamente, ellos, sobre todo los criollos, convertidos en grandes hacendados, comerciantes y contrabandistas. En segundo lugar, que el dominio español se mantuvo sobre una represión inmisericorde. Más falso aún.

La verdad histórica es que, pasado el periodo de conquista –sangriento en unas partes, sin sangre en otras–, la Corona desarrolló un voluminoso sistema de regulación legal de sus dominios americanos, conocido como Leyes de Indias, dentro del cual se encontraban abundantes reales cédulas y reales órdenes dirigidos a proteger al indígena de los abusos y que, tanto o más importante, reconocían derechos a los pueblos indígenas como nunca una potencia colonizadora había hecho ni reconocería jamás. Contrario a lo que sostienen los mitólogos de la historia, el instrumento principal y más efectivo de dominio no fue la fuerza, sino la religión y la educación, hecho que se omite adrede y que entienden herético sacarlo a la luz los repetidores de la mitología historicida. Aquí dejamos un ejemplo, tomado de la obra, en dos volúmenes, de Don Miguel de la Guardia, *Las Leyes de Indias,* editado en Madrid, en 1889:

> LEY IV. Don Felipe II en la Ordenanza 144 de poblaciones, en el Bosque de Segovia, á 13 de Julio de 1573. Que no queriendo los indios recibir de paz la santa fe, se use de los medios que por esta ley se mandan
>
> Conciértense con el cacique principal, que está de paz y confina con los indios de guerra, que los procure atraer á su tierra á divertirse, o a otra cosa semejante, y para entonces estén allí los predicadores con algunos españoles, é indios, amigos secretamente, de manera que haya seguridad, y cuando sea tiempo se descubran á Jos

> que fueren llamados; y á ellos juntos con los demás por sus lenguas é intérpretes, comiencen á enseñar la doctrina cristiana: y para que la oigan con más veneración y admiración, estén revestidos á lo menos con albas ó sobrepellices y estolas, y con la santa cruz en las manos, y los cristianos la oigan con grandísimo acatamiento y veneración, porque á su imitación los fieles se aficionen á ser enseñados.

Como puede colegirse, no hay orden alguna que mande a convertir a los indígenas a sangre y fuego, sino impresionándolos con boatos y ritos y hablándoles en sus lenguas, a efectos de que «se aficionen á ser enseñados». Siguiendo esas órdenes, los predicadores hicieron alarde de imaginación para enseñar la religión cristiana a los indígenas, entre ellos lo que podríamos considerar los primeros «cómics» religiosos:



Catecismo de misionero en las Indias, siglo XVI.

No quedaban ahí las Leyes de Indias. La Corona tampoco promovía la discriminación ni nada que pueda parecerse al *apartheid* inventado por los blancos en Sudáfrica en pleno siglo XX. Era tan «perversa» y «mala» la Corona, que mandaba órdenes de este tenor, que pueden verse en el libro de Don Miguel de la Guardia:

> El Emperador Don Carlos y el Cardenal Gobernador, en Fuensalida, á 7 de Octubre de 1541.
>
> Que se funden hospitales en todos los pueblos de españoles é indios. Encargamos y mandamos á nuestros Virreyes, Audiencias y Gobernadores, que con especial cuidado provean, que en todos los pueblos de españoles é indios de sus provincias y jurisdicciones, se funden hospitales donde sean curados los pobres enfermos y se ejercite la caridad cristiana.

Esa línea fue constante durante el periodo colonial. Así, por Real Cédula de 1697, reiterada en 1725, se derogó la ley que prohibía la ordenación sacerdotal de indígenas. Por la Real Cédula, el rey de España afirmó que los indígenas podían ser ordenados, y que deberían ser tratados «según y como los demás vasallos en mis dilatados dominios de la Europa, con quienes han de ser iguales en todo».

Vamos, ahora, a un punto medular en la historia real de Hispanoamérica: la tenencia de la tierra. Como recoge Fernando Mayorga, en su artículo «La propiedad de tierras en la colonia»:

> Desde temprano, la Corona reconoció la legitimidad de la propiedad anterior a la conquista. En las instrucciones impartidas a los conquistadores se aclaraba que no debía repartirse a los peninsulares la tierra de los indios y que sus estancias debían ubicarse lejos de los pueblos de naturales para evitar que el ganado dañase sus labranzas. Las leyes 7, 9, 12, 16, 17, 18 y 19 del título 12, libro 4 y las leyes 8 y 20 del título 3, libro 6 de la *Recopilación* se refieren a la protección de las tierras de los naturales dentro de las dos vertientes señaladas. Paralelamente, las leyes que reglamentaron el régimen de encomiendas precisaron que el derecho del encomendero debía limitarse a percibir el tributo indígena sin que pudiera bajo ningún concepto disponer de su tierra.

En otras palabras, desde los inicios de la colonia, la Corona española reconoció el derecho de los indios a sus tierras ancestrales, otorgando en un sinnúmero de casos las correspondientes cédulas que reconocían ese

derecho y establecían los linderos de las tierras indígenas. Tras la independencia, los nuevos gobiernos derogaron las Leyes de Indias que protegían las tierras de los indígenas. Aprovechando el vacío legal creado *ex profeso,* las oligarquías terratenientes, todas a una, de México a Argentina, iniciaron una brutal política de despojo –que aún hoy continúa– para arrebatar a los indígenas las tierras reconocidas por la Corona, hundiéndolos en la mayor de las miserias. Este proceso fue iniciado casi desde el momento mismo de los procesos de independencia, según expone Carlos Alberto Murgueitio Manrique en su investigación «El proceso de desamortización de las tierras indígenas durante las repúblicas liberales de México y Colombia, 1853-1876», publicado en 2014:

> Simón Bolívar inició el proceso de desamortización o desvinculación de las posesiones terrenales del clero y de las comunidades indígenas del Perú realista en 1824. Con el decreto de Trujillo, ordenó el reparto de las tierras comunales y la reventa en subasta de las denominadas como excedentarias, por dos tercios de su valor nominal. En vista de su error, el mismo Libertador suspendió la vigencia de tal decreto en 1826, aplazando la enajenación de las tierras de comunidad, al menos, hasta 1850, con el fin de permitirles a los indígenas una adaptación menos traumática al individualismo agrario y un proceso de aculturación que les permitiera entender los propósitos republicanos. También revocó los efectos de la liberación de los esclavos, proclamada por San Martín.

Aunque revestido de palabras altisonantes, como proceso dirigido a modernizar los países y «civilizar a los indios», el proceso de destrucción y despojo de las tierras ancestrales sumió a los pueblos indígenas en la mayor de las miserias. Lo señalaba José Carlos Mariátegui en su obra *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana,* publicada en 1928:

> A la República le tocaba elevar la condición del indio. Y contrariando ese deber, la República ha pauperizado al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria. La República ha significado para los indios la ascensión de una nueva clase dominante que se ha apropiado sistemáticamente de sus tierras. En una raza de costumbre y de alma agrarias, como la raza indígena, este despojo ha constituido una causa de disolución material y moral.

En 1824, en Argentina, comienza la Campaña del Desierto, guerra de exterminio contra los indígenas para conquistar sus territorios. En 1826, el presidente Bernardino Rivadavia, dicta un decreto por el cual «se contrata

al coronel prusiano Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueles». Uno de los partes de guerra de Rauch da cuenta de su forma de hacer la guerra a indígenas desarmados: «Hoy, para ahorrar balas, hemos degollado 28 ranqueles». Los extensos dominios indígenas serán repartidos entre ganaderos y comerciantes, en régimen de enfiteusis, convirtiendo a la Argentina en una inmensa finca controlada por un puñado de familias.



Campaña «contra los indios salvajes» de 1824.

No obstante, corresponde a Uruguay el primer genocidio planificado de Latinoamérica. En 1831, el presidente uruguayo, general Fructuoso Rivera, invitó a los indígenas charrúas a una reunión en un sitio llamado Salsipuedes –nombre que sabe a broma macabra– según él, para tratar el problema del contrabando de ganado a Brasil y la defensa de la frontera. En abril de ese año 1831, los charrúas acudieron a la cita y, ya reunidos, un ejército de 1.200 soldados los atacó sin previo aviso. Nadie sabe, aún hoy, cuántos indígenas fueron asesinados. La historia oficial dice que 40 –cifra ridícula–, los «charruistas», que centenares. El número no importa, sino el

hecho en sí. Los indígenas que no pudieron huir fueron capturados y llevados, amarrados, a lo largo de 300 kilómetros, hasta Montevideo, donde fueron repartidos como esclavos en las casas de la oligarquía criolla de la capital oriental.

Entre 1860 y 1885, los mapuches y otros pueblos de Argentina y Chile sufrieron el exterminio por la acción conjunta de los ejércitos de Chile y Argentina. En México, las tierras comunales y los predios indígenas fueron devorados por los latifundios. En todas partes, los indígenas, privados de los escasos pero importantes derechos que les había reconocido la Corona, serán obligados a convertirse en peones, dentro del Estado feudal oligárquico que nació con la independencia. Todo aquello significó un salto atrás en el tiempo, no hacia adelante.

Caso ilustrativo es el del pueblo mapuche, en Chile, que desentierra las leyes coloniales para defenderse del régimen republicano. Según afirmación del abogado José Lincoqueo, desde 1641 hasta los inicios del siglo XIX fueron «dos siglos de oro para la nación mapuche, en los cuales desarrollaron una agricultura y una ganadería muy avanzadas para la época de la que estamos hablando, y toda su población tuvo un nivel de vida en lo económico o en lo material nunca antes visto ni posteriormente. Los mapuches actuales recuerdan con nostalgia inmensa ese periodo de su historia». En otras palabras, el último siglo y medio del periodo colonial fue la mejor época de la historia mapuche. Su peor periodo se inició en 1860, cuando el ejército chileno invadió sus territorios y destruyó su sociedad. Según afirma el abogado Lincoqueo, en un documento presentado en la ONU:

> Desde 1883 hasta ahora, la nación mapuche ha perdido todos sus derechos fundamentales como tal y se encuentra en la actualidad absolutamente sojuzgada y esclavizada por el Estado chileno, que siendo solo un Estado que ocupa el territorio de una nación independiente, se ha permitido violar unilateralmente los 28 parlamentos o tratados internacionales que España celebró con Arauco o Ragko Mapu, durante la época de la colonia, superponiendo sobre tales instrumentos internacionales su propia legislación.

La expansión de los Estados chileno y argentino hacia el sur terminará con la desaparición de los pueblos fueguinos, cuyo episodio más terrible fue el exterminio del pueblo selknam, en la Tierra del Fuego chilena. En 1872,

el diario *The Daily News* informó lo siguiente: «Indudablemente la región se ha presentado muy apropiada para la cría de ganado; aunque ofrece como único inconveniente la manifiesta necesidad de exterminar a los fueguinos», según lo recogido por el historiador René Peri Fagerstrom en su obra *Reseña de la colonización de Chile.* El gobierno chileno impulsaba una campaña colonizadora sobre la extracción de oro que, una vez agotado, reconvirtió en actividad ganadera. Para propiciar la colonización, repartió millones de hectáreas para ganadería ovina, creando una Sociedad Explotadora de Tierra de Fuego. En 1893 comenzarían los ataques contra los indígenas, que terminarían en su exterminio.

> Los cazadores de indios mataban porque les pagaban una libra esterlina por cada cabeza, y a la mujer le cortaban los senos y pagaban un poco más por ella.

El Museo Nacional de Londres mejoró la oferta: 8 libras por cabeza de indio. Bien, en este punto debe hacerse una pregunta: ¿qué conquistador o autoridad española, en los siglos anteriores, dispuso un exterminio planificado? Ninguna, porque no hubo ninguno. Crueldad, represión y esclavitud hubo en las primeras décadas, pues las conquistas y las guerras son así, pero, en todo caso, era el siglo XVI, no finales del XIX, es decir, 300 años después. Otra pregunta: ¿en qué se diferenciaban las políticas de los gobiernos de Argentina y Chile contra los pueblos indígenas de las de los gobiernos de Estados Unidos? Tal vez solo en la magnitud, pues había muchísimos más indígenas en las llanuras de Estados Unidos que en la Pampa argentina o en la Patagonia chilena. Hagamos memoria del más conocida genocida del siglo XIX, el general Philip Sheridan, según recoge Roxanne Dunbar-Ortiz, en *La historia indígena de Estados Unidos,* editado en 2019, quien dijo, en 1873:

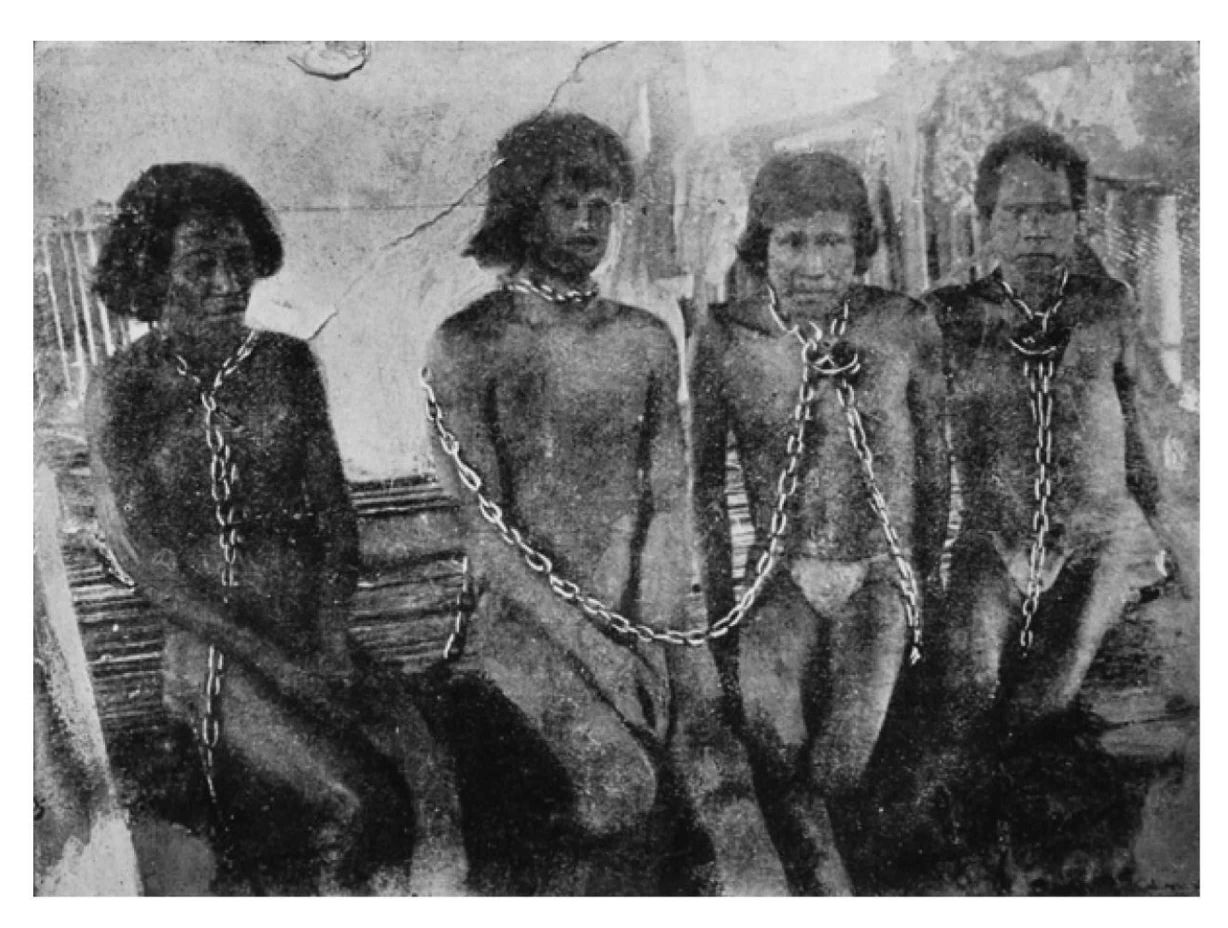
> Debemos actuar con determinación vengativa contra los siux, incluso hasta exterminarlos, a los hombres, las mujeres y los niños.

Podría pensarse que las barbaries perpetradas contra los indígenas fue cosa del siglo XIX y que, entrando en la modernidad del siglo XX, la pesadilla había tocado a su fin, pero no fue así. La visión del indígena como persona sin derechos dio paso a atroces episodios donde el racismo, mezclado con la codicia y el desamparo de los pueblos indígenas se

juntaron para perpetrar crímenes horrendos que quedaron impunes. En la región amazónica de Perú, la fiebre del caucho de finales del siglo XIX y del XX atrajo a grandes empresas y personas sin escrúpulos que, entre otras acciones deleznables, se dedicaron a cazar a indígenas de la Amazonía, para usarlos como mano de obra esclava. Miles de indígenas perecieron bajo aquel régimen brutal, hasta que Walter Hardenburg, un ingeniero estadounidense, viajase a las zonas caucheras peruanas y viese la situación infame de los indígenas. Hardenburg escribió, a su regreso, varios artículos denunciando la barbarie. En uno de ellos relataba:

> Los agentes de la Compañía fuerzan a los pacíficos indígenas del Putumayo a trabajar día y noche […] sin la más mínima remuneración exceptuando los alimentos necesarios para mantenerlos con vida. Les roban sus cultivos, sus mujeres y sus hijos […]. Los azotan de forma inhumana hasta que se les ven los huesos […]. Dejan que se mueran, comidos por los gusanos, cuando sirven como comida para los perros […]. Cogen a sus hijos por los pies y estampan sus cabezas contra árboles y paredes hasta que sus cerebros salen volando […]. Disparan a hombres, mujeres y niños para divertirse […] los queman con queroseno para que los empleados disfruten de su desesperada agonía.

Las denuncias de Hardenburg provocaron un enorme escándalo en Gran Bretaña, la gran financiadora de los caucheros, pero no serán las preocupaciones por los indígenas lo que pondrá fin a la barbarie, sino el hecho de que agentes británicos habían logrado sacar semillas del caucho y las habían cultivado con éxito en las colonias inglesas de Malasia y Sri Lanka, donde era obtenido a menores costos económicos, lo que obligó a abandonar las plantaciones peruanas por quiebra. Así de poco valían los indígenas y así de míseras son las visiones que subsisten del periodo colonial, donde los indígenas tenían más derechos reconocidos de los que jamás les fueron admitidos por las nuevas repúblicas, lo que explica que, aún hoy, sigan luchando por sus derechos.

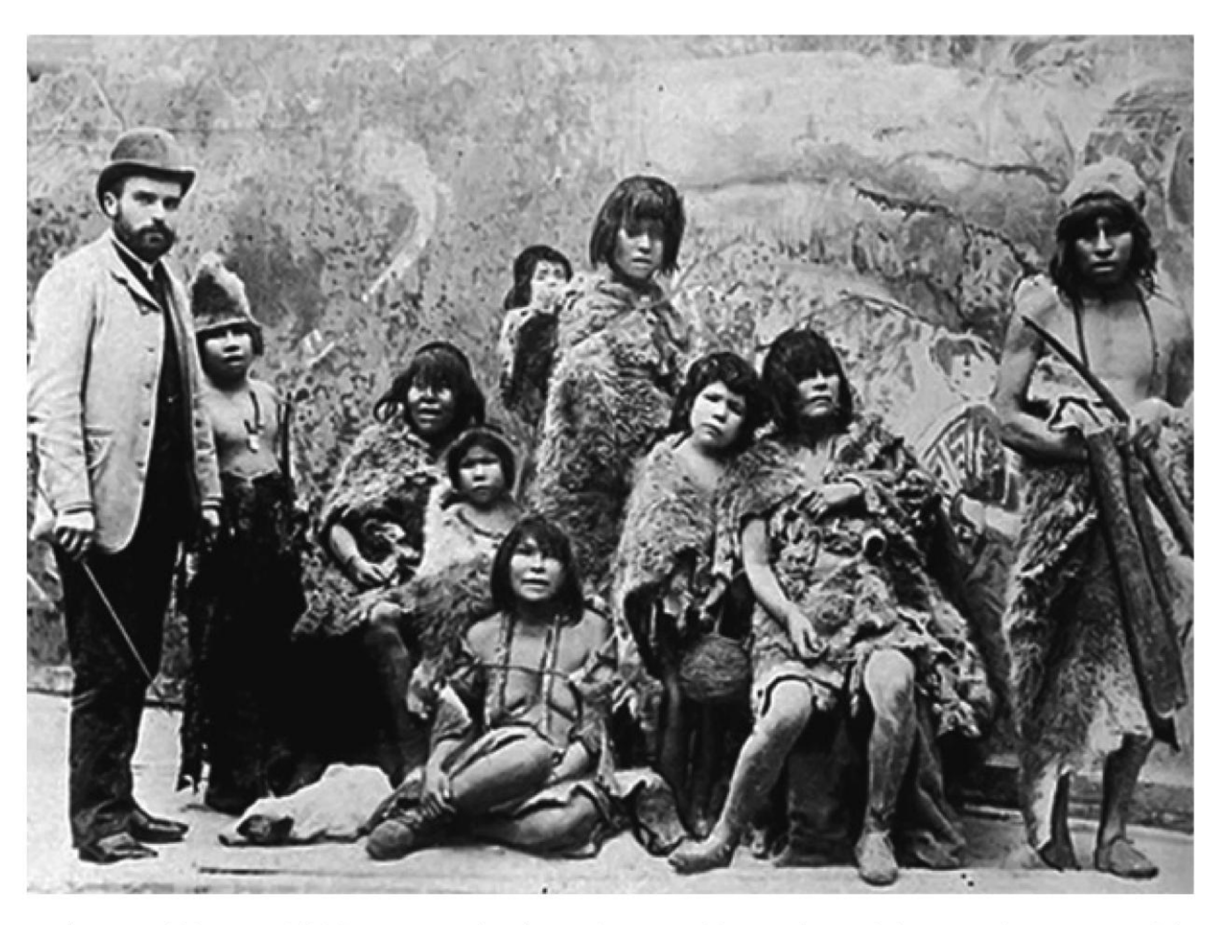


Indígenas de la Amazonía peruana, esclavizados en las plantaciones de caucho a principios del siglo XX. Pero en Perú las diatribas van contra Gonzalo Pizarro.

Hace un siglo, en Argentina, se perpetró la última gran matanza de indígenas a manos de terratenientes. Según relato de la época:

> A la mañana del 19 de julio, 130 policías y algunos civiles partieron desde la localidad de Quitilipi hasta Napalpí. Después de 45 minutos de disparar los Winchester y Mauser a todo lo que se movía, solo quedó el silencio y la humareda de los fusiles. Los heridos –fueran hombres, mujeres o niños– fueron asesinados a machetazos. El periódico *Heraldo del Norte* recordó el hecho a finales de la década del '20: «Como a las nueve, y sin que los inocentes indígenas realizaran un solo disparo, hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en medio del pánico de los indios (más mujeres y niños que hombres), atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad».
>
> El 29 de agosto –cuarenta días después de la matanza–, el ex director de la Reducción de Napalpí, Enrique Lynch Arribálzaga, escribió una carta que fue leída en

el Congreso nacional: «La matanza de indígenas por la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos si viene la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados».



Indígenas chilenos exhibidos como animales en la Exposición Universal de París, de 1889. Su viaje fue autorizado por el gobierno chileno.

Más dramático es que aún hoy, en el siglo XXI, sigan terratenientes y grandes empresas en guerra contra los pueblos indígenas y sigan los indígenas siendo asesinados por reivindicar sus derechos. Uno observa con asombro que, para defender lo que reclaman como suyo, los indígenas en Bolivia, Chile o Nicaragua invocan títulos de la Corona española frente a las leyes republicanas, triste ejemplo del desamparo que siguen sufriendo a manos de los sistemas oligárquicos, y prueba indirecta que desmiente otro de los grandes mitos de la historiografía oficial hispanoamericana: que los

indígenas estaban peor durante la colonia y mejor bajo las repúblicas. Ciertamente los pueblos indígenas fueron duramente explotados, discriminados y reprimidos por el poder colonial; pero ese poder colonial lo integraban no únicamente españoles peninsulares, sino también criollos y mestizos, que, como se ha señalado anteriormente, también se beneficiaban de la explotación de indígenas y negros. Con todo, España reconoció derechos esenciales a los indígenas, como el derecho a sus tierras ancestrales, a vivir según sus leyes y costumbres, o a hablar su idioma, algo que ninguna otra potencia colonial ha reconocido jamás a los pueblos colonizados (¿qué podría agregarse a lo narrado por Howard Zinn en *La otra historia de Estados Unidos* sobre el genocidio indígena en ese país?).

Se podría afirmar, sin riesgo de exceso, que España creó un primer sistema universal de derechos humanos, mínimos e incumplidos de mil formas (¿cuándo se han cumplido cabalmente los derechos humanos?), pero un sistema legal de protección de los pueblos indígenas que no tiene parangón en el mundo de imperios coloniales que se abrió en 1492 y concluyó en 1945, cuando se inició –para no detenerse– el mayor proceso descolonizador de la historia. Para la historia han quedado los debates de los teólogos españoles de la Escuela de Salamanca, en el siglo XVI, sobre los derechos de los indígenas, que fueron el fundamento moderno del Derecho de Gentes, es decir, del Derecho internacional. Era cierto que en tierras americanas la voluntad del emperador «se acata, pero no se cumple». No obstante, como señala Pierre Vilar en su *Historia de España,* este hecho «no quita su grandeza a la controversia política y moral suscitada en torno a tal sistema. Es hermoso para una nación colonial haber tenido un Las Casas, y no haberlo dejado aislado y sin influencia».

¿Puede alguna potencia colonial europea –Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania…– esgrimir una legislación protectora de pueblos indígenas y colonizados como la construida por España a lo largo de tres siglos? No se trata de hacer diferencias entre imperios buenos o imperios malos –el imperialismo ha sido y será siempre imperialismo–. Se trata, nada más, de exponer un ángulo de la historia latinoamericana deformado u ocultado, especialmente si se comparan estos ángulos con las conductas colonialistas en el siglo XIX, casi 100 años después de haber sido proclamados los derechos del hombre y del ciudadano. Hannah Arendt resume, en la obra

antes citada, el espíritu homicida que guió el imperialismo europeo del siglo XIX:

> La raza fue la respuesta de los boers a la abrumadora monstruosidad de África –todo un continente poblado y superpoblado por salvajes–, una explicación a la locura que se apoderó de ellos y les iluminó como «un relámpago en cielo sereno: exterminad a todos los brutos». Esta respuesta determinó las más terribles matanzas de la historia reciente, el exterminio de las tribus hotentotes por los boers, los salvajes crímenes de Carl Peters en el África Alemana del Sudeste, la masacre de la pacífica población del Congo: de 20 a 40 millones reducidos a 8 millones; y, finalmente, quizá lo peor de todo, determinó la triunfal introducción de semejantes medios en la política exterior ordinaria y respetable.

Arendt recoge en otra parte de su obra que los burócratas británicos en África declaraban que «no se permitiría que consideraciones éticas tales como los derechos del hombre se alzaran en el camino de la dominación blanca». Esto, vale repetir, ocurría en el siglo XIX y aún se prolongará al XX. Solo conociendo estos hechos puede tenerse una perspectiva más cabal del significado y singularidad de las Leyes de Indias, promulgadas entre los siglos XVI y XVII. Ciertamente, no fueron respetadas de muchas formas, pero también lo fueron de otras. Un caso puede servir para ilustrar el funcionamiento de las Leyes de Indias en lo que a los pueblos indígenas se refiere.

En Nicaragua, a principios de este siglo XXI, distintas comunidades indígenas desenterraron los viejos títulos reales para defenderse de la voracidad de los terratenientes. Esto también ha permitido conocer de fuente directa, sin intermediarios criollos o mestizos, algunas realidades de la vida de los indígenas durante la colonia. Tal es el caso de la comunidad indígena de Sutiaba, en el departamento de León, que entregó al Instituto Histórico Centroamericano los títulos otorgados por el rey de España a su comunidad en 1726. Estos títulos fueron escondidos por sus custodios «porque fueron perseguidos por los terratenientes y autoridades municipales de la ciudad de León, cuando la anexión de Sutiaba en 1902». Los títulos en cuestión están formados por varios documentos, uno de ellos una cédula real de Felipe V, titulando a favor de los sutiabas 63 caballerías de tierra. Otro documento trata del juicio, iniciado en 1692, por el que un mulato libre, llamado Gaspar Rodríguez, acusado por los indígenas de ser testaferro

del alcalde de la ciudad, reclama unas tierras en el sitio denominado El Buen Suceso, que la comunidad sutiaba reivindica como suyas, en virtud de las Leyes de Indias. Rodríguez obtiene el título de dominio sobre el sitio, alegando que se trataba de tierras realengas, es decir, propiedad del rey. Los indígenas apelaron la titulación y, examinadas las leyes por el tribunal, este reconoció los derechos de los sutiabas, fallando, en 1705, a su favor. Esto ocurría a finales del siglo XVI y principios del XVII, en el apogeo del dominio colonial. En 2007, en Nicaragua, diversas comunidades indígenas exigieron al gobierno el reconocimiento de los títulos reales sobre sus tierras, expedidos por la Corona española a partir de 1713.

El 24 de marzo de 1833, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió, en una sentencia, que, «por nacimiento, el indio americano es extranjero y, por tanto, carece de independencia». El 1 de abril de 1866, el Congreso estadounidense aprobó una ley reconociendo la igualdad de todas las personas, con excepción de los indios. Y, saltando en el tiempo, en 2002, en Argentina, un juez desconoció los derechos de una familia mapuche sobre sus tierras tradicionales, ordenando su expulsión a favor del nuevo propietario, el multimillonario italiano Luciano Benetton.

Entrar en estos terrenos es, en la mitología histórica oficial, otra herejía. «Los españoles exterminaron y expoliaron a los indios», se repite de norte a sur, lo que es muy cierto en cuanto al expolio y no admite contradicción alguna, pero no tanto en cuanto al exterminio, pues, aunque fuera por motivos de explotación, los españoles preferían a los indígenas vivos y trabajando que no muertos y sin mano de obra esclava (nadie con dos neuronas de frente mata a la gallina de los huevos de oro). Los primeros 100 años de colonia fueron terribles, no solo por la esclavitud, el abuso y la destrucción sufrida por los nativos. Lo fueron por la propagación de enfermedades como la viruela, la gripe y otras que las poblaciones amerindias no conocían y causaron estragos. Los otros 200 años fueron distintos y, aunque se mantuvieron la explotación y los abusos, la situación del indio fue mejorando. «Se les ha enseñado policía, visten y calzan y tienen muchos otros bienes que antes les eran prohibidos. Se les han quitado las cargas y servidumbres. Se les ha dado pan, vino y aceite y otros muchos mantenimientos: paño, seda, lienzo, caballos, ganados, herramientas, armas y todo lo demás que en España ha habido, y enseñado los oficios y artificios

con que viven ricamente», se puede leer en las Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias, de 1573.

Andando el tiempo, se abrieron paso niveles notables de respeto a las culturas indígenas: «En aquellas demarcaciones coloniales donde los indios eran numerosos (México, Guatemala, Perú), se dictaban clases de lenguas indígenas dedicadas particularmente a sacerdotes y maestros», señala Bertil Malmberg en su obra *La América hispanohablante.* Esta política permitirá que muchos pueblos indígenas conserven su lengua, cultura y tradiciones, en suma, su identidad. Por tal motivo, la extensión del español, como lengua dominante, se hace después de la independencia, al imponer las oligarquías criollas la enseñanza obligatoria de su idioma. No hablarlo era motivo (y sigue siendo en algunos países) de desprecio y vergüenza, algo que poco ha cambiado en los Estados con mayoría indígena. ¿En cuántas universidades o centros de enseñanza superior de Latinoamérica se estudian hoy las lenguas nativas? ¿En cuántas escuelas? La escritora chilena de etnia mapuche Rayen Kvyeh comentaba, sobre la discriminación lingüística en su país, lo siguiente:

> En los años 80, había una gran lucha por el reconocimiento del idioma mapuche, que en niveles educacionales e institucionales no se aceptaba, a pesar de no existir una ley que lo impidiera. La gente mayor cuenta que en la escuela se les prohibía hablar el mapudungun (lengua de la tierra) en los recreos. Que los profesores, cuando los escuchaban, les castigaban y les hacían arrodillarse, con las rodillas desnudas, sobre piedrecilla, hasta que sangraban. Esto sucedía en las escuelas rurales, donde la mayoría eran niños mapuches.

Chile vive hoy una suerte de sublevación mapuche por la defensa de la identidad y las tierras de esa etnia milenaria. Para reprimirla, distintos gobiernos han utilizado, sorprendentemente, la Ley Antiterrorista aprobada durante la dictadura pinochetiana. Según la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras, su pueblo demanda un acuerdo para resolver los conflictos sobre el derecho al territorio del pueblo mapuche, con la devolución de extensos territorios del sur chileno que reclaman como propios; derecho a la autodeterminación y cese de las inversiones de empresas mineras, forestales e hidroeléctricas que, sostienen, afectan gravemente sus tierras históricas. En este conflicto ha habido muertos, decenas de detenidos y una dirigente mapuche, Patricia Troncoso,

condenada a 10 años de cárcel y que pasó 110 días en huelga de hambre en protesta por la violencia sufrida por su gente, lo que provocó un fuerte movimiento para impedir su muerte y a favor de la causa mapuche. La situación llegó a ser tan grave que la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos enviaron representantes a Chile, para investigar *in situ* el conflicto que afecta a la comunidad mapuche, con sus dirigentes reprimidos y encarcelados, y los defensores de derechos humanos perseguidos por solidarizarse con los mapuches. La AAJ había denunciado en distintas ocasiones que las leyes contra el terrorismo en la región suelen emplearse para reprimir movimientos sociales y pueblos indígenas. La huelga de hambre de Patricia Troncoso terminó a finales de enero de 2008 gracias a la intervención del presidente de la Conferencia Episcopal chilena, el obispo Alejandro Goic, quien, en una declaración titulada *Gracias por la vida,* pedía evitar nuevas situaciones de violencia en tierras mapuches, porque «cualquier polarización, lejos de procurar soluciones y acuerdos, los entrampa».

No solo en Chile se ha dado el abandono. En Nicaragua hubo que esperar al triunfo de la Revolución sandinista de 1979 para que los pueblos indígenas sumus y miskitos, negros creoles y garífonas fueran alfabetizados en sus propias lenguas, y a 1984 para que gozaran del primer Estatuto de Autonomía. En la práctica totalidad de países de la región, la inexistencia de escuelas que enseñaran en los idiomas nativos condenaba a las poblaciones autóctonas al analfabetismo y ha determinado la desaparición de muchas lenguas nativas. Es obvio que la enseñanza y el aprendizaje de la lengua castellana favorecía el desarrollo de los países y a los mismos indígenas, como es obvio también el poder unificador del idioma (la identidad esencial hispanoamericana descansa en el tronco común del español), pero no es incompatible la enseñanza del español, como lengua nacional, con la enseñanza en lenguas nativas y el respeto a la identidad de los pueblos indígenas de Latinoamérica.

Por lo demás, ¿cómo olvidar el genocidio indígena en Guatemala, entre 1954 y 1996, recopilado por el profesor Gonzalo Sichar en su obra *Masacres en Guatemala*? ¿Podría la clase dominante guatemalteca criticar en algo a los encomenderos de la colonia, en su trato con los indígenas, viendo el trato que hoy, año 2019, sigue dispensando a la mayoría maya, excluida de casi todo, sobre todo de justicia? El titular de la Procuraduría de

los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, denunció, en enero de 2019, que los pueblos indígenas continúan viviendo sin el reconocimiento pleno del ejercicio de sus derechos y son víctimas de la discriminación, el racismo y la trata de personas. «Los pueblos indígenas de Guatemala siguen siendo excluidos y discriminados, y están expuestos a la trata de personas. Siguen siendo considerados como fuerza de trabajo barata, sujeta a jornadas laborales extenuantes, y como producto cultural para el turismo», aseguró el magistrado. En su *Informe Anual Circunstanciado de Actividades y Situación de Derechos Humanos 2018,* el magistrado de conciencia reconoce que las autoridades indígenas y sus cosmovisiones son «desvaloradas», tras alegar que los pueblos originarios son «despojados de sus medios de producción, como son la tierra y los bienes naturales», lo que contribuye «directamente a exponerlos a la trata de personas y a diferentes formas de explotación». Meses atrás, en mayo de 2018, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, aseguró que, en Guatemala, se mantienen la discriminación, el racismo y la exclusión contra los pueblos indígenas, que no tienen garantizados sus derechos. «En general, he observado la persistencia del racismo, la discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas a todos los niveles que tiene como resultado una situación de segregación racial de facto», denunció Tauli. ¿O qué decir de Perú, donde, en nombre de la guerra contra Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas perpetraron terribles atrocidades contra la población indígena?

¿Y qué decir de México? El 26 de marzo de 2019, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey de España y al Papa, solicitando que pidieran perdón «por los agravios contra los pueblos indígenas durante la conquista». Hubo respuestas desde México, de sectores indígenas que pedían que el Estado mexicano pidiera primero perdón por las terribles injusticias sufridas después de la independencia y de las que se habla bastante poco.

Aunque, después de la independencia, las nuevas autoridades se llenan la boca hablando de la equiparación de derechos entre todos los habitantes de México, blancos, mestizos e indios, como señala Manuel Ferrer Muñoz, en su estudio El Estado mexicano y los pueblos indios en el siglo XIX, de 1999, «esas iniciativas no pasaban de deseos bienintencionados e ineficaces, que ni siquiera restituyeron a los indígenas al status de que

disfrutaban en el mundo virreinal donde, al menos, aunque sometidos al pago del tributo indígena hasta el decreto de 26 de mayo de 1810 –por su condición de súbditos de la Corona– y de las exacciones que se destinaban al pago de funcionarios, mantenimiento de hospitales de indios y sustento de las arcas de comunidad, estaban exentos del pago de otras imposiciones». Es decir, la equiparación de derechos solo había servido para hacer aún más miserable la vida de los indígenas, que se veían acosados por nuevos impuestos, muchos de ellos para sufragar las guerras civiles y de castas. Tal era la situación que, recoge Ferrer Muñoz, un viajero inglés de esos años –1828– que preguntó a un ranchero sobre las ventajas que le había reportado la independencia, recibió esta respuesta: «el único beneficio que él había logrado consistía en que antiguamente pagaba tres reales de impuesto por ciertos artículos y ahora abonaba por los mismos cuatro». Paralelo al temor a nuevos impuestos era el reclutamiento forzado de indígenas para las guerras de gamonales y oligarcas, a mediados del siglo XIX. El reclutamiento forzoso era visto por los indígenas como «la mas cruel calamidad que devora á sus hijos». En 1847, Carlos María de Bustamante denunció el empeoramiento de las condiciones de vida de los indígenas y de la explotación que sufren por «los hijos de los españoles», es decir, los criollos que habían hecho la independencia.

La violencia contra los indígenas se hizo cada vez mayor. Los abusos fueron respondidos con sublevaciones indígenas, como la de los yaquis en 1826, que alcanzó tal dimensión que fue necesario un indulto general en 1827. Fue esta la primera revuelta en defensa de las tierras indígenas. En 1884 estalla la Guerra del Yaqui, cuando los indios vuelven a sublevarse con 5.000 hombres en armas. El ejército mexicano exterminó a los sublevados, al punto que, en 1896, apenas sobrevivían 500, hambreados y aislados. Largo sería el relato sobre las sublevaciones indígenas y los abusos sufridos por las etnias. En 1887 se reporta que «los indios se han calmado ya, gracias á la tenaz persecución que se les ha hecho». También se reporta el traslado forzoso de poblaciones yaquis y mayos a haciendas agrícolas, donde son esclavizadas.

Entre 1847 y 1886 en distintos Estados mexicanos se lanzan auténticas cacerías de indios, lo que va acompañado de campañas propagandísticas –ya existían– deshumanizando a las víctimas, como lo hizo El Monitor Republicano, en octubre de 1847: «Los indios son antropófagos […]: su

única divisa, su norte único es, mueran todos y vivan los indios […]. Sangre, y no mas que sangre de indios sublevados, debe ser el santo de nuestros puestos. El indio, empedernido en la ferocidad por una naturaleza desamorada, y por el rigor de su suerte, nos mira […] siempre como á sus capitales enemigos». Se hacen normales las «contratas de sangre», por las que se ofrece recompensa por cada indio muerto, primero en Yucatán, luego en otros Estados. En 1853, en Zacatecas, se expidió un reglamento «para los casos de invasión de bárbaros y persecución de ladrones»; «conforme á la circular de este gobierno, todo individuo que corte la cabeza á un bárbaro, recibirá por gratificación 100 pesos». Los bárbaros eran los indios (¿habían leído ya Civilización y barbarie, de Sarmiento?). En 1886, es en Sonora, donde se ofrecen 500 pesos por cabeza de cada apache muerto y en Chihuahua, donde bajan de precio (de 250 a 300 pesos cada cabeza).

En el porfiriato se hablaba abiertamente de civilizar o exterminar a apaches, comanches, yaquis y mayas, recoge Pedro Salmerón, en un artículo en el diario La Jornada, de octubre de 2013. Victoriano Huerta, efímero presidente y traidor de México entre 1913 y 1914, ascendió bajo la dictadura de Porfirio Díaz por las matanzas de indios yaquis y mayas, lo que le valió el ascenso a brigadier general. El trágico alzamiento zapatista, en enero de 1994, sería la última rebelión indígena contra el abandono histórico del Estado mexicano. Las fotografías de indios mayas armados con fusiles de madera expresarían la extrema indefensión de los sublevados. Pero quedémonos con exposición dirigida al presidente mexicano, «en diciembre de 1848 por un grupo de ancianos principales, indígenas de la Huasteca y del departamento de Tampico y Veracruz, redundaba en la opinión común entre las gentes de su raza, que añoraban la época del dominio español, marcada por un gobierno paternal, y la contraponían a los tiempos que por entonces corrían y al estado de miseria, abyección y de abandono en que se hallan, desde que por su mal fueron declarados ciudadanos libres», según recoge Ferrer Muñoz, en el estudio citado. Los ancianos, entre otras cosas, dijeron al presidente mexicano, según la crónica:

> Ellos dicen que los reyes españoles dictaban sin cesar medidas eficaces para poner á cubierto á los indios labradores de la rapacidad de sus astutos enemigos; pero que no ha sucedido lo mismo después que el país se emancipó. ¡Pobres indios! ¿De qué les

vale que haya una constitución donde se hallen consignados sus derechos, si no los conocen, ni disfrutan de ellos, y si ahora son mas esclavos que nunca?

No se pretende hacer, repetimos, apología alguna del colonialismo. Se trata, simplemente, de colocar en sus sitios respectivos, en cuanto a los indígenas, tanto su situación durante el periodo colonial español como las consecuencias que tuvo para ellos la independencia. El que pueblos indígenas, de México a Chile, se vean obligados a desenterrar, 200 años después de la independencia, viejos títulos coloniales para defender sus derechos, nos dice que, para ellos, aquel tiempo pasado fue menos malo.

Que la cuestión indígena sigue siendo un tema pendiente lo demuestran a diario los medios de comunicación. En países como Argentina forma parte de los capítulos más oscuros del país, donde la imagen de país étnicamente europeo hizo desaparecer por décadas a sus indígenas, dando origen a crímenes horrendos. Las razias de exterminio, iniciadas en el siglo XIX, continuaron sucediéndose en el XX. Es el caso del episodio conocido como «la masacre de Napalpí», caso reabierto en 2004 por descendientes de las víctimas, de la etnia toba, del Chaco, masacradas por elementos de la Gendarmería. En la demanda contra el Estado argentino, el pueblo toba solicita:

> Indemnización por daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y moral a favor de la Asociación Comunitaria «La Matanza» por sí y en nombre y representación de la comunidad argentina aborigen de la etnia toba actualmente vivos de la República Argentina, por los crímenes de «lesa humanidad» perpetrados por fuerzas de seguridad nacionales y autoridades civiles federales el 19 de julio del año 1924 en el entonces denominado Territorio Nacional del Chaco, que se conoce históricamente como «Masacre de Napalpí», donde fueron asesinadas más de 450 personas aproximadamente, población civil argentina de etnia toba, y a raíz y por las consecuencias sociales, culturales y económicas que hasta nuestros días trajo ello como consecuencia para las posteriores generaciones sobrevivientes.

En marzo de 2005 se abrió otra causa judicial contra el Estado argentino, en la que se solicita «la indemnización por daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de la verdad histórica, a favor del pueblo de argentinos de etnia pilagá (“Pitte’laalé’ec”), por la llamada “Matanza de Rincón Bomba”, acaecida en las cercanías de la hoy localidad de Las Lomitas, entre el 10 y el 30 del mes de octubre del año

1947, hace 48 años, en el entonces Territorio Nacional de Formosa, por tropas de la Gendarmería Nacional». Las investigaciones pudieron comprobar que más de 1.000 indígenas, niños, ancianos, mujeres y varones indefensos, fueron asesinados, violados y perseguidos como animales. La acusación fue fundamentada en la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Los allanamientos ejecutados por orden judicial en el Polígono de Tiro de la Gendarmería Nacional y otros lugares permitieron localizar varias tumbas comunes. La primera apareció en el patio de la Gendarmería. En total, se habían encontrado, en 2006, cuatro tumbas con decenas de cadáveres. La mayoría de los cráneos encontrados aparecían reventados por proyectiles de pesado calibre.

Casi 200 años después de su independencia, en Argentina dieron un paso singular para el reconocimiento de sus etnias indígenas. Por primera vez desde 1810, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) organizó una encuesta sobre sus pueblos indígenas. El censo se realizó entre mayo de 2004 y diciembre de 2005, en 57.000 hogares de todo el país. Fueron identificados 402.921 indígenas, de 22 pueblos distintos, aunque cuatro de ellos –kollas, mapuches (26 por 100), tobas y wichí– constituyen el 66,2 por 100 del total de la población indígena. Esta, al fin, ha sido reconocida como tal. No obstante, una cuestión es el reconocimiento oficial y otra el tratamiento que reciben. Los indígenas, en Argentina (como en casi toda Latinoamérica), siguen relegados al furgón de cola. Según informes oficiales de la Dirección de Asuntos Guaraníes de la provincia de Misiones, cada cuatro días muere un niño del pueblo mbya guaraní por desnutrición o problemas respiratorios. En noviembre de 2007, el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, se trasladó a la zona de El Impenetrable, en el Chaco argentino, para evaluar el cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia, de proporcionar agua potable, alimentos, medicinas y atención sanitaria a los indígenas tobas. 19 indígenas habían muerto a causa de la desnutrición.

No solo el abandono. En mayo de 2007, funcionarios de la ONU se dirigieron al ministro argentino de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, para expresar su preocupación por los desalojos que sufrían comunidades indígenas de Tucumán, en algunos casos de forma muy violenta. En el desalojo de 22 familias indígenas de sus tierras ancestrales en la comunidad de Los Cuartos, en el valle de Tafí, la policía destruyó viviendas y disparó

contra los pobladores, dejando un saldo de 15 heridos, según los funcionarios de la ONU. En diciembre de 2007, una noticia salió en algunos periódicos argentinos. Trataba sobre la muerte de don Fernando López, un anciano toba de 83 años, que había fallecido como consecuencia del menosprecio y la miseria que sufren los indígenas. La desnutrición, en primer término. Luego la desidia en el momento de atenderlo en el hospital, donde se cayó de la cama y ningún médico o enfermero lo examinó para medir las consecuencias de la caída. Cuando ingresó en el hospital, don Fernando López pesaba 25 kilos. Dado el abandono que sufren, los indígenas se han declarado «desaparecidos económicos», pues, pese a los niveles de miseria que padecen, el Estado sigue brillando por su ausencia y los indígenas siguen invisibles. Noticias recientes recogen declaraciones de autoridades argentinas en el sentido de que pondrán en marcha un plan de emergencia a favor de los pueblos indígenas. En todo caso, deberá guardarse en la memoria que en un país que históricamente ha sido uno de los grandes exportadores de alimentos –carnes y cereales–, hay gente que muere de hambre. Por demás, el hambre indígena no es patrimonio de nadie. En 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) denunció que las poblaciones indígenas de América Latina sufrían tal calamidad en mayor porcentaje que las poblaciones pobres. En Paraguay, los niños con desnutrición crónica pasaron del 18 por 100 en 2005 al 10,8 por 100 en 2012; pero, dentro de las poblaciones indígenas, la desnutrición crónica afectaba al 47 por 100 de menores de cinco años En Guatemala, la indigencia en niños indígenas supera en 12 puntos la media nacional. «Los indígenas no solo pasan hambre por ser pobres, sino también por ser indígenas», afirmó Julio Berdegué, subdirector general de la FAO para América Latina y el Caribe.

En Brasil existen alrededor de 350.000 indígenas, pertenecientes a 200 etnias. Aunque en 1988 la Constitución Política les reconoció como pueblos con derecho a existir, su vida suele valer poco. Matanzas, asesinatos, amenazas, robos, abusos de autoridad o expolio de sus tierras y recursos –aunque han disminuido notablemente en los últimos años– siguen estando presentes, con la impunidad como nota dominante. La historia de Brasil está llena de crímenes contra poblaciones indígenas hasta el momento presente: el asesinato del dirigente Maral Tupai en noviembre de 1983; la matanza de 14 tikunas en marzo de 1983; la de 19 yanomamis en febrero de 1993; el

asesinato de Galindo Jesús dos Santos, del pueblo Pataxo Ha-Ha-Hae, quemado vivo en 1997; la muerte de dos líderes indígenas en enero de 2008 –Leopoldo Crespo, de 77 años, asesinado a golpes por tres jóvenes, mientras dormía en una acera en Miragual, en las proximidades de la Reserva Guarita, y Marcos Veron, de 74 años, dirigente de la comunidad guaraní-kaiowá, muerto por peones de un latifundista, en Mato Grosso do Sul–. Los indígenas guaraní-kaiowá, desde hace casi medio siglo, acampan durante varios meses a lo largo de la carretera cercana a la hacienda de la que procedían los asesinos, como forma de presionar a las autoridades para recuperar sus tierras ancestrales, ocupadas por enormes latifundios. Según datos proporcionados por el Consejo Indígena Misionario (CIMI), una organización próxima a la Iglesia católica brasileña, que trabaja por los derechos de estos pueblos, 76 indígenas perecieron violentamente en Brasil, cifra que significó un aumento del 58 por 100 respecto de 2006, cuando fueron asesinados 48 indígenas. La mayor parte de los asesinatos se dio en el estado de Mato Grosso do Sul, fronterizo con Bolivia y Paraguay. Este goteo interminable de víctimas sigue recordando la página nunca cerrada del drama indígena.

Por lo demás, según fuentes indígenas, en 1822, año de su independencia de Portugal, en Brasil existían unos 600.000 indígenas, que eran apenas 100.000 en 1970. No han sido solo la persecución y los asesinatos. Más daño han producido el robo de tierras y la destrucción de su hábitat. Lo mismo podría decirse de Ecuador, Perú y otros países amazónicos. Por otra parte, en 2007 fueron liberados, en Brasil, 7.000 campesinos que vivían en situación de esclavitud. Los últimos 41 en ser liberados eran esclavos de un familiar del gobernador de Mato Grosso, Blairo Maggi, y fueron encontrados en una hacienda de soja, donde vivían «en un cubículo de madera, acostados en colchones podridos». Al gobernador del Mato Grosso, uno de los mayores empresarios agrícolas de Brasil, se le conoce como «el rey de la soja». El estado de Mato Grosso es, dicho sea de paso, el mayor productor de soja del país y el que tiene el mayor índice de deforestación. Aunque aún no hay cifras oficiales sobre la extensión de la superficie quemada en los gravísimos incendios que asolaron la Amazonia, sobre todo brasileña, en 2019, de lo que no hay duda es de que ha aumentado mucho este año el fuego para quemar espacios de bosques que han sido talados. En torno a los 12.000 o 13.000 kilómetros cuadrados de superficie boscosa

fueron deforestados ese año, y buena parte de esta superficie o la totalidad de la misma serán quemadas. La Amazonia brasileña perdió en agosto de 2019 1.698 kilómetros cuadrados de bosque, un área superior un 222 por 100 superior a la desforestada en el mismo mes de 2018 (526 kilómetros cuadrados), según el estatal Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE). Cabe preguntar qué países pueden construirse con individuos que siguen practicando, igual que hace siglo y medio, la esclavitud y que están gobernados por gente que no tiene el menor escrúpulo en destruir lo que de bueno tiene. El subdesarrollo no parece necesitar aliados externos. Se basta a sí mismo para fagocitar países y pueblos.

En Colombia, entre 2016 y 2018, fueron asesinados 59 líderes indígenas (entre la matanza cotidiana de líderes sociales, que suman casi 1.000 en los últimos 5 años); Amnistía Internacional denunciaba, en abril de 2018, la situación indígena en Chile:

> A pesar de que este contexto de violencia en contra de personas defensoras es noticia constante, poco se conoce sobre la realidad de Chile, sobre todo en relación con el contexto histórico de criminalización y estigmatización de las comunidades del pueblo Mapuche y sus líderes. La historia de la machi Francisca Linconao –autoridad tradicional mapuche de la zona de Temuco al sur de Chile– es sin duda un reflejo de esa realidad.
>
> El 4 de enero de 2013, en un trágico evento murieron Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, una pareja de adultos mayores, cuya casa fue atacada e incendiada por desconocidos que entraron a su predio. La familia Luchsinger-Mackay era dueña de predios disputados como territorio ancestral mapuche, lo que ocasionó que su muerte se vinculara automáticamente a este conflicto.

Conociendo estos datos y hechos resulta tanto más asombrosa la deformación histórica existente en Latinoamérica, donde la memoria histórica parece haberse paralizado en el siglo XVI. Así pasa que, en México, Perú o Nicaragua, la gente sigue odiando con febrilidad a Cortés o a Pizarro, pero desconoce todo –o casi todo– de los distintos genocidios indígenas perpetrados por las oligarquías criollas después de la independencia. Con una diferencia sustantiva. Conquistadores y colonizadores no buscaron, adrede, el exterminio de los indígenas, como ya señalamos. La terrible mortandad producida fue por la suma de una serie de factores, unos voluntarios, como la explotación brutal de los vencidos, otros

accidentales, como las enfermedades. Lo acontecido posteriormente fueron acciones premeditadas, planeadas, dirigidas por los gobiernos republicanos en Uruguay, Brasil, Argentina o Chile. En el siglo XX, en Guatemala. Aunque la gran mayoría de países latinoamericanos han aprobado leyes dirigidas a resolver la histórica omisión, expolio y desculturización de los pueblos indígenas, el resultado de esas iniciativas lo resumen Javier Aguas y Héctor Nahuelpan, en su investigación *Los límites del reconocimiento indígena en Chile neoliberal. La implementación del Convenio 169 de la OIT desde la perspectiva de dirigentes Mapuche Williche,* de agosto de 2018, en los siguientes términos:

> Chile, junto a El Salvador, Costa Rica, Honduras y Uruguay, es parte de los cinco países de Latinoamérica que aún no reconocen en sus constituciones políticas a los pueblos indígenas […]. La experiencia de otros países de América Latina respecto al reconocimiento de los pueblos indígenas en las constituciones nacionales, proceso conocido como multiculturalismo constitucional, es preocupante y desalentador. Los reconocimientos fueron vacíos al momento de hacerlos prácticos. No condujeron a la construcción de sociedades interculturales horizontales ni a Estados plurinacionales que transformaran condiciones estructurales de desigualdad y opresión. Tampoco aportaron en cambios en la superación de la pobreza, distribución de ingresos y transformaciones en las relaciones de poder.

Repasando esas realidades, pareciera como si el tiempo se hubiera detenido en amplias zonas de Latinoamérica, aherrojado a los desastres primigenios. Puede que de esa sensación de tiempo detenido haya nacido el realismo mágico, el pueblo de Comala de Juan Rulfo o el coronel Aureliano Buendía, muerto pero vivo, igual que Melquíades, haciendo y deshaciendo pescaditos de oro, en el espacio intemporal de Macondo, donde llegaron el hielo y las locomotoras a sacar el banano y, con las locomotoras, las matanzas de trabajadores… Latinoamérica, como un gigantesco Macondo.



HOY REPARTO DE INDIOS

A las familias que los requieran se les entregara un indio o china

Diario *La Nación de Buenos Aires,* octubre de 1878.

«El Ministerio de Guerra Informa a la ciudadanía que los días 5 y 6 del mes en curso se entregaran indios para su utilización en estancias ganaderas.

Las indias aun salvajes pueden ser útiles en tareas domésticas en las residencias de las familias porteñas. Es necesario destacar que la comportación de las indias dista de ser civilizadas por lo que es menester la adaptación de los infelices.

También hay a disposición de los señores comerciantes y firmas de esta plaza, indios menores de edad. Los infelices aun careciendo completamente de las gracias de la civilización, pueden utilizarse con sumo provecho para mandados diversos. Los mismos no pueden ser enviados al exterior.

El reparto de los salvajes se realizara gratuitamente en el Hotel de Inmigrantes, los días 5 y 6 de octubre de 8 de la mañana a 6 de la tarde.»

XI. CULPAR AL PASADO PARA EXCULPAR A LAS OLIGARQUÍAS

Contrario a lo que se ha divulgado en la región desde los primeros tiempos de la independencia, que ha achacado a la herencia española el atraso de los países, los datos históricos obligan a hacer, cuando menos, una revisión profunda de esta afirmación, tenida en muchos sitios como una verdad absoluta, casi un dogma histórico. Es un hecho cierto que España y Portugal habían impuesto servidumbres y limitaciones onerosas a las colonias, pero esta era una práctica común a otras potencias coloniales de la época. Inglaterra había impuesto a sus colonias en Norteamérica una prohibición absoluta de construir hornos para fabricar aceros y la existencia de talleres para cortar hierro. También les había prohibido el comercio de sombreros de pieles y de prendas de lana, entre otras variadas prohibiciones –como la de erigir aserraderos de madera– que buscaban proteger la industria británica de cualquier tipo de competencia interna o externa. Igualmente, Gran Bretaña mantenía el monopolio sobre el tabaco y la navegación. Adam Smith criticaba, en su célebre obra *La riqueza de las naciones,* la política comercial británica en sus colonias americanas, que imponía una reglamentación «que de hecho evita el establecimiento de cualquier manufactura [de artículos] de lana […] y limita la industria de sus colonos a aquellos artículos toscos y domésticos que una familia particular puede fabricar para su propio consumo». Smith criticaba también el monopolio comercial que ejercían todas –subrayo todas– las potencias europeas sobre sus colonias americanas. Afirmaba Smith en su obra:

> Después de todos los injustos intentos de todos los países de Europa para encerrar en sí mismos todo el beneficio del comercio con sus colonias, ningún país ha sido capaz hasta ahora de reservar para sí más que el gasto de mantener en la paz y defender en la guerra la tiránica autoridad que ejercen sobre ellas. Cada país ha acaparado en exclusiva los inconvenientes derivados de la posesión de sus colonias, pero ha sido forzado a compartir con muchos otros países las ventajas derivadas del comercio colonial.

España y Portugal, por otra parte, estaban notoriamente rezagados en muchos campos, en comparación con Inglaterra, cuna de la Revolución

industrial. También lo estaban en relación con Holanda, la otra cuna de la industrialización, y de Francia, un país bendecido por la naturaleza en cuanto a fertilidad y abundancia de tierras, ríos y pluviosidad, lo que le permitía mantener una población en constante crecimiento. Pero ¿cómo estaba el resto de Europa o, cuando menos, la Europa que llamamos occidental? Adam Smith se refiere, en su obra citada, a Suecia y Dinamarca como «países pobres», que «nunca hubieran podido fletar un solo barco hacia las Indias orientales si el comercio no hubiera sido reservado a una compañía exclusiva». Polonia, antes de los repartos entre Prusia y Rusia, iniciados en 1795, era un país donde «tres cuartos de la población eran legalmente siervos, atados a la tierra y sin más derechos que los que les concedieran sus amos», apunta Rondo Cameron, en su *Historia económica mundial.* Italia no existía y su territorio seguía siendo, en el siglo XVIII, punto de rivalidad entre España, Francia y Austria. Cameron, por tal motivo, la excluye de su historia. A Noruega ni siquiera la menciona, como para subrayar su irrelevancia económica. El Imperio otomano, que entonces ocupaba Europa oriental y los Balcanes, iniciaba su camino a la decrepitud, lo que le convertiría, en el siglo XIX, en el «enfermo de Europa». Rusia era una gran potencia por la inmensidad de su territorio y la inagotable fuente de recursos que le proveía, pero tendrá que esperar a 1861 para la abolición de la servidumbre y al siglo XX para la desaparición del régimen aristocrático-feudal. Inglaterra, Holanda, Prusia y Francia eran la excepción de una regla, en un continente marcado por la aristocracia, el latifundismo y la pobreza. (Otro tema, que escapa a este trabajo, es el por qué España, habiendo sido la primera potencia con carácter mundial y el país a cuyas arcas fluyó durante siglos un río de oro y plata, no supo aprovechar las cartas marcadas que tenía en mano para convertirse ella misma en el corazón del desarrollo científico, económico, industrial y comercial.)

Por demás, David Ogg, en su obra *La Europa del Antiguo Régimen 1715-1783,* nos ofrece un panorama general de cómo estaban las libertades en ese periodo:

> En Francia la censura varió mucho en aquel periodo, principalmente porque estaba en manos de tres personalidades diferentes –el gobierno, la Sorbona y el Parlement de París–. El hecho de que la *Enciclopedia* se publicase íntegra se debió a una tolerancia del gobierno, representado por Malesherbes, que era *Directeur de la Librairie.* Se dice

> que a dicha tolerancia contribuyó el favor de madame de Pompadour. Por otra parte, el Parlement, la Sorbona y la Asamblea General del clero francés condenaron el *Emilio* de Rousseau; también se le colocó en el Índice y hasta Voltaire lo criticó desfavorablemente... Voltaire, que sufrió encarcelamiento en dos ocasiones, vivió asustado por la censura. […]
>
> En algunos de los Estados alemanes la censura era severa e injusta; en Rusia y Polonia la cuestión apenas se planteaba, dado que en dichos Estados no había público lector. Lo mismo se puede aplicar en cierta medida a los países escandinavos.

En España eran más formales que reales las medidas de censura, no obstante lo repetido sin base por sus detractores. Ogg cuenta que «ni la escasez de la clase media ni la carga de la Inquisición impidieron completamente la infiltración de ideas más modernas en España. Los propios españoles prepararon el camino. En 1713 se fundó la Academia Española, institución que redactó un diccionario del castellano. Era evidente que los hombres de letras estaban deseosos de derribar las barreras de que se veían rodeados… También era evidente que las clases educadas no eran en absoluto indiferentes a la Ilustración; pues, a pesar de que los funcionarios de la Inquisición examinaban los libros en los puertos, *The Spectator,* la *Encyclopédie* y la *Histoire Naturelle* de Buffon pasaron al país clandestinamente. Las obras de Voltaire se podían representar en público con tal de que no se citase el nombre del autor».

Como puede verse, no pasaba España por una situación anormal respecto a otras potencias del continente europeo. Tampoco estaba cerrado el país o la clase dominante a las nuevas ideas de la Ilustración que sacudían Europa, en lo que fue llamado el «Siglo de las Luces». A este respecto, apuntalando lo dicho por David Ogg, comenta John Lynch en su obra *La España del siglo XVIII:*

> Las ideas de la Ilustración penetraron en España desde mediados de la centuria. Llegaron poco a poco y el flujo fue más fuerte en algunos campos que en otros, pero gradualmente atravesaron las barreras oficiales que se interpusieron en su camino y alcanzaron a aquellos que poseían los medios y el deseo de saber. La *Encyclopédie* francesa, prohibida por la Inquisición española en 1759, estaba al alcance de quienes deseaban leerla. El conocimiento científico y técnico se difundió a través de libros, visitas, museos y la prensa, y en los decenios de 1770 y 1780 los escritos de Buffon y Linneo habían llegado a las manos de los lectores interesados. Las ideas económicas se discutían con libertad […].

Los gobiernos ilustrados habían realizado un esfuerzo considerable para sacar a España de la parálisis, y el proceso de reformas, más intenso en la segunda mitad del siglo XVIII, estaba dando resultados, aunque estos no fueran todo lo profundos a que aspiraban los ministros ilustrados como Jovellanos, Campomanes o Aranda. Un factor clave de este renacer es el aumento de población, que pasa, como recoge Pierre Vilar en su *Historia de España,* de seis a once millones entre 1700 y 1800. Dice Vilar:

> Constitución de capitales, acopio de materias, población en aumento: la España del siglo XVIII se industrializa, al fin; la tradición mercantilista la impulsa también a ello, preconizando la disminución de importaciones y la «educación popular» (entiéndase por ello artesanía y técnica).

Eso pasaba en España, y en América… ¿Estaban efectivamente tan ahogadas y atrasadas las colonias americanas como viene repitiendo desde hace 200 años la historiografía oficial? ¿Nada hacía el gobierno de Madrid por mejorar la capacidad económica y productiva de sus dominios, o eran las clases dominantes en las colonias las que se oponían a las reformas? Para citar un ejemplo, recoge el historiador José Dolores Gámez, en su *Historia de Nicaragua,* que en una época tan temprana como 1738 José Gálvez propuso a Carlos III «la formación de un reglamento que, llamado del Comercio Libre, abrió el de América a los más notables puertos de España. Promulgado hasta en octubre de 1778, redujo los antiguos derechos y autorizó la introducción de artículos extranjeros, siempre que se llevaran en buques españoles». Pero quizá nada ilustre mejor el interés existente en la España de finales del siglo XVIII, por mejorar los sistemas productivos que la creación y promoción de las llamadas Sociedades Económicas de Amigos del País. Estas sociedades, recoge Lynch en su citada obra, eran

> organismos semioficiales que se difundieron en los años posteriores a 1765 desde el País Vasco hacia las principales ciudades del resto de España y cuyo objetivo era impulsar la agricultura, el comercio y la industria mediante el estudio y la experimentación.

Estas sociedades pasaron de España a América, donde se fundaron Sociedades Económicas en casi todas las capitales y principales ciudades hispanoamericanas. La primera se fundó en Santiago de Cuba, en 1787; le siguieron la Sociedad Académica de Amantes del País de Lima, en 1790, y

la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana, fundada en 1792 (y que, curiosamente, continúa funcionando). Otras surgieron en Quito, en 1792; en Guatemala se fundó, en 1795, la Real Sociedad Económica de Amantes de la Patria (que fue refundada en 1966); en México, fue creada en 1799; Santa Fe (1801); Cartagena de Indias (1812); Puerto Rico (1813); Santiago de Chile (1813); Chiapas (1819); Lima (1822) y Guayaquil (1825). No deja de sorprender esta última, pues, para 1825, el dominio español en tierra firme estaba desmoronado.

Cuanto más se ahonda en la época, menos se sostienen las pretendidas verdades oficiales. Por eso mismo, va siendo hora de enterrar el periodo colonial como pretexto o justificación de todas las desventuras de Latinoamérica. Las causas principales del atraso están más próximas en el tiempo y es fácil localizarlas en el periodo de las guerras de independencia, en las décadas inmediatas posteriores y en las oligarquías locales. Ha sido siempre recurrente echar las culpas a otro antes que admitir las propias. Y dentro del proceso de deformación de la historia regional, la ocultación de hechos acontecidos durante este periodo es, como se ha señalado varias veces, un asunto medular.

Ocultar o deformar ese pasado se ha usado y sigue usando para justificar los desastres provocados por los verdaderos responsables: las oligarquías criollas que promovieron las mal llamadas independencias, favorecieron el neocolonialismo y siguen siendo abanderadas de sistemas económicos y sociales que mantienen a los países anclados en el siglo XVIII.

Esto hay que repetirlo una y otra vez, pues España desapareció de América hace 200 años o más, en tanto que las oligarquías –y una izquierda escasamente creativa y autocrítica, que de pura molicie ha terminado haciendo el juego a las oligarquías y los imperios– siguen allí, repitiendo el discurso y haciendo lo mismo. Esta argucia de cargar sobre el periodo colonial las causas y responsabilidades por el desastre de los Estados no ha sido, ni mucho menos, accidental. Ha permitido, todavía hoy, descargar las responsabilidades del atraso y el subdesarrollo sobre el periodo colonial español, exculpando y encubriendo los inmensos errores –y crímenes– de las oligarquías que tomaron el poder. No obstante, fueron las oligarquías las que sometieron los países al dominio británico; fueron ellas las que impusieron un modelo económico y social excluyente; ellas las que destruyeron *in nuce* el desarrollo industrial de los países. Ellas, en fin, las

que crearon un tipo de Estado –el Estado oligárquico– cuyo fin no era llevar a los nacientes países hacia la modernidad, por más que lo proclamaran (y siguen proclamando) en sus discursos, sino crear un sistema de dominación que les perpetuara –en simbiótica alianza con potencias extranjeras– como clase en el usufructo de países administrados como inmensas fincas o haciendas, con habitantes que no eran ciudadanos, sino siervos. Por demás, el argumento de la colonia como fuente de todos los males, ¿cómo explica el éxito de países que comenzaron su historia independiente después de 1945 y en peores condiciones que Latinoamérica, como Corea del Sur, Taiwán (parte de China, aclaramos, para no dejar dudas) o, incluso, las petromonarquías del golfo Pérsico? ¿Cómo explicar, incluso, que un país como la República Popular China, que en 1949 estaba completamente devastado después de casi 200 años de expolio, guerras, invasiones extranjeras y una guerra civil, con una población masivamente analfabeta, sea hoy, en 2019, la primera potencia comercial del mundo y una potencia espacial, mientras Brasil, independizado en 1810, sigue siendo un país exportador de materias primas y esté fuera del campo científico-técnico? ¿O el caso de India, que surgió a la independencia sobre 12 millones de muertos a causa de la sangrienta y terrible separación de Paquistán, y que es, entre otras cuestiones, potencia económica, científica y espacial, mientras Argentina sigue instaurada en 200 años de crisis? Una respuesta hay, y es herética: del Estado oligárquico surgido de la independencia solo puede salir subdesarrollo, atraso y más subdesarrollo.

XII. INDEPENDENCIA PARA ESTABLECER LA DEPENDENCIA

Más de 200 años después del inicio de las guerras de independencia, sigue sorprendiendo la escasa o inexistente visión de los libertadores respecto de las consecuencias resultantes de las guerras de independencia (visibles para quien quisiera ver) y, sobre todo, el costo que se pagaría por someter a sus países a la tutela británica. Aunque no fuera esa su intención, la situación de caos que abren las guerras de independencia y la debilidad del propio movimiento independentista les llevaron a depositar sus esperanzas en el favor británico, lo que convierte al movimiento independentista en un regalo para la política y ambiciones inglesas. El Foreign Office maneja la situación hispanoamericana según lo que dictan en cada momento las guerras contra Napoleón. Su objetivo es acceder libremente a los mercados iberoamericanos, sin importarle quién gobierne la región. De hecho, su primera reacción es de oposición al movimiento independentista, por temor a enajenarse el apoyo español en su guerra contra Francia, que considera una cuestión absolutamente prioritaria en ese momento. Cuando el gobierno inglés cree que puede sacar réditos del independentismo hispanoamericano, apoya a los rebeldes, aplicando la política de que Inglaterra no tenía amigos ni enemigos sino solo intereses, como la resumirá lord Palmerston muchos años después. Su condición de meras fichas en un juego entre grandes potencias no parece que fuera entendida cabalmente por los futuros «libertadores» o, si lo entendieron –algo más que posible–, estaban tan obsesionados por derrotar a España que no les habría importado nada su condición de fichas o peones.

Como se vio en el capítulo VII, Bolívar era plenamente consciente de las ambiciones inglesas, como dejó de manifiesto en su carta a Sucre, de mayo de 1823, en la que afirmó que «no es interesante para Inglaterra que una nación europea como España mantenga una posesión como Perú en América. Prefiere que sea independiente con un poder débil y un gobierno frágil». Hay que darle a esa frase la relevancia que tiene y que se desprende de ella. Bolívar admite que Inglaterra apostaría por un país independiente, pero «con un poder débil y un gobierno frágil». Es decir, un país de caricatura al que los ingleses pudieran dominar sin ninguna dificultad.

Bolívar, por tanto, no quiere ni apuesta por países fuertes, libres y soberanos, sino por lo que hoy llamaríamos neocolonias. Y eso fue lo que surgió de las independencias. No países fuertes con gobiernos celosos de su soberanía, sino gobiernos títeres, manejados por Inglaterra según sus intereses y los de sus empresas y empresarios. ¿Algo ha cambiado? ¿No es eso mismo lo que Estados Unidos fue imponiendo en Latinoamérica a medida que iba sustituyendo al poder neocolonial británico? Quienes promovieron ese modelo obsceno de Estados ¿pueden ser llamados libertadores? ¿Libertadores de qué? No hubo liberación con la independencia. Hubo una terrible trampa en la que, todavía hoy, está sumergida la región: la trampa de la dependencia, que han reproducido y siguen reproduciendo gobiernos frágiles de poder débil que, además, suelen estar en manos de oligarcas educados, ayer en Inglaterra, hoy en Estados Unidos. Países con poderes débiles y gobiernos frágiles que no dudaron en firmar lo que Inglaterra pedía, que eran tratados de libre cambio, verdadera tumba de cualquier posibilidad ulterior de desarrollo.

El librecambismo (los tratados de libre comercio de la época) será el precio del apoyo inglés en hombres, armas, dinero y barcos al movimiento independentista. La independencia ponía fin a la primera colonización, realizada por España y Portugal, y abría las puertas a una segunda y más opresiva colonización: la informal de Inglaterra. Los países se liberan de unas cadenas para ser aherrojados por otras. La independencia se hace sin los pueblos y, en sus resultados prácticos, contra los pueblos, de manera que los nuevos Estados nacen enclenques e intervenidos y se forman teniendo como objetivo satisfacer, por una parte, los intereses mercantiles británicos y, por otra, los privilegios de las oligarquías victoriosas y dueñas de todo.

Con el librecambismo, Inglaterra introduce otro cáncer en las economías de la región: el endeudamiento externo, ya mencionado en el capítulo VII. La libre introducción de mercaderías inglesas requería de dinero fresco. El consumismo irresponsable de las elites encuentra una mina de dinero en la bolsa de Londres, donde los capitales se acumulan buscando salida. Entre 1823 y 1825, los países latinoamericanos no dudan en contratar capitales más allá de su capacidad de pago. Adolfo Dorfman, en su *Historia de la industria argentina,* recuerda que, tras el fin de las guerras napoleónicas, «sobrevienen en Inglaterra dos crisis (1815 y 1818), que sumen el comercio en aquel país en un marasmo». Para salir del punto muerto, deciden

aumentar la producción manufacturera y, para encontrar compradores, recurren a Ultramar, de forma que «a partir de 1824 la Bolsa de Londres se inunda de valores sudamericanos». El objetivo que persiguen los británicos es claro: resolver su crisis económica interna animando a sus vasallos latinoamericanos a endeudarse para adquirir manufacturas británicas. Según Dorfman,

> el valor total de las mercancías inglesas enviadas a América Latina pasa de casi tres millones de libras en 1821 a cerca de 6,5 en 1825; los países americanos las pagan con el dinero que la banca británica les adelanta, endeudándose cada vez más, ya que la inversión productiva de capitales es mínima con respecto a lo que se destina a saldar excesos de consumo directo.

No obstante, como la economía capitalista sigue reglas de hierro, no tardó en desinflarse el entusiasmo y producirse la primera crisis de deuda externa, que estalla en 1826. Como señala Halperin Donghi, «en 1827 todos los países, excepto Brasil, dejaron de pagar los intereses y la amortización de sus obligaciones». La crisis se prolongará hasta mediados de siglo, pero el cáncer ya estaba inoculado. La afición al fácil endeudamiento para consumos superfluos, hipotecando al país hasta el extremo, queda como reflejo condicionado de Pavlov en las oligarquías latinoamericanas, hasta hacer explosión siglo y medio después. (La izquierda captó la trampa, como lo expresara el presidente reformista guatemalteco Juan José Arévalo en una frase citada por el periodista argentino Gregorio Selser en su obra *El Guatemalazo:* «En Guatemala, no hemos recibido empréstitos porque sabemos muy bien que, cuando se reciben dólares con la mano derecha, con la izquierda se entrega la soberanía». El sucesor de Arévalo, el coronel Juan Jacobo Árbenz, será derrocado en 1954, por la CIA. Por demás, como señala Galbraith, en su *Breve historia de la euforia financiera,* «la memoria en asuntos financieros debería considerarse que dura, como máximo, veinte años»).

El imperialismo informal se distingue del imperialismo clásico en que no busca el control directo del territorio, sino el control de los mercados y de las materias primas. Esta segunda colonización que sufre la región es más compleja y menos visible, pero más profunda y difícil. Se imbrica tanto en los países que un porcentaje notable de población y –por supuesto– las oligarquías nacionales, no se imaginan que sus Estados puedan funcionar

sin ella, identificándola como parte esencial e inamovible de su *ethos,* casi su destino inevitable. Tan hondo cala el imperialismo informal británico que, cuando el creciente poder de Estados Unidos lo va desplazando paulatinamente, encuentra unas oligarquías tan hechas a la obediencia que la sucesión de una potencia por otra se realiza con total naturalidad, pues no había siquiera que cambiar de idioma. La novedad más relevante opera en cuanto al destino, que pasará de Londres a Washington. Del bombín británico al sombrero tejano.

El nuevo modelo de dependencia se impone, con éxito y rápidamente, porque las clases oligarcas ven en ese modelo una forma de garantizarse enormes beneficios y de consolidarse en el poder. Adquiere formalidad con la firma de tratados de comercio, que imponen el libre cambio entre las partes. De esa forma, Inglaterra da carácter legal a la relación desigual, asegurándose con tratados la exportación de sus manufacturas, en tanto los países latinoamericanos quedan como exportadores de las materias primas que demanda el mercado inglés. El Brasil de los Braganza es el primero en firmar, lo que hace en 1810, convirtiendo a dicho país en el abanderado de la segunda colonización de la región iberoamericana. El siguiente es México, que lo suscribe en 1823. En 1824 lo firma Colombia y en 1825 lo hace Argentina. En Centroamérica, las intrigas del cónsul británico hacen naufragar la frágil república federal, y el poder británico –que se ha apoderado de la costa caribe de Nicaragua– se impone en toda la zona, pero con mayor fuerza en Guatemala y Costa Rica. Aunque los tratados son mucho más tardíos (el de Nicaragua se firma en 1873), el libre cambio se impone de hecho desde 1821, aunque bajo la forma del contrabando.

La actitud de las elites oligarcas no era solo producto de su ignorancia de los procesos mundiales en curso sino, también, de una mal digerida y peor entendida lectura de los pensadores británicos más de moda en aquel periodo: Adam Smith, el padre del capitalismo moderno inglés, Jeremy Bentham, fundador del utilitarismo, y, después de 1830, Richard Cobden, padre y promotor del libre comercio. Apunta Abelardo Ramos, en su notable Historia de la Nación Latinoamericana, que «en las universidades, desde los primeros años de la independencia de España, reinaban las doctrinas librecambistas de Adam Smith». Pero, así como las clases oligarcas se asomaban embobadas a las obras de los economistas británicos, nunca leyeron ni parece que llegaran a conocer las teorías del

estadounidense Alexander Hamilton, ni de uno de los economistas más influyentes de la historia, sobre todo en el siglo XIX, el prusiano Federico List, autor del libro *Sistema nacional de la economía política,* publicado en 1841. Hamilton fue el padre del nacionalismo económico de Estados Unidos; List, del nacionalismo económico prusiano, alemán y europeo. Sobre las ideas de List, los países de Europa continental cimentarán sus procesos de industrialización y desarrollo económico a lo largo del siglo XIX, que es, como se ha señalado, el gran siglo de la industrialización, el capitalismo y las sucesivas revoluciones industriales.

Conviene aquí recordar la tesis central de List, presentada en los orígenes de la expansión del capitalismo y la industrialización. Según este autor, Alemania no debía permanecer como un simple Estado agrícola, sino que debía empujar al pleno desarrollo a todas las fuerzas productivas del suelo y del pueblo alemán, creando manufacturas, fomentando los ferrocarriles, la navegación y la colonización. El medio para lograr esos fines estaba en la «aduanas educadoras», pues la gran diferencia entre Inglaterra y Alemania no procedía de diferencias naturales, sino de causas históricas, y una política aduanera practicada con prudencia podía muy bien vencer las malas consecuencias del pasado alemán y combatir con éxito la supremacía de Inglaterra. Pero las aduanas no debían ser eternas, habiendo de desaparecer tan pronto alcanzaran sus «fines educativos». El término del proceso, según List, debía ser el libre cambio en el mundo entero, entre sujetos iguales. Siguiendo las ideas de List, Prusia, primero, luego Austria, Francia y Estados Unidos, impusieron el sistema de «aduanas educadoras», proteccionistas, que con los sistemas de control e impuestos liberaban a las empresas de esos países de la competencia aniquiladora de Inglaterra. Décadas después, todas eran potencias industriales. List había acertado en sus análisis, y quienes le siguieron pudieron evitar convertirse en satélites de la economía británica y dirigir sus propios procesos de desarrollo. List, dicho sea de paso, sigue inspirando la economía de los grandes Estados, pues las «aduanas educadoras» son empleadas hoy por todos los grandes Estados sin excepción (la guerra declarada por Donald Trump contra la multinacional china Huawei es ejemplo clamoroso de proteccionismo).

Las oligarquías latinoamericanas, adheridas a Smith y Bentham, nunca llegaron a entender que estos economistas hablaban de realidades extremadamente diferentes a las latinoamericanas y que, por tanto, no

podían aplicar mecánicamente las recetas y modelos económicos pensados desde y para la Inglaterra industrial e imperial en países precapitalistas como los latinoamericanos, cuyas estructuras socioeconómicas no tenían nada que ver con las de la Inglaterra imperial e industrial. Y como no hay constancia de que hubieran podido conocer a List –ni tampoco el proteccionismo que practicaban la propia Inglaterra y otras grandes potencias europeas–, no supieron nunca que eran las teorías de este prusiano las más pertinentes al estado de desarrollo (o subdesarrollo) en el que estaban los países de Latinoamérica. Aún hoy, son pocos los que han oído hablar de List y siguen abrazando a ciegas el librecambismo.

Las consecuencias de este hecho pueden verse con mayor claridad comparando los procesos acontecidos en Europa y Estados Unidos a lo largo del siglo XIX. Los procesos de industrialización y consolidación de los Estados modernos se suceden en ambas zonas entre 1820 y 1880. Durante esas décadas esenciales, Estados Unidos, Francia o Prusia, siguiendo a Hamilton y, sobre todo, a List, no dudan en aplicar leyes y medidas proteccionistas, a fin de resguardar su incipiente industria frente a la avalancha de productos británicos. El sustento de esta decisión es la convicción de que el único medio para promover su propia base industrial y evitar la colonización de sus economías es el proteccionismo económico y el fomento desde los poderes públicos de la industrialización. Todavía en 1875, según recoge Eduardo Galeano en *La paradoja andante,* «el general Ulises Grant, vencedor en la guerra del norte industrial contra el sur esclavista, luego presidente de Estados Unidos [respondiendo a] las presiones británicas, contestó: "Dentro de 200 años, cuando hayamos obtenido del proteccionismo todo lo que nos puede ofrecer, también nosotros adoptaremos la libertad de comercio"». Las clases oligárquicas latinoamericanas, en cambio, siguieron el camino opuesto. Adoptan el libre cambio y construyen sus economías sobre el modelo impuesto por Gran Bretaña. De esa guisa, unos se industrializan y Latinoamérica queda atada a un modelo económico primario.

Deslumbrados como estaban por el poder y la civilización británicos, los caudillos de los nuevos Estados decidieron aplicar miméticamente un pensamiento que tenía sentido y aplicación en la Inglaterra de la Revolución industrial, pero que era un solemne disparate en la agrícola y precapitalista Latinoamérica de las primeras décadas del siglo XIX (y aún ahora). El

enemigo de Bolívar y fundador de Colombia, Francisco de Paula Santander, comulgaba a pie juntillas con las teorías de Smith y Bentham. En Brasil, según recoge Landes, en su ya citada obra *La riqueza y la pobreza de las naciones,* «mientras Alexander Hamilton encarecía a una joven América a que desarrollara su industria y compitiera con Europa, el vizconde de Cairu, en Brasil, "creía supersticiosamente en una mano invisible y repetía *laissez faire, laissez passer, laissez vendre*"». El ministro de Estados Unidos en Buenos Aires, durante el gobierno de Rivadavia, comentó en un informe a Washington que «esta provincia se convertirá pronto en una verdadera colonia británica». El príncipe regente de Brasil, Pedro de Braganza, resume mejor que nadie el criterio imperante en Latinoamérica aquellos años: «Compartir enteramente el punto de vista de Gran Bretaña era no solo la más segura sino la más honorable política que podría seguir». Domingo F. Sarmiento, en Facundo, escribe:

> Smith y Say predicaban el comercio libre, libre el comercio se repitió. Buenos Aires confesaba y creía todo lo que el mundo sabio de Europa creía y confesaba.

Como es fácil colegir, la aplicación ciega y mecánica de las teorías que habían permitido y fundamentaban el éxito en Inglaterra (y que otros grandes Estados europeos rechazaban, empeñados como estaban en promover su propia revolución industrial), resultaron en una catástrofe para toda Latinoamérica. Personajes funestos como Santander o el vizconde de Cairu condenaron por dos siglos a sus nacientes Estados, al asumir un modelo que destruía de raíz todo posible desarrollo económico, industrial, científico y técnico.

Las manufacturas inglesas, que ya estaban presentes en los dominios ibéricos desde antes de la independencia, inundan los mercados latinoamericanos hasta extremos patéticos. En la tropical y ardiente ciudad de Río de Janeiro se recibe, durante la época del bloqueo continental decretado por Napoleón, una enorme partida de patines de hielo que Inglaterra no puede exportar a los países europeos. Los brasileños también reciben grandes cantidades de billeteras, aunque en Brasil no existía papel moneda y los nobles y caballeros nunca cargaban dinero a causa de su peso. A Buenos Aires llegan braseros de hierro, usados en Europa para calentarse en invierno, y el Banco Nacional queda en manos de comerciantes ingleses.

Para 1820, más de cien casas británicas han abierto sucursal en Brasil, los británicos controlan el comercio y la minería en Chile, y Buenos Aires se convierte en la puerta de la colonización del antiguo Virreinato de La Plata.

Mientras los libertadores y las oligarquías se entregan al aliado británico, las industrias tradicionales se arruinan en cadena. En Nueva Granada, las ferias que antes ofrecían las telas y productos del Oriente, ofrecen ahora telas de India, sedas de China y paños de Yorkshire, importados por comerciantes ingleses. Lo mismo ocurre con las industrias de tela y los productos del Alto Perú y del interior de las provincias, que ven cerrarse los mercados de Argentina, copados de productos llevados por los ingleses. Con la implantación y generalización del modelo se aborta, de raíz, cualquier posible proceso de industrialización y los países quedan, sin excepción alguna, reducidos a exportadores de materias primas e importadores de manufacturas fundamentalmente proveídas por Gran Bretaña, aunque luego se incorporarán otras potencias industriales. Esta atroz realidad la recoge bellamente narrada Eduardo Galeano en su célebre y pionero libro *Las venas abiertas de América Latina,* en lo que certeramente califica como «el infanticidio industrial»:

> La independencia aniquiló el precario desarrollo alcanzado. En Ayacucho, Cacamorsa, Tarma, los obrajes eran de magnitud considerable. El pueblo entero de Pacaicasa, hoy muerto, «formaba un solo y vasto establecimiento de telares con más de mil obreros», dice Romero en su obra; Paucarcolla, que abastecía de frazadas de lana una región muy vasta, está desapareciendo «y actualmente no existe allí ni una sola fábrica». En Chile, una de las más apartadas posesiones españolas, el aislamiento favoreció el desarrollo de una actividad industrial incipiente, desde los albores mismos de la vida colonial; se fabricaban artículos de metal, desde alambiques y cañones hasta alhajas, vajilla fina y relojes, se construían embarcaciones y vehículos. También en Brasil los obrajes textiles y metalúrgicos, que venían ensayándose desde el siglo XVIII, sus modestos primeros pasos, fueron arrasados por las importaciones extranjeras.

Y así podría seguirse, transcribirse entero el capítulo del libro de Galeano, para ilustrar la magnitud del desastre causado por el desamparo aduanero, el libre cambio y el sometimiento de los países a los intereses comerciales británicos. La independencia enterró, de cuajo, las posibilidades industriales de Latinoamérica, y hoy, 200 años después, la región sigue pagando con sudor y lágrimas aquel crimen original: la venta de los países a Gran

Bretaña y la renuncia a la industrialización. Por lo demás, estos hechos vienen a destruir otro de los grandes mitos levantados por las triunfantes oligarquías locales respecto de la colonia: atribuir el atraso de los países a la herencia colonial. Ocurrió todo lo contrario: fue la independencia y el sometimiento de la región al *diktat* comercial y económico británico lo que condenó a los países al mayor de los atrasos. Fueron los tratados de libre cambio los que arruinaron para siempre a las incipientes y extendidas manufacturas locales. Fue la desprotección a que se vieron sometidas las pequeñas industrias –que hubieran sido núcleo de la industrialización latinoamericana– lo que determinó su desaparición. En eso, ni España ni el periodo colonial tuvieron nada que ver. Sus responsables tienen nombres y apellidos, y muchos de ellos dan nombre a las principales arterias de las ciudades latinoamericanas, siendo ejemplo de lo poco que saben los pueblos de los responsables de su fracaso. Y esa situación no cambió mucho con el paso de los siglos. La sujeción a Gran Bretaña fue sustituida, con espíritu de buey, por la sujeción a Estados Unidos, que continuó aplicando políticas similares con similares resultados. De aquellos polvos estos lodos. Por eso es pertinente repetir: ¿libertadores de qué?, ¿de quiénes?

Ejemplo dramático de esta actitud servil y colonizada es la Argentina de Mauricio Macri, que llegó al poder en diciembre de 2015. Según detalla Esteban Domecq, presidente de Invecq Consultora Económica de Argentina, «en términos de deuda respecto al tamaño de la economía (deuda/PIB) el peso de la deuda pasó del 40 por 100 en 2010 (U$S181.621 millones) al 94,6 por 100 en 2018 (U$S307.656 millones). En el último año, la deuda se incrementó fuertemente, puesto que, en 2017, representaba el 56,6 por 100 del PBI, puntualizó Domecq a BBC Mundo. Pero no está sola Argentina con esa ordalía que se arrastra desde el siglo XIX. El nivel de deuda de Brasil alcanza el 77,2 por 100 de su PIB, según datos de la Cepal 2018. Macri quiso, desde la ortodoxia del FMI, mitigar el endeudamiento con brutales recortes internos, lo que no hizo sino agravar la situación. Pues, como afirma Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, refiriéndose a la crisis argentina: «Las medidas de austeridad ralentizarán la economía e impondrán un alto costo en la gente». En términos similares, el economista Rodrigo Álvarez afirma que «sin crecimiento, no hay sostenibilidad de la deuda». En suma, que los países siguen atados a los mismos reflejos que en 1810 o 1824. Un factor recurrente de este círculo

vicioso de la deuda externa es que «Argentina tuvo un déficit fiscal muy grande en los últimos años, es decir que sus gastos fueron mayores a sus ingresos», es decir, que gastó más de lo que ingresó. Otra de las cadenas ancladas en los inicios de la vida independiente, cuando los gobiernos contrataban préstamos onerosos para gastos suntuarios de las clases dominantes que –ayer como hoy– terminaban pagando los pueblos con su miseria.

XIII. AYACUCHO Y… *GOD SAVE THE KING*

El proceso de neocolonización que sufre Latinoamérica en el siglo XIX no se limita, por otra parte, al intercambio comercial desigual y al enorme atraso científico y técnico que esta dependencia va a provocar –y que se examinará más adelante–. Todavía más lamentable, por sus consecuencias, es que el neocolonialismo se hace ideología, dando lugar al proceso conocido como «autocolonización». Según la definición de Haro Tecglen, ya citada al principio de este trabajo, por este proceso «el colonizado asume o trata de asumir las costumbres y actitudes del colonizador, hasta convertirse en su satélite». El vector original de este proceso es Francisco de Miranda, principal difusor de la anglofilia entre los ricos independentistas hispanoamericanos. Los británicos recurren también a las logias masónicas de ritos ingleses, que emplean inteligentemente para ampliar su influencia. De esa guisa, Gran Bretaña queda convertida en el marco único de referencia, aderezado con una visión exaltada y no menos autocolonizada de las ideas de la Revolución francesa. Se absorben sus ideas sin razonarlas ni plantearse si pueden tener cabida y aplicabilidad en unos países tan profundamente diferentes. Una anécdota ilustra el espíritu que animaba a los grupos independentistas: en Buenos Aires, los comerciantes porteños celebran la victoria de Ayacucho con vivas a Bolívar y también al jefe del Foreign Office, George Canning, y, en honor a la Corona británica, una banda toca el *God save the King.* Todo un símbolo de lo que ocurrirá después.

La admiración que los independentistas profesan por los éxitos de Inglaterra –como después por los de Estados Unidos– no les lleva a estudiar, para luego aplicar en sus países de origen, las causas del éxito inglés (como hicieron entonces Prusia y, posteriormente, Japón, Corea del Sur y significativamente China y también Rusia), sino a entregar los nuevos Estados a los intereses británicos. En otras palabras, a hacer lo contrario, exactamente, de lo que había hecho (y seguirá haciendo) Inglaterra para hacerse más imperio y construir un Estado aún más poderoso, con el que «dirigir el mundo», como escribió Bolívar. El sistema que imponen no se basa en la búsqueda de un modelo autónomo, sino en la conversión de los

países en satélites de la nueva metrópolis y en la imitación mimética y superficial de la moda inglesa. Las admoniciones del maestro Simón Rodríguez a Bolívar para que pensara y actuara desde la realidad iberoamericana, caen en saco roto. Lo mismo ocurre en Brasil con fray Joaquín do Amor Divino Caneca, que repite que «Brasil no es Europa» y que su «constitución ha de ser brasileña en cuerpo y espíritu». No había sitio para lo propio, ante la febril anglofilia de las clases dominantes, que no aspiraban a construir Estados nacionales sino, simplemente, grandes haciendas bajo la forma de Estados, a los que gobernar y expoliar de consuno con el imperio dominante.

La dependencia se profundiza al quedar el tráfico marítimo internacional en manos de Gran Bretaña. Los astilleros que existían en la colonia desaparecen, toda vez que ningún gobierno hace nada para dotarse de una flota mercante propia, hecho que causará estragos en la economía regional. Como recoge Manuel Lucena, durante la colonia, de la mano del comercio intrahispanoamericano,

> surgió una buena industria naval en el Caribe, que suministró las embarcaciones apropiadas, sobre todo en Cuba. En el Pacífico, la totalidad de la flota mercante era americana, y en gran parte construida en los astilleros mexicanos y quiteños (Guayaquil).

De una situación de autosuficiencia se pasa a una situación de dependencia en el tráfico marítimo mercante. El tratado angloargentino de 1824 estipulaba que los barcos británicos serían admitidos en las mismas condiciones que los barcos de construcción nacional, entendiendo por barcos nacionales los construidos en el país y cuyo propietario, capitán y tres cuartas partes de la tripulación fueran ciudadanos del país. Esta cláusula disparatada imposibilitaba la creación de una marina mercante nacional, toda vez que los astilleros nativos no podían competir con los británicos y la carencia de marineros obligaba a contratar tripulación europea, principalmente inglesa. Como Inglaterra poseía los medios, la técnica y el dinero, y Argentina nada equivalente, la cláusula tenía el objetivo de desincentivar la construcción de barcos nacionales y, por tanto, mantener al país sometido a una dependencia total de la marina británica. El control ejercido por Londres llega a ser de tal magnitud que, cuando la guerra entre Brasil y Argentina por el control de la Banda Oriental (hoy

Uruguay), Canning obligó a los beligerantes a aceptar la independencia de Uruguay amenazando con dejarles sin flota, toda vez que la práctica totalidad de sus tripulaciones era británica. Solo la brasileña contaba con 1.200 marinos ingleses. Otro tanto ocurre en Chile, mientras que el Caribe es convertido en un mar inglés. Camino distinto sigue Estados Unidos, una de cuyas primeras medidas tras la independencia de Inglaterra es construir una gran marina mercante que, para 1830, la forman más de 400 buques.

El hecho es tanto más dramático cuanto que los países latinoamericanos, al igual que Estados Unidos, disponían de todos los elementos para producir barcos: capital, madera y mano de obra barata. Pero mientras Estados Unidos los aprovecha, construyendo en las décadas posteriores a su independencia una poderosa marina mercante que le permite consolidar su independencia y multiplicar su riqueza, los países latinoamericanos entregan graciosamente a Gran Bretaña el control del comercio marítimo, que era el remache al control de sus Estados por intereses extranjeros. Punto a destacar es que Estados Unidos, gracias a disponer de su propia flota mercante, capitaliza en su beneficio las guerras napoleónicas y, durante casi dos décadas, realiza millonarios negocios con las potencias en guerra, proveyéndolas de casi todo lo que Estados Unidos podía vender, hasta 1807, cuando el bloque continental decretado por Napoleón –que castigaba con confiscación a todo barco neutral que hubiera atracado en un puerto británico o hubiera sido sometido a pesquisa por un barco británico en alta mar– derivó en guerra comercial entre británicos y franceses, que acabaría arrastrando a Estados Unidos y oponiéndolo al Imperio británico cuando Estados Unidos quiere aprovechar las guerras europeas para apoderarse de Canadá. No obstante, pese a la derrota de Estados Unidos en 1814, este periodo histórico es clave, por cuanto sienta las bases para que Estados Unidos se convierta en una potencia comercial agroexportadora y, luego, en una potencia industrial. Los países de Latinoamérica, en cambio, quedan sometidos a los intereses británicos y, con ello, pierden una ocasión de oro para el despegue de sus economías.

Las oligarquías latinoamericanas no entendieron (y siguen sin entender) que sin economías nacionales fuertes no podían existir verdaderos Estados nacionales, en el sentido que tendrán en Europa y Estados Unidos. Serían, todo lo más, remedos de Estados (hoy los llamarían, interesadamente, Estados fallidos o semifallidos, aunque puede que esta afirmación sea

acertada. Más cierto podría ser afirmar que las oligarquías han tenido un éxito clamoroso en su proyecto de Estado, pues el Estado oligárquico construido en el siglo XIX sigue vivo y coleando en este siglo XXI, sin señales de agotamiento. A ese éxito han contribuido las izquierdas que, al abrazar el discurso oligárquico sobre la independencia, ha terminado dándole la razón y, por esa vía, ha apuntalado su modelo de Estado. Unos Estados con escasas y casi accidentales coincidencias con los Estados modernos que el capitalismo construirá en Europa, Estados Unidos y Japón, en el siglo XIX, y con países como Corea del Sur, Singapur y la República Popular China, en el XX. Serán Estados en la forma, pero neocolonias en lo sustantivo. Pura y simplemente neocolonias productoras de materias primas.

XIV. MATRICULADOS EN EL ATRASO

La independencia latinoamericana se produce en uno de los momentos más importantes de la historia humana, comparable en sus consecuencias al Renacimiento europeo. Entre 1830 y 1875, el continente europeo sufre enormes convulsiones, resultado del derrumbe del Antiguo Régimen y su sustitución por las ideas de la Ilustración y de sus tres más conspicuos productos: el capitalismo, el movimiento de las nacionalidades y el Estado moderno. No son procesos separados, sino simbióticos, que se alimentan unos a otros, diseñando un nuevo mapa político, económico, comercial, ideológico, social e imperial en Europa y el mundo. Las burguesías emergentes necesitan de Estados fuertes para proteger y promover sus intereses; también de una ideología que aglutine a los pueblos en torno a ella. Los ideólogos del nacionalismo resumen su fe en un lema: un pueblo, un Estado. Y es el Estado inventado por la Revolución francesa el que sirve de modelo a nacionalistas y burgueses. No es casualidad que, a partir de las Guerras napoleónicas, los viejos Imperios se vean sacudidos por poderosos movimientos nacionalistas que, paradójicamente, han sido despertados por las invasiones napoleónicas. En dos pueblos se luchará, con especial ahínco, por constituir Estados propios, y serán modelo y guía para otros muchos pueblos: Prusia, de la mano de Otto von Bismarck, y Piamonte-Cerdeña, con Cavour, tomarán a su cargo la construcción de Alemania e Italia.

La burguesía, desde el Estado, practica y expande la nueva filosofía económica. Pero ¿qué era, realmente, el capitalismo? ¿Qué lo diferenciaba de la humana ambición por la riqueza y del afán de acaparar bienes? El capitalismo, nacido de la Revolución industrial en Inglaterra, implicó esencialmente sustituir la tierra como fuente de riqueza para centrarla en la fábrica y la máquina. Para poder impulsar este proceso, la clase social nacida del capitalismo, la burguesía (que habita en burgos, ciudades), necesitaba controlar el aparato del Estado y emplearlo en su propio beneficio. El Estado fue su instrumento de transformación. Fue la garantía de que los procesos internos de acumulación de capital, producción, mercado –en definitiva, sus intereses–, serían protegidos de la competencia extranjera, por una parte, y proyectados hacia el exterior, por otra,

utilizando para ello los instrumentos que ponía en sus manos el control del Estado. Los nuevos procesos de producción debían ser acompañados de nuevas instituciones políticas y nuevos esquemas mentales, que implicaban transformar aspectos sustantivos del orden económico y social. Tomemos como ejemplo, para empezar, el distinto camino seguido por Estados Unidos y Latinoamérica, en concreto, el caso mexicano, único país fronterizo con el mundo anglosajón.

Según recoge Landes, en la obra citada, en 1700, la producción *per capita* del actual México equivalía a unos 450 dólares actuales, por 490 del actual Estados Unidos. En 1800, México seguía en los 450 dólares y Estados Unidos había pasado a 736 dólares, un 65 por 100 más. Las razones básicas las apunta Landes. Estados Unidos gozó desde sus orígenes de grandes ventajas en la disposición de recursos: enormes extensiones de tierras vírgenes y fértiles, escasa población indígena, abundante madera, un clima apropiado para el cultivo extensivo de una materia de gran demanda como el algodón, etc. El territorio de México «es un laberinto de montañas, mesetas y desiertos; no carece de lugares favorecidos, pero están mal comunicados». Pero estas desventajas no explican que, en 1989, México tuviera una producción *per capita* de 3.500 dólares y Estados Unidos de 18.300. En otras palabras, durante el periodo colonial de ambos países, Estados Unidos superó a México en un 65 por 100, pero después de la independencia la diferencia se disparó un 600 por 100. Landes señala como factor esencial diferenciador la distinta tenencia de la tierra. Estados Unidos, dice este autor, era una sociedad «de propietarios de minifundios y trabajadores relativamente bien pagados [lo que] fue el caldo de la democracia y el espíritu de empresa», es decir, del capitalismo. México era, por el contrario, una sociedad de latifundistas, con peones en situación de cuasi esclavitud, donde las disputas por la tenencia de la tierra se convirtieron en fuente perenne de conflictos, hasta culminar en el célebre grito de las guerrillas campesinas de Emiliano Zapata «Tierra y libertad».

Es preciso, no obstante, hacer una aclaración respecto del análisis de Landes. Este autor generaliza a todo Estados Unidos un modelo que solo existía plenamente en el norte de Estados Unidos. El sur, como es bien sabido, era una sociedad latifundista, basada en la esclavitud y ajena a los vaivenes del pujante capitalismo que, desde principios del siglo XIX, se desarrollaba en los estados del Norte. Estados Unidos era, en verdad, dos

países. Uno, el del Sur, era más parecido a Latinoamérica, dominado por una clase latifundista ociosa, racista y retrógrada, que vivía de la explotación inmisericorde de sus esclavos, y partidaria absoluta del libre cambio con Inglaterra, país que compraba casi toda su producción algodonera. El Norte era la sociedad de minifundistas y trabajadores bien pagados, que absorbía casi la totalidad del aluvión migratorio que inundaba cada año Estados Unidos, que describe Landes. Los estados del Norte eran la cuna de una incipiente pero fuerte industrialización que, desde sus orígenes, creía en el proteccionismo económico y en la necesidad de defender con impuestos y medidas prohibitivas la producción nacional de la competencia extranjera. La guerra civil que estalla en 1865 es la guerra entre dos Estados divididos social y económicamente. La victoria de los estados del Norte sobre los del Sur fue el triunfo de una sociedad capitalista y en proceso de revolución industrial sobre una sociedad precapitalista, esclavista y atrasada. De ahí que la victoria norteña fuera más una anexión que una guerra para impedir una división que ya existía *de facto.* Por eso, los años de ocupación que siguieron fueron necesarios para hacer ver a los vencidos la inutilidad de resistir al vencedor industrializado, poblado y rico. Norte y Sur representaban, por tanto, dos formas de ver y entender la organización económica, social y política de Estados Unidos. La guerra civil fue el choque armado entre una sociedad capitalista y una sociedad precapitalista. Siglo XIX en su versión europea avanzada contra siglo XVIII (conviene, en este punto, aclarar que la emigración a Estados Unidos procedía de las masas humanas expulsadas por el capitalismo y eran, por tanto, personas que llegaban mayoritariamente de la Europa industrializada).

El capitalismo era una forma de ver y entender el mundo que implicaba cambiar la estructura económica y social de una sociedad. Por tal motivo, allí donde triunfaba, imponía una ruptura radical con las épocas precedentes. El capitalismo fue concebido como un sistema para multiplicar el capital a través del trabajo y el esfuerzo, no como un simple medio de enriquecimiento y acaparamiento de bienes y riqueza, aunque, por supuesto, buscaba riqueza y poder. Para ilustrar ese aserto, nada mejor que recurrir a Max Weber y a su clásica obra sobre el tema, *La ética protestante y el espíritu del capitalismo:*

«Afán de lucro», «tendencia a enriquecerse» sobre todo a enriquecerse monetariamente en el mayor grado posible, son cosas que nada tienen que ver con el capitalismo. Son tendencias que se encuentran por igual en los camareros, los médicos […] los funcionarios corruptibles, los jugadores, los mendigos, los soldados, los ladrones, los cruzados… en todas las épocas y en todos los lugares de la Tierra, en toda circunstancia que ofrezca una posibilidad objetiva de lograr una finalidad de lucro. Es preciso, por tanto, abandonar de una vez para siempre un concepto tan elemental e ingenuo del capitalismo, con el que nada tiene que ver (y mucho menos con su «espíritu») la «ambición», por ilimitada que esta sea; por el contrario, el capitalismo debería considerarse precisamente como el freno o, por lo menos, como la moderación racional de este impulso irracional lucrativo. Ciertamente, el capitalismo se identifica con la aspiración a la ganancia con el trabajo capitalista incesante y racional, la ganancia siempre renovada, a la «rentabilidad». Y así tiene que ser; dentro de una ordenación capitalista de la economía, todo esfuerzo individual no enderezado a la probabilidad de conseguir una rentabilidad está condenado al fracaso.

En la línea de Weber, aunque más actual en el tiempo, comenta Robert Heilbroner, en su obra *El capitalismo del siglo XXI:*

Capital no es lo mismo que riqueza. La riqueza es una faceta muy antigua de la civilización humana, pero la ambición de amasarla, que podemos remontar a la época de los faraones, nunca se ha convertido en fuerza de cambio continuo. Cuando Napoleón lo conquistó a principios del siglo XIX, Egipto era muy parecido a como lo había sido tres mil años antes. De manera similar, los incas y los mayas, o los gobernantes de la India o la China, acumularon tesoros inmensos en oro y construyeron palacios y templos magníficos, pero en su larga historia no hubo nada que se asemejara ni siquiera vagamente a la lógica evolutiva que advertimos en los trescientos años últimos de la historia de Occidente.

La Argentina de la «época dorada» nos ofrece ejemplos invaluables de este aserto. Alberto Dodero y el historiador Phillippe Cros son autores de una investigación titulada *Argentina. Los años dorados (1889-1930).* En ella reconstruyen ese periodo de gloria. Dodero, en una entrevista a la revista *Noticias,* comenta de dicho periodo:

Se tenía lo mejor, se aspiraba a lo mejor y se compraba lo mejor, porque había muchísimo dinero […]. El Palacio del Correo, el Palacio del Congreso o los palacios privados se hacían construir por los mejores arquitectos europeos, con materiales importados de la mejor calidad. Hasta las baldosas, en algunas estancias, son importadas de Francia.

El origen de la bonanza argentina era, según recuerda Dodero, «primero de todo la estancia, la fábrica que producía el dinero para el país. Al mismo tiempo era un hecho colectivo, porque movilizaba el sistema productivo». En otras palabras, en una época inmersa en la segunda Revolución industrial (1870-1900), Argentina, el país más rico y avanzado de Latinoamérica, seguía siendo un Estado latifundista, cuya riqueza dependía de la exportación de carne y cueros. Riqueza había, indudablemente, a causa de la invención de la máquina frigorífica por el francés Charles Tellier, en 1868. Lo que no se había logrado era la introducción del sistema capitalista de producción. La riqueza obtenida de la estancia y la ganadería no se empleaba en modernizar e industrializar el país, en construir vías de comunicación y de telecomunicaciones, como ocurría en Estados Unidos. Se derrochaba en importar los bienes más suntuosos y absurdos, de igual forma que hacían los maharajás en la India, sin entender la gravedad y las consecuencias de ese derroche para todo el país y para su futuro. Porque, como explica Heilbroner en su citada obra:

> El capital es una riqueza cuyo valor no es inherente a sus características físicas, sino a su utilidad para crear una cantidad mayor de capital. Esta utilidad se da, de forma característica, cuando el dinero se convierte en bienes como las materias primas, estas se transforman en materias elaboradas y servicios, y las materias elaboradas se venden en el mercado, no con el fin de conseguir un beneficio y retirarse para llevar una vida cómoda, sino para comprar más materias primas e iniciar el proceso de nuevo.
>
> Así pues, el capitalismo difiere de la riqueza por su carácter intrínsecamente dinámico, que cambia continuamente de forma pasando de bien a dinero una y otra vez, en una metamorfosis sin fin que permite ver ya con claridad su plena relación con la naturaleza cambiante del propio capitalismo.

No obstante, el primero en señalar el vigor del capitalismo decimonónico y su capacidad demoledora no fue Weber. Fueron Karl Marx y Friedrich Engels, en su celebérrimo *Manifiesto comunista,* en el que exaltaron el papel transformador y revolucionario de la clase social que recién había asaltado el poder en los Estados inmersos en el proceso industrializador y capitalista. Una clase social surgida en los burgos (ciudades) europeos, es decir, en las urbes, no en los latifundios, dato esencial y diferenciador, pues esa clase social urbana necesitó desmantelar el viejo sistema agrario, latifundista y aristócrata, para hacer posible la revolución económica y

social que era inherente al proceso industrializador y a la revolución científico-técnica que lo acompañaba. En Latinoamérica, por mera imitación, se pasó a llamar «burguesía» a las clases oligárquicas que, sin pretender cambiar sustancialmente las estructuras heredadas de la época colonial, incursionaron tímidamente, y siempre bajo modelos dependientes, en los escasos procesos industrializadores que ha conocido la región. Pero veamos lo que escribieron Marx y Engels sobre el espíritu que animaba a la burguesía europea de la primera mitad del siglo XIX:

> La burguesía ha desempeñado un papel extremadamente revolucionario en la historia.
>
> Dondequiera que llegó al poder, la burguesía destruyó todas las condiciones feudales, patriarcales, idílicas. Ha desgarrado despiadadamente todos los abigarrados lazos feudales que ligaban a los hombres a sus superiores naturales, no dejando en pie, entre hombre y hombre, ningún otro vínculo que el interés desnudo […].
>
> La burguesía no puede existir sin revolucionar permanentemente los instrumentos de producción, vale decir todas las relaciones sociales. En cambio, la conservación inalterada del antiguo modo de producción era la condición primordial de la existencia de todas las clases anteriores. El continuo trastocamiento de la producción, la conmoción ininterrumpida de todas las situaciones sociales, la eterna inseguridad y movilidad distinguen la época burguesa de todas las demás.

Aunque el *Manifiesto comunista* fue escrito en 1848, resulta bastante obvio que la descripción de Marx y Engels no puede aplicarse de ninguna forma a las clases dominantes que han mantenido el control de los Estados latinoamericanos desde el siglo XIX. Las «burguesías» nacionales en Latinoamérica pueden ser acusadas de cualquier pecado, barbaridad, latrocinio o dislate menos de ser revolucionarias. Jamás han intentado destruir las condiciones feudales, patriarcales o idílicas heredadas de la colonia ni, menos aún, se han planteado asumir una dinámica dirigida a revolucionar de forma permanente los instrumentos de producción y las relaciones sociales. Bien al contrario, su razón de ser, su esquema básico de funcionamiento, el *leitmotiv* de su existencia, estaba y sigue estando dirigido a mantener inalterados y a perpetuar en el tiempo los antiguos modos de producción.

Para conservar invariables su dominio y sus privilegios no han dudado –cuando han perdido el control de los Estados– en solicitar, promover o sumarse a la intervención extranjera (véase el caso de Venezuela en 2019),

para que la intervención extranjera pusiera fin a los intentos de revolucionar los modos de producción, modernizar algún país de la región o construir un Estado nacional, es decir, han actuado siempre en sentido diametralmente opuesto al de los burgueses europeos del siglo XIX y principios del XX, que no dudaron en modificar el mundo para acomodarlo a su concepción e intereses. Las hemos visto apoyando golpes de Estado, intervenciones armadas, boicots económicos, embargos salvajes, desestabilizaciones e, incluso, amenazando con la secesión (como ocurrió en Bolivia, desde el estado amazónico de Santa Cruz, en 2008), todo con tal de impedir los cambios y recuperar el poder que usufructúan desde los tiempos coloniales.

Un episodio de la historia de Nicaragua permite ilustrar el enfrentamiento entre fuerzas progresistas y reaccionarias. En 1893 había triunfado una revolución liberal, dirigida por José Santos Zelaya. Este presidente promovió reformas profundas, con la idea de situar al país en mejores condiciones internas e internacionales. Sus enemigos acérrimos estaban en el Partido Conservador, que reunía a lo más granado de la oligarquía de la ciudad de Granada. Carlos Cuadra Pasos, considerado el «pensador oficial» de esa oligarquía, comentó en el libro recopilatorio de sus escritos, *Obras,* las transformaciones impulsadas por el gobierno de Zelaya:

> Durante este tiempo del régimen liberal se había verificado en el país una transformación de la sociedad. El patriciado criollo de raíces coloniales sufrió ruina por empobrecimiento. Las viejas familias enriquecidas durante la colonia perdieron su fortuna por las fuertes multas y contribuciones forzosas que les imponía Zelaya. El sistema jerarquizado dentro de un orden patriarcal se vino abajo. El patriciado fue sustituido por una burguesía de nuevos ricos, que cambiaron de método en sus relaciones con las clases de la artesanía y del proletariado campesino […]. Con los nuevos ricos empezó Nicaragua a desarrollarse en sentido plutócrata, que antes era desconocido.

Comenta Cuadra Pasos que la lucha contra Zelaya obedecía a que «los dirigentes conservadores aspiraban a un franco regreso a los Treinta Años [de gobierno conservador en el siglo XIX]. Era algo así como un ideal de restauración del viejo sistema de gobierno patriarcal, contemporizador, con los poderes públicos flotando sobre una honorable y culta oligarquía». El fondo del conflicto entre el liberalismo de Zelaya (que nada tiene que ver con los partidos liberales que hoy existen en Nicaragua, vale aclarar, para

no desfigurar la vida y obra del presidente reformista) y la oligarquía conservadora era, en suma, la confrontación entre dos concepciones políticas, sociales y económicas del mundo y del país. La modernizadora, aunque retrasada en el tiempo, del liberalismo, que bebía de la Revolución francesa y representaba la versión nacional de un incipiente capitalismo, y la reaccionaria, anclada en el siglo XVIII, del «patriciado» conservador, que aspiraba a mantener «el sistema jerarquizado dentro de un orden patriarcal» con –repitamos las palabras del oligarca Cuadra Pasos– los «poderes públicos flotando sobre una honorable y culta oligarquía». Se confrontaban, en suma, las fuerzas que sentaban las bases de una nueva sociedad, cimentada en ideas capitalistas, y las que se oponían al cambio y pretendían restablecer en Nicaragua los viejos esquemas de producción y dominación surgidos en la colonia.

Este episodio de la historia nicaragüense es relevante, entre otros motivos, porque fue el primer caso en la historia latinoamericana en que una oligarquía, ante la incapacidad de derribar por sus medios a un gobierno progresista, decide depositar sus esperanzas de recuperar el poder en la intervención de una potencia extranjera, en este caso el naciente poder imperial de Estados Unidos. Fue así cómo, cuando Zelaya entra en contradicciones con Washington por la construcción del codiciado canal interoceánico, la oligarquía conservadora se ofrece como instrumento interno para derrocar al presidente nacionalista. La intervención política de Estados Unidos en 1909, que Zelaya intentó detener con su renuncia al poder y el exilio voluntario, y la ocupación militar del país a partir de 1912 supusieron no solo la pérdida de la independencia nacional sino, y más grave por su proyección en el tiempo, la ruptura del proceso de cambios y modernización del Estado promovido por el liberalismo zelayista.

A partir del momento en que recuperaron el poder, los conservadores –junto con Estados Unidos– entraron a saco en las finanzas y recursos nacionales, realizando el mayor saqueo que ha sufrido Nicaragua en toda su historia. El país fue desmantelado como si de un Estado enemigo se tratara, algo que podía entenderse del poder ocupante, no así de quienes se suponían eran hijos del país. Ferrocarriles, aduanas y bancos fueron entregados a empresas estadounidenses. En 1909, la deuda externa nacional era de 2.350.000 dólares. En 1914, asciende a 14.000.000 de dólares (desde los albores del imperialismo moderno, endeudar a los países dominados ha

sido un medio eficaz para profundizar y prolongar la dominación). La oligarquía se autoindemnizó por los «sufrimientos» sufridos durante el gobierno de Zelaya. Un cronista de la época, Pío Bolaños, en su obra *Génesis de la intervención norteamericana en Nicaragua,* comenta con amargura:

> Jamás el tesoro público ha tenido mayores apuros, ni ha habido más pobreza general y estancamiento de comercio y de todo el progreso […].
>
> Los asesores financieros estadounidenses dirigían la política fiscal y monetaria de la nación (incluyendo la creación del córdoba como moneda nacional) y, en general, subordinaron la economía nicaragüense a los acreedores europeos y norteamericanos. Esta tutela no tiene parangón en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

¿No suena familiar este comentario? Parecería que, en vez de hablar de un país ocupado militarmente, Pío Bolaños se refiriera a la intervención del FMI en la administración de la economía de un país latinoamericano. El resultado fue similar. Nicaragua vio roto y desmantelado el aparato estatal y la economía intervenida en su totalidad. Como consecuencia de ello, fue destruido el primer proyecto de Estado que conocía desde la independencia de España. El derrocamiento del gobierno liberal significó, además, la pérdida de una ocasión de oro para insertar la economía nacional en la economía mundial en una situación menos desventajosa. En 1914 estallará la Primera Guerra Mundial y ese desastre significa una oportunidad magnífica para las economías de los países no beligerantes –como Estados Unidos, hasta 1918, o Suecia–, que recogerán pingües beneficios. La Nicaragua ocupada está fuera de juego. Como recoge un investigador nacional:

> La caída del régimen de la burguesía cafetalera, como consecuencia directa de la intervención militar extranjera, y su sustitución por un régimen que representaba una alianza entre la potencia extranjera y sus agentes locales de la oligarquía plantadora granadina, conllevaron el desmantelamiento de toda estructura política y económica correspondiente a la hegemonía y al proyecto político de la burguesía cafetalera. Significó también una nueva organización de la estructura, en función de los intereses de Estados Unidos y, accesoriamente, de los agentes locales. De tal manera, en unos pocos meses de esta nueva «alianza de poder», el capital extranjero se había incrustado en la economía de la nación.

A partir de 1909, la injerencia extranjera pasará a ser un hecho cotidiano y hasta «natural» en los Estados latinoamericanos. El guion puesto en práctica contra Zelaya se repetirá una y otra vez, con las variaciones necesarias, haciendo fracasar o frustrando, en muchos otros países de la región, los esfuerzos por sacarlos del atraso y la dependencia (así ocurrirá con Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954, con Juan Bosch en República Dominicana en 1965 o con Salvador Allende en Chile en 1973, entre una larga lista que no es menester enumerar). Comprender este guion y este periodo es esencial para entender por qué, 200 años después del inicio de la Revolución industrial en Europa, Nicaragua –como otros países del área– no ha sido capaz de transformar su estructura económico-social y permanece estancada en parámetros arcaicos. La intervención militar norteamericana, que concluirá en 1934, dará paso al periodo de intervención indirecta (la dictadura somocista). Durante 70 años el país será un protectorado. Estados Unidos impone un modelo económico neocolonial, arropado por la oligarquía conservadora y un partido liberal al que Estados Unidos había obligado a desnacionalizarse y a abandonar toda la influencia del derrocado presidente, es decir, a expulsar de su ideario cualquier asomo, tentación o impulso patriótico. El país volverá a ser anclado en las estructuras oligárquicas nacidas en el siglo XVIII, esta vez bajo dominio extranjero y con la Guardia Nacional como ejército privado de la dictadura somocista, hasta su derrota en 1979.

La alianza entre oligarquías e imperio se convierte, con mayor fuerza en el siglo XX, en un muro insalvable que, entre otros efectos, tendrá el de impedir que el sistema capitalista pueda introducirse dentro de los Estados, salvo en los efectos negativos que llegan de fuera. Una paradoja rotunda, toda vez que Gran Bretaña en el siglo XIX y Estados Unidos en el XX eran países que se presentaban como los campeones mundiales del capitalismo. Pero no había contradicción alguna. El capitalismo ha necesitado, desde su propio origen, del colonialismo y del neocolonialismo para subsistir como sistema; por tal motivo era –y sigue siendo– absolutamente coherente sostener, de forma directa o indirecta, a regímenes oligárquicos y defender el capitalismo a escala global. Son las dos caras de una misma moneda, dentro del proceso mundial –previsto por Marx– de acumulación capitalista, donde un puñado de multimillonarios –como se encarga de recordar cada año, vanamente, la ONU– posee más riqueza que continentes enteros.

Entender tanto lo que es el capitalismo como comprender la existencia de una alianza entre oligarquías e imperios es esencial para comprender el infortunio y el fracaso de los Estados latinoamericanos. A esta región el capitalismo no llegó –salvo de forma fragmentada y siempre tardía, de la mano de las sucesivas corrientes migratorias– y, aún hoy, en muchos países y regiones dentro de los países sigue sin llegar (las zonas industriales que existen en la mayor parte de países son islas de capitalismo, contenidas en su propia dinámica). Si no llegó el capitalismo, tampoco podía llegar el Estado moderno por él prohijado ni la idea de nacionalidad, tal como fueron concebidos en Europa durante todo el siglo XIX. A aumentar el desconcierto sobre esta cuestión esencial ha contribuido, en enorme medida, el trasvase mecánico que tradicionalmente han hecho izquierdas y derechas latinoamericanas de los análisis que las izquierdas y las derechas europeas hacían de la propia e intransferible realidad europea, aplicándolos sin conversión a una realidad tan absolutamente distinta como la latinoamericana. Ahora bien, si resulta incluso comprensible que la derecha latinoamericana imitara a la europea en el siglo XIX –y a la estadounidense en el XX y el XXI–, pues, a fin de cuentas, era una derecha tributaria, oligárquica y profundamente incapaz, no puede decirse lo mismo de la izquierda latinoamericana, obligada, por su propia naturaleza, a ser analítica, creativa y vinculada a las realidades económicas y sociales desde las que construir sus teorías.

No ocurrió así. El afán de imitación, el seguidismo ideológico, también hicieron nido incluso en la izquierda más creativa y menos dogmática. Confundiendo afán de riqueza con capitalismo, pensadores tan señeros como el marxista peruano José Carlos Mariátegui dieron por cierto que, como en Europa occidental (no en todo el continente) había triunfado el capitalismo, el sistema económico y social existente en Latinoamérica tenía que ser por fuerza capitalista. Por tanto, como en la capitalista Europa occidental existía burguesía, debía existir también burguesía en Latinoamérica. Y si en esa parte de Europa existía proletariado, proletariado debía existir en Latinoamérica. Una visión fuera de foco que tenía que llevar, forzosamente, a construir teorías políticas, sociales y económicas erróneas. Por esa razón, teorías originales como las desarrolladas por Mariátegui se vieron limitadas por la fe ciega depositada en las categorías sobre las que construían sus análisis. Un error lleva a otro, que es no poner

en duda los tópicos elaborados por las oligarquías, cuyo papel no terminan de identificar. De esa guisa, caen en la trampa de situar las causas del atraso latinoamericano en el periodo colonial, sin detenerse a analizar las circunstancias internas y externas del periodo independentista y el papel asumido por las oligarquías e Inglaterra en la formación de los nuevos Estados.

La cadena de errores lleva a asumir como símiles el remedo de Estado que construyen las oligarquías latinoamericanas con el poderoso Estado moderno que surge en Europa occidental, aunque todo parecido entre uno y otro modelo sigue siendo mera coincidencia. Mientras que el Estado latinoamericano se forma sobre el latifundio, el comercio, la exclusión de una vasta mayoría de la población, el librecambismo, la dependencia extranjera y de espaldas a la ciencia y la técnica, el Estado moderno europeo es todo lo contrario. Se construye sobre el desarrollo y el control de la energía, el nacionalismo económico, la industrialización, el ferrocarril, la expansión imperial y la investigación científica y técnica. Esto explica el distinto resultado obtenido por uno y otro modelo de Estado, y el creciente abismo que separa a una región de la otra.

Desde esa confusión de términos y categorías, Mariátegui, en sus *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana,* ya citados, expresa que el Imperio británico estaba «destinado a representar tan genuina y trascendentalmente la civilización capitalista» y que «con esa clara conciencia de su destino y misión históricas a que debe su hegemonía en la civilización capitalista, [le tocó] jugar un papel primario en la independencia de Sudamérica». No duda Mariátegui en llamar «revolución» a la independencia, aunque de sus mismos escritos se deduce que tal revolución no hubo. Su desconocimiento del funcionamiento del periodo colonial es clamoroso, y Mariátegui, como tantos otros pensadores, se queda varado en el siglo XVI («España nos trajo el Medioevo: Inquisición, feudalidad, etc.») sin llegar al siglo XVIII –que es el gran siglo desconocido de la historia latinoamericana– y sin adentrarse en las honduras del XIX, el gran siglo del capitalismo. Es tal el peso de los tópicos que Mariátegui no identifica el proceso de neocolonización que habían sufrido las repúblicas desde antes de la independencia, a pesar de que por sus manos pasan pruebas abrumadoras. Así, llega a exaltar el endeudamiento de los países recién independizados, afirmando que «los banqueros de Londres, con sus

préstamos no por usurarios menos oportunos y eficaces, habían financiado la fundación de las nuevas repúblicas», aunque más adelante reconoce que el Perú «se sintió rico. El Estado usó sin medida este su crédito. Vivió en el derroche, hipotecando su porvenir a la finanza inglesa». Lo curioso y terrible es que el gran revolucionario peruano había llegado a entender de alguna manera qué era el capitalismo, como lo indica una nota a pie de página casi en el inicio de sus célebres *Siete ensayos:*

> El capitalismo no es solo una técnica; es, además, un espíritu. Este espíritu que en los países anglosajones alcanza su plenitud, entre nosotros es exiguo, incipiente, rudimentario.

¿Espíritu capitalista o simple afán de riqueza? Mariátegui afirma que el feudo («antítesis y negación del espíritu del burgo», según sus propias palabras) está encargado en Latinoamérica de «la creación de una economía capitalista». Nuevamente la confusión provocada por los tópicos. Con lo simple que habría sido entender que Perú, en 1923, seguía atado a un sistema precapitalista, que no existía burguesía sino oligarquía, y que esa oligarquía vivía y sobrevivía en alianza estratégica con el imperio dominante de turno, el mismo que estaba interesado en introducir formas capitalistas de producción para obtener minerales, guano y azúcar de Perú, sin cambiar nada los fundamentos de su estructura económica y social. Aún ahora, el capitalismo es un sistema que sigue sin fructificar y los términos de intercambio han variado poco, como puso de manifiesto el colapso de Brasil en 2012, y el de Argentina, en 2019, nueva demostración de que las economías latinoamericanas siguen siendo un simple *adendum* de las grandes economías mundiales y su dicha o desdicha depende del precio de las materias primas que exporta y de los préstamos que pueda obtener. ¿Alguien puede calificar de exitosos los resultados de las independencias?

Sobre la independencia que pudo ser y no fue…

La independencia fue para que hubiese pueblo
y no mugrosa plebe:
hombres, no borregos de desfile;
para que hubiese ciudadanos;
para que júbilo goce la infancia

en decencia de hogares sin miseria;
para que abunden los jardines de recreo
infantil; y los juguetes; y, mejores que las flores,
y más bulliciosos que los pájaros,
más dulces que las frutas,
crezcan los niños y maduren
en salud y alegría que el Estado ampare
y el buen gobierno garantice,
porque la Patria, antes que todo, es madre.

Salomón de la Selva

XV. UNA REGIÓN FUERA DE RUTA

La independencia iberoamericana significó una ruptura, no solo con España, sino con los procesos de cambio que se darían en Europa y que transformaron para siempre el mundo. Unos procesos que, como se ha visto, se habían puesto en marcha a mediados del siglo XVIII y a los cuales se había sumado España. La Ilustración, la Revolución francesa, la Revolución industrial inglesa y, luego, las Guerras napoleónicas, serán los ingredientes que nutrirán los procesos prodigiosos que sucederán durante el siglo XIX.

Latinoamérica, en manos de unas oligarquías reaccionarias, ignorantes y aferradas a su casta y privilegios, no llegó a conocer el capitalismo y, menos, a entender su espíritu. Los países siguieron atados a estructuras precapitalistas, pues sus oligarquías se movían en parámetros precapitalistas. La independencia no cambió sus costumbres ni su cosmovisión, simplemente les permitió sustituir el poder colonial por su propio poder. Asumieron la independencia como un fin en sí mismo y estructuraron los Estados desde los únicos dos parámetros que conocían. Copiaron las ideas y las leyes inglesas y francesas, y ordenaron los países como si fueran parte de Europa, de resultas de lo cual ninguno de los Estados funcionó y se sumieron en interminables guerras civiles, cuartelazos e inestabilidad crónica. Las guerras y la inestabilidad agravaron el atraso e hicieron mayor el foso que separaba a los países latinoamericanos de los procesos de cambio que acaecían en el mundo occidental.

Dada la enorme inestabilidad existente, aquellas geografías tan despobladas, extensas y generosas se beneficiaron muy poco o muy tardíamente de la riada de emigrantes que el capitalismo europeo expulsaba de sus países de origen, que se dirigió masivamente a Estados Unidos, Canadá y Australia, países de gobiernos estables y tan despoblados y extensos como los de América Latina. Los Estados receptores de emigrantes vieron cómo se multiplicaba su riqueza y se sumaron rápidamente al proceso capitalista en boga en esos años, en tanto Latinoamérica permanecía estancada como simple suministradora de

materias primas y sumida en una inestabilidad crónica de guerras interminables y luchas oligárquicas, que la hacían inviable para la inversión extranjera y la recepción de emigrantes. Y era natural que ocurriera así: ¿quién desearía invertir o emigrar a países sometidos a interminables guerras civiles, conflictos internos, inestabilidad, cuartelazos, latifundios e inseguridad jurídica general?

Quedarse fuera casi un siglo de la riada migratoria privó a Latinoamérica de sangre e ideas nuevas, del trasvase de las sucesivas revoluciones industriales, científicas y técnicas que se dieron a lo largo del siglo XIX. También la privó del capital europeo que seguía a sus emigrantes y que financió buena parte del despegue industrial, científico, técnico, agrícola y minero de Estados Unidos. Gracias a la emigración, la población estadounidense pasa de 18 millones en 1845 a 23 millones en 1850, siendo esta riada humana uno de los factores determinantes de su éxito como país. Como indican A. G. Kenwood y A. L. Lougheed en su *Historia del desarrollo económico internacional:*

> Una minoría de los recién inmigrados poseía una cierta capacitación y, en su conjunto, fueron los responsables de la introducción de las nuevas técnicas de manufactura. Pero la principal contribución de los emigrantes al desarrollo industrial en estos países se centró en el aumento de población […]. Estas cifras crecientes de población proveyeron de más mano de obra y un más amplio y profundo mercado, que era necesario para la especialización y, por tanto, para la producción en gran escala.

La emigración en Latinoamérica es casi residual. Brasil recibe, entre 1840 y 1870, apenas 427.000 emigrantes. Entre 1857 y 1870, Argentina recibe 180.000. En cifras globales, tomadas de Kenwood y Lougheed, entre 1821 y 1915 Estados Unidos recibió 31,9 millones de emigrantes (61,8 por 100 del total), por 4,7 millones Argentina (9,1 por 100) y 3,4 millones Brasil (6,7 por 100). La diferencia radica no solo en el número, abrumadoramente a favor de Estados Unidos, sino en los tiempos. Porque, realmente, hasta finales del siglo XIX y principios del XX no se abrirá un verdadero flujo de emigrantes hacia un grupo reducido de países latinoamericanos, como Brasil, Argentina y Uruguay y, posteriormente, México, Venezuela y Chile. La emigración es importante, sobre todo en Argentina, pero hay ya un siglo de retraso respecto a Estados Unidos, un siglo esencial y una pérdida de tiempo fatal, en términos económicos, industriales, comerciales y científico-

técnicos. Un tiempo, sencillamente, irrecuperable, durante el cual el desfase en los niveles de desarrollo entre Estados Unidos y Latinoamérica se hará abismal… y fatal.

Obsesionados por el poder, sin voluntad de mejorar y menos de entender lo que podía significar un buen gobierno, las oligarquías centraban sus esfuerzos en la lucha por arrancar el poder al otro grupo oligárquico que lo detentaba. Eran liberales o conservadores en sentido muy lato, que se traducía en el tipo de leyes que se aprobaban, surrealistas en aquel páramo de atraso, analfabetismo y exclusión económica y social de la gran mayoría de la población. Por tal razón, eran ajenos a los grandes fenómenos sociales, políticos, económicos y científicos en marcha, como los ferrocarriles, la necesidad de estabilidad política y, cómo no, una revolucionaria reforma agraria, que pusiera a producir los vastos territorios acumulados por la minoría terrateniente. Lo deplorable es que ni siquiera llegaran a entender la relevancia del fenómeno migratorio. Como recogen Kenwood y Lougheed, «siempre hubo una conexión directa entre inmigración y crecimiento económico en los países receptores». Habría que agregar el dato, no menos relevante, del manejo y conocimiento de nuevas técnicas de manufacturas. Adolfo Dorfman, en su citada *Historia de la industria argentina*, recoge el dato de que, en 1895, del total de establecimientos calificados como industriales censados, 19.000 (85 por 100 del total) eran propiedad de extranjeros, el resto de nacionales del país.

Pero la inmigración, como tantas otras cosas, ocurrió tarde y estuvo mal dirigida. Se concentraba en cada capital y en su área de influencia, mientras que el resto del país seguía deshabitado. La norma era (y sigue siendo en demasiados países del área) que cada nuevo gobierno iba a lo suyo, sin atinar con planes estructurados y coherentes que le permitieran aprovechar las circunstancias externas, como la emigración o los créditos para inversiones productivas. Las oligarquías y los gobiernos de turno dedicaban más tiempo –o casi todo su tiempo– a sus luchas incesantes por el poder y a garantizar la perpetuación de las prebendas de clase, que a cualquier esfuerzo dirigido a mejorar la situación de sus países. Para oligarquías y gobiernos era más importante desgastarse discutiendo sobre nuevas leyes y constituciones –que, además, solían ser copiadas de las europeas y rara vez aplicadas– que dedicar tiempo a resolver las duras realidades de sus países. Por tal motivo no hubo, como en Estados Unidos, sino en un tiempo tardío,

movimientos serios y sostenidos dirigidos a captar la emigración europea para, con ella, modernizar, poblar y desarrollar los Estados. Algo difícil de pensar en países en estado perpetuo de violencia, bajo formas de guerra civil, golpes de Estado, cuartelazos, guerras con los vecinos y atroz dependencia extranjera.

Dueñas de Estados precapitalistas y vasallas de Inglaterra, las oligarquías se limitaron, en materia económica, a someterse al librecambismo inglés, matando toda posibilidad de desarrollo autónomo. Nunca pudo desarrollarse un pensamiento económico nacional que mereciera tal nombre, pues la norma era copiar ciegamente y aplicar las recetas que llegaban de fuera, sin entender nunca que aquellas leyes y recetas, nacidas en Europa para responder a situaciones y necesidades propias de cada uno de los países respectivos, no podían servir en los países latinoamericanos, cuyas realidades poco tenían que ver con las europeas. Si esto fuera solo historia, no quedaría más que la resignación; pero la copia mecánica de las recetas foráneas sigue siendo la norma, no la excepción, y así se continúa patinando –cada vez menos, afortunadamente– en ese «más de lo mismo». ¿Qué otra cosa pasa en la Argentina de hoy, entregada, una vez más, al FMI, como en el siglo XIX lo estaba al capital inglés? Con excepción, hasta noviembre de 2019, de la Bolivia del derrocado presidente Evo Morales, ¿qué países tienen planes estratégicos de desarrollo que merezcan tal nombre? ¿Y qué decir de la emigración masiva de latinoamericanos expulsados por el fracaso de sus países? La emigración mide el nivel de fracaso de un país al momento de ofrecer oportunidades a sus ciudadanos, como la inmigración sirve de medida del nivel de riqueza que atrae a otros hacia ese país.

Tendencias y patrones la migración en América Latina y Caribe

	Población total	*Inmigrantes Porcentaje de población en el país*	*Emigrados Porcentaje de población en el país*
Argentina	40.117	4,5	1,8
Bolivia	10.027	1,3	6,8
Brasil	190.756	0,3	0,5

Chile	17.135	1,9	2,5
Colombia	41.468	0,3	4,8
Costa Rica	4.302	9,0	2,6
Cuba	11.204	0,1	11,6
Ecuador	14.483	1,3	6,9
El Salvador	5.744	0,7	22,9
Guatemala	14.377	0,4	6,4
Haití	10.188	0,3	9,8
Honduras	7.616	0,3	8,0
México	111.960	0,9	10,6
Nicaragua	5.119	0,6	11,7
Panamá	3.381	3,5	3,7
Paraguay	6.460	2,5	10,6
Perú	27.412	0,2	3,6
República Dominicana	9.445	4,2	11,3
Uruguay	3.286	2,3	7,4
Venezuela	27.228	4,2	1,6

Fuente: CEPAL.

Inmigración y emigración en América Latina y Caribe (ALC), en 2016. Con excepción de Argentina, todos los países de la región tienen más población emigrante que inmigrante, según datos de la CEPAL. Dato significativo es que la mayor economía regional –Brasil–, presenta una tasa de inmigración de 0,3, igual a la de las economías más precarias, las de Haití y Honduras.

XVI. PAÍSES SIN ESTADO: TODO EL PODER PARA LAS OLIGARQUÍAS

Las invasiones napoleónicas produjeron, en la mayoría de países invadidos, una honda reacción nacional, que llevó a políticos, intelectuales y grupos económicos a volver los ojos a sus raíces. Surgió, de esa manera, la idea de reunir en un único Estado a pueblos dispersos entonces bajo distintos imperios o gobiernos, bajo el lema «un pueblo, un Estado». Será el llamado Estado-nación, uno de los fenómenos políticos, sociales y económicos más importantes del siglo XIX. En casos señeros, como los de Alemania e Italia, constituirá la mayor obra de ingeniería política, que tendrá como pilares la industrialización y los ferrocarriles. El caso alemán es paradigmático.

En Prusia, el más poderoso Estado germánico, el ministro de Hacienda, Motz, impulsa la Zollverein –la unión aduanera entre los numerosos Estados germánicos– como paso esencial para sentar las bases de la unidad del pueblo alemán. En junio de 1829 –según recoge Pierre Renouvin en su *Historia de las relaciones internacionales*– escribe Motz al rey de Prusia:

> De esta unión, basándose naturalmente en una identidad de intereses, y extendiéndose necesariamente a la Alemania media, nacerá una Alemania verdaderamente unida, libre, lo mismo interior que exteriormente, bajo la dirección de Prusia […]. La unión de estos Estados en una liga aduanera y comercial originará, al mismo tiempo, la unión en un único e idéntico sistema político.

En 1834 nacía oficialmente la Zollverein, bajo la égida de Prusia. «Toda Alemania va a convertirse por fin, mediante la fusión de sus intereses económicos, en un pueblo, en una unidad poderosa.» En 1871, tras la Guerra franco-prusiana y la derrota de Francia, es proclamado el Imperio alemán, convertido en la mayor potencia continental de la época. Otro elemento había contribuido poderosamente a desarrollar el espíritu alemán: la red de ferrocarriles que había unido los grandes núcleos urbanos, fomentando las relaciones humanas y los intercambios económicos. Porque los países se construían políticamente desde los gobiernos, pero se estructuraban sobre grandes obras públicas e infraestructuras, que dieran

cohesión a los territorios sobre los que construían los Estados. Y el ferrocarril fue, desde el siglo XIX, el gran medio vertebrador.

La unificación de Italia no se organizó sobre un entramado económico tan claro, como en Alemania, sino sobre la voluntad de una minoría apoyada y financiada por el más fuerte Estado ítalo, el Reino de Piamonte-Cerdeña. Como señala Pierre Renouvin, en su *Historia de las relaciones internacionales:*

> Los patriotas italianos –los activos partidarios de realizar la unidad– se reclutaban entre los intelectuales, que tenían sentimiento de los destinos nacionales y a quienes alentaban los recuerdos históricos; entre los hombres de negocios e industriales que tenían interés en crear un mercado italiano; comerciantes, que veían abrirse nuevas perspectivas a medida que tomaba impulso en los diferentes Estados de la península la construcción de ferrocarriles; en fin, entre los obreros y artesanos, atraídos por la propaganda de Manzini.

No todo era sentimiento patrio, sino también cálculo: «Los intereses económicos contribuyeron en gran manera al sentimiento de solidaridad entre la población de los diferentes Estados». La unidad italiana, completada en 1860, hizo de este país una gran potencia europea. Sentimiento nacional e intereses económicos fueron los pilares sobre los que surgirían posteriormente Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía o Grecia (y, en el pasado siglo, los países surgidos del suicidio de la Unión Soviética y las guerras yugoslavas).

En la segunda mitad del siglo XIX, en Japón, un sector de la clase dominante apostó por modernizar el Estado para garantizar su independencia y evitar la suerte seguida por China, colonizada por un puñado de potencias occidentales. El conflicto entre fuerzas tradicionalistas y reformistas concluyó con el triunfo reformista. En medio siglo, Japón dejó de ser un Estado cuasi feudal y se convirtió en potencia mundial. Para lograrlo, contrató a miles de técnicos y maestros europeos y estadounidenses a fin de que introdujeran a Japón en la modernidad y, sobre todo, en el dominio de la ciencia, la técnica y la economía. Como señala Tony Smith, en su *Los modelos de imperialismo:*

> Y no hay duda de que la capacidad del Japón para industrializarse y convertirse en su oportunidad en uno de los miembros más prominentes de la comunidad internacional no puede entenderse fuera de las acciones del Estado. Luego de la restauración Meiji

(1868), fue el Estado quien, actuando en nombre de la nación y no en favor (aunque sí en su interés) de grupos o clases particulares, emprendió un reordenamiento fundamental del gobierno y la economía japoneses. Fue el Estado quien insistió en la reforma agraria a fin de acelerar el desarrollo industrial; fue el Estado quien invirtió en un gran conjunto de empresas industriales que el capital mercantil temía al principio; fue el Estado quien absorbió en sus burocracias cuanto samurái pudo y luego rompió la resistencia de los restantes; fue el Estado quien inició los sistemas modernos de la banca, la tributación y la educación en Japón.

No es propósito hacer la historia de la formación de los grandes Estados sino, simplemente, recalcar el papel fundamental que ha desempeñado el Estado –y que sigue desempeñando– en el desarrollo y bienestar de los pueblos. La suma de un Estado fuerte con una economía fuerte más un sentimiento fuerte de patria hizo posible el Estado moderno. La economía se elevó a pilar insustituible del Estado y, como demuestran los hechos, no hay economía que prospere sin un Estado rector. Pero la economía también necesita de un espíritu, de una idea que la impulse en una dirección determinada. En el presente caso, en la consolidación y fortalecimiento del propio país. Y se habla de un Estado fuerte, no de un Estado dueño de todos los medios de producción, lo que, en cualquier caso, sería apenas una parte del amplio campo de acción que tiene el Estado.

El Estado no fue un fenómeno vinculado únicamente al surgimiento de nuevos países, como Alemania o Italia, o a la necesidad de garantizar la independencia, como Japón. Gran parte de la grandeza británica en el siglo XIX se debió al papel desempeñado por el Estado para potenciar el desarrollo económico de Gran Bretaña. La cuna de la Revolución industrial y del libre comercio debe su poder a la alianza estratégica entre el Estado y el sector privado. «La política exterior inglesa debe abrir el camino a los comerciantes» resumía Palmerston en 1841. Era el matrimonio entre Estado y economía. Los comerciantes e industriales británicos no deseaban que el gobierno permaneciera al margen, sino, al contrario, que mantuviera una política exterior que les garantizara mercados y materias primas. Bajo la consigna «El comercio sigue a la bandera» la clase dominante financió la expansión imperial británica, que permitiría construir un enorme imperio colonial. La protección estatal de intereses privados llevó a múltiples guerras y conflictos. Así, por ejemplo, bajo el gobierno de Mehemet Alí, Egipto acometió un acelerado proceso de industrialización y modernización

que lo convirtieron, en 1830, en un Estado potente, aunque formalmente dependiente del Imperio turco. El emergente desarrollo egipcio inquietó a Gran Bretaña, que promovió la guerra y la caída de Alí. La razón de tal política era contundente en sus fines: «Todo proyecto de independencia económica se hallaba en contradicción con los intereses ingleses». Esta regla sigue vigente y es extensible a todos los Estados desarrollados.

Se podrá comentar que esas son historias decimonónicas y que ahora estamos en el siglo XXI, tan lleno de connotaciones futuristas. No obstante, el calendario es una forma de medir el tiempo, no el desarrollo de un país. En términos de desarrollo económico y social (y puede que en lo político y cultural), Latinoamérica sigue anclada, unos países más que otros, entre los siglos XVIII y XIX y lejos del XXI. A la región no llegó el Estado moderno. No podía llegar, pues ese Estado moderno había nacido de la industrialización y el capitalismo. La traslación mecánica de las instituciones jurídicas de Inglaterra o Francia a Latinoamérica no igualaba a la región con Europa, que es antiguo el refrán de que el hábito no hace al monje. La elegante vestimenta jurídica solo servía para poner de relieve el profundo divorcio de las oligarquías gobernantes con las realidades de sus países, algo que continúa hoy en una mayoría de Estados, donde se sigue confundiendo lo accesorio con lo principal, olvidando que la mona, mona se queda, aunque se vista de seda, por seguir en el refranero popular. Que una Constitución fuera calco de la francesa no transformaba el Estado oligárquico en Estado moderno, como el hecho de que un amplio grupo de ciudadanos posea ordenadores o que haya un uso amplio de televisores, vídeos o teléfonos inteligentes no convierte a un país atrasado en uno desarrollado.

Pues bien. El Estado no solo no ha perdido protagonismo, sino que lo ha ido ganando con el paso del tiempo, hasta tal punto que es imposible explicar el progreso de los países ricos sin contar con el papel estratégico desempeñado por el Estado. Incluso en los momentos cumbres del neoliberalismo, el Estado estuvo lejos de ser enterrado. Todo lo contrario, el llamado Estado de bienestar, que ha hecho de Europa occidental la región más igualitaria y desarrollada del mundo, no se hubiera podido alcanzar sin el protagonismo del Estado. Los ciudadanos de la Unión Europea no pueden imaginar su vida sin la tutela del Estado, dueño no solo del sistema educativo y sanitario, sino de empresas (incluidas conocidas

multinacionales, como Renault), parques naturales y vías de comunicación, y también de los recursos hídricos, de las playas, de puertos y aeropuertos, y de un largo listado que ocuparía demasiado espacio. Es, también, el principal empleador, el más grande distribuidor de riqueza y un implacable recaudador de impuestos, amén de su papel de proveedor de servicios.

Tras la Segunda Guerra Mundial la economía japonesa estaba en ruinas. Las riendas de la reconstrucción quedaron en manos del Estado, quien asumió el control directo de la industrialización a través del poderoso y mítico Ministerio de Industria y Comercio Internacional (MITI, en sus siglas en inglés). El MITI decidía qué empresas o sectores eran prioritarios a través de la asignación de recursos y divisas. Aunque no existía una obligación legal de obedecer las directrices estatales, ninguna empresa se resistía. El *gyosei shido,* o asesoramiento administrativo, era y sigue siendo utilizado por el gobierno para indicar a las grandes empresas qué es lo que tienen que hacer, para dirigir la economía a objetivos precisos. A través del MITI, el gobierno se encarga de preparar una «visión de futuro» para la industria, para lo cual cuenta con un cuerpo consultivo, el Consejo de Estructura Industrial, encargado de elaborar el *Libro Blanco de la industria.* El poder del MITI es tal que entre sus funciones está proteger a los comercios minoristas de la competencia de los supermercados, prohibiendo hasta hace poco que se instalaran en sus cercanías. Los sectores siderúrgico y naviero fueron obligados a aplicar planes de racionalización para hacerlos mundialmente competitivos. También el MITI aplicó duras tarifas aduaneras a la importación de vehículos, que fue reduciendo poco a poco hasta dejarlas en cero, en 1978, pero hasta «que los vehículos japoneses consiguieron competitividad internacional», como recogió Shoji Nishijima, en su investigación sobre *Desarrollo económico y política industrial de Japón,* de diciembre de 2009, en la que también alude a la «influencia excesiva en la economía» del Estado japonés.

«Fuentes oficiales japonesas atribuyen el éxito de esta política a la existencia de un objetivo muy claro (alcanzar el nivel de desarrollo de los países occidentales y elevar el nivel de vida de los japoneses).» Después de la Segunda Guerra Mundial, las inversiones extranjeras en Japón fueron limitadas con severidad por el gobierno, con el propósito de proteger la independencia económica nacional. No se autorizó que la propiedad estuviera controlada por empresas extranjeras, a menos que ello permitiera

obtener un beneficio mayor, como, por ejemplo, la transferencia de tecnología. Entre 1950 y 1989 Japón adquirió bienes en el extranjero por valor de 259.900 millones de dólares, mientras que firmas extranjeras solo pudieron adquirir bienes en Japón por valor de 15.700 millones (en Latinoamérica se ha vendido casi todo).

En la República Federal de Alemania no hay nada que se parezca al MITI. Oficialmente es una economía social de mercado, donde la empresa privada es el pilar de la economía. Esa profesión de fe no impide que muchas de las empresas alemanas más señeras (como Volkswagen o Lufthansa) sean o hayan sido hasta hace poco tiempo total o parcialmente propiedad del Estado. La intervención del gobierno alemán, en 1999, para salvar de la quiebra a la empresa Philipp Holzmann, la segunda mayor constructora del país, ilustra el papel del Estado en la salvaguarda de empresas y puestos de trabajo. El gobierno promovió un acuerdo en virtud del cual el Estado aportaría un total de 250 millones de marcos y los bancos acreedores otros 200 millones para reflotar la empresa. El entonces canciller, Gerhard Schöder, defendió su intervención invocando el «modelo alemán», es decir, que la responsabilidad de las instituciones financieras iba más allá de sus negocios concretos y afectaba a la economía y a la sociedad alemana.

Como indica Michel Albert, el Estado organiza «la distribución geográfica de las actividades económicas en función de los recursos naturales y humanos de cada región, desarrollando, muy especialmente, las infraestructuras de las regiones menos favorecidas». Otra forma de intervención estatal en la economía es «el enorme incremento de las subvenciones» a las empresas en crisis o necesitadas de expansión. Cuando empresarios árabes intentaron controlar Mercedes Benz, el Deutsche Bank intervino para adquirir las acciones en venta. Las transferencias públicas a las empresas representan el 2 por 100 del PIB, cantidad nada despreciable tomando en cuenta el volumen de la economía alemana (ese 2 por 100 significaría alrededor de 60.000 millones de dólares). En diciembre de 2018, el Gobierno alemán aprobó una modificación del reglamento de inversiones extranjeras, de forma que el gobierno pueda investigar todas las inversiones extra comunitarias en sectores estratégicos, cuando la inversión no comunitaria exceda del 10 por 100 del valor o accionariado de una empresa considerada estratégica. El anterior techo era del 25 por 100. La normativa alemana fue adoptada después de que la empresa estatal china

Grid Corporation of China (SGCC) adquiriera una importante gestora de red eléctrica germana. La razón aducida por el gobierno alemán era que la medida buscaba proteger sectores considerados de interés nacional y para evitar posibles acciones de espionaje.

España e Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, se situaban en la franja de economías intermedias. No formaban parte de los países punteros (Francia, Gran Bretaña, Alemania) ni de los más atrasados (omitiré sus nombres). Su retraso tecnológico e industrial obligó a los gobiernos a asumir una beligerante política de industrialización, que reposó en dos enormes consorcios estatales: el Istituto per la Ricostruzione (IRI) italiano y el Instituto Nacional de Industria (INI) español, que «desempeñaron un importante papel como "agentes del crecimiento", tanto a nivel estatal como regional, como constructoras o reconstructoras del sector industrial». En Italia, hasta fecha reciente, «la empresa pública es una de las bases fundamentales del sistema» y constituye «un coloso sin parangón en otro país del mundo capitalista desarrollado. Incluye la casi totalidad de la banca […] así como el 50 por 100 de la gran industria […]. A ellos se añaden hechos más comunes como el casi monopolio del transporte aéreo, de los ferrocarriles, autopistas, servicios telefónicos y correos, junto a diversos monopolios menores de tipo comercial y a una presencia dominante en el mundo de la televisión y la radio».

En España, el INI constituyó el mayor grupo industrial y comprendía monopolios estatales como Telefónica y Tabacalera, así como líneas aéreas –Iberia–, astilleros, minas, fábricas de armamento, constructoras navales, consorcios financieros, empresas petroleras, fábrica de aviones, etc. El Estado también es dueño de casi todas las universidades y centros de estudios, de carreteras, playas, etc. En España, las empresas públicas producían en torno el 50 por 100 del PNB, mientras que en Francia y en Italia representan un tercio del PNB. El proceso de privatización, por otra parte, se ha llevado de manera singular. En primer lugar, fueron privatizadas una vez que el Estado había salvaguardado su preeminencia en España en relación con los competidores que llegarían como resultado de la liberalización de los mercados (Telefónica, por ejemplo, controla la mayor parte de la infraestructura de comunicaciones y las otras empresas deben pagar un canon para utilizarla). Por otra parte, el Estado se reservó la llamada «acción de oro», en virtud de la cual se establece la necesidad de

una autorización previa del Estado a operaciones que afecten a determinadas empresas. Aunque la «acción de oro» fue luego declarada ilegal por la UE, permitió preservar en manos españolas la mayor parte de empresas privatizadas. Como prueba del doble estándar que se aplica a países ricos y a países pobres, mientras que a los pobres se le obliga o induce a vender las empresas públicas, los ricos protegen las suyas de múltiples formas, como se verá más adelante, aplicando el llamado «patriotismo económico». Por demás, conviene recordar que el derecho comunitario europeo establece que los Estados miembros tienen poder exclusivo para fijar qué debe ser privado y qué público, dentro de su propio territorio. Es decir, reconoce al Estado un relevante poder interventor para el control de su economía (otra cuestión es que los gobiernos decidan usar de ese poder o no).

¿Qué decir de Estados Unidos? Oficialmente, el Estado se limita a un mínimo de tareas, dejando el grueso del funcionamiento de la nación a los grandes consorcios privados. Bajo el gobierno de Ronald Reagan, ideólogo oficial del neoliberalismo, el papel del Estado en la economía debía de haber desaparecido. Ocurrió todo lo contrario. Después de ocho años de gobierno, Estados Unidos había pasado de ser el primer acreedor del mundo a ser el primer deudor del mundo, debido al gasto público. En 1989 la deuda externa norteamericana alcanzaba la friolera de 600.000 millones de dólares. Nunca como bajo Reagan un gobierno estadounidense había intervenido tanto en la economía (ni había profundizado tanto las desigualdades sociales). El papel del Estado lo describió certeramente Galbraith en su obra *La cultura de la satisfacción:* «La intervención del Estado, con su mano que controla o sostiene, no es precisa y, salvo cuando un banco o una gran empresa necesita que lo salven o hace falta reformar la defensa común, nunca es beneficiosa». En otras palabras, el Estado está para sacarle las castañas del fuego a las empresas privadas y, en esos casos, es mejor que el ángel de la guarda. Una doble moral muy conveniente.

Pero el Estado sirve para proporcionar otras bondades y beneficios, concentrados mayoritariamente en las grandes empresas para proveerlas de cuantiosos beneficios. El más notorio es obligar a otros países que abran sus mercados a los productos estadounidenses, siguiendo en eso la tradición británica del siglo XIX. Claras han sido las amenazas de guerra comercial del gobierno de Estados Unidos a Japón, la Unión Europea y China para

que compren más productos estadounidenses. Otro capítulo destacado son las subvenciones públicas a empresas privadas, ocultas en los presupuestos de defensa o de agricultura. Amén del papel, nunca enterrado, del Estado como gran patrono empresarial, como ilustra el caso del consorcio Airbus. Hasta 1971, las empresas de Estados Unidos habían monopolizado el mercado aeronáutico occidental a través de McDonnell Douglas y Boeing. Ese año 1971 cuatro países europeos (Alemania, Francia, Gran Bretaña y España) decidieron formar un grupo estatal de construcciones aeronáuticas, imprescindible para fomentar el desarrollo científico-técnico en un campo en el que Europa estaba ausente. Así nació Airbus Industries. Bajo protección estatal y dotada de fondos públicos multimillonarios, Airbus logró desplazar del segundo puesto a la McDonnell Douglas, logrando, a partir de 1992, copar el 30 por 100 del mercado mundial de aviones, solo por detrás de Boeing, que controlaba el 57 por 100 de dicho mercado. En el presente, ambas empresas mantienen una lucha a muerte por ser la primera empresa aeronáutica en los mercados mundiales, con los gobiernos respectivos involucrados apoyándoles cuanto haga falta. Como resumía la agencia EFE, en un cable de enero de 2005:

> Los dos gigantes aeronáuticos, el europeo Airbus y el estadounidense Boeing, se hallan en una auténtica batalla de altura. La competencia entre estos dos colosos del aire es enorme, tanto en volumen de venta de aparatos como en la lucha por los subsidios y políticas de subvenciones.

Cada año, los balances de ventas y contratos de ambas empresas se esgrimen como espadas. En 2018 Boeing hizo 806 entregas de aviones comerciales por 800 Airbus, cifras que el primero las airea como victoria y el segundo asume como derrota. Airbus recibió, ese 2018, 747 pedidos por valor de 118.400 millones de dólares, precio de catálogo, mientras Boeing recibió 893 encargos por 143.700 millones. Dicho sea de paso, Airbus –hoy integrada en el consorcio EADS– no ha sido la única empresa europea interestatal. Los proyectos de investigación financiados con fondos públicos se cuentan por docenas desde hace décadas: los programas EUROLASER-EXULT, JESSI o EUREKA (cuyo objetivo, según reza su página oficial, es «capacitar a Europa para que pueda abordar las nuevas tecnologías que permitan mejorar la competitividad y productividad de su economía a través de una mayor cooperación científica y tecnológica entre los países

participantes y, al mismo tiempo, consolidar las bases para un crecimiento duradero y con creación de empleo») son otros tantos proyectos financiados con dinero público, con el fin de fortalecer la capacidad científica y técnica de la UE, que es igual a decir mantener su capacidad económica y su condición de potencia comercial.

Del caso de Airbus deben resaltarse varios aspectos. Airbus es un consorcio de empresas estatales o paraestatales formado por decisión de cuatro gobiernos europeos. El éxito de la empresa se debió a las millonarias subvenciones recibidas de los gobiernos y al apoyo dado por esos gobiernos, tanto adquiriendo aviones para las flotas aéreas nacionales, también estatales, como promoviendo su adquisición por otros gobiernos. En Estados Unidos, la prosperidad de Boeing y McDonnell Douglas –desde 1996 absorbida por Boeing, por orden del gobierno estadounidense, que decidió la creación de un holding nacional que pudiera enfrentar la competencia de Airbus– dependía del apoyo del Estado, a través de contratos cerrados a la libre competencia y la adquisición del producto final que, cuando se trata de aeronaves militares, significa la casi totalidad del producto. Un negocio redondo en ambos casos. Sin «papá Estado» la expansión y la prosperidad de esas empresas hubieran podido tener otro final.

Atención especial requiere la propuesta de la UE, aprobada en abril de 2019, de dotar al Fondo Europeo de Defensa (FED) de 13.000 millones de euros, para potenciar la industria militar europea. Esta decisión hizo que Estados Unidos pusiera el grito en el cielo, por considerar que amenaza directamente el predominio militar estadounidense en Europa, pieza angular de su dominio político. El FED es considerado por la UE un paso previo y necesario para retomar el proyecto de un ejército europeo, distinto y separado de la OTAN, aunque no incompatible (según criterio europeo) con la organización atlántica. La respuesta de Estados Unidos llegó por carta el 1 de mayo –que no es festivo en ese país–, advirtiendo de las serias consecuencias que habría si el proyecto de Euroejército seguía adelante, por considerar que el mismo «produce duplicación, sistemas militares que no son interoperativos, dispersión de los escasos recursos de defensa y una competencia innecesaria entre la OTAN y la UE». Más claridad es difícil de encontrar. El otro tema de fondo es que el proyecto de la UE, de crear un complejo militar industrial europeo, de forma que la UE produzca el grueso

de armas que requiera, apunta al corazón del complejo militar e industrial de Estados Unidos, pues, de conformarse el proyecto europeísta, la UE reduciría drásticamente la compra de material militar estadounidense. Otro factor que alimenta la desconfianza de Estados Unidos es la salida del Reino Unido de la UE, pues Londres actuaba como agente de Estados Unidos y bloqueaba todos los proyectos que a Estados Unidos no le interesaban. 27 países de la UE se han comprometido con el Euroejército y con la industria militar europea, proyectos que tienen como principales padrinos a Alemania y Francia. Nada hace pensar, en las circunstancias actuales, que la UE vaya a renunciar a estos proyectos, considerados estratégicos y vitales para el futuro de la UE. Cuestiones políticas y geopolíticas aparte, el FED es otro ejemplo del poder interventor del Estado cuando se considera menester.

Por lo demás, los países mal llamados capitalistas tienen clara conciencia de uno de los mayores asertos de Marx, cual es que el capitalismo tiende a la acumulación y al monopolio; que, por esa tendencia perversa, destructora de la competencia y del mercado, si se le deja actuar sin controles, terminaría autodestruyéndose, al concentrar la riqueza en un puñado de manos. De esa guisa, conductas que los países del centro castigan dentro de su funcionamiento interno o entre ellos, son favorecidas en los países periféricos o semiperiféricos. Tal ocurre con las leyes contra los monopolios o con la creación de tribunales para garantizar la competencia y evitar pactos secretos entre las grandes empresas o grupos de empresas, dirigidos a controlar los mercados o realizar acciones especulativas. Así, en diciembre de 2006, el Tribunal de Primera Instancia de la UE confirmó una decisión de la Comisión Europea (CE) que había impuesto una multa de 17 millones de euros al sector de carne de vacuno de Francia, acusado de pactar precios y de prohibir las importaciones de ese producto. El Tribunal confirmó la decisión de la CE, por considerar que imponía «restricciones a la competencia», lo que está prohibido por el Derecho Comunitario Europeo. Más sonoro fue que este mismo Tribunal validara, en 2007, la decisión de la CE de imponer una multa multimillonaria a Microsoft, acusada de abusar de su posición de dominio por aprovecharse del monopolio del sistema operativo Windows. El Tribunal de Primera Instancia confirmó la multa de 497,2 millones de euros impuesta por la CE al gigante informático, que fue calificada de «histórica» y que Microsoft no

tuvo más remedio que pagar. En marzo de 2019, la Unión Europea impuso a Google la astronómica multa de 1.494 millones de euros por «abusar de su posición dominante» en el mercado publicitario *on line* en los últimos diez años. Como estos tribunales son establecidos por acuerdo internacional, se trata de formas indirectas de tutela estatal sobre el sistema, para evitar las distorsiones perversas inherentes al sistema capitalista. Pues bien, mientras esto ocurre en la UE, los países que la integran no dudan en promover que sus empresas adquieran posiciones de monopolio o que abusen de posición de dominio en los países del llamado Tercer Mundo, entre ellos los latinoamericanos, confirmando en doble rasero que aplican en materia económica y comercial (y en otras muchas materias más). Las oligarquías en Latinoamérica, por su parte, no han dudado en aprovechar su control del aparato del Estado para imponer sistemas monopolistas o para apoderarse, simplemente, de países enteros, desde una concentración obscena de riqueza. Esto es lo que denunció la revista *Punto-com* en un extenso artículo titulado «Los dueños de América Latina», en el que se afirma:

> Su poder no parece tener límites. Los dueños de América Latina tienen bajo su control los más importantes canales de televisión y emisoras de radio. Cinco de cada diez noticias que se producen en la región salen de sus medios de comunicación. Son los mayores vendedores de cerveza, son propietarios de pozos de petróleo, fundaron los bancos más grandes de la región, las mejores fábricas de cemento y telenovelas, producen automóviles y computadoras, poseen líneas aéreas y monopolios de telecomunicaciones.

No hay novedad en ello. Hace más de un siglo, Eduardo Matte Pérez, una de las más grandes fortunas chilenas, afirmó: «Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio». Quienes son dueños de todo, no admiten regulaciones de nadie, menos todavía aceptarían autorregularse en beneficio del país. Son la esencia del pensamiento oligárquico y la prueba más evidente del estancamiento en el pensamiento precapitalista que arrastran las clases dominantes en Latinoamérica, dueñas (aunque cada vez menos y cada vez con más dificultades) de países enteros y, por tanto, adversarias de establecer Estados efectivamente fuertes y sistemas políticos modernos. No debe extrañar, por tanto, la inesperada y, al mismo tiempo, masiva sublevación

social que se produjo en Chile en noviembre de 2019, resultado de un sistema extremadamente desigual, como ya se ha visto en anteriores capítulos. En Chile, vale señalar, está privatizado casi todo, incluyendo el agua, lo que ha posibilitado abusos impensables en Europa sobre la población con menos recursos y causa de que la clase media cada día sea menos media y más precaria.

Se puede concluir, en fin, que la prédica oficial contra el papel del Estado ha sido más propaganda que verdad. La historia demuestra que el crecimiento económico, durante los siglos XIX y XX, pudo lograrse merced al papel determinante que desempeño el Estado desde una multiplicidad de ángulos, que se extendían desde la aprobación de leyes de carácter proteccionista, para preservar y promover la industria local frente a la competencia extranjera y la provisión generosa de fondos a empresas privadas y públicas para garantizar su éxito, hasta la creación, por el propio Estado, de inmensos consorcios empresariales –tipo IRI o INI– para fomentar la industrialización de un país desde el propio Estado. En medio, una gama infinita de medidas, como la aprobación de leyes y acuerdos internacionales reguladores del sistema, la creación de centros de investigación, el fortalecimiento de la enseñanza obligatoria en primaria y secundaria, universidades potentes y casi gratuitas, sistemas de becas.

Es absolutamente falso que en los países desarrollados la economía sea manejada exclusiva o preponderantemente por intereses privados. Podría hacerse un listado extenso refutando tal afirmación. Ocurre precisamente lo contrario. La economía de los países ricos funciona bien porque el Estado sigue ejerciendo de maestro de ceremonias, órgano rector, espina dorsal y cerebro central de los planes de desarrollo. En cambio, es interminable el listado de países fracasados que tienen un denominador común: en ellos no existe Estado o este es tan débil que es como si no existiera. Ningún modelo económico puede funcionar exitosamente al margen o en contra del Estado. Los ejemplos citados ilustran más que mil palabras el papel estratégico del Estado en la protección y desarrollo de las sociedades y de la economía. Algo que, en Latinoamérica, salvo periodos breves, no se ha tenido en cuenta. Una última cita. En Francia, cuando triunfó una coalición de derechas encabezada por Nicolas Sarkozy, en 2007, Sarkozy explicó su proyecto de hacer una reforma profunda del Estado francés (el Estado por antonomasia), modificando la educación, el sistema de pensiones, el

mercado laboral, la función pública… Todo desde el Estado y sin renunciar al papel rector del Estado. Según las palabras del entonces recién electo presidente,

> El desarrollo económico no es posible en un contexto de oposición entre lo público y lo privado […] todo lo contrario: la calidad del servicio público es decisiva para el crecimiento económico, y la productividad de la Administración es igual de importante que la de las empresas.

A buen entendedor, pocas palabras, sobre todo cuando esas palabras salen de la boca de un selecto representante de la derecha gala.

XVII. PAÍSES QUE PERDIERON EL TREN (O NO LO HALLARON)

El capitalismo, como ha documentado Eric Hobsbawn en su libro *La era del capital,* se desarrolla entre 1848 y 1875, es decir, décadas después de la independencia de Latinoamérica. Su expansión está directamente vinculada al temor, en los países continentales, a la industrialización inglesa, que amenazaba con convertirlos en simples proveedores de materias primas. La reacción llega de la mano de los gobiernos, que usan el Estado para promover sus propios procesos industriales. En Francia, la industrialización se produjo entre 1830 y 1848. En Estados Unidos, a partir de 1850 y, sobre todo, después de la guerra civil, es decir, con posterioridad a 1865. El asombroso desarrollo de Japón se inició después de la restauración Meiji (1868), cuando el Estado, como ya se viera, «actuando en nombre de la nación y no en favor (aunque sí en su interés) de grupos o clases particulares, emprendió un reordenamiento fundamental del gobierno y la economía japoneses». Para lograr remontar su enorme atraso respecto a Occidente, Japón compró fábricas enteras y tecnología extranjera para conocerla, dominarla y, luego, construir su propia base industrial y tecnológica.

En la misma España, los primeros procesos industrializadores tuvieron lugar a finales del siglo XIX, en las regiones próximas a la frontera con Francia (aunque la verdadera industrialización será posterior a la década de los sesenta del pasado siglo, de la mano del Estado y con el Estado como vertebrador de esa industrialización). Potencias industriales del presente, como Corea del Sur o Taiwán, se industrializaron vertiginosamente con posterioridad a 1950. ¿De qué podía culparse a España después de 1825? ¿No resulta más evidente y lógico responsabilizar a las oligarquías y a Inglaterra, los dos poderes que controlaban a los países y cuya alianza abortó el desarrollo industrial?

Lo mismo puede decirse del otro gran fenómeno unido, indisolublemente, al desarrollo capitalista: las comunicaciones, particularmente los ferrocarriles y el barco de vapor. El éxito del capitalismo en el siglo XIX puede medirse por la longitud de vías férreas construidas en los Estados, por la razón simple de que las vías férreas –las vías de comunicación que,

en el siglo XIX y aún hoy (vean, si no, los trenes de alta velocidad), era decir ferrocarriles, rieles, locomotoras– son al cuerpo de un Estado lo que las arterias y las venas al cuerpo humano. Por ella circula todo y de ellas dependen, en los Estados, la economía y la sociedad; en las personas, la vida toda. El desarrollo marchaba, marcha, sobre los caminos de hierro.

La primera vía férrea a vapor se construyó en 1825, entre Stockton y Darlington, con el fin de transportar mercancías desde una mina de carbón a un puerto fluvial; su promotor fue George Stephenson, inventor de la locomotora Blucher. En 1830 se inauguró el ferrocarril entre Liverpool y Mánchester. Desde entonces y hasta el presente, el ferrocarril ha sido sinónimo de desarrollo. En 1840, Gran Bretaña tenía 2.390 kilómetros de vías férreas, que ascendían a 32.623 en 1914, para una superficie de 229.000 kilómetros cuadrados. En Francia, en ese periodo, los *chemin de fer* pasaron de 410 kilómetros a 37.400, aunque su territorio (500.000 kilómetros cuadrados) más que duplicaba el británico. En lo que será Alemania, aumentan de 469 a 61.749 kilómetros, para una superficie de unos 350.000 kilómetros cuadrados. En Estados Unidos, pasan de 4.510 a 410.475 kilómetros, sobre 8.000.000 de kilómetros cuadrados. Rusia, por su parte, termina en 1904 la construcción del mítico Transiberiano, con una longitud de 9.297 kilómetros.

En Latinoamérica, con la excepción de Argentina –que entre 1870 y 1914 construyó 47.000 kilómetros de vías, ocupando en su momento el décimo lugar del mundo en tendido férreo–, el ferrocarril ha sido un elemento tardío, cuando no extraño, en la configuración de los países. En realidad, dada su estructura precapitalista, basada en el latifundio y la exportación de materias primas, carecía de lógica construir grandes redes de vías férreas. Si el ferrocarril era expresión de la pujanza y expansión del capitalismo, ¿por qué razón iban a necesitarlo países anclados en el siglo XVIII? Por demás, gran parte de las vías férreas se trazaban hacia o para las explotaciones mineras o agroexportadoras, de forma que, en última instancia, su construcción beneficiaba a las oligarquías y a las empresas extranjeras y solo de manera residual al país (en Mauritania, durante la época colonial, Francia construyó una línea férrea que comunicaba la mayor mina de hierro, explotada por una empresa francesa, y el puerto; la gente viajaba en los vagones vacíos ilegalmente, pues los únicos dos vagones de pasajeros

eran caros e iban reservados. El efecto de esa línea férrea para Mauritania era nulo. Para la minera, lo era todo).

En México, a causa de sus avatares durante el siglo XIX, aunque los primeros 13 kilómetros de ferrocarril se construyeron en 1850, la primera vía férrea que merece tal nombre no entra a funcionar hasta 1869, con 139 kilómetros entre Ciudad de México y Apizaco. No obstante, en 1880, México contaba apenas con 1.060 kilómetros de ferrocarril, cantidad mínima para un país de 2.000.000 de kilómetros cuadrados. Suecia, con un territorio que era el 20 por 100 del mexicano, contaba con 1.700 kilómetros en 1870. Bélgica, en sus 30.000 kilómetros cuadrados, poseía, en ese mismo año, 2.897 kilómetros de vías férreas, casi tres veces más que México. Como recoge el informe *El transporte ferroviario en México,* de José de Jesús González Rodríguez, de junio de 2018, «gran parte de las vías férreas que existen en la actualidad en nuestro país son herencia del trazado ferroviario generado en el siglo XIX. De los cerca de 26.000 kilómetros de caminos férreos existentes en nuestro país actualmente, casi 20.000 kilómetros fueron construidos en el Porfiriato» (gobierno del dictador Porfirio Díaz, entre 1876 y 1911, inicio de la revolución mexicana. Díaz fue autor de la célebre frase «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos»).

Brasil, con una extensión similar a la de Estados Unidos, comenzó a construir sus ferrocarriles en 1855, contando en 2008 con 27.418 kilómetros de líneas, que, en 2019, se habían reducido a 20.000, principalmente en el sur del país (hay un plan de extender las vías férreas 10.000 kilómetros más, pero es eso, un plan). Tal cantidad de vías era equivalente, *grosso modo,* al 5 por 100 de las que tenía Estados Unidos en 1914.

A partir de 1873, el gobierno de Guzmán Blanco, en Venezuela, otorga a empresas alemanas e inglesas concesiones para la construcción de distintas líneas férreas, como parte de un plan de modernización del país. Así se construyeron varios ramales que comunicaban Butacas, Aroa, La Luz y Barquisimeto; La Ceiba, Sabana de Mendoza y Motatán; La Guaira y Puerto Cabello, y La Vela y Coro. Como el gobierno venezolano les había garantizado un rendimiento anual del 7 por 100, la iniciativa de Guzmán Blanco se tornó en pesadilla, pues el gobierno no pudo cumplir con las obligaciones pactadas en las concesiones. El no pago de compromisos llevó a las empresas extranjeras a abandonar las obras ferroviarias y provocó una

crisis internacional. En 1902, las costas de Venezuela son bloqueadas por buques de guerra de Inglaterra, Alemania e Italia. En décadas posteriores, el montaje de grandes plantas ensambladoras, la importación de autos y de otros vehículos, sustentados en el auge del petróleo, llevaron a entregar el sistema de comunicaciones al parque automotor, dejando abandonado el ferrocarril, un sistema de transporte de pasajeros y de carga mas económico, de mayor proyección social y muy lejos de ser contaminante como el automóvil. Por lo demás, comentaba el director del Museo del Transporte de Caracas, Alfredo Schael, los pocos tramos ferrocarrileros que existían en Venezuela eran una fantasía, pues «lo que quedaba eran unos rieles, unos derechos de vías y restos de materiales ferroviarios desprotegidos y abandonados, porque esas eran empresas que habían muerto a partir de 1912».

En Nicaragua, tras la derrota sandinista, fue desmantelada la única red férrea del país. Llevada por una mezcla de incuria y voracidad, la oligarquía que había recuperado el poder merced a la brutal guerra de agresión dirigida por Estados Unidos, destruyó cuanto había por destruir, entre ello el centenario ferrocarril. Vendieron las locomotoras de principios de siglo (una joya en sí mismas) y hasta los rieles del tendido férreo. Hoy la maleza y un reguero de chabolas han ocupado el sitio.

Ejemplo de que la región sigue sin entender las reglas más elementales del juego económico mundial es que, mientras que los países ricos continúan ampliando, potenciando y modernizando las comunicaciones por ferrocarril, en América Latina los ferrocarriles están, bien en retroceso, bien en el olvido, como ocurre en Centroamérica. En Colombia, en 2018, la red férrea tenía 3.515 kilómetros de vías, de los cuales solo 448 kilómetros funcionaban. Y así de mal funciona el país.

Caso dramático e ilustrativo es el de Argentina, otrora campeona regional en vías férreas, de las que llegó a tener 47.000 kilómetros, como se ha indicado. En la década de los noventa, el gobierno de Menem decidió privatizar los ferrocarriles, provocando la ruina del sector. Según afirmara el presidente de la Asociación del Congreso Panamericano de Ferrocarriles (ACPF), Lorenzo Pepe, «80.000 trabajadores ferroviarios quedaron en la calle» y «800 pueblos sufrieron los cierres de los ramales». El impacto económico para todos estos pueblos y familias debió ser, simplemente, demoledor. Según recoge Jairo Straccia,

> muchos de esos pueblos eran ferroviarios y, al desaparecer el ferrocarril, toda esa gente tuvo que emigrar. Entonces nosotros la consecuencia la redondeamos en una sola palabra: despoblación.

Una anécdota puede ilustrar este capítulo desmoralizador de la historia argentina. Funcionarios del gobierno intentaron acallar a la gente que protestaba por el cierre de los ramales afirmando que no podían volver a abrirlos ¡porque eso sería volver al pasado! Uno de los reclamantes, de nombre Juan Carlos Tineo, respondió, enojado: «Nosotros ya volvimos al pasado, porque no tenemos tren». En el Boletín Argentino de 31 de mayo de 2007, los usuarios describen así el servicio ferroviario:

> Viajar en un tren de larga distancia en la Argentina casi podría compararse con la trama de un relato clásico: esperanza, primero; crisis, en el medio, y alivio, al final, cuando eventualmente se logra llegar a destino. El deterioro del material rodante y el estado calamitoso de las vías obligan a los convoyes a circular a una baja velocidad exasperante de entre 30 y 60 kilómetros por hora.

Con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se inició un proceso de rehabilitación de la otrora enorme red de ferrocarriles argentinos, no obstante, cabe decir aquí que «cualquiera tiempo pasado fue mejor». Es sumamente costoso reconstruir lo destruido, más cuando esa voluntad choca con grupos y sindicatos tan poderosos como los de camiones de transporte por carreteras. Inversores chinos están renovando la línea de carga Belgrano Cargas, considerada estratégica para las exportaciones argentinas, pero es inversión mínima comparada con las viales. China, además, financia la adquisición de 2.400 vagones hasta el 2020. En total, hasta el 2025, Argentina prevé invertir 4.683 millones de dólares en rehabilitar y modernizar su red de ferrocarriles, planes que habría que tomar con reserva, dada la terrible crisis en que está sumido el país desde 2018.

Debe compararse el abandono que sufrió el sector ferrocarrilero latinoamericano con el papel estratégico otorgado por la UE al desarrollo de los ferrocarriles, tomando como referencia el país más próximo a Latinoamérica, como es España. Con 500.000 kilómetros cuadrados de territorio, cuenta con una red aproximada de 15.000 kilómetros de ferrocarril. En 1992 fue introducido el sistema que vendría a revolucionar

completamente este medio de comunicación: el tren de alta velocidad (conocido como AVE), que puede alcanzar los 300 kilómetros por hora, pasando a competir con las comunicaciones aéreas. La construcción de líneas férreas de alta velocidad es considerada una prioridad para el desarrollo de España, de ahí su proceso de expansión, que alcanzó los 3.410 kilómetros de vías en 2019. Proyectos hay para llevar el AVE a Extremadura, para 2020 y a la frontera cantábrica con Francia en 2023, de la misma forma que están sobre la mesa el proyecto Almería-Murcia y los corredores Cantábrico y Mediterráneo. Planes similares se vienen ejecutando en Francia, Alemania, Inglaterra… Sin olvidar que los pioneros de la alta velocidad fueron los japoneses, en un año tan temprano como 1960.

Es plenamente comprensible la política ferroviaria europea, si se tiene en cuenta la diferencia de costos entre el transporte ferroviario y el transporte por carretera. Como señala el venezolano Alfredo Schael, las autopistas cuestan 1.000 millones de bolívares por kilómetro, mientras que las vías férreas salen a 0,4 millones, incluida la infraestructura de las estaciones. La vida útil de las autopistas es de 7 años, por 30 años las vías férreas. «Un tren de carga transporta el equivalente a 50 camiones, que en términos ambientales significa 50 motores emitiendo gases de efecto invernadero. De igual manera, un tren transporta cómodamente a 1.000 pasajeros, para lo que se necesitan 20 autobuses.» Sigue señalando Schael que, según datos estadísticos de Europa, de 2001, «las cifras de muertos por cada mil millones de viajeros por kilómetro es de 0,2 en ferrocarril y 8,7 en carretera, lo que indica que el ferrocarril también es el transporte más seguro. En otras palabras, la carretera resulta 43 veces más peligrosa que el sistema ferroviario. Ha sido tal el atraso en ese tema en Venezuela, que en el país solo existen dos sistemas ferroviarios que, juntos, no superan los 450 kilómetros».

En Latinoamérica, solo dos países, México y Argentina, se apuntaron al tren del siglo XXI. En 2005, el gobierno mexicano anunció una licitación para construir un tren de alta velocidad (TAV), que uniría la capital con la ciudad de Guadalajara, situada a unos 300 kilómetros del antiguamente conocido como Distrito Federal (DF), hoy solamente Ciudad de México. No obstante los buenos deseos, después de hechos los cálculos económicos, que elevaban la inversión a 12.000 millones de dólares, México decidió

abandonar el proyecto, una decisión más que razonable pues, con esa enorme suma, México podría rehabilitar toda su red. En 2014 se habló de un TAV entre la Ciudad de México y Querétaro, con financiación china, que también fue suspendido poco después, reviviendo la idea en 2019, sin visos de realidad.

En septiembre de 2007, el presidente Néstor Kirchner encabezó los actos de presentación de ofertas para la construcción del primer tren de alta velocidad (TAVE), que deberá unir, en 2009, Buenos Aires y Rosario, situada a 286 kilómetros de la capital argentina. En una segunda etapa, en 2011, llegaría a Córdoba, situada a 710 kilómetros de Buenos Aires. El tren comunicaría Buenos Aires con Córdoba en tres horas, con velocidades de hasta 320 kilómetros por hora, y su costo ascendería a 1.000 millones de dólares. Este TAVE entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba «será el primero de América Latina y el segundo del continente americano», expresó el secretario de Transporte de Argentina, Ricardo Jaime. Según él, «el Gobierno aspira con la implementación del tren de alta velocidad a dar un salto cualitativo que acompañe a la Argentina del futuro que estamos construyendo». El propósito perseguido obedece a que «el presidente tiene la firme decisión de recuperar los ferrocarriles, para construir nuevamente un país federal».

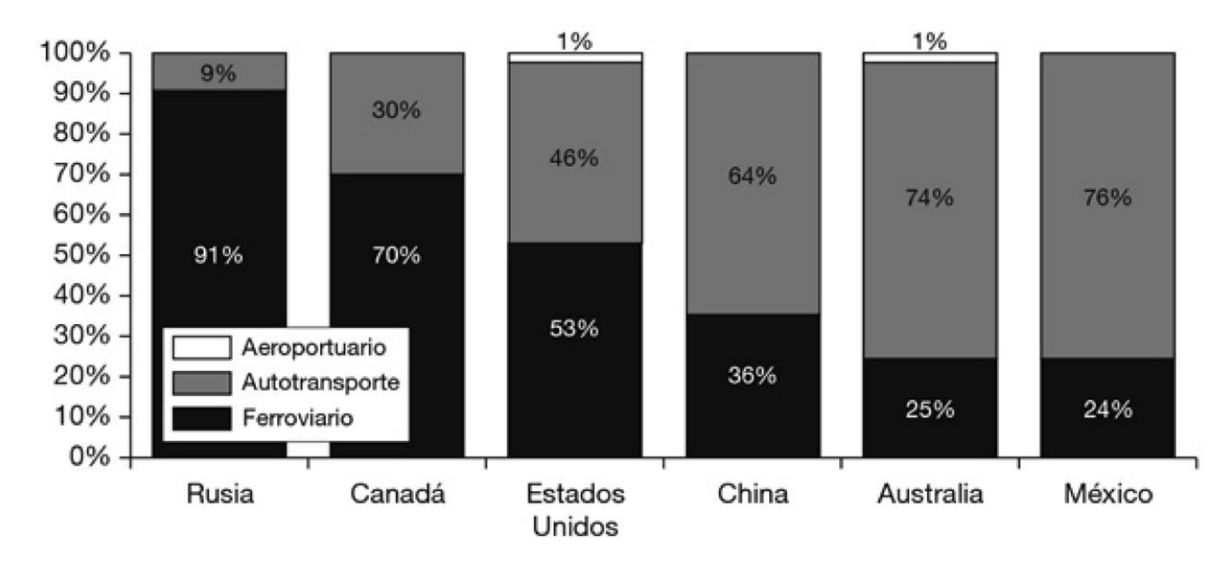
En enero de 2008 se decidió adjudicar el contrato para su construcción al consorcio francés Veloxia. La obra faraónica fue criticada, dada la situación de Argentina entonces, pues, al igual que el TAV mexicano, tenía utilidad mayor emplear los recursos asignados al TAVE en rehabilitar toda la red férrea abandonada y recuperar para el país los 800 pueblos sacrificados y las decenas de miles de kilómetros abandonados por efecto del cierre de los ramales del ferrocarril. Elido Veschi, de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos y Puertos Nacionales, criticó el proyecto indicando la causa: «El sistema ferroviario está absolutamente destruido y con ese dinero se podrían reconstituir 8.000 kilómetros de vías para que corran trenes a 120 kilómetros por hora». Por su parte, Norberto Rosendo, presidente de la Comisión Nacional Salvemos al Tren, afirmó que «con ese dinero se podrían tener buenos trenes a Tucumán, Salta, Posadas, Rosario, Córdoba, Mendoza, Bariloche y Bahía Blanca». Rosendo aseveró también que la tarifa del TAVE va a ser tan alta que el Estado va a terminar subvencionándola. De todas formas, del TAVE no se puso ni un riel. El

proyecto fue cancelado en 2012, dada la imposibilidad de asumir los costos del mismo.

Si una golondrina no hace verano, una solitaria línea de alta velocidad en un país de 2,7 millones de kilómetros cuadrados podría constituir la más costosa golondrina férrea del continente. Un acto de imitación, de los tantos que tanto han costado, para transmitir imagen de modernidad al exterior, aunque el interior se nos caiga a pedazos. Un poco como la autovía costera que se ejecutó en Dakar, la capital del Senegal, obra faraónica en una ciudad donde la mayoría de los barrios carecen de agua y alcantarillado, las calles, cuando llueve, se convierten en lagunas terrosas que las vuelven intransitables, y donde, para rematar, proliferan los zancudos, vectores del paludismo, una de las siete plagas que asolan África.

En cualquier caso, la región latinoamericana, pese a esfuerzos notables en países como México, Argentina y Brasil, sigue apostando por las carreteras, algo inexplicable en países con las distancias existentes en la mayoría de ellos. Los grupos empresariales de transportes por camiones, unido a la ceguera de los gobiernos no terminan de entender lo que los europeos comprendieron de inmediato, sobre el ferrocarril como vector esencial de transporte, cohesión y desarrollo de los países. El gráfico de la página siguiente explica fácilmente porqué –entre otros factores– unos países progresan y se desarrollan de manera más sostenida y firme que otros.

Comparativa internacional de la movilización de carga por modo de transporte (toneladas por kilómetro en porcentaje, 2010)



Fuente: BM, 2010.

Como puede observarse, Rusia, Canadá y Estados Unidos mueven masivamente su carga por ferrocarriles. El dato de China requiere una aclaración. En septiembre de 2019, la agencia Xinhua informaba que, en China, «los ferrocarriles de alta velocidad se extienden 29.000 kilómetros, lo que representa más de dos tercios del total mundial, según el Buró Naconal de Estadísticas». En 2018, China invirtió 116.800 millones de dólares en ferrocarriles, con 4.683 kilómetros de nuevas vías y 4.100 kilómetros de vías de alta velocidad. En diciembre de 2018, China tenía 29.000 kilómetros de AVE, equivalentes a dos tercios del total mundial. La apuesta china por el ferrocarril es la mayor del mundo. Nada que agregar, nada que comentar.

XVIII. LATIFUNDIOS *FOREVER,* SUBDESARROLLO *FOREVER*

En las sociedades precapitalistas, el valor de medida de la riqueza es la tierra. En la Europa preindustrial, los ricos medían su estatus económico y social contando los latifundios y pueblos que poseían. La literatura europea está llena de historias de esos ricos, reunidos en la clase aristocrática, rentista e improductiva. La Revolución industrial y burguesa cambió el parámetro de riqueza, pasándolo de la tierra al capital; de la agricultura y la ganadería a la industria; de la educación improductiva a la ciencia y la técnica. La Revolución industrial llevó aparejada una revolución agraria, que liquidó el sistema feudal terrateniente para sustituirlo por un modelo agropecuario industrial. No importaba tanto la extensión de las propiedades como la aplicación en ellas de los avances tecnológicos que permitieran un aumento constante de la producción. El latifundio, en las sociedades capitalistas, se ha concentrado en la producción en escala y, paradójicamente, en las sociedades posindustriales, en el latifundio de corte ecologista, donde multimillonarios europeos y estadounidenses intentan aliviar su mala conciencia adquiriendo inmensas extensiones en países del sur de América, dizque para promover desarrollo y medio ambiente y, de paso, revivir las sociedades feudales, con ellos como señores absolutos de los feudos del siglo XXI.

Los países de Latinoamérica mantuvieron y profundizaron un sistema económico y social basado en los latifundios, donde una minoría de la población era dueña de la inmensa mayoría de la tierra productiva, sistema que se ha perpetuado hasta el presente. No ha habido ninguna reforma agraria (más exactamente, ninguna revolución agraria) que haya servido para modificar a fondo el sistema imperante. Aunque desde momentos tempranos, en algunos países, se intentó cambiar este sistema arcaico, los fracasos han sido clamorosos. Así, el gobierno de Rivadavia, en Argentina, promulgó una Ley de Tierras en 1824 con el fin de impedir la creación de grandes latifundios y mejorar la agricultura nacional. Vano esfuerzo. La Ley de Tierras tuvo el efecto contrario, favoreciendo el surgimiento de inmensos latifundios, que fortalecieron todavía más a la oligarquía de la tierra que gobernaba gran parte del país.

Pocos sectores son tan reacios a los cambios como el latifundista. No es un mal que se restrinja a Latinoamérica, sino que, de Europa a China, ha estado en el centro de los debates entre fuerzas reaccionarias y fuerzas progresistas a lo largo y ancho del mundo. En España, la concentración de la tierra en pocas manos –la aristocracia y la Iglesia, esencialmente– fue un factor determinante para que perdiera el tren del progreso respecto a países como Inglaterra –pionera en el tema, con la Ley de Cercos, que permitía ocupar y cercar las tierras comunales– o Francia. La mala distribución de la tierra implicaba una mala y demasiadas veces escasa producción de cereales y otros alimentos, lo que a su vez generaba hambrunas. La reforma agraria fue una de las preocupaciones principales de los gobiernos ilustrados y de las Sociedades Económicas de Amigos del País. En 1765, Pedro Rodríguez de Campomanes publicó, a cuenta de la Corona, su *Tratado de la regalía y la amortización,* en el que defendía, como recoge John Lynch, en su obra ya citada *La España del siglo XVIII,* «la intervención del Estado para modificar las condiciones de la distribución de la tierra en interés de la sociedad». Desde esos tempranos años, los gobiernos ilustrados intentaron modificar la tenencia de la tierra, con escasa fortuna, por la resistencia de la Iglesia y los latifundistas.

La cuestión de la tierra, por lo demás, había ocupado la atención de muchos economistas del siglo XVIII, que se daban perfecta cuenta de que el fomento de la riqueza en el campo y la reforma agraria eran el corazón de los procesos de desarrollo. Lo había señalado Adam Smith en su obra *La riqueza de las naciones:*

> El cultivo y mejora del campo que suministra la subsistencia […] debe ser necesariamente anterior al crecimiento de la ciudad, que solo suministra comodidades y lujo. Es solo el producto excedente del campo, o lo que supera a la manutención de los cultivadores, lo que constituye la subsistencia de la ciudad, que solo puede expandirse cuando lo haga ese producto excedente.

En otra parte de su obra, Smith afirma:

> Por lo tanto, según el curso natural de las cosas, la mayor parte del capital en toda sociedad que crece se dirige primero a la agricultura, después a la industria y, por último, al comercio exterior.

Podrían seguir citándose abundantes ejemplos sobre el papel fundamental de la agricultura en el desarrollo económico, pero no es el caso. No se pretende hacer una historia de la agricultura, sino solo recalcar el papel que le corresponde dentro de cualquier estrategia de desarrollo. W. W. Rostov, en su libro *Las etapas del crecimiento económico,* recogía la realidad tan tempranamente señalada por Smith:

> Los economistas políticos clásicos daban por sentado que, para conseguir el mayor capital circulante que exige un creciente sistema industrial urbano, era necesario aumentar la producción agrícola. Una buena parte de los economistas de algunos países gobernados tanto por comunistas como por no comunistas se olvidó durante un tiempo de esta relación vital.

Se cuentan por decenas los países que han podido alcanzar un notable desarrollo económico gracias a haber respetado esta, al parecer, ley de hierro de la economía. La España destruida por la guerra civil de 1936-1939, luego aislada por la derrota de sus aliados nazi-fascistas, labró –y nunca mejor dicho– su industrialización exportando productos agrícolas. Se decía en la década de los sesenta que era un país exportador de aperitivos y postres (en referencia a las aceitunas y las naranjas, dos de los principales productos exportados). A pesar de ser un país mayoritariamente seco, gracias a un ambicioso plan de aprovechamiento del agua en el transcurso de tres décadas España pasó de país pobre a ser potencia agrícola y, después, a potencia industrial (bueno, un país adecuadamente industrial), aunque aún hoy sigue manteniendo el sector agrícola como uno de de los pilares de su economía.

En Latinoamérica, por el contrario, la inmovilidad o movilidad mínima en la estructura de la tierra ha determinado, entre otras tantas cosas, el fracaso de los escasos intentos de industrialización que se han propuesto para la región. Entre ellos se cuenta el célebre modelo planteado por Raúl Prebisch, desde la CEPAL, de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), conocido como «modelo cepaliano», que, como su nombre indica, proponía instalar fábricas en los países para producir en ellos los productos que se importaban. El modelo cepaliano aspiraba a industrializar los Estados sin tocar su estructura económica y social y, lo que era peor, sacrificando el campo al proyecto industrializador. El modelo fracasó. Un fracaso explicado por el hecho de que, hasta el presente, no ha existido un

solo modelo de industrialización que no haya pasado, previamente, por una rotunda transformación de las estructuras agrarias y educativas, para convertirlas en sostén y motor del desarrollo industrial. Al no proponer ninguna modificación de fondo de la estructura agraria, no solo era imposible el éxito del modelo, sino que este imponía una dinámica destructiva para el sector agrario, es decir, destruía el sector que debía alimentar la industrialización. Era como construir una casa al revés, usando barro para los cimientos. Esta realidad quedó evidenciada tardíamente, como recogen Eliana Cardoso y Ann Helwege, en su obra *La economía latinoamericana:*

> La agricultura fue gravemente perjudicada por la ISI. El crédito fue desviado hacia la industria, dificultando a los campesinos financiar sus costos de temporada o invertir en riesgo y equipos. Los gastos públicos en carreteras, servicios de agua y electricidad se concentraron en las zonas urbanas. Casi no se hizo ningún esfuerzo por integrar a los campesinos al sector moderno mediante ayuda técnica y reforma agraria.

La ISI fue más un retroceso que un avance, resultado de no haber ahondado los teóricos del modelo cepaliano en la realidad de las estructuras socioeconómicas de la región. Porque el problema de fondo viene de este hecho cardinal, que teóricos, políticos y economistas latinoamericanos y no latinoamericanos han pasado por alto o no han valorado suficientemente: que los países de América Latina –unos más que otros– son países precapitalistas, cuyas estructuras económicas y sociales están más próximas al siglo XVIII y primera mitad del XIX que al siglo XX, ya no digamos a este siglo XXI. Esas estructuras se basan en el latifundio, formas de explotación agrarias extensivas y destructivas (de las sociedades y del medio ambiente) y de un atroz retraso educativo-cultural, dentro del cual estremece el aún más devastador retraso científico y técnico. Pretender establecer modelos capitalistas en sociedades precapitalistas es como querer construir una casa sobre un pantano. Al final, terminará hundiéndose, sean cuales sean los materiales que se usen, como se hundió la ISI y se han seguido hundiendo otros modelos, de izquierda a derecha, por la simple razón de que esos modelos se elaboran sobre países que no existen, sobre modelos socioeconómicos que solo se hallan en las ecuaciones de los teóricos. No hay forma de fomentar el progreso y el desarrollo sin realizar

una profunda y racional modificación en la tenencia y los modos de producción de la tierra.

Peor aún, el modelo cepaliano es responsable –aunque fuera de forma culposa, por su imprevisión– de uno de los problemas más graves que afecta a buena parte de los países latinoamericanos: la producción de alimentos. Al castigar a un ya bastante castigado campo, aceleró, si acaso no provocó, su abandono. Los campesinos, dejados a su suerte, emigraban (y siguen emigrando) en masa a las ciudades, generando un doble problema. Uno, que dejaban de producir alimentos, aunque fuera para autoconsumo. Dos, que pasaban a convertirse en consumidores, agudizando el problema. Es así cómo una región que, por su geografía y calidad de tierras, podría inundar el mundo de alimentos, entrará en agudos déficits alimentarios. Como señalan Cardoso y Helwege, en el libro citado:

> América Latina no solo dependió cada vez más de alimentos importados, sino que su tradicional fuente de divisas, el sector agrícola, no pudo satisfacer la necesidad de divisas.

Cuando la crisis de la deuda externa empezó a azotar la región, el panorama resultante era desolador. No solo no había divisas para pagar la voluminosa deuda, sino que muchos países no eran capaces siquiera de autoalimentarse. Como pasa siempre, el sector más castigado, el campesino, fue el menos culpable de la aplicación de políticas económicas erróneas. Venezuela ilustra el drama provocado por abandonar o subestimar al agro, y el precio que se paga por no entender el papel de la agricultura en el desarrollo. País de agua abundante y tierras fértiles, lleva décadas importando casi todos sus alimentos, a pesar de disponer de recursos suficientes para gozar de bonanza.

Venezuela arrastra una carestía permanente de alimentos básicos, que tiene su origen en la década de los cincuenta, consecuencia de la aplicación del modelo cepaliano de ISI. No obstante, para ser más rigurosos, debe señalarse que la destrucción del campo venezolano fue daño colateral y directo del maná petrolero encontrado en los años veinte del pasado siglo. Con tanto petróleo manando y manando sin cesar ¿para qué matarse trabajando en obtener los frutos de la tierra? ¿No era más práctico comprarlo fuera, a países agrícolas o a los mismos Estados Unidos? Los

hábitos de consumo provocados por el petróleo hizo de Venezuela un país importador de la casi totalidad de sus alimentos, obligando al país a gastar decenas de miles de millones de dólares anuales en importar lo que los venezolanos podían producir. Si se hubiera optado por un modelo productivo, se hubiera liberado al país de la servidumbre alimentaria y ahorrado una cantidad inmensa de divisas, que podrían haberse invertido en modernizar el agro, industrializarlo y convertirlo en una potencia mundial. Pero se hizo lo contrario. Creyendo que el maná petrolero sería eterno, Venezuela puso su futuro en el mantenimiento de precios altos del petróleo, que era la única forma de mantener aquel modo de vida improductivo e insostenible. Cuando el precio del petróleo se hundió, a finales de los ochenta, el país se hundió con él. Sin dinero para importar aquellas ingentes cantidades de alimentos, la crisis estalló y fue el llamado «caracazo». La pobretería asaltando los supermercados en diciembre de 1989, y el gobierno respondiendo sacando al ejército a la calle y… la masacre. La ley de hierro de la economía impuso su tributo. Si Venezuela hubiera desarrollado un poderoso sector agropecuario, el país habría resistido la debacle petrolera y no estaría sufriendo el horror del bloqueo y el boicot de Estados Unidos que sufre desde 2018. Si una lección deja la actual debacle venezolana es que la autosuficiencia alimentaria debe ser regla de oro de cualquier gobierno, sobre todo si es de izquierdas. Tómese en cuenta que el resurgir prodigioso de China fue posible gracias a que el país pudo resolver su mayor hándicap histórico: el hambre, resultado del déficit alimentario.

Esto es así porque las divisas que se gastan en importar alimentos no se pueden emplear en mejorar los sistemas de salud y educación o en infraestructuras e investigación. El subdesarrollo del agro, por tanto, provoca el subdesarrollo del país y, a la inversa, el desarrollo agrario es fuente de riqueza y prosperidad para un país, como es fácil comprobar desde hace siglos. Por otra parte, justo es anotar que los gobiernos de Venezuela y Cuba (otro país víctima del modelo cepaliano) llevan años haciendo esfuerzos por revertir la situación en el campo, buscando alcanzar el imprescindible autoabastecimiento. Pero, tan cierto como eso, es que ambos países se han encontrado una dificultad tan insuperable como fatal, pero comprensible para quien conoce mínimamente el sector agropecuario: fácil es despoblar el campo y misión casi imposible recolonizarlo.

La razón es elemental. La agricultura (la cultura de la tierra) no se improvisa ni se puede inculcar desde programas burocráticos, por muy bien intencionados que sean. La vida en el campo suele ser dura, y no solo las plantas, también los humanos necesitan tener raíces y amar y conocer –conocer mucho– la tierra para estar por ella y trabajar en ella, sacándole la riqueza que alimentará al país. Esta realidad, que conoce bien la gente del campo, no suele aparecer en los doctos manuales de economía de los tecnócratas, que saben mucho de números, pero poco de cómo funciona la milenaria cultura de la tierra. Esto lo vivió amargamente la Revolución sandinista en Nicaragua, donde revolucionarios burócratas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria se dedicaron a confiscar pequeñas y medianas unidades productivas, lo que produjo el colapso de la estructura productiva y Nicaragua pasó en dos años de exportar granos básicos a importarlos, creando, además de un grave problema de abastecimiento, un enorme malestar entre los sectores campesinos y los productores, que luego alimentarían a las fuerzas de la contrarrevolución. Los burócratas, sean de la CEPAL o de un partido revolucionario, son un arma de destrucción masiva, pues normalmente es gente que no sabe ni cómo se siembra un frijol, menos todavía todo lo que hay que hacer para sacar la cosecha.

Pues bien, pese a todos los desastres que provoca el mantener unas estructuras agrícolas anacrónicas, las oligarquías latinoamericanas siguen sin asumir esa regla de hierro de la economía, aunque todas ellas se declaren devotas seguidoras de Adam Smith, uno de los iconos del capitalismo y fundador de la economía clásica (aunque Smith, como recoge John Kenneth Galbraith en *La cultura de la satisfacción,* «sería un progresista [estadounidense] del siglo XX», defensor del papel del Estado en la economía y hombre compasivo, como quiso dejar de manifiesto en el libro que lo lanzó a la fama, *La teoría de los sentimientos morales.* Smith, en esta obra, hace afirmaciones tales como que quitarle a un ser humano «lo que es realmente útil para él meramente porque puede ser tanto o más útil para nosotros […] es algo que ningún espectador imparcial podrá admitir», o que «la disposición a admirar y casi a idolatrar a los ricos y poderosos […] es […] la más extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales»).

Al negarse las oligarquías a realizar una revolución agraria y otra educativa, condenaron a la mayor parte de la población a continuar sumida en la marginación, la pobreza y la ignorancia, razón por la cual no pudo incorporarse al mercado y convertirse ella misma, mediante el consumo y la producción, en motor que sostuviera el esfuerzo industrializador. El modelo cepaliano, como otros menos elaborados, fueron una especie de injertos industriales metidos a fuerza en un cuerpo preindustrial y arcaico que, a la postre, terminó rechazando el injerto y determinó el fracaso del modelo, al costo de desarticular el sector agrario. Se trató de un esfuerzo absurdo, de querer crear de la nada una sociedad industrial –que es una forma compleja producto de relaciones capitalistas– en sociedades precapitalistas y feudales, gobernadas por grupos aferrados al poder con escaso o nulo interés de cambio y a quienes únicamente les interesa el éxito de sus empresas, no del país.

En general, el campo latinoamericano ha permanecido en el mayor de los atrasos y, con el campo, las estructuras socioeconómicas. Solo unos pocos sectores específicos, vinculados a la exportación, como la carne y el trigo en Argentina, o el café en Brasil y Colombia, últimamente la soja, por la enorme demanda china, han sido objeto de procesos productivos capitalistas, lo que en la práctica totalidad de los casos ha servido de pretexto para aumentar la concentración de la tierra en manos de una minoría oligárquica. Según Oxfam, Latinoamérica presenta el mayor índice de desigualdad del mundo en tenencia de la tierra, correspondiente –en relación causa y efecto– a tener el mayor índice de desigualdad del mundo. Aquí unos ejemplos:

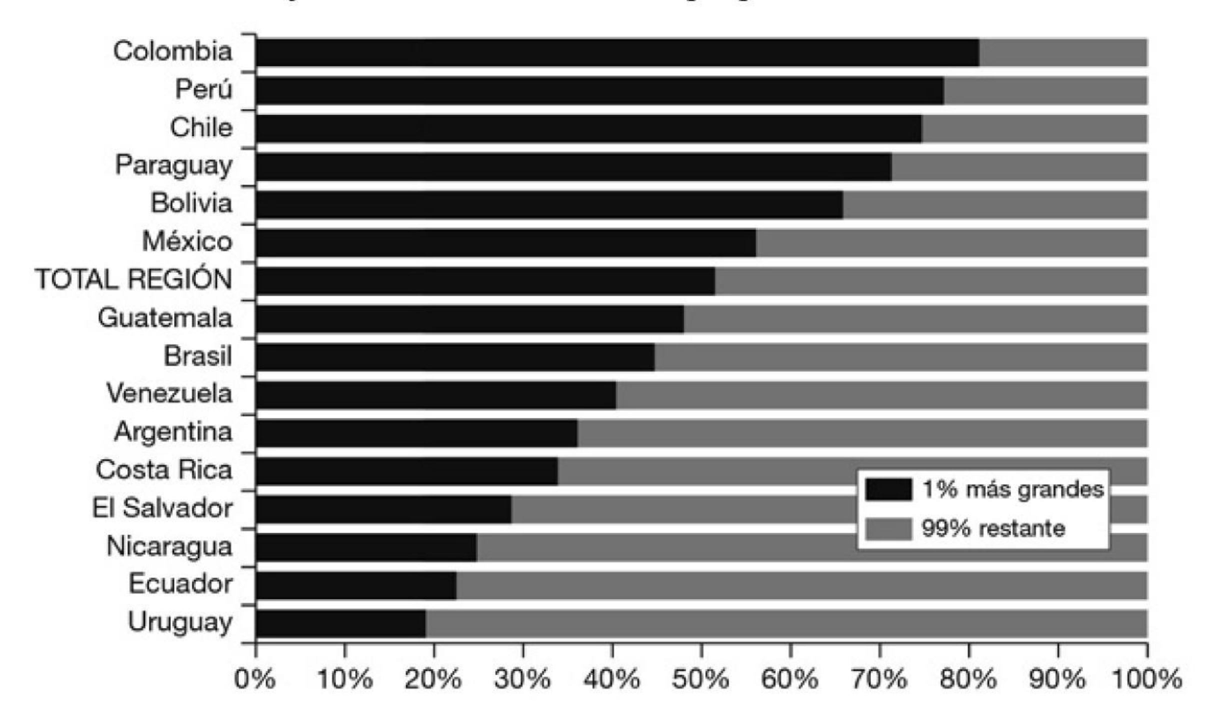
– En Brasil, el 1 por 100 de las propiedades rurales ocupan el 50 por 100 del área rural, mientras el 1 por 100 de propietarios posee el 47 por 100 de tierras cultivables. La industria agropecuaria ha empujado una mayor concentración de la tierra desde su poder económico, que suponía, en 2017, el 23,5 por 100 del PIB de Brasil. Los pequeños agricultores representan el 80 por 100 de la población rural, pero poseen menos del 18 por 100 de las tierras cultivables. Hay 12 millones de campesinos sin tierra en la indigencia, aunque 166 millones de hectáreas permanecen sin ninguna utilidad.

– En Argentina, el 0,94 por 100 de latifundistas controla el 33,89 por 100 de la totalidad del territorio argentino. El 99,06 por 100 restante controla apenas el 66,11 por 100. En Argentina, el promedio de extensión de los latifundios supera las 22.000 hectáreas.

– En Guatemala, el 92 por 100 de los pequeños productores dispone del 22 por 100 de la tierra del país, mientras el 2 por 100 de latifundistas acapara el 57 por 100 de la tierra cultivable.

– En Colombia, el 1 por 100 de propietarios posee el 81 por 100 de la tierra cultivable. El 0,1 por 100 de las fincas con extensiones superiores a las 2.000 hectáreas ocupan el 60 por 100 de la tierra. En 1960, el 29 por 100 de Colombia lo formaban fincas de más de 500 hectáreas; en 2002, la cifra ascendió al 46 por 100 y, en 2017, alcanzó el 66 por 100. Después de medio siglo de guerra, cifras oficiales indican que, en 2019, «solo se utilizan 7 de las 22 millones de hectáreas con vocación agrícola» que hay en Colombia.

Porcentaje de tierras en manos de propietarios latifundistas



Fuente: Oxfam (2016) y cálculo propio para Colombia a partir de DANE (2016b).

El latifundismo es, además, una fuente interminable de violencia e inestabilidad, que castiga de muchas formas a los pueblos y las economías. Países como Guatemala o Colombia vivieron hasta hace poco tiempo un conflicto de dos siglos que tenía (y sigue teniendo) como epicentro la distribución de la tierra. La guerra de 40 años de la oligarquía guatemalteca contra los indígenas mayas, que provocó el último genocidio del continente, era, en el fondo, la guerra del latifundio contra los campesinos desposeídos, una guerra teñida de racismo y del miedo que la minoría oligarca tiene de la mayoría indígena desde los tiempos de la colonia. En Colombia, los colombianos reconocen que la guerra que asoló el país desde hace un siglo es una guerra por la distribución de la tierra. Las sociedades latinoamericanas son, pues, sociedades estancadas y fracturadas, con índices elevadísimos de violencia en el campo que, en muchos casos, recuerda películas del Far West, aunque eso, en Estados Unidos, sea desde hace un siglo simplemente tema de películas y novelas. En Colombia, país con una violencia rural crónica, entre 1985 y 2003, 1.678 campesinos fueron asesinados, según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). Y según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019, 837 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y excombatientes de las FARC fueron asesinados en Colombia. Incluso en el pulcro Chile, y atendiendo cifras del Ministerio de Interior, desde 2018 al presente hay registradas 558 víctimas de la violencia rural en las regiones del Biobío, La Araucanía y de Los Ríos.

En octubre de 2007, el Movimiento de los Sin Tierra (MST) de Brasil, denunció que, «luego de la reocupación de un área que fue tomada al inicio de la mañana de ese mismo día, más de 40 pistoleros fuertemente armados, pertenecientes a una milicia que actúa bajo la fachada de la empresa NF Seguridad, invadieron el Campamento Tierra Libre, en el sector de los experimentos de transgénicos, y ejecutaron a quemarropa al compañero Valmir Mota de Oliveira, conocido como Keno». Según el MST, «en 2006 se registraron 76 casos de conflictos de tierras en Paraná. Entre 1994 y 2002 ocurrieron 16 asesinatos de trabajadores rurales Sin Tierra; 31 trabajadores fueron víctimas de atentados; 47 fueron amenazados de muerte; 7 fueron víctimas de tortura y 324 quedaron heridos. No hubo castigo para los autores intelectuales y materiales de los crímenes». Más aún, según el MST,

los hacendados latifundistas se han organizado en grupos, «para reprimir con violencia cualquier intento de reforma agraria. En la región Noroeste existe la Unión Democrática Rural (UDR), presente también en otras regiones del país; en la región Centro-Oeste se creó el Primer Comando Rural (PCR); en la región Oeste existe la Sociedad Rural del Oeste (SRO), liderada por el latifundista Alessandro Meneghel, el mismo que, en abril, creó el Movimiento de los Productores Rurales (MPR). Los objetivos son: formar grupos paramilitares fuertemente armados para asesinar campesinos y desmovilizar la lucha de los movimientos sociales». En noviembre de 2016, después de dieciocho años, el presidente de la UDR, Marcos Menezes Prochet, fue condenado por la muerte del trabajador sin tierra Sebastiâo Carmargo. Durante la mañana del 5 de enero «cuando un pequeño grupo de trabajadores se dirigía al río Traíra para abastecerse de agua, fueron sorprendidos por los vigilantes quienes descargaron sus armas vil y cobardemente». Esto pasó en Brasil, en enero de 2019, no en Texas 1880, según denunció la Comisión Pastoral de la Tierra. Por su parte, la Red Eclesial Panamazónica/REPAM-Brasil, protestó por el asesinato de 12 líderes comunitarios hasta junio de 2019. Según la misma Red, entre 1985 y 2018, 1.938 personas fueron asesinadas por conflictos por tierra, agua y trabajo en Brasil, en casi total impunidad, pues el 92 por 100 de los casos no fueron investigados. Estas cosas ocurren en el tercer milenio después de Cristo, en un país cuya clase dirigente aspira a convertirlo en líder regional y potencia mundial. Mientras que en los países desarrollados, y los nuevos que les han seguido en el camino del desarrollo durante el último medio siglo, la tierra y la reforma agraria son figuras del pasado, en Brasil los campesinos siguen luchando por resolver una situación terriblemente anacrónica.

En los últimos años, por otra parte, el latifundismo latinoamericano ha encontrado un poderoso aliado: las transnacionales que promueven las semillas transgénicas. La suma de latifundios y transgénicos, según denuncias, entre otros, del MST, ha dado lugar al llamado «agronegocio, organizado por el latifundio retrasado y por las empresas transnacionales, que quieren asegurar el control de nuestra agua, de los recursos naturales, de la biodiversidad, de las semillas, y robar nuestra Amazonía». El agronegocio es, por tanto, un híbrido del latifundio y el capitalismo. Su origen se remonta a la década de los sesenta, justamente en Brasil, después

del golpe de Estado de 1964, cuando la dictadura militar decidió promover un modelo agroexportador basado en el latifundio, modelo seguido luego por las dictaduras chilena y argentina.

Este modelo encubría una nueva contrarreforma agraria y tenía objetivos múltiples. Por una parte, preservar la alianza con la oligarquía latifundista y combatir a los movimientos campesinos. Por otra, adaptar el latifundio a las necesidades de exportación de las multinacionales estadounidenses –pues por su magnitud podía adquirir enormes cantidades de productos como abonos, insecticidas, semillas, etc.– y garantizar el flujo de productos agrícolas baratos, seleccionados por las mismas multinacionales atendiendo sus necesidades. El fenómeno de los agronegocios ha tenido como efecto perverso el aumento exponencial de las desigualdades en los países y el empobrecimiento de los pequeños y medianos productores, obligados a emigrar o dedicarse a otros cultivos (como la marihuana o la coca), así como realidades tan atroces como que México, origen de las culturas indígenas del maíz, deba hoy importar ese grano de Estados Unidos debido a la ruina que la política agraria mexicana, alentada por Washington, ha provocado en el campo. Como señala el investigador James Petras, las estrategias de desarrollo basadas en el agronegocio «no son empujadas por la "tecnología", sino por patrones de tenencia de la tierra». Es decir, el modelo no es introducido para promover una revolución agraria en los países, sino para impedirla. Tanta importancia ha adquirido este modelo agroexportador que se habla de las «repúblicas unidas de la soja», selecto club integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, por orden de importancia. Según la organización Oxfam, las «repúblicas unidas de la soja» producen más de la mitad de la soja que se consume en el mundo. «Entre 1990 y 2014, triplicaron el área de cultivo y quintuplicaron la producción hasta alcanzar conjuntamente más de 150 millones de toneladas en 60 millones de hectáreas, una extensión más grande que la superficie de Paraguay y Uruguay juntos», indicó Oxfam.

Nada mejor para formarse una idea del impacto demoledor que la inmovilidad de la estructura agraria tiene sobre las posibilidades de cambio y desarrollo en la región que recordar las consideraciones de Chen Cheng, quien fuera el «alma» de la reforma agraria y vicepresidente de Taiwán. Esta isla china ha sido y sigue siendo considerada una trinchera del capitalismo en Asia y se cita repetidamente como ejemplo a seguir para

superar el subdesarrollo atroz que afecta a Latinoamérica. Comenta Chen Cheng en su libro *La reforma agraria en Taiwán:*

> De acuerdo con nuestra experiencia, la realización de la reforma agraria no solamente es fundamental para el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo y la promoción de la estabilidad social y política, sino que constituye la fuerza motriz que da impulso al desenvolvimiento económico y la industrialización. El progreso que hemos hecho en la reconstrucción económica se debe en gran parte al influjo de las transformaciones producidas en la agricultura.

En esa misma línea se expresa el economista Pablo Bustelo, en su obra *La industrialización en América Latina y Asia Oriental:*

> En suma, las contribuciones de la agricultura a la industrialización fueron sustancialmente menores en Brasil y México que en Corea del Sur y Taiwán. La razón principal de esa diferencia estriba en la realización de una ambiciosa reforma agraria en los países asiáticos, proceso al que no se asistió en Brasil y que fue mucho menos radical en México. Por tal motivo, el crecimiento agrícola de los dos países latinoamericanos fue más lento y reunió características peculiares que hicieron que su influencia en el desarrollo industrial fuese claramente menos importante.

Otra cuestión que hay que señalar es que la reforma agraria, por sí misma, es no solo insuficiente, sino, peor aún, un engaño absoluto. Para que una modificación de las estructuras agrarias tenga éxito debe necesariamente acompañarse de una revolución educativa, que junto con la tierra facilite a los campesinos educación y capacitación e introduzca medios y tecnología, abra caminos y construya silos, tenga puertos y abra puertas dentro y fuera de cada país, es decir, que sea realmente una revolución agraria. De otra forma, como ocurrió con la reforma agraria de 1954 en Bolivia y la que hizo Cárdenas en México, se quedarán en un simple reparto de tierras, muchas de ellas escasamente productivas. Por lo demás, que casi 200 años después de la independencia la cuestión agraria siga siendo un asunto esencial y pendiente en la vasta mayoría de países de la región, da una medida del nivel de atraso estructural que afecta a Latinoamérica. Inglaterra realizó su reforma en el siglo XVIII y Francia, Alemania y Japón, en el XIX. Taiwán y Corea del Sur, que se independizaron de Japón en 1945, realizaron su reforma y revolución agraria en los años cincuenta y sus efectos fueron definitivos para el desarrollo de sus economías. Lo perverso

de esta situación es que Estados Unidos combatía en Latinoamérica lo que promovía en Corea del Sur y Taiwán. Estos dos países hacían frontera con la República Popular China y la Unión Soviética, y fueron convertidos en escaparate del «mundo libre» frente al «mundo comunista», en el conflicto bipolar. Para esos países se consideró imprescindible hacer lo que en Latinoamérica era tildado de subversivo. En 1954, el coronel y presidente de Guatemala Jacobo Árbenz fue derrocado por afectar unas pocos miles de hectáreas de tierra sin cultivar, propiedad de la United Fruit Co. Un ejemplo más, entre miles, de que las potencias extranjeras atienden exclusivamente a sus intereses, sin importarles absolutamente nada el efecto de sus políticas en un país.

XIX. BIOCOMBUSTIBLES, CONVIRTIENDO EN ATRASO EL PROGRESO

En los últimos años, los biocombustibles –es decir, los combustibles obtenidos «a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos», específicamente biodiesel, bioetanol y biogás– han adquirido un lugar central en la discusión sobre el futuro energético del planeta. Ello se ha debido, esencialmente, a dos causas: por una parte, al cambio climático, que tiene en los combustibles fósiles uno de los mayores factores contaminantes; por otra, al encarecimiento del precio del petróleo, que en ciertos momentos llegó a rozar los 110 dólares por barril, castigando duramente la economía mundial y, sobre todo, las economías de los países más pobres no productores de hidrocarburos. A ello hay que agregarle criterios políticos y estratégicos. Buena parte de las reservas mundiales de gas y petróleo se halla en la región más volátil del mundo –Oriente Medio–, agitada por el extremismo islámico y golpeada por el terrorismo, que hizo eclosión con las invasiones de Afganistán e Iraq, la destrucción de Libia y la atroz guerra padecida por Siria e Iraq a través del llamado Estado Islámico (EI), según las propias cifras oficiales proporcionadas por Estados Unidos. Por último, la irrupción avasalladora de India y, muy particularmente, de China, ha puesto en el tablero mundial a dos nuevas potencias ávidas de recursos energéticos. El potencial que se consideró, a principios de este siglo XXI, tenían los biocombustibles –al menos para un número reducido de países ricos–, fue tal que se los bautizó como el «oro verde», el nuevo maná de la economía mundial, presentado como la solución de futuro al fin del petróleo y una medida casi milagrosa para detener el cambio climático. Los hechos posteriores han atemperado el entusiasmo inicial, pero no el uso creciente de estos combustibles.

La suma de los factores señalados llevó a un grupo de países, con Estados Unidos a la cabeza, a promover fuertemente la producción de biocombustibles, presentándolos como la alternativa ecológica de los combustibles fósiles y como una forma de reducir la dependencia estadounidense del petróleo extranjero (antes de que se descubriera el petróleo de esquisto, que ha hecho a Estados Unidos exportador de este tipo

de hidrocarburo). En marzo de 2007, durante una visita oficial a Brasil, el presidente George Bush firmó con el presidente Lula un acuerdo para potenciar el uso de biocombustibles. En dicho acuerdo, Brasil y Estados Unidos se comprometían a cooperar para establecer un mercado mundial de biocombustibles y fomentar su uso en otras regiones del planeta, comenzando por Centroamérica y el Caribe. Este compromiso tuvo una interpretación inmediata: los biocombustibles tenían el propósito oculto de contrarrestar la influencia adquirida por el presidente Hugo Chávez en el Caribe, gracias al manantial de petróleo que posee Venezuela (un tema hoy sacado de agenda, dada la crisis venezolana).

Brasil es el mayor productor mundial de biocombustibles; Estados Unidos, el segundo, Argentina, el tercero. Estos tres países representan el 80 por 100 de la producción y consumo mundiales de esos combustibles. Brasil dedica 8,59 millones de hectáreas al cultivo de caña de azúcar, con una producción anual que no cesa de crecer. En el ciclo 2018-2019, el país tuvo una producción récord de 33.580 millones de litros, un 23,3 por 100 más que en el ciclo anterior, según datos de la estatal Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab). Estados Unidos, Brasil y Argentina, vale recordar, comparten una singularidad intransferible. Son países inmensos, que pueden dedicar millones de hectáreas al cultivo de materias primas agropecuarias, lo que está fuera del alcance de la inmensa mayoría de países. (Los devastadores incendios que arrasaron enormes extensiones de la Amazonia brasileña en 2019 han hecho frotarse las manos a los latifundistas productores de biocombustibles, entre otros sectores vinculados al latifundio agroexportador.)

Desde que Estados Unidos se pusiera a la cabeza de la campaña mundial a favor de los biocombustibles, se han multiplicado las denuncias, públicas y privadas, sobre los múltiples riesgos que entraña la utilización de plantas de consumo humano, como el maíz y la caña de azúcar, para producirlos. El peligro es tanto mayor en el caso del maíz, un grano esencial para la alimentación humana, usado para producir etanol, aunque su rendimiento deje mucho que desear. Hace falta una tonelada de maíz para producir apenas 420 litros de etanol y una tonelada de azúcar de caña para obtener unos magros 83 litros, aunque la mayor densidad de la caña en relación con la del maíz, hace de la caña una fuente mucho más rentable para producir etanol. Viéndolo desde una perspectiva alimentaria, esas cifras indican que,

para llenar el tanque de una camioneta con 100 litros de etanol, se requiere la misma cantidad de maíz que podría alimentar a una persona durante un año. Siendo el maíz y el azúcar de caña alimentos esenciales, la producción de biocombustibles, aunque haya reducido la competencia con la alimentación, sigue manteniendo altos niveles de contradicción con las necesidades alimentarias de vastos segmentos de población humana. El semanario liberal *The Economist* apuntó, ya en abril de 2006, este peligro:

> Como se emplea más tierra para cultivar maíz y no otros cultivos alimentarios tales como la soja, sus precios también se elevan. Y como el maíz se utiliza para alimentar a los animales, el precio de la carne aumenta también. En otras palabras, el suministro de alimento se está desviando para alimentar a los hambrientos automóviles [estadounidenses].

En términos similares se pronunció *The Wall Street Journal,* en octubre de 2006:

> Los precios de los contratos de azúcar ya están en sus niveles más altos en un cuarto de siglo. Después de que durante la mayor parte de la década pasada la libra se negociara por menos de 10 centavos de dólar, el precio del azúcar ha subido en la New York Board of Trade más de 19 centavos por libra.

En agosto de 2012, el ministro alemán de de Cooperación para el Desarrollo, Dirk Niebel, declaró que «en caso de pérdida de las cosechas de maíz o trigo, el uso del biocarburante E10 conlleva a un incremento exorbitante de los precios de los alimentos». El E10 se refiere a que, por ley, en Alemania, los combustibles deben llevar un 10 por 100 de biocarburantes. «En los campos donde crece el trigo y el maíz para producir combustibles, no pueden crecer los alimentos que los países más pobres necesitan para su nutrición. Así que si los precios de estos productos agrarios suben, los más golpeados serán justamente los más pobres».

El negocio de los biocombustibles se ha convertido, en muchos países de América Latina, en un poderoso sector económico, que ha agravado el fenómeno del latifundismo, ahondado las desigualdades y creado una auténtica amenaza medioambiental, pues es causa directa de la tala incesante de bosques para ampliar las áreas de cultivo de caña de azúcar, maíz o la palma africana, última estrella vegetal para hacer dinero a costa de la naturaleza y la salud humana. En Argentina, la superficie dedicada a la

siembra de maíz o soja no ha cesado de ampliarse, empujada por la demanda del mercado estadounidense. En 2016, el 86 por 100 de las exportaciones de biocombustibles argentinos fueron a parar a Estados Unidos –un país exportador tradicional de granos– que hace un triple juego, de productor de combustibles a base de maíz, exportador de maíz e importador de biocombustibles. Gracias a ese triple juego, Estados Unidos obtiene pingües beneficios, en tanto su vecino del sur, México, paga los platos rotos.

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), significó un duro golpe al campo mexicano, sobre todo contra los pequeños y medianos productores, que se vieron avasallados por la producción proveniente de Estados Unidos. Como señalan Moreno-Sáenz, González y Matus, en su investigación sobre *Dependencia de México a las importaciones de maíz en la era del TLCAN,* de febrero de 2016, «en el periodo 1985-1997 el consumo se abastecía con producción nacional en 86 por 100, mientras que para el lapso de 1998-2010 la cobertura se redujo al 77 por 100, en promedio», y que «en 2011, el 35 por 100 del maíz consumido en el país fue importado. De hecho, después de la apertura comercial en 1994 y hasta 2011, el índice de dependencia osciló alrededor del 23 por 100, mientras que en el periodo previo (1980-1993) fue siete puntos inferior a ese valor». Es decir, el TLCAN ha hecho de México un país dependiente del mercado de maíz estadounidense, con precios oscilantes marcados por la producción de etanol de maíz. «Hemos visto alzas de precios muy fuertes (de los alimentos) desde fines de 2000, luego se repitieron en 2007 y volvieron en 2010 y 2011», afirmará Timothy Wise, director del Programa de Investigación y Política del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente de la Universidad de Tufts. Según Wise, el aumento de precios «coincide con la expansión del etanol en Estados Unidos». «Lo que se ve en México es el aumento del precio de la tortilla de maíz», el alimento tradicional del país, cuyo precio se elevó un 60 por 100 desde 2005, dijo Wise. «El gobierno de México tiene que determinar que está del lado del productor y no en beneficio de las empresas. Tenemos que trabajar sobre una reserva de alimentos, para no depender del extranjero», declaró la activista Olga Alcaraz, de la Red de Empresas Comercializadoras Campesinas de Michoacán.

Pero lo que es la alegría de multinacionales y latifundistas (la revista *Forbes* de febrero de 2007 calificó el biocombustible de alcohol de caña como «la estrella más brillante de los mercados externo e interno»), no puede ocultar la amenaza que esconde para una mayoría de seres humanos. Si damos por ciertas las cifras de la ONU de que hay en el mundo 3.000 millones de personas que viven con menos de dos dólares diarios, un aumento, por mínimo que sea, en el precio de los alimentos básicos –maíz, azúcar, harina– puede provocar una catástrofe alimentaria.

Desde la ONU, el entonces secretario general Ban Ki-moon, denunció que el elevado precio de los alimentos es «uno de los mayores desafíos que afrontan los más pobres del mundo». Razones no le faltan. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en 2012 se consumieron en el país 53.302 millones de litros de etanol de maíz, para lo que se empleó el 40 por 100 de la cosecha total del grano, una cifra considerable para un país exportador de maíz. Otros productos agrícolas, como la soja y el trigo han tenido un alza de precios, el arroz ha duplicado su precio en un año y el maíz tiene el precio más alto de los últimos doce años. La incorporación de Rusia al mercado mundial de cereales –en 2018 desbancó a Estados Unidos como primer exportador de trigo– ha mitigado la cuestión, pero no la ha resuelto. En Europa, la presión que los biocombustibles ha puesto sobre los cereales ha provocado, en varios momentos, el incremento del precio de la carne, los huevos y los productos lácteos, que los ricos europeos pueden pagar, pero que no podrían hacerlo centenares de millones de africanos, asiáticos y latinoamericanos.

Al problema alimentario que crean los biocombustibles debe agregarse otro, no menos grave: el medioambiental. Como señaló el diario *The New York Times* a principios de 2007, el «auge que tiene lugar en el cultivo del maíz constituye un elemento de presión para la tierra que ha sido destinada al Programa de Reserva y Conservación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos». En otras palabras, el aumento del precio del maíz invita a la deforestación y a cultivarlo en todo tipo de superficie, aumentando el desastre medioambiental. Si el efecto dominó cundiera, el mundo sería deforestado para producir biocombustibles. Si tal llegara a ocurrir, sus efectos serían absolutamente devastadores.

Para Latinoamérica, las consecuencias de la euforia por los biocombustibles pueden ser más desastrosas que en Estados Unidos, en

términos medioambientales. Latifundistas nativos y transnacionales agrícolas llevan décadas en guerra contra los ecosistemas, que nunca han dudado en sacrificar en aras del beneficio. El negocio multimillonario que se está abriendo agrega un acicate poderoso para arrasar selvas y bosques, destruir ríos y hábitats, con el fin de convertir las tierras asoladas –en muchos y repetidos casos con incendios provocados, para destruir selva y avanzar sobre lo quemado o sobre el expolio a campesinos pobres, o ambas perfidias a la vez– en enormes campos de cultivos de maíz, soja o caña de azúcar, apoyándose en unas tenues leyes dictadas a su medida.

Dado que el cultivo de materias primas agropecuarias para biocombustibles exige enormes extensiones de tierra, la multiplicación de latifundios está servida. Brasil –donde, como vimos, el 56 por 100 de la tierra cultivable pertenece a latifundios– vive desde hace años una renacida fiebre de concentración de tierras, animada incluso por entes oficiales. En Brasil denuncian también que el renacido furor latifundista está suscitando un empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros del campo, que por siglos han arrastrado una vida semiesclava, atados a la tierra y sin derecho a ella, como señala Julio César Casarin Barroso, en un artículo publicado en el diario de la *Safe Democracy Foundation,* titulado «Brasil, entre los biocombustibles y el hambre»:

> Las condiciones laborales del millón de personas que trabajan en los sembradíos de caña del país son espantosas. De acuerdo con datos citados por Luiz Felipe de Alencastro, en los años ochenta un trabajador cortaba 4 toneladas y cobraba el equivalente a R$ 9,09 (menos de 5 dólares) por día. Hoy, corta en promedio 15 toneladas y cobra cerca de R$ 6,88 por día (menos de 4 dólares). Cada persona necesita cortar por lo menos 10 toneladas para cobrar un sueldo mensual de R$ 413 (200 dólares). A este ritmo de trabajo se atribuye la muerte por extenuación de al menos 17 cortadores de caña en 2006, denunciadas por la Pastoral do Migrante, y eso solamente en los cañaverales del estado de São Paulo, como afirma Luiz Bassegio, secretario de esa entidad, en declaraciones divulgadas por *Folha de São Paulo.*

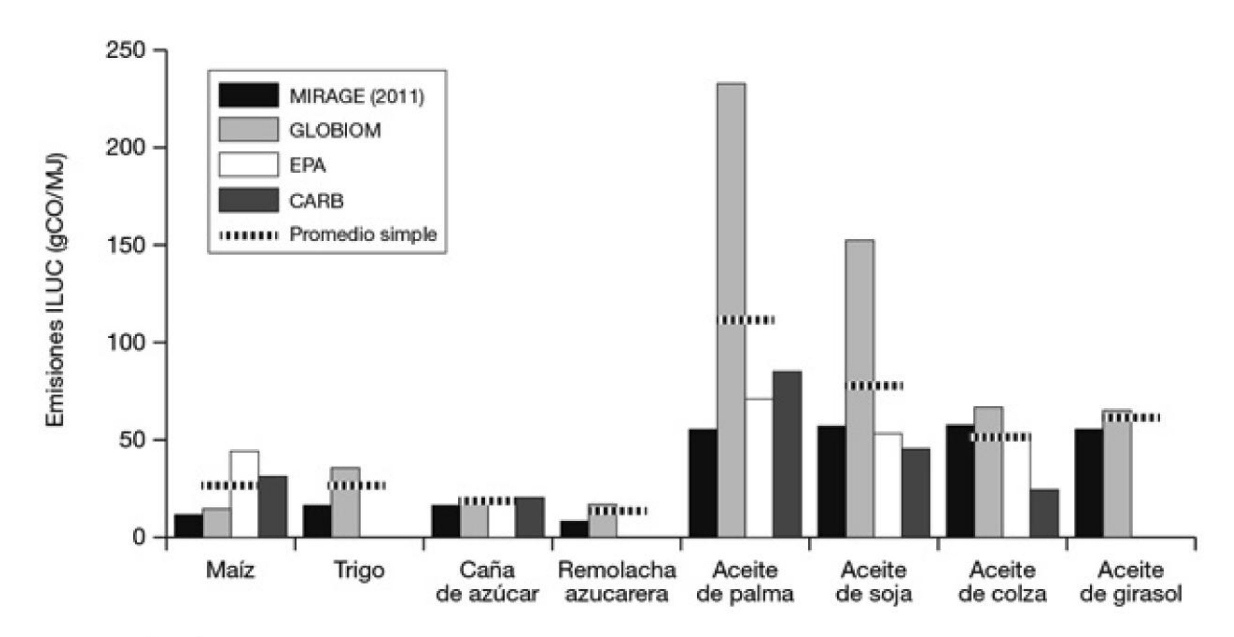
Afortunadamente, tras la euforia de los primeros tiempos parece que la sensatez está volviendo a imponerse. En Brasil, luego del descubrimiento de la mayor reserva de petróleo jamás soñada, que garantiza el autoabastecimiento energético por muchos años, el gobierno de Lula empezó a desmarcarse de la geopolítica basada en los biocombustibles.

China anunció, en enero de 2008, que dejará de usar el maíz para producir etanol a causa de su impacto en el precio de los alimentos. En la UE, las advertencias sobre los riesgos de catástrofes alimentarias y medioambientales han llevado a adoptar una posición de rechazo al cultivo anárquico de biocombustibles. En octubre de 2012, la UE introdujo el concepto ILUC (Indirect Land Use Change o «cambio indirecto del uso del suelo»), definiendo este concepto en los siguientes términos:

> Cuando se producen biocombustibles en las tierras agrícolas existentes, la demanda de alimentos y cultivos forrajeros continúa, y puede llevar a que alguien produzca más alimentos y piensos en otro lugar. Esto puede implicar un cambio en el uso de la tierra (al cambiar, por ejemplo, los bosques en tierras agrícolas), lo que implica que se libera una cantidad sustancial de emisiones de CO2 a la atmósfera. ¿Qué hay de nuevo en la propuesta legislativa?

Dentro de ese nuevo marco, la Comisión Europea rectificó en diciembre de 2016, después de nuevos análisis sobre el impacto de los biocombustibles en la deforestación y el medio ambiente. La nueva normativa establece que, para 2020, los biocarburantes de primera generación o convencionales (es decir, los producidos a partir de materias primas alimentarias) no podrán representar más del 7 por 100 del combustible consumido en la Unión Europea. Ese límite deberá reducirse al 3,8 por 100 en 2030, según la propuesta de plan energético presentado en diciembre de 2016 por la Comisión Europea. Bruselas sostiene en su plan –conocido como «paquete de invierno»– que debe imponerse un «tope» para «reducir al mínimo los impactos indirectos del cambio de uso de la tierra», que contribuye al cambio climático al transformarse masas forestales –que retienen el CO_2– en cultivos. No obstante, en enero de 2019, un nuevo documento dividía los biocombustibles en dos categorías: los altamente contaminante (ILUC) y los no contaminantes. Entre los primeros aparecían el aceite de palma –el mayor, con diferencia– y la soja. Los derivados de maíz, trigo, remolacha y caña de azúcar eran catalogados de no contaminantes, como se puede ver en este cuadro elaborado en el estudio de la Unión Europea:

Resultados sobre ILUC obtenidos de los principales estudios normativos



Fuentes: Cerulogy.

En junio de 2018, la Unión Europea adoptó la decisión de que los biocombustibles de «alto riesgo de ILUC» no deberían ser incluidos dentro de sus objetivos de energías renovables para 2030 y que los biodiesel de aceite de palma y soja deberían ser prohibidos, por su relación con la deforestación y sus altos niveles contaminantes. En el caso de los demás biocombustibles, «la cuota se limitará a los niveles nacionales para 2020 (con una flexibilidad del 1 por 100), con un máximo del 7 por 100». Una posición más avanzada, pero aún lejos del objetivo principal, que es impedir que productos alimenticios sean empleados en producir biocombustibles, en detrimento de las necesidades de centenares de millones de personas.

Esta situación, esperpéntica y dramática, ha llevado al doctor Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, a preguntarse, en un artículo de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI):

> ¿Llenar millones de autos con etanol o llenar millones de estómagos, incluyendo de desnutridos, y conservar economías y culturas que no se compran en ninguna gasolinera ni planta industrial del mundo?

Los efectos medioambientales de los biocombustibles, por lo demás, no se han visto respaldados por la comunidad científica. Aprovechando la

Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, celebrada en Bali, Indonesia, en diciembre de 2007, se realizó una encuesta entre más de 1.000 científicos y delegados de los 105 países presentes. Entre las 18 tecnologías citadas en la encuesta para reducir las emisiones de dióxido de carbono, los biocombustibles fueron considerados los de menor potencial, y la energía solar, la primera. Para hacer más evidentes las contradicciones, en Indonesia se talan los bosques para cultivar aceite de palma con el fin de producir biocombustibles. El éxito comercial del aceite de palma está haciendo de este cultivo una auténtica plaga mundial para los bosques tropicales, al punto que la UE decidió, en junio de 2018, eliminar progresivamente el uso de biocombustibles «de alto riesgo» para 2030, aunque, en una concesión a los países productores de palma, la eliminación progresiva comenzará en 2023.

Obviamente, los biocombustibles no pueden ser descartados de manera tajante, pues otras plantas hay –como la Jatropha curcas o jatrofa, un arbusto originario, al parecer, de Centroamérica, cuyas semillas producen un aceite que se emplea en hacer velas y jabones, y que puede producir hasta 1.800 litros de aceite por hectárea– que pueden servir a esos propósitos sin poner en riesgo el planeta. También habrá otras tecnologías que, en el futuro, podrían hacer viable los biocombustibles. Dentro del esfuerzo por resolver el déficit energético en el mundo, no puede olvidarse el papel rector que le corresponde al Estado, como regulador y promotor. Mientras eso llega, habrá que estar de acuerdo con John Pickett, coordinador de un estudio encargado por la Royal Society sobre los efectos del uso de los biocombustibles: «No debemos crear nuevos problemas sociales o ambientales en nuestros esfuerzos por combatir el cambio climático». En cuanto a las consecuencias que el latifundismo tiene en la refundación y modernización de los países, ya están dichas. Un salto atrás en el tiempo.

El mundo es sacudido de forma recurrente por crisis alimentarias, unas producidas por guerras, otras por el cada día más evidente y duro cambio climático. El Programa Mundial de Alimentos, en su informe de abril de 2019, denunció que 113 millones de personas en 54 países padecieron «niveles elevados de inseguridad alimentaria». Por su parte, el director general de la FAO, José Graziano da Silva, declaró, en la presentación del informe, que, «para poner fin de verdad al hambre, debemos atacar sus

causas profundas: los conflictos, la inestabilidad y los efectos de las crisis climáticas». Debió agregar también las profundas desigualdades y la inmoral concentración de la riqueza en cada vez menos manos.

Ante circunstancia tan dramática cabe apuntar lo siguiente. Asia y Latinoamérica serían, más que nunca, regiones complementarias. Asia está superpoblada, sus recursos para producir alimentos están al límite, si acaso no sobrepasados, pero tiene una enorme liquidez monetaria. Nuestra región está poco poblada, tiene tierras y agua en abundancia, y necesita urgentemente de inversiones y mercados que fortalezcan o generen espirales de desarrollo. Tiene, pues, las mejores condiciones materiales para inundar de alimentos el planeta. Para hacer esto es preciso poner en marcha una inmensa revolución agraria que implique al gobierno, a la empresa privada que esté dispuesta a colaborar, a los sindicatos, a las cooperativas que sigan existiendo y al campesinado.

Como se ha señalado, la reforma agraria es reparto simple de tierra. Una revolución agraria es algo más profundo y de mayor calado. Implica reformar la tenencia de la tierra, poner en marcha una vasta campaña educativa para introducir nuevas y mejores técnicas de producción agropecuaria, para producir más en menos espacio y gastando menos. Es decir, producir con la máxima eficiencia posible. Es abrir caminos que comuniquen las zonas productivas con las zonas de acopio, y estas, con puertos y carreteras. Es educar a los pequeños y medianos productores en las bondades de la producción cooperativa (base del éxito del sector agropecuario europeo), enseñándoles a organizarse como cooperativas de base social-capitalista. Es introducir sistemas de racionalización en el uso del agua, para gastarla menos y aprovecharla más, lo que debe ir acompañado de la reforestación de las riberas y cuencas de ríos, arroyos y lagos, así como de la recolección de aguas en los periodos lluviosos para aprovecharlas en verano. Se trataría, en definitiva, de sacar a los países del siglo XVIII y plantarlos, de golpe, en el siglo XXI. Dicho eso, también hay que dejar consignado lo siguiente:

– Los biocombustibles han expandido el latifundismo y creado poderosos grupos de presión internos y externos con graves consecuencias para los pueblos, el medio ambiente y el duro, durísimo proceso para sacar a la región de su atraso secular.

– Los indudables beneficios económicos que se derivan de los biocombustibles han acrecentado las desigualdades y fortalecido a los grupos oligárquicos en perjuicio de los pueblos y países. Esa realidad hace imprescindible la intervención del Estado tanto para establecer condiciones laborales y sociales justas, como para reducir cuanto sea posible el daño terrible que están sufriendo los ecosistemas y los pueblos indígenas que han habitado por miles de años las selvas tropicales.
– El Estado deberá, cuando eso sea posible (si acaso algún día lo es), reducir y controlar el poder de los grupos latifundistas y, en su momento, someter los latifundios, no solo a medidas que combatan el cambio climático, sino y sobre todo, nacionalizar esos latifundios, para liberar a los países de las oligarquías latifundistas y poner a disposición de los Estados medios de financiación para promover los cambios estructurales y hacer realidad la justicia social.

XX. RECURSOS NATURALES PARA PERPETUAR ATRASO Y DEPENDENCIA

No son la agricultura y los latifundios la única medida del atraso. El tratamiento dado a los recursos naturales en algunos países enormes y variados es otra referencia de los niveles de anclaje de las clases oligárquicas en estructuras precapitalistas. El petróleo en Venezuela, Argentina y México, y el salitre y el cobre en Chile son los ejemplos más contundentes de la diferente concepción sobre su aprovechamiento. En la Inglaterra industrial, el carbón se convirtió en motor de su crecimiento económico, dando lugar a intensos procesos de investigación, desarrollo y mecanización. Se creó una densa red de industrias en torno al carbón, en un proceso imparable que llevó al país a optimizar el recurso natural. Igual aconteció en Estados Unidos con los yacimientos petrolíferos descubiertos, que fueron la base para que el país se convirtiera en una potencia científico-técnica, además de industrial y comercial, en el campo de la minería, el petróleo y el gas. A finales del siglo XIX, Estados Unidos se había convertido –además de en una potencia agrícola, a partir de la revolución agraria realizada a lo largo del siglo– en una potencia tecnológica y un semillero de geólogos, gracias a la inversión en investigación y desarrollo aplicada a la minería. En otras palabras, Estados Unidos, país gobernado con criterios capitalistas, optó por invertir en la educación minera y petrolera para optimizar los recursos naturales en su propio beneficio. En Latinoamérica, gobernada por oligarquías atrincheradas en el precapitalismo, no existía otra idea de aprovechar sus recursos naturales que entregarlos a empresas extranjeras, sin pensar nunca en crear centros de investigación para aprovechar esos recursos para desarrollar sus países. Por lo demás, los dueños del carbón inglés eran ingleses y los dueños del petróleo de Estados Unidos, estadounidenses, como era lógico e imprescindible que ocurriera (y sigue ocurriendo), si se quería fortalecer a los países. La lógica de las empresas extranjeras es minimizar las inversiones y magnificar las ganancias, que son, sistemáticamente, remitidas al país de la empresa extranjera, que es, en última instancia, el verdadero gran beneficiario.

El tema del petróleo merece atención especial, pues, como señala el antropólogo Marvin Harris, el control de la energía es el control del poder. Podría uno pensar que lo ocurrido en el siglo XIX sucedió así porque era el siglo XIX, pero que mucho han variado las cosas en el mundo y esas reglas ya no son válidas. Nada más opuesto a la realidad. En 1965 se encontraron los primeros yacimientos petrolíferos en el mar del Norte. Tres países, Reino Unido, Noruega y Holanda, fueron los beneficiarios. De ellos, la parte del león correspondió a Noruega. El petróleo se consideró desde un principio de dominio estatal y para su explotación se constituyeron empresas estatales. En 2007, las compañías noruegas Norsk Hydro y Statoil (propiedad del Estado en un 43,8 por 100 y un 70,9 por 100 respectivamente) decidieron fusionar sus unidades de crudo y gas para crear una empresa que fuera líder mundial en la explotación de recursos energéticos en el mar. El Estado noruego controla un 62,5 por 100 del grupo empresarial. Cuando se descubrieron los yacimientos petrolíferos y de gas, Noruega carecía de experiencia y tradición en el ramo. No obstante, como señala un portal de internet del gobierno noruego:

> Al principio, gran parte de los conocimientos provenían de empresas extranjeras, pero en la actualidad Noruega posee una industria petrolífera muy desarrollada, internacional y competitiva. Esta abarca las compañías de petróleo, la industria abastecedora y las instituciones científicas y de investigación. El sector provoca fuertes impulsos en cuanto a innovación y desarrollo tecnológico, pero también en otros ámbitos del comercio noruego.

Noruega, país capitalista, entendió la regla esencial de que debía crear su propia industria y sus propios centros de investigación, y utilizó la bonanza petrolera para crear una industria nacional, que permitiera revertir en el país los beneficios ingentes que dejaba el maná energético. Pasó de la dependencia de empresas y técnicas extranjeras a la autonomía y a ser ella misma una potencia científica y técnica en materia energética. En ese sentido, Noruega actuó después de 1965 como Japón a partir de 1868. Un siglo después de la «Restauración Meiji», la regla seguía manteniendo su plena efectividad. Si no se tiene la capacidad y la tecnología, se adquiere fuera para, posteriormente, utilizando los recursos, el apoyo y la dirección del Estado, crear una industria y una tecnología nacionales que permita optimizar los beneficios y darle el máximo valor agregado al producto o

materia prima de que se trate. Siempre vale más el diamante tallado finamente que el diamante en bruto. (Caso similar es el de la República Popular China, que exigía –y sigue exigiendo, aunque ahora con menos rigor– a las empresas que quisieran establecerse en su mercado, transferir su tecnología a China. Gracias a esa continua transferencia de tecnologías ha alcanzado la cotas gigantescas que tiene hoy.)

Similar es el caso de Holanda, que fue por décadas el mayor productor de gas natural de Europa occidental y un gran productor de petróleo, merced a los yacimientos existentes en la plataforma continental del mar del Norte. Empresas holandesas explotan esos yacimientos y han aprovechado su existencia para construir una inmensa estructura industrial, científica y tecnológica. El puerto de Róterdam dispone de refinerías y compañías de transbordo de petróleo y gas. En el presente, como puede leerse en el portal Holandacaye,

> Holanda posee cuatro grandes empresas de construcción de acero, capaces de diseñar y construir completas refinerías químicas y de petróleo, o plataformas de perforación marina. Además, decenas de empresas se han especializado en aparatos específicos. También hay varios institutos de investigación que disponen de facilidades de laboratorio para la simulación de las condiciones de las plataformas en modelos a escala.

En los Países Bajos han ido mucho más allá, a partir de sus yacimientos energéticos, como deja constancia este reporte oficial de mayo de 2016:

> La industria energética tiene una buena posición en áreas como las energías renovables y la eficiencia energética. Concretamente, destacan la energía eólica y la biomasa. Para el año 2050, el país pretende tener un sistema energético sostenible, seguro y asequible, habiendo reducido en un 50 por 100 de las emisiones de CO_2 y generando el 40 por 100 de la energía a través de fuentes renovables. La industria energética holandesa está investigando la obtención de energía proveniente de las olas, las algas y la biomasa. Además, se han desarrollado soluciones innovadoras en la producción descentralizada de energía en los invernaderos. De hecho, la proporción de capacidad instalada de energía descentralizada es muy elevada en los Países Bajos, en comparación con los países de su entorno. A todo ello, se suma el papel central de los Países Bajos en el mercado europeo de gas, la elevada experiencia en eficiencia energética y su prestigio internacional en la investigación en el campo de las energías renovables. El sector de la energía se caracteriza por estar liberalizado y moderadamente concentrado.

En Latinoamérica la dinámica ha sido, en términos generales, la opuesta. La casi totalidad de sus recursos naturales ha sido entregada, bajo diferentes formas, a empresas extranjeras. En Chile, hoy modelo de desarrollo según los países ricos, el cobre es explotado desde 1880 por y en beneficio de empresas extranjeras. Reprivatizado hace dos décadas, este mineral está explotado en un 65 por 100 por empresas foráneas, correspondiendo a la estatal Codelco el resto de producción. Pese a que han transcurrido casi 140 años del descubrimiento de los inmensos yacimientos de cobre, Chile no ha sido capaz de generar una potente industria nacional cuprífera como hicieron Noruega y Holanda con los hidrocarburos. El cobre es un mineral con una gama enorme de aplicaciones, de la construcción a la medicina; no obstante, Chile no exporta productos elaborados de alta gama. Casi la mitad de sus exportaciones son mineral en bruto, exactamente igual que en 1880. Del progreso limitado del país en ese rubro da medida el hecho de que, en 2008, miles de toneladas se acumularon en minas y depósitos improvisados porque no había en el país capacidad para procesarlas. El cuasi capitalismo reumático chileno se atasca en el cobre justo cuando el mineral tiene una demanda astronómica.

En marzo de 2019, el FMI, el BM y la CEPAL llamaron la atención sobre la dependencia de Chile de los precios del cobre. Cuando, en 2014, el valor de dicho metal se hundió, a 2,36 dólares la libra –el peor precio desde 2009–, la economía chilena chirrió. En el periodo 2010-2012, con los precios del cobre altos, la economía chilena había tenido un crecimiento sostenido superior al 5 por 100. En 2014 su crecimiento fue de un exiguo 1,9 por 100. En suma, si el precio del cobre sube, Chile sube; si el precio baja, Chile baja; si el cobre se hunde, Chile se hunde. El FMI resumía en estos términos la dependencia: «La economía chilena se está recuperando de una prolongada desaceleración que comenzó con la caída de los precios del cobre en 2011 y se intensificó en los últimos dos años. Después de varios años de deterioro constante, el saldo fiscal general registró una mejora sustancial de aproximadamente 1 por 100 del PIB esperado en 2018, debido a mayores ingresos del cobre y un gasto menor». El peso del cobre en la economía chilena es tal que, como señaló Gustavo Lagos, del Centro de Minería de la Universidad Católica, «determina en un altísimo porcentaje el valor del dólar y el del peso chileno». Según Lagos, «El crecimiento de las exportaciones de otros sectores es muy malo. No hay

ninguna industria que pueda siquiera ser un relevo […]. Si de aquí a diez años no tenemos un cambio fundamental en ese modelo, este país no va a conseguir crecer a tasas mayores del 3 por 100». Chile lleva décadas realizando esfuerzos para diversificar sus exportaciones logrando, en 2018, que la venta de otros productos representara el 51 por 100 del total, alcanzado los 38.000 millones de dólares. Una cifra considerada histórica para Chile, pero que deja otra lectura: el cobre representa el 49 por 100 de sus exportaciones. Por demás, los otros productos de éxito son salmón, vino y aceite de oliva, productos que alegran cualquier mesa, pero que tienen escaso agregado tecnológico. Dicho de otra forma, Chile, hoy, como hace dos siglos, sigue exportando materias primas y dependiendo, para mantener a flote su economía, de los vaivenes del precio del cobre, que es determinado por la demanda de países asiáticos, China en primer término.

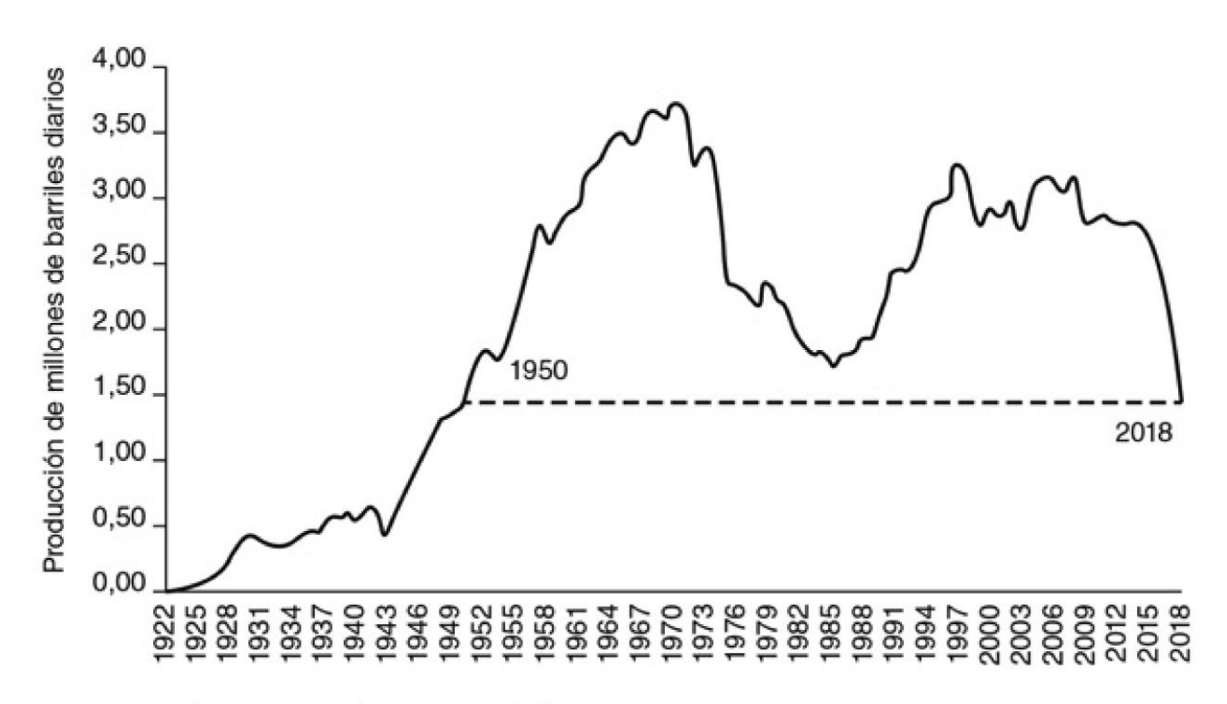
En Venezuela ha ocurrido algo similar con el petróleo. En 1914 fue descubierto el pozo de Zumaque, en el estado de Zulia, sin que los ingentes ingresos producidos por el petróleo fueran utilizados para modernizar e industrializar el país. Ocurrió casi lo contrario. El maná petrolero determinó el abandono del campo y la constitución de una economía monoexportadora. Durante la llamada IV República (1958-1998), el país recibió alrededor de 250.000 millones de dólares por petróleo (valor de aquella época, atención, que habría que multiplicar por tres o hasta por cinco, para tener idea de la magnitud de los ingresos petroleros), sin que ese maná increíble fuera invertido en convertir a Venezuela en una potencia económica y técnica, y en construir una base industrial y científica. Al contrario, hizo de Venezuela una sociedad dependiente del petróleo, que lo importaba todo y derrochaba el recurso en un festín interminable de corruptelas escandalosas. Sobre la corrupción de ese largo periodo hay abundante información, pero hay unos datos que dan una medida cabal de los niveles de sangrado a los que fue sometido el país por las oligarquías dominantes, centradas en los dos partidos históricos, Acción Democrática, socialdemócrata (al menos de nombre) y Copei, democristiano, y es la escandalosa evasión de divisas que sufría Venezuela y que, finalmente, la llevaron a la bancarrota más total:

Ingresos y egresos de divisas de Venezuela. Periodo 1983-1988 (millones de dólares)

Periodo considerado	*Ingreso de divisas*	*Egreso de divisas*	*Saldo*
1983-1988	86.765	90.169	-3.404
1983-1985	49,625	45.748	3.844
1986-1988	37.140	44.383	-7.243

No son pocos los que achacan el desplome de Venezuela al gobierno de Hugo Chávez y, con más fuerza, al de Nicolás Maduro. No obstante, y sin excluir gravísimos errores en estos gobernantes (como no haber creado un fondo de ahorro, como sí hizo y sigue haciendo Noruega, para la época de vacas flacas, que siempre llegan), el mal se instaló en Venezuela desde el descubrimiento y explotación del petróleo hace un siglo. El país pasó, de repente, de una sociedad agropecuaria que vivía del trabajo y el esfuerzo diario, a una sociedad «petrolizada», donde el chorro de dólares que entraba anualmente fue creando una sociedad rentista y zángana (perdón a los que la expresión pueda ofender), que dejó de ser productiva para convertirse en consumidora neta. El cáncer se instaló en la economía sobre un mar de petróleo. Todo fue de maravilla, hasta 1979, cuando la burbuja petrolera estalló y el país, como el cuento del rey desnudo, fue bajado de forma traumática a la realidad. Para 1979, sesenta y cinco años después de haber sido descubierto el pozo de Zumaque, el país no tenía industrias, no tenía infraestructuras y, peor aún, no producía alimentos. China necesitó sesenta años para convertirse en superpotencia; Venezuela, sesenta y cinco para autodestruirse.

Evolución de la producción petrolera venezolana



Fuentes: Baptista (2002), Pdvsa y Ecoanalítica.

El auge petrolero en Venezuela se dio entre 1950 y 1978. Casi cuatro décadas para hacer del país una gran potencia económica, industrial y científico-técnica. No hubo inversión, solo consumo desenfrenado.

Venezuela es el caso más dramático del fracaso de las oligarquías latinoamericanas, pues en este país, por más de medio siglo, dispusieron de dinero en magnitudes tales que pudieron convertirlo en modelo de éxito. Pero el asombro y la perplejidad no pueden quedarse en un solo país en un momento dado. Hace falta una perspectiva más prolongada en el tiempo. Por ejemplo esta: ¿cómo es posible que, después de siete o veinte revoluciones industriales y científicas, cuando el mundo está inmerso en una nueva y aún más vertiginosa revolución científica, con la informática como epicentro, Latinoamérica siga de espaldas al mundo? ¿Cómo es posible que, inmersos en el siglo XXI, ningún país en la región haya asumido, como lo han hecho Corea del Sur, Taiwán, India o Irán la promoción de ámbitos de investigación que saquen a la región de su crónico atraso científico y técnico? ¿Dónde están los proyecto de desarrollo de sistemas informáticos, medicamentos innovadores, aeronáutica o nanotecnologías?

Mientras que en Europa y Estados Unidos los Estados protegían y promovían a sus empresas petroleras para convertirlas en poderosos agentes de sus intereses y bienestar, creando grandes centros de investigación y desarrollo, unas industrias potentes y unas más potentes multinacionales, en Latinoamérica los recursos energéticos y mineros se convirtieron en el plato principal de los enormes festines que cíclicamente se celebraban con los recursos naturales. En vez de ser convertidos en motor esencial de desarrollo y en pilares para promover ciencia y técnica, solo sirvieron para financiar una inmensa corrupción y apuntalar en el poder a una clase oligárquica, holgazana y apátrida, lo que ha hecho más profundo el atraso y mayor la dependencia científica y técnica. Durante la «era del neoliberalismo», en las décadas de los ochenta y los noventa del pasado siglo, los bienes nacionales se subastaron al mejor postor, siendo su ejemplo más obsceno el gobierno de Carlos Menem, en Argentina, donde por vender, vendieron todo, entre ellas la empresa estatal del petróleo Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), comprada por la multinacional española Repsol, en 1992. El proceso fue revertido por la presidenta Cristina Fernández quien, en 2012, emitió un decreto ordenando la renacionalización de YPF. Una vía similar a la seguida en Venezuela y Bolivia, con Chávez y Evo Morales, que no dudaron en renacionalizar los recursos energéticos estratégicos (y otros no energéticos), como ocurrió con el gas en Bolivia, con el fin de recobrar el control de la economía nacional, aumentar los ingresos del Estado y redistribuir esos ingresos entre las capas más desfavorecidas de la población.

Este *modus operandi* de las oligarquías latinoamericanas ilustra mejor que nada la mentalidad arcaica que las domina y que se reproduce con cada nueva generación, no importa dónde sean enviados a estudiar sus hijos o qué centros universitarios pisen. Como ilustran los casos del carbón y el petróleo, frente a un recurso natural, un empresario capitalista entenderá el potencial que posee a efectos de su explotación y aprovechamiento, se trate de riqueza minera, pesquera o maderera. Para explotarla, buscará, si no lo tiene propio, el capital necesario que le permita iniciar su explotación o aprovechamiento, lo que le llevará a adquirir, si se trata de pesca, barcos pesqueros y personal especializado. Con el beneficio de la pesca instalará una fábrica de conservas. Luego, con los beneficios obtenidos, hará por abrir una fábrica de harina de pescado para aprovechar tanto los desechos

como el pescado sobrante no comercializable. Usará los nuevos beneficios para procurar aumentar su flota pesquera y la calidad y cantidad de enlatado, etc. También para montar laboratorios y centros de investigación donde científicos a su cargo trabajarán para encontrar nuevos y mejores sistemas para aprovechar el recurso de que se trate. De esa forma, el empresario, la cooperativa, el mediano o pequeño productor, logrará multiplicar su capital, crear empleo, potenciar la investigación y el desarrollo y, todo eso junto, contribuir a hacer más próspero al país.

Desde una mentalidad precapitalista, la dinámica será la inversa. El individuo verá las riquezas naturales como un medio de obtener riqueza rápida y fácil, sin arriesgar ni preocuparse por nada. Buscará empresas capitalistas extranjeras para ofrecerles los recursos a cambio de un pago (o soborno) y empleará el dinero obtenido en construirse una mansión en el país o –con mayor posibilidad– fuera de él; depositará una cantidad importante en un banco extranjero (pues como no confía en el país ni en su futuro, lo prefiere fuera) y se dedicará a vivir la vida, regocijándose en lo listo y ágil que ha sido, pues logró enriquecerse a costa del país. La empresa extranjera agotará el recurso y, una vez agotado, se irá (no es su país) a buscar otros caladeros donde haya gobiernos corruptos que le entreguen nuevas concesiones. El individuo en cuestión habrá acumulado riqueza, pero su país ha quedado más pobre, no se ha generado empleo y el agotamiento de los recursos provocará daños medioambientales de altísimo costo. Este *modus operandi* puede rastrearse de México a Argentina y ayuda a entender por qué la política de privatizaciones fue aplicada con tanto entusiasmo en toda la región.

El economista de Harvard Lester Thurow puede ayudar a entender esta conducta. En su libro *La guerra del siglo XXI,* Thurow diferencia entre *establishment* y oligarquías, explicando el *modus operandi* de cada uno de ellos. Según Thurow,

> la meta fundamental de un *establishment* es asegurar que el sistema funcione, de modo que a la larga el país tenga éxito. Un *establishment* confía en que, si el sistema funciona y si el país va bien, sus miembros prosperarán personalmente. Un *establishment* seguro de sí mismo no necesita que un interés propio sea el valor supremo cuando toma decisiones públicas […].
>
> En cambio, una oligarquía es un grupo de individuos inseguros que acumulan fondos en cuentas bancarias suizas secretas. Como creen que deben atender siempre a su

> interés personal inmediato, no los atrae la idea de invertir su tiempo o su esfuerzo en mejorar la prosperidad a largo plazo del país. Dicho francamente, no confían en que, si su país tiene éxito, ellos lo tendrán.

Señala Thurow que, ante las necesidades del país, uno u otro grupo reaccionarán de forma distinta. «Si una oligarquía diseña un sistema impositivo, montará el sistema de modo que ella pague el mínimo impuesto posible. […] En cambio, el *establishment* rebajará en último término sus propios impuestos […].» Piénsese, por ejemplo, en la carta firmada, en junio de 2019, por 19 multimillonarios estadounidenses, en la que les decían a los candidatos presidenciales «es hora de cobrarnos más impuestos», pidiendo el establecimiento de una tasa especial para hacer realidad el cobro de más impuestos, que ayudara a reducir la brecha cada vez mayor entre pobres y ricos. «Estados Unidos tiene una responsabilidad moral, ética y económica de gravar más nuestra riqueza», afirmaron. Obviamente, estos archimillonarios no son hermanitas de la caridad, pero sí son conscientes de que un colapso social dañaría seriamente sus intereses, dado que el 1 por 100 de ricos aumentó su patrimonio en 21 billones de dólares, mientras el 50 por 100 de población vio disminuidos sus ingresos en 900.000 millones de dólares. Ahora, el punto: ¿alguien ha leído, escuchado o visto a algún grupo de archimillonarios latinoamericanos pidiendo pagar más impuestos para mejorar las escuelas, los centros de salud o las pensiones?

La diferencia en estas posiciones está en que a las oligarquías no les interesa el país, sino, esencialmente, sus intereses particulares. En caso de contradicción entre sus intereses y el país, sacrificarán al país, que es lo que está ocurriendo en Venezuela, en los últimos años y lo que ocurrió en el Chile de Salvador Allende, entre 1970 y 1973, en Nicaragua, entre 1980 y 1990 o en Bolivia, en su duro presente, tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, el mejor presidente de la devastadora historia boliviana. Tal ha sucedido históricamente en Latinoamérica, donde las oligarquías solo han sabido velar por sus intereses. Al *establishment,* en Estados Unidos, le interesaba, desde el momento mismo de la independencia, que el país tuviera éxito, pues había vinculado su prosperidad como clase a la prosperidad del Estado en su conjunto. Por tal razón se preocupaba de que la economía creciera y de que sus empresas y fábricas prosperaran, para lo

cual no dudaba en adoptar medidas proteccionistas que las salvaguardaran de la competencia extranjera.

Quizá pocas frases puedan resumir mejor esta amalgama entre *establishment* y país que la expresada por Charles Erwin Wilson, el entonces presidente de la multinacional por excelencia, General Motors, en una comparecencia ante un comité del Senado de Estados Unidos, que examinaba la designación de Wilson como secretario de Defensa. Preguntado Wilson en 1953 si, como secretario de Defensa, sería capaz de adoptar decisiones que perjudicaran a General Motors, este respondió que podría adoptarlas, pero que no se imaginaba que pudiera darse una situación así «porque durante años yo pensé que lo que era bueno para el país era bueno para General Motors y viceversa». La práctica totalidad de las oligarquías latinoamericanas, hasta fecha, aún no han descubierto esa centenaria forma de proteger sus intereses y los del país, razón por la cual hoy defienden, por ejemplo, los tratados de libre comercio con el mismo celo con que los fundadores de los Estados latinoamericanos defendieron los tratados de libre cambio. Es decir, defienden con la misma ceguera que hace 200 años el intercambio desigual, que condena a sus países a ser proveedores de materias primas y consumidores de productos manufacturados por los países desarrollados. Dicho de otra manera, las oligarquías regionales continúan casadas con el subdesarrollo y la dependencia, y ancladas en los mismos reflejos de subordinación al poder extranjero.

XXI. PENSAR OBLIGATORIAMENTE EN NUEVOS PARADIGMAS

Es pertinente aclarar que, iniciando 2020, sería ingenuo y disparatado pensar que los problemas de Latinoamérica serán resueltos aplicando, siglo y medio después, el capitalismo del que hablaron Marx y Weber. Aquel capitalismo tuvo su momento y sus circunstancias, que han desaparecido para siempre, en un mundo que también ha desaparecido para siempre y que está cambiando aceleradamente su geografía del mundo occidental hacia ese «arco del triunfo» asiático, que se extiende de Rusia a India, con la República Popular China recobrando el «imperio del centro».

El capitalismo triunfó en los siglos XIX y XX por dos causas principales. Una de ellas fue la emigración. Entre 1821 y 1924, unos 55 millones de europeos emigraron a distintos continentes, principalmente a América, huyendo de los estragos que provocaba la revolución capitalista que sacudía la mayor parte de Europa occidental. La burguesía se había dado cuenta de que, o creaba una válvula de escape a las legiones de miserables excretados por la industrialización, o los estallidos revolucionarios de 1830 y 1848 podrían terminar barriéndola como clase. La emigración fue esa válvula, y era tan perentoria para la burguesía esa vía de escape que los gobiernos llegaron a financiar los pasajes de los desheredados, con tal de verlos emigrar lejos de sus países de origen. Pero un Estado emisor de emigrantes requiere de un país receptor. Europa encontró, no un país, sino un continente entero. La política migratoria de los países capitalistas europeos fue posible porque al otro lado del mar existían inmensos territorios escasamente habitados. Los países americanos, por su parte, necesitaban ingentes cantidades de seres humanos para poblar esos territorios. Tal complementariedad posibilitó que el capitalismo europeo pudiera desarrollarse sin que se desencadenaran explosiones sociales en cadena, que habrían dado al traste con el modelo, como iba a ocurrir en Rusia en 1917. El destino principal de los desheredados fue Estados Unidos y aquel inagotable capital humano terminará convirtiendo al país en una enorme potencia mundial.

La otra causa que permitió el triunfo del capitalismo fue el imperialismo. Merced a su superioridad en armas y tecnología, un puñado de potencias

coloniales pudo construir grandes imperios y dominar a centenares de millones de personas, que fueron convertidas en esclavos y siervos para las empresas capitalistas y en consumidores obligados de sus manufacturas. Pero el colonialismo no tuvo como único motor la búsqueda de mercados y materias primas. También permitía resolver otra serie de graves problemas: el hambre y el desempleo, por una parte, y la colonización de territorios, por otra. Grandes contingentes de europeos se establecieron a lo largo y ancho de las nuevas colonias, de Argelia a Sudáfrica, de India a Australia, enriqueciéndose la mayoría de ellos y enriqueciendo a sus países.

Latinoamérica, bajo la forma del neocolonialismo, recibió emigración –poca y tardía–, pero la debilidad de los países les hizo víctimas del expolio. El capitalismo no podía triunfar en esta región, no solamente por la incapacidad de las oligarquías para entender el fenómeno, sino porque sus estructuras agrarias precapitalistas y el sometimiento de las oligarquías a Inglaterra abortaron la posibilidad de reales procesos de cambio. Para aprovechar sus riquezas y la inmigración que asomaba, los gobiernos latinoamericanos habrían necesitado, como hizo Estados Unidos, enfrentarse a Inglaterra, primera potencia mundial y campeona de la libre empresa, para proteger sus propios procesos de industrialización. No hubo tal y no hubo industrialización.

Las premisas originarias siguen estando vigentes hoy, pues la región entera sigue manteniendo como asignatura pendiente sus propios procesos de desarrollo. Aun queriendo impulsar el modelo capitalista hoy en boga (que es social-estatal-capitalista), las oligarquías tendrían que apostar por modelos propios, convertirse ellas mismas en *establishment,* refundar los Estados y enfrentarse, inevitablemente, a las potencias que colonizan sus economías. Pero una apuesta tan arriesgada no está en las agendas oligárquicas, que siguen apostando, en una mayoría de países, por la colusión con las multinacionales, los tratados de libre comercio (como el firmado en julio de 2019 entre la Unión Europea y Mercosur) y porque potencias venidas a menos sigan de guardianes de sus privilegios, las restituyan en el poder –en los países donde lo perdieron– o les ayuden a preservarlo –allí donde todavía lo conservan– de los aires huracanados de cambio que sacudieron la región desde 1979 (triunfo de la Revolución sandinista) al presente, aunque Lula da Silva haya sido preso (y liberado en

noviembre de 2019), el gobierno chavista siga sufriendo los embates de la ofensiva imperialista y Evo Morales haya sido derrocado en Bolivia.

El viejo capitalismo, por demás, fracasó estrepitosamente con el Crac del 29, dando origen a una nueva forma de economía, con el Estado como elemento rector. Soñar con imitar a la Europa del XIX, además de repetir el pecado de la imitación, sería una solemne estupidez, pues las condiciones actuales del mundo y de la región nada tienen que ver con las que existían en Europa y en el mundo en el siglo XIX. Olvidemos la imposibilidad de recrear imperios coloniales, como hizo un puñado de potencias europeas. Nuestra región, en las circunstancias que vive, a lo único que puede aspirar es a inundar Europa o Estados Unidos de emigrantes, en unas condiciones que son diametralmente opuestas a las de la emigración europea de los siglos XIX y XX. Si Europa encontró en América y sus coloniales, países y territorios que podían absorber casi ilimitadamente sus riadas de emigrantes, Latinoamérica afronta cada día más dificultades para que los países ricos acepten la emigración latinoamericana, y el ejemplo más claro –y brutal–, lo tenemos en la guerra declarada por Donald Trump desde 2018 contra la inmigración centroamericana. El capitalismo que triunfó a lo largo del siglo XIX terminó de desaparecer con el desmantelamiento de los imperios coloniales y del imperialismo clásico, y quedó enterrado para siempre en las dos guerras mundiales, que fueron, más que mundiales, guerras entre dos grupos de poderosos imperios europeos que, en su condición de imperios, arrastraron a buena parte de la humanidad tras ellos.

El último esfuerzo por revivir el capitalismo de vieja escuela –rebautizado neoliberalismo– naufragó aparatosamente, dejando países despoblados, economías devastadas, gobiernos corrompidos y a los Estados oligárquicos en bancarrota. El foso al que fueron lanzados la mayor parte de países se hizo fuente de la que surgieron la mayor cantidad de gobiernos progresistas de la historia latinoamericana, con Hugo Chávez, Lula, Daniel Ortega, Néstor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y el Frente Amplio uruguayo seguidos, durante breve tiempo, por Manuel Zelaya, en Honduras –derrocado en 2009– y Fernando Lugo, de Paraguay –derrocado en 2012–. Una pléyade de gobiernos que pusieron en práctica nuevos modelos de Estado que respondían, por primera vez, a los intereses de sus pueblos y no a los de las clases que históricamente han poseído gobierno y poder. La contraofensiva reaccionaria, que ha echado por tierra aquellos procesos,

dejan claras lecciones: las elecciones dan el gobierno, no el poder; las oligarquías pueden transigir en un momento dado, por debilidad, interés o miedo, pero siempre van a conspirar contra los movimientos progresistas, hasta lograr su caída y, si pueden, su destrucción; por último, Estados Unidos no acepta los gobiernos de cambio. Más tarde o más temprano reactivará su alianza de un siglo con las oligarquías nativas para devolver a los países a su situación de neocolonias. Esa es, de fondo, la batalla que hoy libra Venezuela, que se libra en Bolivia y que sostienen líderes perseguidos como Lula, Rafael Correa o Evo Morales.

La solución a los problemas de Latinoamérica pasa por dar un salto sobre el capitalismo que se le quiere vender y que no es, en sustancia, más que otra forma de mantenerla en el atraso y la dependencia. Es preciso crear políticas propias en lo económico y social, crear, en suma, modelos propios, adaptados a las condiciones de cada Estado y que, sobre todo, respondan a las circunstancias, necesidades, intereses y sueños de los países y de sus pueblos. Crear ha sido, históricamente, algo poco practicado en estas latitudes, excepción hecha de la literatura y el arte. Crear, por eso mismo, tiene un enorme potencial revolucionario, opuesto a la visión conservadora, que solo propone imitar, imitar, como los monos. Hoy el mundo es multipolar, con China, Rusia e India expandiendo cada día más su poder en el mundo. Este cambio histórico, de magnitud colosal, es sumamente beneficioso para las fuerzas progresistas del mundo y, por supuesto, de Latinoamérica. Saber entender la magnitud del cambio, saber aprovecharlo y sumarse a él es uno de los grandes retos de las fuerzas progresistas y de cambio en la región y el mundo. A nuevos horizontes, nuevos paradigmas, mirando a Asia…

XXII. ENEMISTADOS CON LA CIENCIA Y LA TÉCNICA

Los Estados precapitalistas reducen, en términos generales, sus economías al sector primario y este hecho tiene otro efecto, menos visible pero de consecuencias fatales para el futuro y el desarrollo de un país. Reducidos los países a ser simples exportadores de productos agrícolas, minerales o de escaso valor agregado, las clases oligárquicas nunca echaron de menos nada que tuviera que ver con el desarrollo científico y técnico. No necesitaban de ningún tipo de investigación para mejorar sus técnicas de explotación, pues, en su visión anacrónica del mundo, modernizarse se reducía a adquirir manufacturas elaboradas en Europa o Estados Unidos o, en el mejor de los casos, importar tecnologías extranjeras para adecuar sus explotaciones a las demandas del mercado mundial. Por tal motivo, el estudio de las ciencias y el desarrollo de la técnica carecían de sentido, y la enseñanza se reducía esencialmente al ámbito de las letras.

Tampoco sentían la necesidad de fomentar la curiosidad por los inventos entre estudiantes y profesores, porque esos hábitos eran (siguen siendo) cosas propias de países desarrollados, no de pueblos periféricos. El estudio de las disciplinas científicas, como matemática, física o química, tiene escaso sitio en países cuyas clases dominantes no sienten necesidad alguna de un desarrollo industrial real ni, por tanto, de investigadores que aporten descubrimientos o inventos que las hagan más productivas. Por tal motivo, Latinoamérica es una región que desde muy temprano ha deslumbrado en literatura, poesía y música, pero que ha sido un erial, hasta fechas recientes, para investigadores y científicos, salvo oasis aislados en países como Brasil, Argentina o México, que están a años luz de los grandes centros de investigación del mundo. La persistencia de estructuras socioeconómiocas precapitalistas está en la raíz de la persistencia de esa visión obsoleta de la economía y la sociedad, que tiene como secuela nefasta que quienes han deseado dedicarse a la investigación o a las ciencias, se hayan visto y se sigan viendo obligados a emigrar.

La llamada «fuga de cerebros» («brain drain») es un fenómeno que comenzó a detectarse hace décadas. Fue planteado por vez primera en un foro internacional en la Conferencia de las Naciones Unidas para el

Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), celebrada en Chile en 1972. Según estudios de Susana Torrado, de 1980 y 1982, entre 1961 y 1970 61.000 profesionales, técnicos y afines (PTA) latinoamericanos (científicos, arquitectos, médicos, ingenieros, etc.) emigraron a Estados Unidos. Este fenómeno se multiplicó a partir de la década de los ochenta, y con el colapso general de los Estados latinoamericanos, que produjo su bancarrota económica y social, recibió un nuevo impulso, de forma que la mayor masa migratoria de PTA latinoamericana salió de la región a partir de los años noventa.

Con la emigración de amplios sectores de científicos, técnicos y profesionales, los países experimentan una triple pérdida. Por una parte, pierden por la transferencia de conocimiento y capital humano hacia países desarrollados, lo que a su vez se traduce en una transferencia inversa de tecnología, según fuera definido por la UNCTAD. Por otra, pierden lo invertido en la preparación de esos sectores que, conviene no olvidarlo, requieren más recursos cuanto mayor y mejor es su preparación. Para hacernos una idea mejor, estudios en España, según recogieron medios de comunicación en octubre de 2017, señalan que el costo de cuidar y educar a un hijo/hija hasta los 18 años ronda los 100.000 euros. La formación de un médico le cuesta al Estado 73.000 euros por 15.000 euros un abogado. Un estudio de la UE de 2012 señaló que el costo total medio de formar a un profesional universitario era de 250.000 euros. En Uruguay, un estudio pedido por *El Observador,* en 2013, concluyó que formar a un agrónomo costaba cuatro veces más que a un médico. Digámoslo en estos términos: las carreras científicas cuestan mucho, mucho más que las carreras humanísticas. La razón es simple. Para estas últimas, basta libros y muchas horas de codo. Para las científicas, hacen falta laboratorios, aparatos sofisticados, insumos, prácticas, ensayos… todo lo cual hace que su costo se dispare. Pues bien, estas dos pérdidas se traducen en una tercera: la pérdida de un capital humano necesario para potenciar el desarrollo de sus propios países. A la inversa, los países receptores de esta emigración cualificada reciben una inyección invaluable de riqueza humana, en la que, en una mayoría de casos, no han invertido nada o lo han hecho solo parcialmente. Es, quizá, la forma más sutil y cruel del neocolonialismo. Como señaló, en 2007, el profesor Lucas Luchilo,

> el reclutamiento de personal calificado sigue siendo una prioridad para los países desarrollados, con prescindencia de sus impactos para los países de origen. En el momento de tomar la decisión de adoptar una cierta política de atracción de personal calificado, los países desarrollados tienen en cuenta su propio interés.

En 2017, el Instituto de la Economía Alemana (IW), alertó de que Alemania tenía un déficit de 237.500 profesionales de las carreras denominadas MINT: matemáticas, informática, ciencias naturales e ingenierías. Según el informe, patrocinado por la patronal y la industria (tomen nota, por favor), el déficit en la economía alemana era de un 38,6 por 100 con respecto a 2016 y era el máximo alcanzado desde 2011, cuando se empezaron a realizar esos estudios. «Este cuello de botella se hará aún claramente mayor si no empiezan a trabajar en este ámbito empleados extranjeros en una proporción mayor» a la del presente en la sociedad, afirmó Thomas Sattelberger, presidente de la iniciativa del sector privado alemán «Logrando el futuro MINT». (Sirva este dato para ilustrar la actitud de empresarios e industriales en una sociedad capitalista desarrollada y la existente en las oligarquías en países precapitalistas).

Las causas de la emigración latinoamericana, sobre todo de los científicos, son varias. Las crisis internas que sufre la región de forma cíclica –golpes de Estado, conflictos armados, derrumbes económicos, enfrentamientos políticos–, explican parte del fenómeno, pero no todo. Hay dos causas enraizadas en las estructuras políticas y económicas que aclaran el resto. De una parte, el abandono histórico de la investigación científico-técnica, que se traduce en la carencia crónica de centros de investigación, laboratorios y recursos, o en la absoluta obsolescencia de los existentes. O, simplemente, no existen centros de investigación de alta tecnología, pues sus costes y el atraso del país impiden su existencia. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (INH) posee 27 centros de investigación para estudiar males que van desde el cáncer hasta el alcoholismo. Para ello dispone de un presupuesto anual de 28.000 millones de dólares, cantidad que supera el PIB de unos cuantos países de la región y, por supuesto, casi todo los presupuestos asignados al sector salud. A este factor debe agregarse otro: los salarios. Una empresa farmacéutica o de biotecnología puede ofrecer sueldos de 150.000 dólares anuales a un científico latinoamericano, con el aliciente de poder trabajar con otros científicos tan cualificados como él y

de disponer de los medios tecnológicos y de investigación más modernos del momento, más la certeza de que esos medios irán siendo renovados a medida que inventen otros nuevos. Como ningún país latinoamericano está en condiciones de competir, ni en medios ni en salarios, la región seguirá viendo, desde la impotencia, cómo sus científicos siguen –y seguirán– emigrando.

El director de la CEPAL, Andrés Solimano, señalaba en 2005 que la última medición realizada por la CEPAL, hasta el año 2000, concluía que «de cada 1.000 argentinos que emigraron en los años noventa a Estados Unidos, 191 eran personal especializado». La proporción en Chile era de 156 especialistas por cada 1.000, en Perú de 100 por 1.000 y en México de 26 por 1.000. Según el estudio de la CEPAL, «el 60 por 100 de la mano de obra especializada en una ciencia o técnica que emigra en Latinoamérica lo hace hacia Estados Unidos». Este país, según el estudio, habría recibido, en los años noventa, 17.946.000 emigrantes latinoamericanos. Argentina tiene cerca de 7.000 científicos en el extranjero, que, en opinión de Bernardo Kosacoff, director de la CEPAL en este país, emigraron principalmente por «problemas políticos y por la posibilidad de desarrollar sus investigaciones más que por las crisis económicas». Superados los problemas políticos y bajo control las crisis económicas, con la región en un periodo notable de crecimiento, queda por resolver el problema de la falta de infraestructuras, medios y recursos para impulsar el desarrollo de las investigaciones científicas y técnicas. Pero hay otro factor a anotar: un estudio en Argentina concluyó que el 57 por 100 de doctorados en el extranjero decidía no regresar a su país de origen. Por la razón que sea –las económicas especialmente– optan por no volver.

La hondura de la herencia que se arrastra en este campo desde la independencia se refleja en las cifras sobre los niveles de desarrollo científico-técnico de la región. Un informe del año 2005, de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) señalaba que la inversión mundial en investigación y desarrollo se distribuía así: el 42 por 100 corresponde a Estados Unidos y Canadá; el 28 por 100, a Europa; el 27 por 100, a los países asiáticos; y un escuálido 1 por 100, a América Latina. ¿Ha progresado la región en su conjunto desde 2005? No. Los datos proporcionados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO), hechos públicos en diciembre de 2018 sobre cifras de

2017, indicaban que América Latina seguía representando el escuálido 1 por 100 respecto de patentes registradas por investigadores locales. De un total de 1.974.100 patentes registradas, 7.500 eran de Latinoamérica. En 2017, el *ranking* de países por solicitudes de patentes, en el marco del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT, por las siglas en inglés), era el siguiente:

Puesto en el ranking	*País*	*N.º de solicitudes*
1	Estados Unidos	56.440
2	Japón	45.220
3	China	43.128
4	Alemania	18.302
5	Corea del Sur	15.554

Veamos ahora las solicitudes de patentes presentadas por países latinoamericanos:

País	*N.º de solicitudes*
Brasil	568
México	289
Chile	197
Barbados	114
Colombia	100

Como es bien sabido, los niveles o grados de patentes, inventos y similares son el reflejo más claro y contundente de los niveles o grados de desarrollo o atraso de un país. También dan medida de sus niveles de riqueza, pues, atención también a este otro dato: patentar inventos es un negocio multimillonario. Quienes más inventan y patentan más cobran, y aquellos que no inventan o patentan poco, pagan, y pagan mucho. A título de ejemplo, en esta época de apoteosis de la telefonía móvil, Samsung pagó, en 2013, 1.000 millones de dólares por uso de patentes. Se estima que, si un teléfono cuesta 800 dólares, pagaría 240 dólares en royalties a los dueños de las patentes. Solamente en el sector de la llamada economía creativa, según la WIPO, «la industria editorial de 11 países que abarca tres sectores totalizan [ingresos por] 248.000 millones de dólares de los Estados Unidos de América en 2017». Hay, además, un problema añadido. En 2006, Irán y Venezuela hicieron pedidos millonarios de aviones al –casi– único fabricante latinoamericano de aviones, la brasileña Embraer (vendida en 2019 a Boeing, en acto de extremo patriotismo muy de la región). Estados Unidos vetó la venta porque distintas piezas de instrumental de los aviones Embraer eran fabricadas en Estados Unidos con patentes de Estados Unidos y ese hecho daba derecho a Estados Unidos a prohibir la venta de productos que lleven componentes de Estados Unidos. En suma, que las patentes dan poder económico, científico, técnico y político.

Con estos datos, ¿qué podía esperarse? Téngase en cuenta que el país más adelantado de la región en este campo, Argentina, esperó a febrero de 1958 para crear el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), «respondiendo a la percepción socialmente generalizada de la necesidad de estructurar un organismo académico que promoviera la investigación científica y tecnológica en el país». Aunque esta institución significó una revolución en el ámbito científico argentino, está a años luz de otros centros similares, algunos con siglos de existencia. El pasado determina el presente y en ningún campo paga Latinoamérica un tributo mayor y con tan terribles secuelas como en el de la investigación científica y técnica.

El atraso en este campo sigue pasando factura a todos los países, incluidos los que poseen la mayor planta industrial, como demuestra la alta concentración de los laboratorios de investigación y desarrollo de empresas transnacionales en países desarrollados, donde se encuentra el 91 por 100

de ellos. El 9 por 100 que resta se distribuye en el vasto universo de países subdesarrollados (Brasil, México) o con mercados muy vinculados a los países desarrollados (Hong Kong, Singapur, Taiwán, Israel). China y Rusia tienen los suyos propios. Según sostiene el economista Kumar, varias causas explican esa concentración, destacando sobre todo la cantidad de personal cualificado existente y los niveles de desarrollo tecnológico que hay en un país, así como los costos de producción y la existencia de un importante mercado interno. Latinoamérica está en la cola del mundo, razón por la cual alberga tantos laboratorios de I + D como Suiza (5) y menos que Bélgica (8).

En 1993, en Chile, alentados por los altos precios internacionales del cobre, se propuso «agregar inteligencia a las piedras», es decir, aprovechar los fondos millonarios que inyectaba el mineral a la economía para crear grandes centros de investigación. Fue, nuevamente, un brindis al sol. El país continuó manejando el cobre como hasta ese año. En 2006, la ministra de Minería y Energía, Karen Poniachik, volvía sobre el tema:

> No hay ninguna razón por la cual Chile sea solo un productor de cobre en concentrados y en cátodos. Chile podría ser el Silicon Valley de la minería: tener los mejores programas universitarios del mundo con miras a atraer al país a los mejores talentos; ser un polo de clase mundial en materia de I + D para generar nuevas técnicas y procedimientos avanzados; proponer nuevas aplicaciones en sectores como la biotecnología, la medicina y la nanotecnología; convertirse en un país vanguardista […].
>
> Pese a que Chile es el principal productor y exportador de cobre del mundo, los laboratorios y centros tecnológicos de la industria no están acá. Si bien es cierto que algunos pilotajes (pruebas a nivel semiindustrial) se han realizado en el país, gran parte del desarrollo de nuevos procesos y obtención de patentes se realiza en el extranjero.

Para afrentar el reto, la ministra pidió a las empresas transnacionales que abrieran centros de I + D en Chile. Nuevamente el espíritu de dependencia y de dejar que empresas e intereses extranjeros asuman responsabilidades que corresponderían al Estado. Pero no debe causar extrañeza, dada la mentalidad imperante. Un episodio acontecido en este país ilustra el menosprecio que siguen manifestando las clases dominantes latinoamericanas hacia la I + D. En 2004, el gobierno chileno dio a conocer su intención de establecer una prima de hasta un 3 por 100 sobre las ventas

de cobre que hacían las empresas privadas, con el fin de destinar ese 3 por 100 a financiar proyectos para el desarrollo de tecnología e innovación. La cantidad a recaudar era casi simbólica, según las cifras de la BBC (un millón de dólares), pese a lo cual el sector empresarial se opuso al proyecto, alegando que alejaría a «muchos inversionistas extranjeros». Cabe medir el atraso de las clases empresariales latinoamericanas tomando a la chilena como ejemplo, toda vez que Chile tiene la fama de poseer, hoy, la clase empresarial más exitosa y dinámica de Latinoamérica. Podría afirmarse, sin exagerar, que esas clases empresariales siguen en las cavernas de la economía moderna, una economía que no parecen –o no quieren– entender. En noviembre de 2007, el reconocido filósofo y científico argentino Mario Bunge expresaba en una videoconferencia en Ecuador:

> Me propongo defender tres tesis. La primera es que, puesto que la ciencia es la madre de la técnica y ambas son motores intelectuales de la civilización humana no hay desarrollo nacional sin ciencia. Mi segunda tesis es que la investigación científica es la gallina de los huevos de oro. Mi tercera tesis es que hay maneras de criar la gallina, y otras tantas de matarla.

Palabras que se quedaron en el aire pues, al final, los gobiernos aplican la ley del mínimo esfuerzo y en lo mínimo se quedan. Para entender de qué va el tema cuando se quiere jugar de verdad, examinemos el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). Según se lee en su página oficial

> El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el elemento central del Plan de Inversiones para Europa, destinado a impulsar el crecimiento económico y la competitividad a largo plazo en la Unión Europea.
>
> El Fondo pretende movilizar financiación pública, en particular financiación con cargo al presupuesto de la UE, para atraer la inversión privada hacia una amplia variedad de proyectos emprendidos en la UE, por ejemplo, en infraestructuras, investigación e innovación, educación, salud y tecnologías de la información y la comunicación, entre otros ámbitos.

Para alcanzar dichos fines,

> en diciembre de 2017, el Consejo amplió la duración del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) hasta diciembre de 2020, con un objetivo de medio billón de euros en inversiones adicionales.
>
> El nuevo Reglamento:

– amplía la duración del fondo hasta el 31 de diciembre de 2020;
– aumenta el objetivo de inversión a 500.000 millones de euros;
– incrementa la garantía presupuestaria de la UE hasta 26.000 millones de euros;
– aumenta la contribución del Banco Europeo de Inversiones a 7.500 millones de euros (en lugar de los 5.000 millones actuales).

Son palabras mayores, claro, porque la UE es la región más rica del mundo y pueden dedicar al FEIE las cifras astronómicas señaladas. No obstante, sirve como ejemplo de lo que es pensar estratégicamente y, también, de los crecientes costos de las investigaciones en I + D. China no se queda atrás. En 2017, la superpotencia asiática –que tiene decidido convertirse en la mayor potencia mundial en I + D para 2050–, invirtió 370.000 millones de dólares en ese rubro, cifra que duplica la de Japón y solo está debajo de la de Estados Unidos, que gastó 476.000 millones de dólares. Lo cierto es que, mientras Europa, China, Rusia, Japón o Corea del Sur siguen avanzando en estos campos, en Latinoamérica el tema continúa ocupando el furgón de cola y, salvo zonas como islas en México, Brasil o Argentina, la región continúa siendo un desierto en esos campos fundamentales de la economía y del conocimiento del siglo XXI que son la ciencia y la tecnología.

Obviamente, a gobiernos y clases empresariales latinoamericanas les resulta más simple, fácil y manejable dedicarse a vender materias primas, botellas de vino y pescado enlatado con maquinarias compradas a países industrializados, que seguir el ejemplo europeo, chino o ruso. Adentrarse en el proceloso mar del desarrollo científico-técnico implica realizar inversiones millonarias en educación (como hicieron Suecia y otros países desde mediados del siglo XIX), impulsar las matemáticas, montar laboratorios y enseñar a la gente a pensar, discernir, entender, escalar en la pirámide humana. Tal esquema jamás ha encontrado espacio en la región (con la excepción de Cuba, cuyo modelo está hondamente condicionado por la hostilidad de Estados Unidos), donde pensar ha sido considerado una actividad peligrosa que es mejor dejar en manos extranjeras. La ciencia y la técnica, ya se sabe, han sido siempre motores de cambio y fuente de ideas peligrosas para los *establishment* de todo el mundo, del mismo modo que han florecido en situaciones de cambio y revolución. No obstante, es preciso tener en cuenta lo señalado por Guillermo Foladori, de la

Internacional Nanotechnology & Society Network, de que «hace pocas décadas la novedad tecnológica fue la biotecnología, la robótica, las computadoras, los satélites, y a pesar de todo ello la pobreza y la desigualdad han aumentado en el mundo en estas últimas décadas, según el informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas (UNDP, 2005). La relación entre ciencia y tecnología y desarrollo humano no es ni mecánica ni lineal». Es decir, que ciencia y técnica sí, pero sin olvidar el esencial deber de usarlas para combatir la desigualdad y la pobreza.

Por otra parte, de la misma manera que el mundo se hace cada día más complejo, el mundo de la ciencia y la técnica ha alcanzado niveles asombrosos de complejidad y de especialización. Así, a título de ejemplo, en el campo del genoma, resulta ya insuficiente conocer los miles de genes que lo componen. Es preciso conocer las microdiferencias que nos hacen únicos a cada uno. Tal es el propósito del «Proyecto Mil Genomas» que, en 2015, había secuenciado a 2.504 personas de todo el mundo. El estudio genético se hizo con gente de países tan distintos como Japón, China, la etnia yoruba de Nigeria, dos etnias distintas de Kenia, italianos de Toscana, indígenas gujarati de Houston, habitantes del estado estadounidense de Utah de origen europeo y, por último, ciudadanos de la ciudad de Los Ángeles con antepasados mexicanos y afroestadounidenses para confirmar –una vez más–, que todos procedemos de África y de 1.500 individuos. En el proyecto participaron un conjunto de universidades y centros, entre ellos el Instituto Sanger del Reino Unido, el Instituto de Genómica de Pekín, el Instituto para la Investigación del Genoma Humano de Estados Unidos y la Universidad John Hopkins, también de Estados Unidos. El «Proyecto Mil Genomas» permite ilustrar varias cuestiones, sobre todo tres. Una, los niveles de sofisticación que ha alcanzado la investigación científico-técnica. Dos, que esta sofisticación obliga a juntar recursos humanos, económicos y técnicos de distintos países. Y tres, que los costos de este tipo de investigaciones son tan elevados que es preciso aunar esfuerzos.

Otro aspecto a resaltar es que la investigación científica y técnica no está limitada a campos con efectos eminentemente económicos, es decir, a financiar investigaciones en función de los beneficios económicos que sus resultados pueden proporcionar a una empresa o consorcio. Un campo tan estratégico y esencial como es la salud es víctima de los criterios mercantilistas que predominan entre las grandes multinacionales

farmacéuticas. Porque la salud depende no solo de la capacidad de un Estado para brindar ese servicio a la población, sino también de la investigación de nuevos fármacos que permitan combatir enfermedades endémicas que causan estragos en los países pobres, países que, a su vez, dependen del nivel de salud de los pueblos para impulsar su desarrollo o, cuando menos, evitar catástrofes humanas. Y la investigación depende, en términos casi absolutos, de la inversión que se haga. Como es bien sabido, las multinacionales farmacéuticas dedican el 90 por 100 de su presupuesto a investigar fármacos para enfermedades –o vanidades– que interesan a los países ricos, dejando las sobras a investigaciones sobre las plagas que azotan a los países en desarrollo. Enfermedades como el dengue hemorrágico, la oncocercosis o el mal de Chagas, según ha denunciado la Organización Mundial de la Salud (OMS), afectan a más de 750 millones de personas en el mundo y causan la muerte de 500.000 personas cada año. No puede negarse que la lógica económica está de parte de las multinacionales, pues el 80 por 100 de sus ventas se realizan en Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. Dado que la ley que impera en los mercados es la del beneficio, las grandes empresas consideran justificado su desinterés en invertir en enfermedades que azotan a países con escasa o nula capacidad adquisitiva. Como afirmara años atrás Roy Vagelos, exdirectivo de Merck, la investigación y desarrollo de enfermedades tropicales carece de lógica económica, por lo que es «un problema social y no se debería esperar que la industria lo resolviera».

La responsabilidad recae, ciertamente, en los propios Estados, debiendo ser una responsabilidad indeclinable. ¿Por qué una multinacional extranjera debe asumir una responsabilidad que no asumen los más directamente implicados? ¿Para qué están los gobiernos, sino para ayudar a resolver, desde los recursos que pueden manejar los Estados, los males que afligen a los pueblos? Siendo sus poblaciones las que padecen enfermedades como la malaria o el mal de Chagas, corresponde a los Estados asumir una actitud beligerante, no solo combatiendo la enfermedad (el número de personas afectadas por el mal de Chagas en Latinoamérica ha pasado, según la OMS, de 20 millones hace veinte años a 6 millones en 2019), sino promoviendo la investigación y el desarrollo de fármacos de patente propia, que liberen a los países de la tiranía de las multinacionales de la farmacia. No es solo cuestión de seguridad sanitaria, sino una forma de promover la

investigación y ahorrar a los países centenares de millones de dólares. Para entender este punto, basta recordar lo que ha ocurrido con la medicación del sida. El costo de los fármacos patentados por las transnacionales ascendía a la obscena cantidad de 10.000 dólares por persona, cifra que condenaba a muerte a millones de personas en los países pobres. Brasil e India, sin atender a las patentes ni a las amenazas del gobierno de Estados Unidos de llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio (OMC), decidieron fabricar medicamentos genéricos, con lo que el costo del tratamiento por paciente se redujo a 600 dólares. En 2017, el gobierno de India ofreció tratamiento gratuito a todos los afectados, de forma que puedan tratarse el máximo número de ellos. «El gobierno de India está mostrando un liderazgo y un compromiso audaces con las personas que viven con el VIH», expresó Steve Kraus, director del programa de Naciones Unidas para el sida (ONUSIDA) para Asia y el Pacífico. «Esta nueva política pondrá al alcance de más de un millón de personas que viven con el VIH un tratamiento que puede salvar vidas. Mantendrá sanos y productivos a individuos, familias y comunidades, y garantizará que la India ponga fin a la epidemia de sida para 2030», afirmó Kraus. India es ejemplo de que, cuando hay empeño, es posible resolver problemas de salud fuera del marco de las grandes transnacionales farmacéuticas.

Situados en el siglo XXI, con los niveles de información circulantes, no hay excusas que justifiquen el seguir dando la espalda a la ciencia y la técnica. El ámbito de investigación y desarrollo es casi infinito. Desde las nanotecnologías hasta la carrera espacial esperan por Latinoamérica. Es claro que los países, por separado, poco podrán hacer, pues, en el presente, la I + D requiere de fondos multimillonarios. Por eso mismo no deja de sorprender que investigadores de la talla de Manuel Castells escriban ensayos –como el publicado en 2005 y reimpreso en 2006– induciendo a un país como Chile a afrentar solo y aislado de sus vecinos los retos planteados. En su apologética obra sobre el «modelo chileno», *Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial,* Castells, pese a reconocer que Chile está detrás de países como México o Brasil, lo invita a una andadura en solitario. Recoge, como dato positivo de los avances del modelo chileno de desarrollo, que, en 2000 (un dato viejo, vale señalar), la inversión pública chilena en I + D alcanzó la cifra de ¡461 millones de dólares! ¿Qué es esa ridícula cifra comparada con las

inversiones de la UE, China o Japón? Sirva el dato para darse cuenta de que, en las circunstancias actuales, será un esfuerzo casi inútil para países pobres o pequeños o medianamente ricos asumir el desarrollo científico y técnico en solitario. Dadas la cantidad de recursos que demanda la I + D, es una idea suicida.

Lo cierto es que nada impide que, sumando recursos humanos, económicos y científicos, no pueda una unión de países de la región construir uno, dos, tres, cuatro o diez «silicon valleys» en Latinoamérica, donde científicos y técnicos latinoamericanos y no latinoamericanos (Europa tiene en muchos campos excedentes de investigadores que desaprovecha) puedan desarrollar sus investigaciones y habilidades. Esa sería, no la mejor, sino la única forma de aprovechar el caudal humano que, año tras año, abandona la región para buscar futuro en los países más ricos del mundo. No solo varios «sylicon valleys». También, puestos a soñar, una agencia espacial latinoamericana, un gran centro de investigaciones de enfermedades tropicales, un laboratorio sobre nanotecnologías y nuevos materiales o centros de investigación sobre hidrocarburos y energías renovables. En las condiciones actuales, solo países de economías poderosas –China, Estados Unidos, Rusia– o bloques poderosos de Estados –como la UE– son capaces de enfrentar la mayor revolución científica y técnica en marcha. Si los países latinoamericanos quieren desempeñar un papel destacable en ese festín científico-técnico, están obligados a unir y reunir sus recursos. No hay alternativa. En tal sentido, Latinoamérica podría tomar nota, por ejemplo, de los programas europeos de cooperación. Por lo demás, no debe olvidarse que el colonialismo y el neocolonialismo debieron en gran medida su triunfo a la superioridad científica y técnica de un puñado de potencias. Si hay un área donde se hace evidente, en toda su crudeza, la división de la especie humana en pobres y ricos, en ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera –como imaginara Aldous Huxley en su clásica obra *Un mundo feliz*–, es, justamente, en el dominio y acceso a los centros de investigación y a los beneficios del desarrollo científico-técnico. Reducir al mínimo esa brecha es cuestión de supervivencia, pero cómo se sobrevive requiere de conciencia e ideología. A las oligarquías el tema les importa nada. Es una cuestión de países, de pueblos, que solo desde una visión amplia y progresista se puede entender. Es decir, sería una tarea que debe asumir la izquierda del siglo XXI.

Más claro aún: una tarea que solo podría asumirse desde posiciones de izquierda y progresistas, lo que hace de este reto un reto esencial para las izquierdas. Que, o apuestan sin vacilar por el desarrollo científico y técnico o no podrán llamarse izquierdas.

XXIII. UNIVERSIDADES QUE NO «UNIVERSITAN» NADA

En esta época de estadísticas y estudios comparativos, no podían faltar los correspondientes a las universidades. Así, el World University Rankings 2019, un análisis elaborado por el diario *The Times* de Londres, publica cada año una tabla sobre las mejores universidades del mundo. Según el último estudio, que aparece en el *Times Higher Education Supplement,* ninguna universidad latinoamericana figura entre las primeras 200 del planeta. Sí figuran 10 universidades chinas, 3 de Corea del Sur y 2 de Singapur. El informe 2019 del QS World University Ranking (QSWUR) es más generoso, pues en él aparecen 5 universidades latinoamericanas: la de Buenos Aires (en el puesto 73), la Universidad Nacional Autónoma de México (113), la Universidade de São Paulo (118), la Pontificia Universidad Católica de Chile (132) y el Instituto Tecnológico de Monterrey (178). Un resultado menos devastador, pero, cuando menos desalentador para una región que vio nacer las primeras universidades del continente americano.

Tanto en el estudio de *The Times* como en el del QSWUR, los puestos están copados, abrumadoramente, sobre todo en lo referente a las primeras 50 universidades del mundo, por centros universitarios de Estados Unidos y Europa occidental, con la rivalidad creciente de universidades de China y Corea del Sur. Esto no es, en absoluto, una novedad, pues esas universidades son las que están llenas de premios Nobel, las que editan las revistas más prestigiosas y hacia donde emigran en masa científicos e investigadores del mundo entero. Han dispuesto, casi desde su fundación, de apoyo estatal y social, así como de dinero abundante, que les ha permitido contratar a los mejores del mundo, sea cual sea su procedencia. Los buenos profesores hacen buenas universidades y el prestigio de esas universidades atrae a los buenos y más brillantes profesores. Un círculo virtuoso que mantiene una vía nutricional constante, que se autoalimenta, mientras en América Latina ocurre lo inverso. El bajo nivel universitario ahuyenta a los buenos profesores y etcétera.

Como ya señalamos, la Corona española fue generosa en materia educativa, aunque decirlo sea hereje. En una época tan temprana como

1538, fundó la Universidad de Santo Domingo, a la que siguieron otras 22 universidades, del Virreinato de México al del Río de la Plata. Son de mencionar las universidades de San Marcos de Lima, fundada en 1551, hoy Universidad Nacional Mayor de San Marcos; la Universidad Santo Tomás de Aquino (1580), hoy Universidad Nacional de Colombia; la Universidad de Córdoba (1621), actualmente Universidad Nacional de Córdoba, y la Universidad Santo Tomás (1690), hoy Universidad Central de Ecuador. ¿Qué pasó para que países que poseyeron universidades desde tiempos tan antiguos no fueran capaces de promover y sostener universidades de primera línea? La explicación que se daría desde la mitología histórica latinoamericana es que, durante la colonia, el atraso era tan grande que aquellas supuestas universidades no eran tales, o que solo estudiaban Teología, Derecho y materias similares. Que las provincias vivían en el más absoluto oscurantismo por culpa de la tiranía colonial y, por ende, separadas adrede del pensamiento y los adelantos científicos, técnicos, económicos y políticos que tenían lugar en Europa.

Nada, ciertamente, más falso y deliberadamente tergiversado que esa visión del último siglo colonial. A lo largo del siglo XVIII, España fundó en sus provincias americanas centros para la formación de arquitectos, escultores y pintores; «surgieron, asimismo, bibliotecas, jardines botánicos, museos de historia natural, un observatorio astronómico (Bogotá) y un Instituto de náutica», como señala Bertil Malmberg en su libro *La América hispanohablante,* con datos que, confiesa el autor, tomó de Henríquez Ureña y su *Historia de la cultura en la América hispánica.* Y, recoge Malmberg, «[a] las universidades les siguieron las imprentas. Ya en 1535 encontramos una en México, y en el siglo XVII ya existen en Guatemala».

Todo historiador medianamente informado sabe que el siglo XVIII vio un notable y vigoroso resurgimiento de España, particularmente bajo el reinado de Carlos III. Este monarca, que provenía del reino de Nápoles, se rodeó de los hombres más ilustres y preparados de su época para impulsar grandes reformas y apadrinar, desde la Corona, el «despotismo ilustrado», que aspiraba a sacudir el atraso de España, introduciendo la Ilustración (sinónimo, entonces, de modernidad) desde el poder. De este relevante periodo datan decenas de iniciativas modernizadoras, que se proyectaron a América, así como la organización de expediciones científicas a los dominios asiáticos y americanos de España. Aunque existían fuertes

motivaciones políticas (como informar de la situación de las regiones o de la presencia comercial extranjera), eran, sobre todo, un esfuerzo dirigido a conocer los dominios y promover el conocimiento científico. Mucho deberá la ciencia europea al esfuerzo investigador realizado por España en esta época.

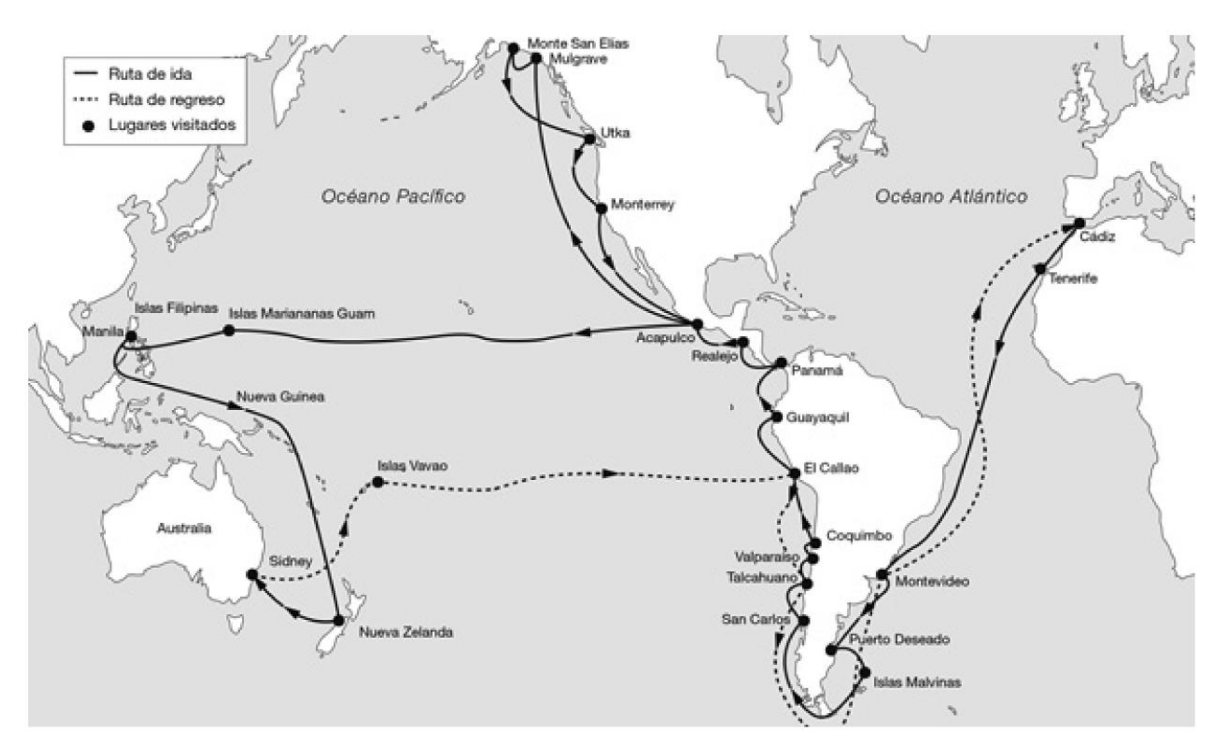
Portugal, por su parte, organizó a lo largo del siglo XVIII varias expediciones dedicadas a la exploración de la Amazonía, llevadas a cabo por misiones científicas patrocinadas por los reyes portugueses. Estas expediciones se dedicaron a recopilar cuanta información pudieran sobre la geografía, la botánica, la geología y la fauna de la extensa región, lo que permitió elaborar los primeros mapas de la Amazonía.

Entre las varias expediciones científicas que se organizaron desde España destacan cuatro. La primera la dirige el científico y sacerdote José Celestino Mutis, quien había propuesto a la Corona, en 1763, organizar una expedición científica a los dominios americanos de España. Veinte años después, en 1783, sale de la península la Real Expedición Botánica al Nuevo Reino de Granada, que se prolongará hasta 1818, pese a que Mutis muere en 1808, porque las investigaciones fueron continuadas por un sobrino, Sinforoso Mutis, hijo de su hermano Manuel. En Nueva Granada, el padre Mutis realiza una obra envidiable, pues establecerá la cátedra de Matemáticas en el colegio El Rosario, así como promoverá el estudio de los principios copernicanos y de física. El movimiento independentista cortará la investigación y los científicos enviaron a Madrid –sabiamente, viendo lo que pasará luego en Colombia– el resultado de la magna labor iniciada por Mutis.

La segunda expedición es la dirigida por el español de origen italiano Alejandro Malaspina, que, en colaboración con Francia, entre 1789 y 1794, explora América y las Filipinas. Después de haber recorrido decenas de miles de kilómetros y visitado 34 puertos, la expedición regresa a España. De sus resultados habla la página web del Real Jardín Botánico de Madrid:

> [La expedición] ha cumplido una buena parte de sus cometidos: su colección de cartas hidrográficas es magnífica; se ha llevado a cabo una interesante serie de trabajos sobre el magnetismo terrestre y la gravedad; se inspeccionaron las más ricas minas de México y Perú, evaluando sus recursos productivos y sus sistemas de explotación; los naturalistas portan una buena colección de pliegos de herbario, algunas muestras mineralógicas, un número nada desdeñable de animales, una colección de materiales

etnográficos, y, por parte de los dibujantes, se ha realizado un atinado trabajo iconográfico. Casi un millar de imágenes entre plantas, animales, paisajes, tipos etnográficos, ritos y tradiciones… un inmenso álbum de los territorios coloniales, pertenecientes a la Corona española. Sobre todo, se recopiló una amplísima información sobre las relaciones comerciales y el gobierno de la América española.



Ruta seguida por la expedición de Malaspina (1789-1794).

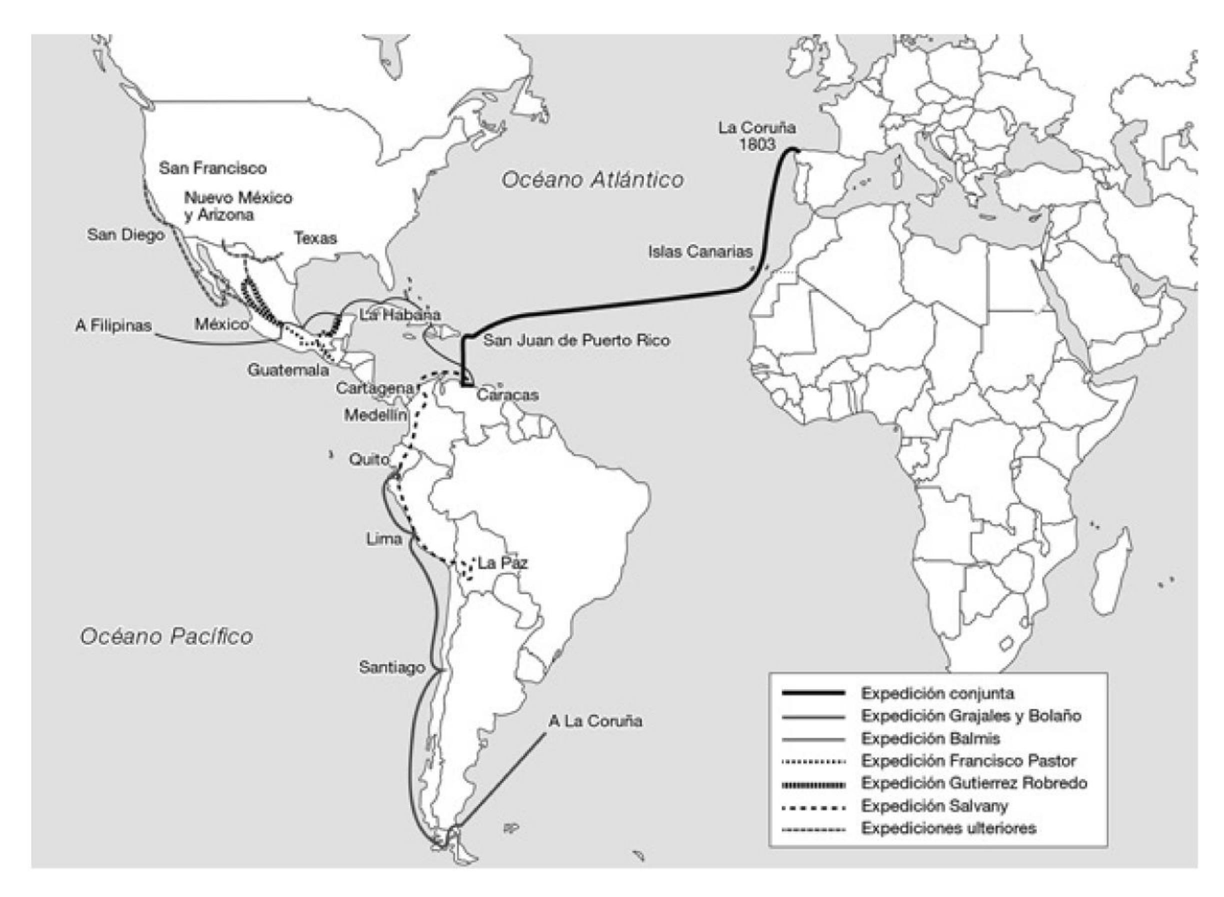
La otra gran expedición es la que realiza el célebre Alexander von Humbolt, por iniciativa propia, pero con el respaldo de Madrid. El rey Carlos IV, convencido del valor del proyecto de Humboldt, pone a su disposición la corbeta *Pizarro,* para que el científico y naturalista pudiera desplazarse a los territorios americanos. El prusiano desarrolla una vasta y prodigiosa labor investigadora entre 1799 y 1804, y, aunque se estableció en París por muchas décadas, su principal y más ambiciosa obra es, sin duda, el *Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente,* trabajo monumental de 30 volúmenes, publicados entre 1807 y 1834. Los viajes de Humboldt se tienen como la primera investigación científica independiente de la historia, pues el interés del ilustre prusiano era el desarrollo de las

ciencias naturales. Humboldt es testigo excepcional de la situación existente en la América española, como refiere Malmberg, en obra citada:

> El gran humanista alemán Alejandro de Humbolt, que hizo un viaje al Nuevo Mundo, a principios del siglo XIX, escribía que ninguna ciudad de América –incluido Estados Unidos– disponía de instalaciones científicas tan grandes y tan bien equipadas como las de México capital, que, por lo demás, era la ciudad más poblada del continente con sus 112.900 habitantes (frente a los 96.000 de Nueva York).

Además de las expediciones de Mutis, Malaspina y Humboldt, hay una que merece un lugar especial en la historia americana y mundial. Se trata de la expedición Balmis-Salvany, ordenada en 1803 por el rey Carlos IV con el fin de que los médicos Francisco Xavier Balmis y José Salvany dirigieran la primera y más vasta campaña de vacunación jamás realizada en el mundo contra una enfermedad: la viruela. El rey había perdido a un hijo a causa de esta enfermedad y decide combatirla en todo su reino aprovechando la circunstancia de que, en 1796, el escocés Edward Jenner había descubierto la vacuna contra dicha enfermedad, que causaba estragos en el mundo. Rafael E. Tarrago, desde la página web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha descrito aquella expedición, la más noble de todas cuantas se habían organizado hasta ese momento. Rememora Tarrago la orden del rey Carlos IV en los siguientes términos:

> El 1 de septiembre de 1803, el rey Carlos IV de España, uno de cuyos hijos había muerto de viruela, emitió un edicto dirigido a todos los funcionarios de la corona y autoridades religiosas de sus dominios de Asia y América en el cual anunciaba la llegada de una expedición de vacunación y ordenaba que la apoyaran para:
>
> – vacunar gratis a las masas,
> – enseñar a preparar la vacuna antivariólica en los dominios ultramarinos, y
> – organizar juntas municipales de vacunación para llevar un registro de las vacunaciones realizadas y mantener suero con virus vivo para vacunaciones futuras.



Ruta de la expedición para la primera jornada de vacunación masiva de la historia.

Entre 1803 y 1810, los expedicionarios vacunaron a cuantos pudieron, de Puerto Rico a Bolivia, en un esfuerzo humanitario sin parangón hasta los tiempos modernos. El doctor Jenner, según cita Tarrago, comentó en 1806 a su amigo el reverendo Dibbin sobre esta inmensa campaña de vacunación masiva: «No me imagino que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este». (El mérito de la iniciativa del rey español y de los médicos expedicionarios resalta todavía más si se recuerda que, en la segunda mitad del siglo XIX, el gobierno de Estados Unidos enviaba colchas contaminadas de viruela a los pueblos indígenas, para que, en vez de sus soldados, fuera esa mortal enfermedad la que limpiara de indios los territorios que serían ocupados por los civilizados blancos, protestantes y europeos.) Otro hecho debe consignarse: Balmis llevó consigo 2.000 ejemplares del libro sobre la vacuna, «para establecer juntas de vacunación en las ciudades visitadas que garantizaran la conservación del fluido y la vacunación a las generaciones futuras», como

recoge Mongutz. El libro en cuestión era el *Tratado histórico y práctico de la vacuna,* escrito por Jacques-Louis Moreau, editado en Madrid en 1803 y traducido al español por el propio Balmis. Las provincias americanas, por lo tanto, fueron las primeras en el mundo, gracias a la expedición de Balmis, en disponer de vacunas, manuales y centros de vacunación. ¿Era eso atraso?

Otros grandes investigadores y científicos se pasearon por las desconocidas y anchas extensiones iberoamericanas, destacando el checo (entonces austriaco) Tadeas Haenke, que acompañó a Malaspina en su expedición americana y que, habiendo enfermado de escorbuto en Lima, debió abandonar la expedición, pero no el continente americano, donde permaneció como infatigable investigador hasta su muerte en Cochabamba, Bolivia, en 1817. Señala Rodolfo Pérez Pimentel que a Haenke «se le considera uno de los mayores naturalistas del siglo XVIII y quizá, el botánico mejor organizado de su tiempo, pues dibujaba a la perfección hermosas láminas, empleaba la química para aislar las sustancias activas de los vegetales y clasificaba según el método de Linneo con patrones científicos que hasta hoy se aplican». En las décadas inmediatas posteriores a la independencia, otros científicos hicieron el camino americano, como el paleontólogo Alcide d'Orbigny, que, entre 1826 y 1834, recorrió Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Perú y Bolivia, o el italiano Antonio Raimondi, que arribó a Perú en 1850 y allí permaneció hasta su muerte, en 1890.

¿Por qué tantas vueltas sobre las expediciones científicas enviadas por España en las décadas finales del periodo colonial? Porque existe un propósito concreto: desmentir con hechos, cifras y datos el supuesto oscurantismo que sufrían los dominios americanos de España, según se encargaron de difundir las oligarquías que tomaron el poder tras la independencia. Ocurría, como en tantos otros ámbitos, lo contrario de lo que se ha venido sosteniendo. Durante la segunda parte del siglo XVIII, España realizó un esfuerzo colosal para ponerse a la altura de las potencias punteras en ciencia y tecnología. De ese esfuerzo hizo partícipe a las provincias americanas, cuyas clases dominantes (las que van a heredar el poder, es preciso recordar) pudieron contemplar con sus propios ojos y conocer de primera mano a grandes científicos y los métodos modernos de investigación, así como conocer y ver en funcionamiento los aparatos que portaban los expedicionarios, que eran los más perfectos que podían

fabricarse en Europa en aquellos años, muchos de ellos construidos *ex profeso* para la expedición.

Humboldt se asombró de las instalaciones científicas existentes en México; Mutis, en Nueva Granada, introdujo las teorías de Galileo, las matemáticas modernas y la física; Haenke fue uno de los mayores botánicos de la historia… Más aún. Todos estos hombres famosos, en sus expediciones, iban acompañados de decenas de personas más, dibujantes, técnicos, marinos, astrónomos, físicos, etc., que llevaban consigo la ciencia y la técnica europeas. En las largas conversaciones y disertaciones que debieron mantener en veladas, comidas y recepciones –que recibieron de continuo en los largos años de recorrido y permanencia en puertos, pueblos y capitales–, pudieron difundir grandes cantidades de información sobre los procesos de modernización que estaban en marcha en Europa, a los que España quería sumarse. Por otra parte, como señala Tarrago, tanto el *Semanario de Agricultura y Artes de Madrid* (que publicó una traducción al español de un resumen del informe de 1798 del doctor Edward Jenner sobre la vacuna contra la viruela) como la *Gaceta de Madrid* «eran muy leídas en la América española». Otras publicaciones, españolas, inglesas, francesas, también circulaban. Había, pues, información fluida y, por tanto, elementos suficientes para promover, en las provincias españolas de América, centros de investigación y universidades que pudieran seguir el impulso científico, técnico, modernizador que tenía lugar en Europa. No ocurrió así, o los esfuerzos que se hicieron fueron incompletos, precarios o aislados en el tiempo.

Las elites, por tanto, no desconocían lo que ocurría en Europa en la época de la independencia. En casi todos los países existían universidades y colegios, algunos con dos siglos de existencia. Había recursos económicos y juventud necesitada de estudios. ¿Por qué, entonces, ningún país latinoamericano ha sido capaz de crear universidades que puedan competir en excelencia académica con sus pares de Europa y Estados Unidos? Una respuesta podría aventurarse: porque las oligarquías no las necesitaban. Porque las universidades son reflejo de las sociedades y el rostro real de las clases dominantes y dirigentes. Allí donde gobiernan la mediocridad y la desidia, las universidades son lo que son. El menosprecio por la educación y la investigación expresaba, además, el arraigado sentimiento de clase de las oligarquías y su hondo nivel de autocolonización respecto a Inglaterra y

Francia (después respecto a Estados Unidos). Tal visión del mundo y de los países les llevará a considerar que bastaba con enviar a sus hijos (no a las hijas, que esas estaban solo para casarse) a Londres o París (en el presente, a Estados Unidos), para cumplir con el capítulo educación. Eso les permitía, no solo adquirir una preparación académica igual a la de sus admirados británicos y franceses, sino mantener una preeminencia académica sobre los nativos salidos de las maltrechas universidades nacionales.

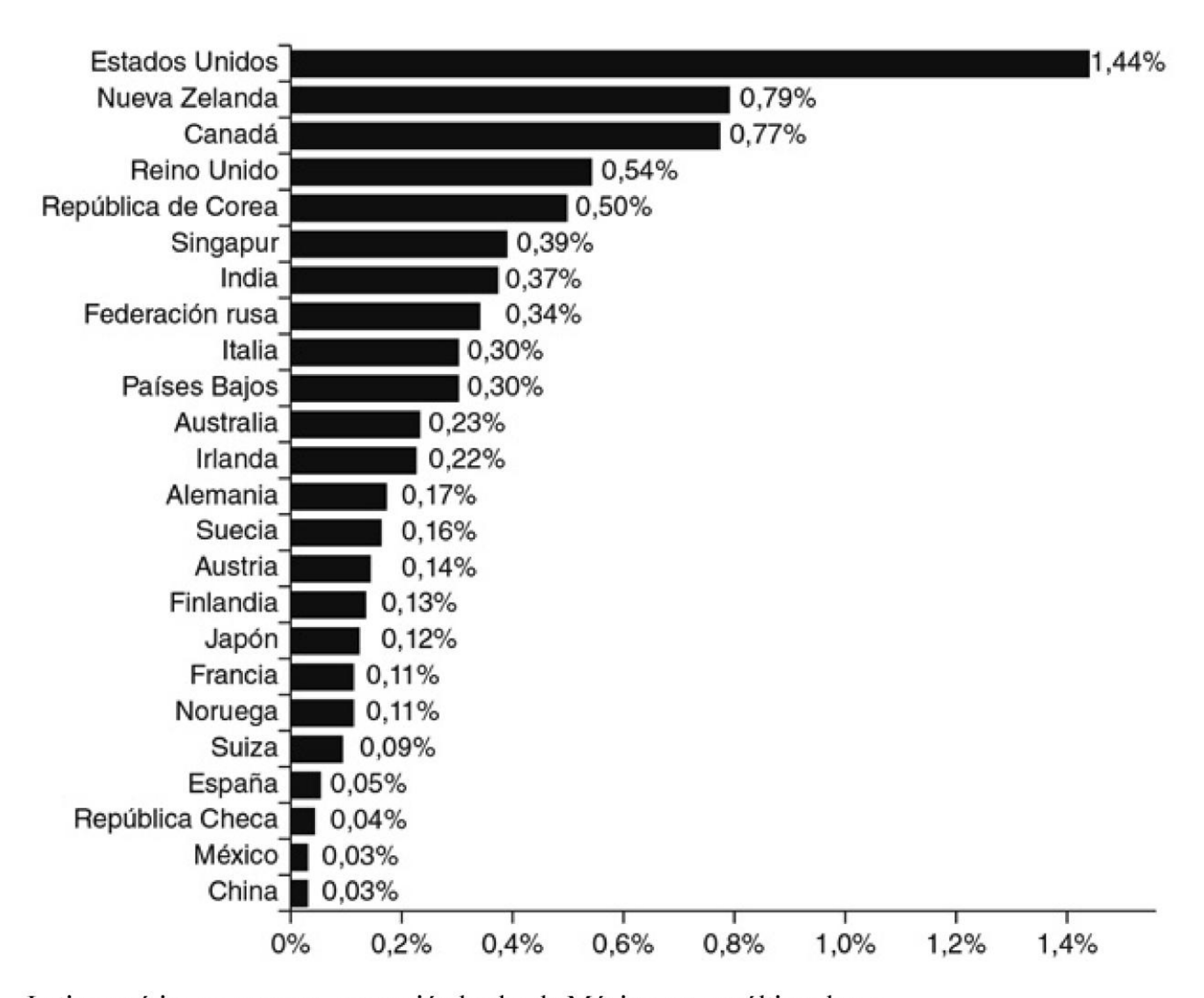
Enviar a estudiar al hijo a una metrópolis era distintivo de clase y aseguraba que los hijos graduados en el extranjero pasaran luego a ser ministros, diputados, senadores, diplomáticos y, por supuesto, herederos de las grandes fortunas. La universidad, por tanto, era usada también para perpetuar a la clase dominante. Nunca un diploma nacional podría hacer competencia a los diplomas de los grandes centros universitarios de Gran Bretaña, Francia y, a partir del siglo XX, Estados Unidos. Había otro beneficio: estudiar fuera permitía establecer en los centros universitarios extranjeros relaciones personales que luego podían traducirse en relaciones de Estado. De esa forma, la alianza entre oligarquías e imperios podía reproducirse desde la cuna estudiantil y el Estado oligárquico agregaba otro pilar al edificio para perpetuarse a sí mismo. El sistema, debe reconocerse, resultó tan eficaz que ha logrado prolongar su vigencia hasta este siglo XXI, como evidencia el número de presidentes y ministros graduados de universidades y otros centros universitarios de Estados Unidos, tantos que casi parece un requisito *sine qua non*...

Esta concepción clasista y arcaica tenía otra secuela: la de menospreciar las universidades nacionales, donde se formaban las clases medias y bajas, que luego ocuparían el lugar que les asignaba la escala social. Este desinterés de las oligarquías iba a dejar las universidades en manos de lo que el Estado pudiera hacer por ellas; pero el Estado era una entidad precaria, en muchos aspectos simbólica y siempre escasa de recursos, lo que determinaría que las universidades tampoco dispondrían nunca de medios suficientes para acercarse a los emporios universitarios de Europa o Estados Unidos. Tampoco había una estrategia nacional dirigida a dotar al país de centros universitarios de primera calidad. Para entender más cabalmente este punto lo mejor es examinar la conducta del *establishment* estadounidense respecto a la enseñanza universitaria.

La celebérrima Universidad de Yale debe su existencia a las enormes subvenciones recibidas, a lo largo del siglo XVIII, del archimillonario comerciante Eliu Yale, gracias a las cuales pudo ascender de escuela a universidad. Como agradecimiento a su benefactor, pasó a llamarse Yale University. La Universidad de Stanford fue creada en 1891 por otro multimillonario, Leland Stanford, quien la instaló en lo que había sido su granja de caballos (por eso se la sigue llamando «La Granja»). Más singular es el caso del mítico Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Este centro fue creado en 1861 por el geólogo William Barton Rogers con el fin de establecer una institución que sirviera al creciente proceso de industrialización de Estados Unidos. La guerra civil que azotó el país entre 1860 y 1865 paralizó el proyecto, pero en 1865 inició su actividad. Había, pues, en Estados Unidos, multimillonarios interesados en potenciar la educación a los más altos niveles y en crear centros de investigación al servicio del desarrollo del país.

Otro elemento que ha contribuido históricamente al fortalecimiento constante de las universidades son las donaciones multimillonarias que reciben anualmente. En 2007, el multimillonario John Werner Kluge donó a la Universidad de Columbia la cantidad de 400 millones de dólares, destinados a estudiantes de escasos recursos. Se trataba del mayor donativo recibido por la universidad y uno de los más cuantiosos recibidos por universidad alguna en Estados Unidos. El rector de la George Mason University, Angel Cabrera, en una conferencia en la Universitat Politècnica de València en junio de 2016, expuso que Estados Unidos es el país donde se realizan más donaciones a las universidades en relación con su PIB, como expuso en este cuadro:

Porcentaje de donaciones por país



Latinoamérica no aparece, excepción hecha de México, en penúltimo lugar.

En 2015, el millonario, John Paulson, donó 400 millones de dólares para la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Harvard. En noviembre de 2018, Michael Bloomberg donó la friolera de 1.800 millones de dólares a la Universidad Johns Hopkins, para personas de escasos recursos. Con esta donación, el presupuesto de la John Hopkins aumentó un 30 por 100, hasta los 6.100 millones de dólares. En 2019, el millonario Robert F. Smith donó al Morehouse College, de Atlanta, 40 millones de dólares. «Mi familia creará una subvención para eliminar sus préstamos estudiantiles», dijo Smith. La particularidad de esta última donación es que Smith es negro y al Morehouse College asisten alumnos mayoritariamente negros. Donación con fondo de clase. Las donaciones a universidades son, desde el siglo XVIII, algo normal en este país. En 2018,

las universidades y centros de investigación recibieron alrededor de 38.000 millones de dólares en donaciones.

Este flujo abrumador de dinero a las arcas universitarias es reflejo de algo que va más allá de la desgravación fiscal que existe en Estados Unidos sobre los fondos donados. Refleja el compromiso del *establishment* con un sector imprescindible para la fortaleza y el futuro de Estados Unidos, es decir, con Estados Unidos. Los miembros del *establishment* envían a sus hijos a estudiar a esas universidades, de ellas obtienen a los profesionales, científicos y técnicos que trabajarán en sus empresas, ellas proporcionan ideas e inventos que luego repercuten en mejorar la capacidad competitiva de sus negocios. Como identifican su propio éxito y progreso con el progreso y éxito de Estados Unidos, encuentran razonable, loable y beneficioso destinar –como donación– cantidades multimillonarias a las universidades. Las quieren fuertes, buenas, audaces y con recursos para contratar a los mejores, y con fondos suficientes para que inviertan cuanto haga falta en investigación y desarrollo. De esa forma, las universidades estadounidenses se han convertido en máquinas de producción de premios Nobel, ideas rutilantes y hasta empresas transnacionales.

Pero no solo de donaciones viven las universidades estadounidenses. También «papá Estado» aporta fondos suficientes para obtener sus propios fines. El MIT ha llegado a ser lo que es hoy porque, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, recibió encargos militares como el proyecto Whirlwind, para crear un aparato simulador de vuelos para entrenar a los pilotos de bombarderos. Con la Guerra Fría y el lanzamiento al espacio por la Unión Soviética de los satélites Sputnik, el gobierno de Estados Unidos inyectó al MIT fondos multimillonarios para ciencia y tecnología que permitieran responder al reto planteado por la Unión Soviética. Algo similar había pasado con la Universidad de Stanford, donde, merced a los fondos provistos para investigación militar, dejó de ser una universidad modesta para convertirse en lo que es hoy.

Con estos elementos en mano, es posible entender por qué las universidades latinoamericanas, con un puñado de excepciones, pese a la antigüedad de los países, no compiten en primera ni en segunda de las ligas universitarias. Las oligarquías, que no se identifican con sus países, tienen menos motivos para identificarse con las universidades nativas. De ahí que

sea excepcional, absolutamente excepcional, que sus adinerados miembros se sientan motivados para hacer donaciones millonarias en ellas. ¿Pensó alguna vez el sátrapa Simón Patiño hacer lo que el geólogo Rogers y fundar una instituto para minerales, aprovechando el chorro del estaño boliviano? ¿Cuánto han donado a universidades de sus países los gerifaltes del petróleo en Venezuela, del cobre en Chile o del café en Colombia o Brasil? ¿Dónde están las muestras de su filantropía?

Por otra parte, tratándose de sociedades precapitalistas, gobernadas por oligarquías de comerciantes y terratenientes (a los que hay que sumar ahora ejecutivos de empresas transnacionales), las necesidades de innovación técnica a efectos de mejorar sus beneficios son mínimas, y las resuelven por la vía rápida de importar maquinarias y técnicas de las metrópolis, como lo vienen haciendo desde el siglo XIX. No necesitaban, por tanto, centros de investigación ni universidades que formen a sus juventudes en los sectores cada vez más especializados que demanda la compleja sociedad actual. No necesitan de centros de estudios que respondan a los desafíos del desarrollo económico y social. Dicho en otras palabras, al quedar al margen los países de los procesos de industrialización y del fenómeno capitalista, y convencidos como están de que es mejor invertir en la enseñanza en el extranjero, no necesitaron en el pasado, ni necesitan en el presente, de centros de estudios que atiendan las exigencias de las industrias, las empresas, la banca, la navegación o el comercio. «Que inventen otros, aquí solo invertimos en comprar maquinarias y tecnología, que con eso resolvemos», pareciera seguir siendo el hilo argumental de las clases dominantes latinoamericanas.

La única incursión masiva de las clases oligarcas y sus seguidores ha sido entrar de lleno en el mercado de las universidades privadas. No para emular los casos de Stanford o Yale, sino como un suculento negocio de venta de títulos, donde decenas de miles de jóvenes son engañados con carreras saturadas, carreras inventadas o carreras inútiles, todas ellas de fácil aprobado, a cambio de satisfacer un estipendio mensual. Tal ha ocurrido en Centroamérica y el Caribe, donde el descrédito de estas titulaciones ha llegado a tal punto, que Estados Unidos y muchos países de Europa rehúsan de forma categórica reconocer tales títulos. La conversión de la enseñanza universitaria en un mercado más está causando estragos en los países y sectores afectados, llenándolos de titulados sin preparación (lo que causa

daños notables en carreras como Arquitectura, Ingeniería o Farmacia, con relación directa con la gente), además de constituir un derroche de recursos económicos y humanos. Más que favorecer el desarrollo de los países, se convierten en un desastre mayor, casi un crimen, pues equivale a prostituir lo que, desde las academias griegas, constituye uno de los deberes más sagrados de una sociedad: velar por la correcta y adecuada educación de los jóvenes, que deberán, en su momento, tomar el relevo y dirigir sus sociedades y países. El subdesarrollo es un monstruo que se devora a sí mismo, generando, de su propia dinámica, los factores que lo perpetúan.

Indudablemente, uno de los mayores retos que afrenta la práctica totalidad de países de la región –unos más perentoriamente que otros– es hacer una revolución en el sistema de enseñanza universitaria, que permita crear universidad e institutos tecnológicos que respondan a las necesidades de desarrollo de todos y cada uno de los Estados, incluido el desamparado sector de la investigación y el desarrollo. Una tarea que deben asumir los Estados, pues debe ser meta, labor, objetivo indeclinable y fundamental de los Estados y desde el Estado, asumir la transformación de todo el sistema de enseñanza, con énfasis en las universidades, para hacerlas motor de cambio y fuerza esencial del esfuerzo por salir del subdesarrollo y el atraso. Las oligarquías gobernantes no han hecho nada por crear unos sistemas universitarios de primera calidad. No lo han hecho ni lo harán. Eso es tarea de los Estados que solo podrá hacerse realidad si gobiernan fuerzas progresistas que entiendan cabalmente el valor transformador de la educación. Que comprendan la necesidad imperiosa que tiene la región de dotarse de centros de enseñanza superior que creen científicos y técnicos, no solo poetas, novelistas, pintores y músicos.

La Unión Europea creó, en 2010, un espacio europeo común, en un intento de hacer converger estudios e investigaciones con los planes económicos y las necesidades de las empresas. Tanto la idea de un espacio europeo de educación superior como la vinculación de las universidades a las empresas –y viceversa– merecen atención. Por una parte, sería un gran paso adelante crear un espacio latinoamericano de universidades que permita unir a las mejores universidades, con el fin de compartir recursos y, apoyándose unas a otras, elevar la calidad académica e investigadora. De otra parte, vincular los centros de estudios universitarios con la realidad de los países –no solo la empresarial– permitiría convertir a las universidades

en vectores de desarrollo, enseñando las carreras que necesite cada país, no lo que decidan inventar grupos sin escrúpulos que, como en el presente, comercian con los títulos académicos sin importar el daño que causan. Una idea a desarrollar. Un reto más que afrentar para superar 200 años de desidia. No se trata de imitar. Se trataría de tomar la idea para adaptarla a las necesidades de la región.

XXIV. CUBA Y PUERTO RICO, LA OTRA CARA DE LA MONEDA

¿Y qué había sido de Cuba y Puerto Rico? Las dos mayores islas antillanas eran los únicos dominios americanos que permanecieron fieles a España. En la dramática situación que vivía la península en los años de las guerras de independencia, aquellas dos islas eran la única base sólida con que contaba. De Cuba y Puerto Rico salieron soldados, armas y recursos para los realistas en Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. Bolívar y los independentistas de México intentaron promover el independentismo en Cuba, pero fracasaron dado el poco respaldo que tenían en la isla. El interés de Bolívar por Cuba era residual, pues sus ojos estaban puestos en el sur. En 1823, un grupo de conspiradores cubanos, que se hace llamar Soles y Rayos de Bolívar, envía a Caracas una delegación para solicitar el apoyo de Bolívar a la independencia de la isla. Después de un viaje de meses, llegan a Bogotá, donde son recibidos por Francisco de Paula Santander. Este les desanima sin mucha delicadeza, explicándoles la imposibilidad del apoyo, pues Bolívar estaba dedicado en cuerpo y alma a la independencia de Perú. El 25 de febrero de 1824, Bolívar dirige una carta a Santander, en la que se contenía una escueta frase sobre Cuba –«Vea Ud. si puede hacer algo contra La Habana»–, que resume su posición respecto a la isla.

El hecho de que Cuba y Puerto Rico permanecieran fieles a España ofrece una posibilidad singular, casi de laboratorio, a efectos del presente trabajo: la de poder comparar la suerte que siguieron, en el siglo XIX, las dos partes en que queda dividida Latinoamérica: una, la continental, constituida por Estados formal y teóricamente independientes; otra, la insular, con las dos grandes islas antillanas formando parte de España. Según la historiografía oficial, la independencia se dio como respuesta a las arbitrariedades y los abusos del sistema colonial español, que era, además, atrasado y arcaico. Siguiendo esta lógica, Cuba y Puerto Rico debieron sufrir las consecuencias de permanecer atados a un imperio decrépito, en tanto que los nuevos países, libres de cadenas, pudieron abrir senderos de modernidad, progreso y desarrollo. ¿Pasó así? ¿Tuvieron, como indicaría la lógica, Cuba y Puerto Rico un destino peor como colonias que los dominios que alcanzaron su

independencia? ¿Estaban, medio siglo, ochenta años después, mejor los Estados independizados que las dos colonias que pudo conservar España? No se trata de entrar en terrenos especulativos, sino de comparar los datos.

Como ya se ha visto, con la independencia los nuevos países se hundieron en una terrible espiral de violencia, caos y destrucción, a causa de las luchas intestinas de las clases oligárquicas. La región se fragmentó y, en una mayoría de casos, las guerras civiles se prolongaron hasta el siglo XX (en Colombia hasta este siglo XXI), provocando la ruina material y humana de muchos de estos países. Gran Bretaña aprovechó el caos para imponer un modelo neocolonial y la región quedó al margen de los grandes procesos que harán del siglo XIX uno de los siglos fundamentales para la humanidad. Puerto Rico y Cuba siguieron gozando de paz e, incluso, fueron beneficiarios indirectos de los desastres de las guerras y otros peores que, como caja de Pandora, reventaron con la independencia. La paz fue, en sí misma, una primera y fundamental ganancia para las dos islas antillanas, y sobre la paz se cimentará, en las décadas posteriores, un largo periodo de modernización, prosperidad y fortalecimiento institucional que, a la postre, terminará de formar un espíritu nacional y de sentar las bases de un Estado en el sentido moderno del término. La paz existente en las islas permitió atraer hacia ellas dos elementos esenciales para su desarrollo económico: emigración y capital, no solo de Europa, sino de los países recién emancipados. Como resume Antonio Santamaría en su artículo «Reformas coloniales, economía y especialización productiva en Puerto Rico y Cuba», publicado en la *Revista de Indias:*

> [De] Tierra Firme llegaron a dichas islas inmigrantes con capital, esclavos y, en algunos casos, experiencia agrícola, huyendo de las luchas emancipadoras o de los conflictos civiles que padecieron enseguida muchas de las nuevas Repúblicas. Igual que los franceses de Haití antes, recibieron incentivos, contribuyeron a mantener la fidelidad de la Gran Antilla y Borinquen a España, y también ayudaron al progreso de la agricultura y el comercio.

Sobre Puerto Rico, recoge el investigador Manuel García, en su página web, lo siguiente:

> Durante el siglo XIX Puerto Rico progresó más rápidamente que en los siglos anteriores. La proclamación de la independencia en Hispanoamérica motivó la llegada de muchos realistas que contribuyeron a intensificar la colonización. La isla cobró cada

vez más autonomía: se designó un diputado por las Cortes de Cádiz; en 1811 se estableció la intendencia de Puerto Rico, separada del gobierno central; se crearon nuevos puertos y se suprimieron los monopolios. Pero lo que contribuyó más al auge de Puerto Rico fue la llamada «Cédula de Gracias» (1815), que autorizaba el libre comercio y permitía la inmigración de extranjeros católicos.

Cuba fue escenario de distintas iniciativas modernizadoras, iguales en su contenido a las que se ponían en práctica en España, toda vez que Cuba era parte del país. Así, en 1824 se crearon una Juntas de Fomento del Reino para promover la mejora de la producción agrícola e industrial de cada territorio y el progreso del comercio y las artes. A semejanza de España, en 1792 se había fundado una Real Sociedad Económica de Amigos del País, que continuó funcionando y fue promotora principal de la introducción del ferrocarril en Cuba. Y lo del ferrocarril es relevante, porque quizá nada ejemplifique mejor el proceso de modernización y prosperidad de la mayor isla antillana que el hecho de que fue, justamente, en la provincia española de Cuba donde se construyó la primera vía férrea del mundo hispánico. Como recuerda F. Fernández Sanz, «el primer ferrocarril español se construyó en Cuba» y la primera línea, que unía La Habana y Güines, entró a funcionar el 19 de noviembre de 1837, siete años después de que se inaugurara el ferrocarril Liverpool-Mánchester (1830).

Para 1854, Cuba disponía de 593 kilómetros de vías férreas, más incluso que las existentes en España, que contaba con apenas 305 kilómetros de ferrocarril. Chile tuvo una primera línea férrea en 1851 de unas pocas decenas de kilómetros, por iniciativa de un estadounidense afincado en el país. Brasil, como se vio, inició la construcción de sus primeros ferrocarriles en 1855. Argentina dispuso de una primera línea férrea en 1857 y México en 1869. Venezuela debió esperar a 1873 para tener un primer y mínimo ferrocarril. Apunta Fernández Sanz que, para 1885, Cuba disponía de 1.499 kilómetros de ferrocarriles a cargo de 12 compañías, «todas de capital hispano-cubano, excepto una británica. […] En 1898, al finalizar la presencia española en la isla, la red de ferrocarriles sumaba en Cuba un total de 1.765 kilómetros», para una superficie de 110.000 kilómetros cuadrados. En 1880, México, con 2.000.000 de kilómetros cuadrados, había construido 1.060 kilómetros de vías férreas. En realidad, solamente Argentina superaba a Cuba en la relación extensión del país por

kilómetros de vías férreas. Pero el ferrocarril, en Cuba, tuvo efectos que fueron más allá de lo puramente económico. Indica Antonio Santamaría, en el artículo citado:

> La construcción de ferrocarriles, que empezó en 1837, antes que en España, en un tiempo relativamente breve comunicó las principales áreas agrícolas, los núcleos de población y los puertos en la isla, y se acompañó con avances en las técnicas de fabricación del dulce y en la organización del negocio.

Siguiendo la descripción de Santamaría, se deduce que el ferrocarril, al igual que había acontecido en su momento en Alemania o Italia, países de reciente formación en el siglo XIX, actuó como elemento articulador del país, uniendo todos sus principales centros poblacionales, económicos y portuarios. Este hecho es tanto más notable cuanto que, aún en estos albores del siglo XXI, la mayor parte de países de la región sigue sin contar con sistemas de comunicación que articulen sus partes, de forma que extensas zonas de Latinoamérica siguen desvinculadas del mundo. Países hay, como Nicaragua, que apenas en 2019 terminaron la construcción de una carretera que comunica la región caribe con el resto del país.

El impacto de las reformas impulsadas por España se deja notar rápidamente en Cuba, de forma que, señala Viviano Torres Ramírez en su colaboración en el volumen IV de la extensa obra *Historia de América,* «la isla alcanzará desde el punto de vista económico un bienestar hasta ahora desconocido», pasando de exportar «40.000 toneladas de azúcar en 1815 a 200.000 en 1840». ¿Qué había ocurrido, mientras tanto, en los dominios gloriosamente independizados? Lo resumen Eliana Cardoso y Ann Helwege, en su citada obra *La economía latinoamericana:*

> Los cincuenta años que siguieron a las guerras de independencia, es decir, el periodo transcurrido entre 1820 y 1870, fue desalentador en materia de crecimiento económico, aunque no faltaron auges de exportación.

El colapso económico de este periodo va más allá de lo meramente económico, pues entre 1830 y 1875 –en opinión de Eric Hobsbawn, como ya vimos, entre 1848 y 1875– se produce el auge del capitalismo, proceso del que queda drásticamente marginada la región, que permanecerá anclada en estructuras precapitalistas y neocoloniales. Esta es otra de las razones

fundamentales por las cuales, aún hoy, el capitalismo como proceso económico, político y social sigue sin terminar de cuajar.

Como se ha visto, el desarrollo de la ciencia y la técnica ha estado vinculado estrechamente al desarrollo del capitalismo. En tal sentido, el siglo XIX fue un desierto para los países latinoamericanos, pero ¿qué había ocurrido en las dos colonias que había podido mantener España? La página web de la Red Cubana de la Ciencia, el principal portal sobre ciencia en Cuba, ofrece una breve historia de la ciencia durante el siglo XIX, que se explica por sí misma. En 1802, el segundo obispo de La Habana, Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, entre otras reformas que impulsa, apoya la labor del médico Tomás Romay en la introducción, en 1804, de la vacuna contra la viruela, así como otras campañas de vacunación. En 1817 se crea el Jardín Botánico de La Habana, siendo «la primera institución científico-investigativa creada en Cuba». El médico Romay restablece, en 1823, la enseñanza práctica de la medicina, en el Real Hospital Militar de La Habana, y crea un Museo de Anatomía. En 1838, se organiza un modesto Museo de Historia Natural. En 1848, el químico español formado en Francia José Luis Casaseca funda el Instituto de Investigaciones Químicas de La Habana. En 1857 es creado el Observatorio Físico-Meteórico de La Habana, sustituido después por el Observatorio del Colegio de Belén. La iniciativa científica más relevante es la fundación oficial, en 1861, de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, «única de su tipo» en una colonia hispana. En 1864 aparece la revista de la institución, *Anales de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.* La preocupación científica se manifiesta también en ramas de reciente fecha. Así, en 1877, nace la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba. En 1887 se crea el Laboratorio Histo-Bacteriológico e Instituto de Vacunación Antirrábica de La Habana, «uno de los primeros institutos de investigación bacteriológica de América». El desarrollo científico de la Cuba colonial encuentra su premio en los trabajos de Carlos J. Finlay (1833-1915), quien descubre el modo de transmisión de la fiebre amarilla, «constituyendo su descubrimiento el mayor logro científico cubano del siglo XIX». ¿Cuántos de los países independizados pueden aportar una historia científica similar en el siglo XIX o, incluso, ahora, en el XXI? La ciencia y lo científico siguen siendo una cuestión ajena o está reducida a islas de investigación.

Recordemos que la rica Argentina no creó su primer centro de investigaciones científicas hasta 1958, 97 años después de haberse creado en la Cuba colonial la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.

Para Cuba, por una suma de hechos, el siglo XIX es fundamental, pues a lo largo de este siglo termina de construirse como país, constituyendo un caso único en Latinoamérica. A partir de 1859, con el gobierno del general Francisco Serrano, dice Torres Ramírez, Cuba «conoció unos años de progreso cultural y espiritual. Nuevos liceos, universidades, teatros, tertulias literarias florecen entonces». Nada que ver con la feria de calamidades que eran los países del Caribe o los andinos, que, además de conocer escasos periodos de paz, se desangraban en guerras civiles, cuartelazos, intervenciones extranjeras o conflictos externos. Con el desarrollo económico, científico y cultural, en esta primera mitad del siglo XIX el nacionalismo cubano va forjándose y, aún prematuro, se lanzará a una primera guerra de independencia en 1868.

La guerra independentista iniciada el 10 de octubre de 1868 por Carlos Manuel de Céspedes constituirá un punto de inflexión en la formación del nacionalismo y del Estado cubano. No obedecerá, como había ocurrido en la independencia del continente, a factores externos, ajenos a la propia dinámica de los pueblos. Como en Puerto Rico, responderá a causas endógenas, propias, derivadas de la oposición objetiva entre los intereses de Cuba y Puerto Rico con los de España. Pero no es en Cuba, sino en Puerto Rico, donde se dará el primer movimiento independentista, con el Grito de Lares, el 23 de septiembre de 1868, que es rápidamente sofocado por las tropas coloniales.

Los movimientos que tienen lugar en Puerto Rico, pero sobre todo en Cuba, son consecuencia de una suma de factores, políticos y económicos, que, al no encontrar respuesta en España, llevan a una guerra de diez años (1868-1878). A mediados del siglo XIX, la economía cubana sufre un triple choque. El mercado del café, uno de los puntales económicos de Cuba, sufre la irrupción del café de Brasil, provocando su derrumbe. Aunque el azúcar sustituye rápidamente al café como primer producto de la isla, el azúcar de caña debe enfrentar la competencia del azúcar de remolacha europea. Las políticas arancelarias españolas tampoco ayudaban a Cuba en la crisis que sufría. España convoca, en 1867, a una Junta de Información,

formada por cubanos, portorriqueños y españoles, para estudiar los posibles cambios de régimen que podían aplicarse en las islas. La Junta fracasa, pues ninguna de las propuestas cubanas tuvo acogida. Aunque aún se discute el papel de esta Junta de Información sobre el devenir de la isla, lo cierto es que los grupos separatistas ven en la independencia la solución a los problemas de Cuba. La situación externa está, asimismo, muy revuelta. Estados Unidos está recuperándose de los estragos causados por su guerra civil (1861-1865); en 1865, barcos de Francia, España e Inglaterra acosan a México, so pretexto del cobro de deudas; entre 1865 y 1866, barcos españoles bombardean puertos peruanos y chilenos en una guerra absurda impuesta por España; de 1861 a 1865, República Dominicana se anexionará otra vez a España; la misma España se verá sacudida por la llamada «Revolución Gloriosa», que triunfa en septiembre de 1868, expulsando del trono a Isabel II y proclamando la Primera República. Todos aquellos acontecimientos contribuyeron a crear un clima antiespañol. La «Guerra Larga», como la llaman en Cuba, concluirá con la Paz del Zanjón, en 1878, convencidos los independentistas de la imposibilidad del triunfo.

Fracasada la «Guerra Chiquita» (sublevación dirigida por Maceo y Calixto García, de agosto de 1879 a diciembre de 1880), a partir de 1880, Cuba entra en una nueva etapa, con cambios drásticos. El tenebroso sistema esclavista es definitivamente abolido por España en 1886, en tanto que la producción azucarera entra en una etapa industrial. Estados Unidos se ha convertido en el mayor mercado del azúcar cubana y las inversiones estadounidenses no cesan de crecer. Políticamente, la sociedad cubana se ha escindido en dos grupos, independentistas y autonomistas. La situación permanece invariable, con una Cuba cada vez más consolidada como país, hasta que irrumpe en la historia la figura axial del criollo José Martí, hijo de españoles, que logra articular un potente movimiento independentista, que cristaliza en el Partido Revolucionario Cubano. De Martí y los hechos posteriores, de sobra conocidos, cabe decir poco. Sí es preciso citar el pensamiento martiano en ciertas cuestiones centrales, para compararlo con el pensamiento que siguieron los independentistas de principios del siglo XIX. Respecto al libre cambio (o libre comercio) y a la aplicación mecánica de las ideas que llegaban de los países desarrollados, Martí explicaba, en relación con ese tema, pues seguían debatiendo en México sobre proteccionismo y libre comercio, lo siguiente:

> La imitación servil extravía, en economía, como en literatura y en política. Un principio debe ser bueno en México, porque se aplicó con buen éxito en Francia. Asiéntase esto a veces, sin pensar en que esto provoca una pregunta elocuente. ¿Es la situación financiera de México igual a la francesa? ¿Se producen las mismas cosas? ¿Están los dos países en iguales condiciones industriales? Debe haber en la aplicación del principio económico relación igual a la relación diferencial que existe entre los dos países.
>
> […]
>
> Conviene, además, que las fábricas de rebozos no se extingan; porque siempre conviene tener industria propia. Deben buscarse, por tanto, no solamente las razones que aboguen en pro de uno u otro sistema debatido, sino las soluciones fijas y concretas para este caso especial. Sentado como principio que es justo permitir la introducción de rebozos extranjeros, porque de ello aprovecha la masa común y no perjudica al comercio interior, debe buscarse al mismo tiempo la manera de conservar las fábricas mexicanas de rebozos, para que no queden sin trabajo los operarios que trabajan en ellas.

¿Qué tiene que ver la posición lógica y lúcida de Martí con la ceguera que, en materia económica, política y científica, guió a los fundadores de los países del continente después de 1810? ¿Quién de ellos planteó la necesidad de proteger las fábricas nacionales? Martí tiene idea de Estado porque ha podido conocer el proceso de formación de Estados nacionales en Europa y ver de primera mano el proceso de consolidación de Estados Unidos como potencia industrial. También ha visto las revoluciones científicas de su siglo y por eso aboga por la enseñanza pública de las ciencias («Que la enseñanza científica vaya, como la savia en los árboles, de la raíz al tope de la educación pública. Que la enseñanza elemental sea ya elementalmente científica: que en vez de la historia de Josué, se enseñe la de la formación de la Tierra»). En esa línea de lucidez, Martí advertía sobre el divorcio entre las clases gobernantes de lo que llamaba «nuestra América» y la realidad de los países:

> ¿Cómo han de salir de las universidades los gobernantes, si no hay universidad en América donde se enseñe lo rudimentario del arte de gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos de América? A adivinar salen los jóvenes al mundo, con antiparras yanquis o francesas, y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen.

Otra diferencia fundamental con las guerras de independencia de principios de siglo es que las guerras de independencia de Cuba no fueron guerras civiles, como habían sido las de Hispanoamérica. Los ejércitos mambises combatían a tropas coloniales españolas, sobre todo en la guerra iniciada en 1895. Tampoco Martí y los suyos fomentaban el odio fanático o las matanzas, como había ocurrido en Venezuela o Nueva Granada. «La guerra no es –dice Martí en el *Manifiesto de Montecristi*– […] el insano triunfo de un partido cubano sobre otro, o la humillación siquiera de un grupo equivocado de cubanos». Tampoco es «contra el español». «La guerra no es la tentativa caprichosa de una independencia más temible que útil […] que no debe en verdad apetecer un pueblo que no la pueda sustentar.» Es la guerra de un pueblo maduro y de un país lo suficientemente preparado para echarse a caminar solo, sin tutelaje extranjero. Nada que ver con los endebles países que una suma de accidentes históricos hizo independientes.

No pudo Martí ver a Cuba liberada. Murió en Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895. Tampoco la habría visto, de haber sobrevivido a la guerra. La intervención de Estados Unidos –que entra en guerra con España en 1898, cuando los cubanos tenían prácticamente vencido al ejército colonial español– aborta la lucha independentista y convierte a Cuba en protectorado estadounidense. No obstante, el Estado cubano estaba maduro. Cuba no se hallaba en la misma situación que los otros Estados latinoamericanos –sobre todo los del Caribe–, que, después de ochenta años de independencia, seguían siendo, unos más que otros, Estados paupérrimos, desarticulados y anclados en el siglo XVIII. A lo largo del XIX, Cuba había podido consolidar un espíritu nacional que difícilmente la intervención yanqui iba a corromper, como había ocurrido en otros países de la región. De hecho, podría afirmarse que la guerra revolucionaria que triunfó en 1959 fue, a su manera, la tercera guerra de independencia del pueblo cubano, derrotada la primera en 1878 y usurpada la segunda en 1898. De ahí que, desde el triunfo de la revolución, con la Unión Soviética y sin ella, Cuba haya logrado sobrevivir al bloqueo, el aislamiento, el boicot y, por último, a la desaparición total y repentina del bloque soviético, con el que mantenía la casi totalidad de sus relaciones económicas y comerciales. Tal capacidad de resistencia se ha sostenido, creemos, más en el patriotismo que en la ideología que ha inspirado a la Revolución cubana, desde su triunfo, el 1 de

enero de 1959. Cuba y Puerto Rico ganaron permaneciendo de colonias en el siglo XIX. Eso responde a las preguntas hechas. Las que no pueden responderse son otras: ¿qué camino habría seguido Cuba si no se hubiera dado la brutal intervención estadounidense? ¿Qué habría sido de la revolución si, en vez de bloqueo y agresiones de todo tipo, Estados Unidos hubiera respetado el derecho inalienable de Cuba a su autodeterminación e independencia?

¿Y qué habría sido de Puerto Rico, país que tuvo un destino peor que el de Cuba, convertido, todavía hoy, en colonia de Estados Unidos? Después de 121 años de situación colonial, resulta obvio que Puerto Rico está sobradamente listo para la independencia, y su mantenimiento como «Estado libre asociado» es el mayor anacronismo que sufre el continente. No obstante, debe haber claridad en cuanto a que la independencia del país hermano está ligada, de forma irremediable, a la decadencia imperial de Estados Unidos, de la misma forma que la independencia de Irlanda fue una de las secuelas más inmediatas de la debacle británica en la Primera Guerra Mundial. A Inglaterra le resultó menos traumático reconocer la independencia pacífica de Canadá, en 1867, y la de Australia, en 1901, que la de Irlanda, producto de una cruenta guerra entre 1919 y 1921 que llevó a la firma del tratado anglo-irlandés, estableciendo el Estado Libre de Irlanda. Pero este tema es otra historia…

XXV. INDUSTRIALIZARSE ¿PARA QUÉ?

Para Latinoamérica, el último tercio del siglo XIX es, en términos de comercio exterior, un siglo plácido. Aposentados en su papel de exportadores de materias primas, los países no sufren mayores vaivenes, con excepción de los propios de las crisis cíclicas del capitalismo. En general, la situación permanece invariable hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando la caída de precios de las materias primas y la contracción de los mercados externos desnuda la magnitud de su dependencia, dejándoles sin divisas para adquirir manufacturas y productos industriales. El Crac del 29 provoca otra crisis demoledora y, por primera vez en su historia, las elites gobernantes cavilan sobre la magnitud de su dependencia y las trampas y deficiencias del modelo económico imperante desde la independencia. Hasta el estallido del modelo neocolonial parecen entender la extrema debilidad de sus economías. Así, en la década de los treinta del pasado siglo, el industrial Bunge se quejaba de que Argentina compraba alimentos básicos en el extranjero, como huevos frescos, hierba mate, tabaco, arroz y otros similares, que podían perfectamente producirse en el país. Dicho de otra manera, un país de tierras extensas y feraces y con agua suficiente gastaba cantidades enormes de divisas en importar bienes básicos que podía producir él mismo sin ningún problema (el problema que, andando las décadas, ahogará las economías de Cuba y Venezuela).

Pese a esas debilidades estructurales, en la segunda mitad del siglo XIX, Argentina y Chile figuraban entre los 20 países más ricos del mundo. Como recordaba Lester Thurow, en *La guerra del siglo XXI,* en 1870, Argentina ocupaba el puesto 11 entre los países más ricos *per capita* (Francia, ocupaba el 10), por delante de Austria, Italia y Alemania. Chile figuraba en el 20 (Suecia, 19). Su futuro era, a ojos de todos, de los más promisorios de Latinoamérica, y pocos dudaban en aquellos años de que Argentina estaba destinada a convertirse en la gran potencia económica del sur del continente. Aquellos presagios nunca se cumplieron, aunque no es posible negar que, a lo largo del siglo XX, Argentina fue, con diferencia, el Estado más desarrollado de la región, favorecido, como ya se vio, por un constante

flujo de emigrantes provenientes, en su gran mayoría, del continente europeo.

Precisamente por este hecho, Argentina constituye un ejemplo paradigmático del fracaso del modelo económico y social impuesto en los Estados latinoamericanos desde la independencia. Argentina gastaba divisas en importar alimentos que podía producir y gastaba más divisas en importar maquinaria moderna que le permitiera competir en los mercados. El modelo era insostenible, pues el país carecía de medios económicos capaces de generar divisas suficientes para cubrir tanto las importaciones primarias como las terciarias. Si Argentina hubiera sido, efectivamente, un país capitalista, habría promovido la producción interna de bienes primarios para, con ellos, financiar el surgimiento de un sector terciario, así como para copar, con productos nativos, el mercado nacional, como ocurría en otros países (Estados Unidos, antes de ser potencia industrial, fue una potencia agrícola). Pero Argentina seguía anclada entre el siglo XVIII y principios del XIX, en el latifundio y el nefasto librecambismo, y el modelo estaba condenado a explotar, sin que las pinceladas o islas de capitalismo existentes bastaran para superar la brecha existente, como sigue ocurriendo hoy en un puñado de países que aspiran a ingresar en el club de los ricos.

En los Estados más grandes como Brasil, Argentina y México, se inician en las primeras décadas del siglo XX –es decir, con un siglo de retraso– importantes aunque limitados procesos de industrialización, condicionados por el mantenimiento de la estructura de privilegios de los grupos dominantes. Esos procesos, dirigidos por las mismas oligarquías que gobiernan los países desde la independencia, topan con el sistema de privilegios y prejuicios impuesto por esas mismas oligarquías. Por tal motivo, el esfuerzo industrializador tiene un alcance limitado y no toca ni afecta de forma significativa las causas históricas del atraso y la dependencia, como son el latifundismo, la ignorancia, la inexistencia de potentes sectores de investigación y tecnología propios y la extrema desigualdad en la distribución de la riqueza.

Los pseudoprocesos industrializadores son procesos de carácter reformista, que aspiran a dotar de mayor autonomía a los Estados, pero que, al no modificar de manera real las estructuras de poder económico y político, llevan dentro de sí las causas, bien de su fracaso, bien de su reducido efecto en el desarrollo de los Estados. Es el caso de México,

durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Este nacionaliza en 1938 los ferrocarriles y en 1939 los hidrocarburos, y pone en marcha una importante reforma agraria que beneficia a 774.000 campesinos. Cárdenas, sin embargo, respeta los grandes latifundios y no toca el poder de las clases oligárquicas ni de la Iglesia católica. Los gobiernos que le siguen enfriarán el proceso, y las reformas de Cárdenas se verán diluidas con el tiempo, hasta quedar en nada. México mejorará su estructura económica y alcanzará una mayor independencia, pero seguirá siendo una sociedad dual, un país fraccionado entre una minoría opulenta y unas mayorías excluidas de todos los ámbitos del poder. Un país de capitalismo superestructural y precapitalismo estructural, que le mantendrán en el atraso, la dependencia y al margen del desarrollo científico y técnico, del que seguirá siendo consumidor y espectador, pero no protagonista ni generador de ideas. Ciencia y desarrollo deberán seguir esperando, como siguen esperando hasta ahora. La firma, en 1993, del TLCAN, versión modernizada de los tratados de libre cambio del siglo XIX, terminarán de atar a México al modelo neocolonial a niveles agónicos. Como se vio en un capítulo anterior, el TLCAN ha adquirido un peso tan grande en la economía mexicana que determina hasta el precio de la tortilla de maíz, el alimento básico y más simbólico del pueblo mexicano. No debe extrañar esa situación, dada la dependencia absoluta de México respecto de Estados Unidos, pues el 80 por 100 de las exportaciones mexicanas tienen a Estados Unidos como destino. Por ese motivo, la amenaza del presidente Donald Trump, en mayo de 2019, de imponer un impuesto del 5 por 100 a las importaciones de México, que podía llegar al 25 por 100 si no ponía coto a la emigración centroamericana, supusieron un terremoto en este país, cuya economía podría simplemente colapsar si sufriera esas tasas impositivas. La dependencia económica crea la dependencia política y el gobierno mexicano –enfrentado a la realidad creada por el TLCAN–, no tuvo más alternativa que apresurarse a alcanzar un acuerdo migratorio con Estados Unidos, entregando de ofrenda al moderno Calibán a los emigrantes centroamericanos.

Similar, aunque más ambicioso, es el proceso seguido en Brasil con el gobierno de Getúlio Vargas y su Estado Novo, creado en 1937. Durante el primer gobierno de Vargas, la industrialización alcanza logros notables y Brasil experimenta un importante crecimiento económico. Se crean grandes

empresas nacionales para explotar el petróleo, la siderurgia y los minerales, así como institutos nacionales para incrementar la producción agrícola. Este prometedor proceso, sin embargo, es detenido en 1945, con el golpe de Estado que derroca a Vargas, y entra en abierto retroceso en 1954, con la apertura del país a las inversiones extranjeras, que desplazan a un segundo término la industria nacional, cuando no la hacen fracasar. El nacionalismo económico de Vargas es definitivamente enterrado en 1964, con el derrocamiento de João Goulart por el primer golpe de Estado anticomunista que sucede en Latinoamérica (al que los golpistas calificaron de «contrarrevolución preventiva»), que entrega el control de la economía brasileña al capital extranjero, principalmente de Estados Unidos. Brasil volvía, de la mano de los militares, al mismo esquema que guió su nacimiento como Estado, de desprotección nacional y entrega del país a los intereses políticos y económicos extranjeros.

El caso de Brasil ilustra con mayor fuerza que otros golpes militares un hecho irrefutable: los ejércitos latinoamericanos tenían un papel esencial en la salvaguarda de los intereses oligárquicos y extranjeros. En caso de fracasar otros medios de preservar el sistema de expolio (presiones económicas y políticas, injerencias extranjeras o elecciones), se podía recurrir a las fuerzas armadas para el preceptivo golpe de Estado; como pusieron en evidencia el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, en Honduras, en 2012, y, más recientemente, el de Evo Morales en Bolivia, en noviembre de 2019. (En el presente, tras el suicidio de la Unión Soviética, el papel de los ejércitos, de guardianes de las oligarquías y el imperio, se ha diluido, cuando no desaparecido –como ilustra el compromiso del ejército venezolano con el chavismo–, pero aún palpita en países como Honduras, Chile, Colombia y Paraguay). Y de Brasil hay que destacar su renuncia voluntaria –y tan latinoamericana– a retomar políticas de industrialización. Excepción hecha de la aeronáutica Embraer (que vendió su división de aviones comerciales, la más valiosa, a Boeing en febrero de 2019), el país exporta productos agrícolas, cárnicos, minerales y petróleo crudo, que constituyen más del 60 por 100 de sus exportaciones totales. Venden vehículos, pero de transnacionales, como Volkswagen, Ford, Fiat, Renault, etc., es decir, una típica economía neocolonial, cuya prosperidad depende de mercados que no controla.

A partir de 1945, el coronel Juan Domingo Perón impulsa, en Argentina, el que posiblemente haya sido el más ambicioso y amplio proceso para romper el modelo de dependencia surgido en el periodo de la independencia. Utilizando el Estado como poder director y regulador, Perón nacionaliza el Banco Central, establece una marina mercante, crea empresas nacionales para explotar petróleo y hulla, y pone en marcha un plan de fomento de la industrialización, que debe ser asegurada por la agricultura. Nacionaliza, además, los ferrocarriles y la telefonía. El proyecto de nacionalismo económico de Perón arranca con éxito, pese a la oposición de los poderes tradicionales y de las empresas y gobiernos extranjeros afectados. Aunque en 1948 se produce una crisis y el modelo peronista se resiente, Perón obtiene una clara victoria electoral en 1951. No obstante el apoyo popular, una conspiración alentada por Estados Unidos, la Iglesia católica y la oligarquía culmina en el golpe militar de 1955, que pone fin al peronismo. El derrocamiento de Perón significa el triunfo de la vieja oligarquía y de los intereses extranjeros, que entierran en pocos años nacionalismo económico e industrialización.

Sin embargo, los esfuerzos de Perón chocan con la realidad de un modelo asimétrico. La producción industrial no podía crecer por falta de maquinaria moderna, pero Argentina no generaba las divisas suficientes para comprarla, situación que se veía agravada por la falta de crédito externo. La solución que se consideró fue alentar la entrada de empresas multinacionales, dispuestas a proveer los equipos y la tecnología necesarios, con inversiones directas y en sectores aún no explotados. La asimetría industrial se demostraba en que Argentina no fabricaba algo tan elemental como los rieles de ferrocarril, a pesar de que las primeras vías férreas se empezaron a construir en 1855. Un siglo después, el país seguía dependiendo totalmente de la maquinaria y la tecnología extranjeras. Por tal motivo tuvo que destinar una cantidad millonaria a adquirir rieles y equipos ferroviarios británicos, en lo que se consideró «uno de los mayores contratos firmados por esa rama de la industria inglesa luego de la guerra». Pero la solución estaba en un mayor control estatal de las divisas y una planificación más decidida, como hacían en esos mismos años los gobiernos de Japón y Alemania.

Como es bien sabido, tras la Segunda Guerra Mundial, las economías de Alemania y Japón quedaron en ruinas. La reconstrucción de esos dos países

se hizo desde un estricto control de las divisas, la planificación de las inversiones y con el Estado como rector, para garantizar que los escasos recursos no se emplearan en objetivos no considerados estratégicos. Aún hoy, en Japón y Alemania, como ya se vio, el Estado sigue siendo un actor esencial en la economía. Perón no quiso, o no pudo, dar ese paso, o, quizá, simplemente no supo que existía ese modelo para defender el proceso de industrialización que impulsaba en Argentina. No obstante, desde Perón Argentina vivirá su mayor y más completo proceso de industrialización, que le situará a la cabeza de la región. Para 1990, el país tenía 527 empresas estatales, sobre las que descansaban la economía y la sociedad argentinas.

El tiro de gracia al sueño industrial peronista lo da el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), que decide la privatización masiva de las empresas y los bienes estatales, entre ellos el petróleo y el gas, al tiempo que ata el peso argentino al dólar estadounidense. Tras la euforia inicial, producida por el flujo de dinero proveniente de las privatizaciones, llega la cruda realidad, que se encarga de demostrar que la venta (más bien subasta o festín) de los bienes nacionales –guiada por una mezcla de sumisión ciega a recetas extranjeras, criterios anacionales y fe dogmática en las tesis monetaristas elaboradas, como siempre, por economistas de países ricos– era pan para hoy y hambre para mañana. A finales de 2001, Argentina presentaba un panorama desolador. Como resumen Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo, el país llevaba

> cuatro años consecutivos de recesión económica, crecientes y alarmantes niveles de pobreza (más del 52 por 100 de su población), niveles inéditos de indigencia (casi cinco millones de argentinos y cerca del 15 por 100 de la población), elevadísimas tasas de desocupación y subocupación de la fuerza de trabajo, insostenible déficit fiscal, desequilibrios crecientes en su sector externo, recurrentes renegociaciones de una deuda externa impagable (tanto en los términos en que fuera acordada originalmente, como en sus opacas renegociaciones posteriores).

La empresa YPF –vendida, como ya vimos, a la española Repsol–, desde su proceso privatizador procedió a despedir a más de 55.000 obreros y técnicos, sin tomar en cuenta, como ilustra dramáticamente el documental de Fernando E. Solanas *Memoria del saqueo,* los pueblos arruinados y las zonas arrasadas por los cierres y despidos de tantos obreros, lo que significó la ruina de miles de familias y de decenas de pueblos, sobre todo en la

Patagonia argentina. La red de ferrocarriles, que en 1947 alcanzaba los 42.700 kilómetros, quedará reducida a 4.000 en el servicio de carga y pasajeros. El país se derrumba en 2001, bajo la presidencia de Fernando de la Rúa, quien se ve obligado a renunciar en medio de un baño de sangre. No había acontecido, realmente, nada nuevo. Menem y de la Rúa no habían hecho más que continuar la tradición inaugurada por la Junta de Buenos Aires en 1810, de vender el país a intereses extranjeros y obedecer a la oligarquía.

En 2003, accede a la presidencia de Argentina Néstor Kirchner, con un programa de recuperación nacional de resonancias peronistas en lo social y lo económico. Kirchner pone en práctica un proceso de redención que logra sacar al país del foso. En 2003, el paro era del 24,7 por 100 y en 2010 es del 7,4 por 100. Se renegocia la inmensa deuda externa argentina, reestructurando el 93 por 100 de la misma, con una quita de casi el 65 por 100, lo que permite librar al país de un peso que mataba su economía. No menos importante, Kirchner inicia el proceso de renacionalización de grandes empresas, como Correos Argentinos, las aguas de Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas, aeropuertos y astilleros. Su esposa, Cristina Fernández, nacionalizará petróleo y gas. El saneamiento económico permite elevar las reservas internacionales de unos exiguos 10.500 millones de dólares en 2002, a 52.200 millones en 2010. En 2015, el kirchnerismo perdió las elecciones a manos de Mauricio Macri, representante o heredero de la oligarquía, que no tardó en restablecer el neoliberalismo. Y vuelta atrás, en una especie de *déjà vu* de Argentina. Tomemos como ejemplo la empresa Paquetá, fabricante de zapatillas deportivas y creada por el gobierno Kirchner en 2006. Alcanzó a tener 1.200 empleados con salarios suficientes para formar parte de la renaciente clase media. El 2016, Macri abrió el país a las importaciones extranjeras y, pronto, las zapatillas asiáticas y brasileñas llevaron a la quiebra a Paquetá. La empresa tuvo que cerrar y, en 2018, fueron despedidos los últimos empleados.

En 2018 llegó el –último– colapso. Entre diciembre de 2015 y abril de 2018, cuando el FMI decide intervenir la economía argentina, el país había acumulado una deuda de 143.000 millones de dólares, de los cuales un 55 por 100 se fugaron fuera de Argentina. El FMI entrega 57.000 millones de dólares (el préstamo más grande jamás otorgado por ese organismo) y con el préstamo la imposición de medidas draconianas contra la población.

Según el Ministerio de Trabajo y Producción, entre febrero de 2018 y febrero de 2019 se habían perdido 252.000 empleos. Un 30 por 100 de la población se hunde en la pobreza o la extrema pobreza. La CEPAL informa que dos millones de personas padecen hambre, en un país que produce alimentos suficientes para abastecer a 440 millones de personas. Lo dicho, un *déjà vu* trágico que lleva repitiéndose más de dos siglos. Lo peor está por llegar. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística, la pobreza alcanzó en Argentina, en octubre de 2019, «niveles devastadores» del 35,4 por 100 de población, según la calificara el diario El País de Madrid. 8,1 puntos más que en 2018, con un 25,4 por 100 de hogares que no pueden pagar la canasta básica. Unos 15 millones de personas. Para finales de 2019, la pobreza afectará al 37 por 100 de argentinos. Otro logro maravilloso de la suma FMI-oligarquías, imbatibles en su labor de destruir países y pueblos. El gobierno electo en octubre de ese año tendrá ante sí una tarea titánica para dar respuesta a las expectativas levantadas durante la campaña electoral. Alberto Fernández recibió en diciembre de 2019 un país hipotecado hasta la médula y su gobierno tendrá que aplicarse a fondo para negociar nuevas condiciones con el FMI, que hagan menos miserable la vida de casi la mitad de la población argentina.

En los años ochenta, la Revolución sandinista en Nicaragua puso en marcha el primer plan de industrialización de la historia del país, que incluía complejos agroindustriales, flota pesquera, marina mercante nacional y la modernización de los puertos, incluida la habilitación de un gran puerto en el mar Caribe, de lo que carecía el país. La guerra impuesta por Estados Unidos echa a pique el proyecto y, tras la derrota electoral de 1990, la coalición antisandinista que toma el poder destruye toda la infraestructura industrial creada por la revolución. Los proyectos agroindustriales –algunos ya en producción– son todos desmantelados, y sus espacios, sustituidos por zonas francas o maquilas. La línea aérea nacional (Aeronica) desaparece, como desaparecen también la flota pesquera y la única línea de ferrocarril. La explotación del espacio aéreo y de los mares nacionales es entregada a empresas extranjeras. Desde entonces, el modelo de dependencia se ahonda, hasta sumir al país en la mayor ruina de su historia, solo comparable con la sufrida entre 1912 y 1926, durante la primera ocupación del país por tropas de Estados Unidos. Treinta años después del desmantelamiento brutal de aquella incipiente

estructura industrial, Nicaragua sigue sin línea aérea (hecho trágico, pues las aerolíneas extranjeras mantienen un expolio permanente con tarifas leoninas: un pasaje San José de Costa Rica-Managua puede llegar a costar 550 dólares para un vuelo de 40 minutos), sin flota pesquera y sin agroindustria.

El caso de Bolivia, bajo el gobierno de Evo Morales, requiere una mención. País históricamente pobre entre los pobres, tras perder su salida al mar en la Guerra del Pacífico, la histórica victoria electoral de Evo Morales en 2005, primer presidente indígena de un país poblado mayoritariamente de indígenas, abrió el mejor periodo de la historia boliviana. En lo que interesa aquí, el gobierno de Evo inició un proceso de cambio que ha transformado, ojalá que para siempre, el rostro de Bolivia. Todo empieza con la nacionalización de los recursos naturales, sobre todo el gas, propiedad hasta entonces de la empresa española Repsol. En mayo de 2006, se nacionaliza Yacimientos Petrolíferos Fiscales, así como empresas eléctricas, de comunicaciones, mineras y cementeras. La inversión pública en relación con el producto interior bruto se dispara, según datos de la CEPAL, del 7,78 por 100 en 2006 al 14,54 por 100 en 2014. A partir de ese año, el gobierno boliviano inicia un plan de industrialización, con dos buques insignia. Uno es la Planta de Amoníaco y Urea, inaugurada en septiembre de 2017, en Bulo Bulo, Cochabamba. En palabras del presidente Morales:

> Es el proyecto más importante en la historia de Bolivia, una inversión gigante, 953 millones de dólares, pero más allá de todo, es un salto cualitativo que en más de 192 años nunca se ha consolidado la industrialización del gas; mañana se iniciará las operaciones de esta petroquímica gigante que cambiará el agro, la economía, el concepto de la industrialización.

El otro, es la Planta Industrial de Cloruro de Potasio, inaugurada en el Salar de Uyuni, en octubre de 2018, construida por China bajo dirección de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Evo Morales la presentó como la primera de un total de 41 plantas industriales, para lo cual se invertirían 4.400 millones de dólares. Estaríamos ante el primer y más ambicioso proyecto de industrializar los principales recursos naturales de Bolivia y crear en torno a ellos la más poderosa infraestructura industrial del país. Un dato ilustra el éxito de la política económica y social del gobierno de Evo

Morales. En 2006, el producto interior bruto *per capita* de Bolivia era de 995 dólares y, en 2018, ese producto interior bruto es de 3.005 dólares. ¿Sobrevivirá a Evo Morales el poderoso proceso industrializador boliviano o seguirá, luego de su derrocamiento, el mismo camino que han seguido otros procesos industrializadores en América Latina, es decir, terminará desmantelado y Bolivia devuelta al pasado?

Principales productos de exportación por país

País	*Porcentaje*	*Monto (mdd)*	*Principales Exportaciones*
Venezuela	98,0	59,287.1	Petróleo, hierro y aluminio
Ecuador	86,0	22,129.5	Petróleo, bananas, flores y camarones
Colombia	79,0	43,288.3	Petróleo, carbón, café, erroníquel, oro y flores
Bolivia	71,8	9,224.2	Petróleo, plata, zinc, estaño, plomo y granos
Argentina	70,3	50,599.8	Cereales y manufacturas de origen agropecuario
Perú	70,0	26,713.3	Cobre, oro, zinc, plomo, harina de pescado y frutas
Chile	63,0	47,675.3	Cobre y sus derivados, frutas y productos de pescado
Uruguay	61,0	6,134.2	Soya, carne bovina, celulosa, arroz, trigo y lacteos
Brasil	52,4	117,952.9	Hierro, aceites, soya, azúcar, café carne de pollo y bovino
México	16,6	65,923.4	Petróleo, oro, plata, café, frutas y verduras

Como puede verse, Latinoamérica sigue siendo una región dependiente de las exportaciones de materias primas y de productos de escaso valor agregado. México engaña, pues sus exportaciones son de empresas de Estados Unidos, Europa o Japón establecidas en el país, no propias. Las cifras son de 2014 sin variación en 2019.

Como muestra la historia latinoamericana, los escasos procesos iniciados en un número reducido de países, dirigidos a romper el modelo de dependencia, han encontrado, una y otra vez, la resistencia combinada de los intereses foráneos y las clases dominantes tradicionales. En los casos en que han sido desalojadas del poder y han podido recuperarlo, no han dudado en usar su control del Estado para desmantelar los procesos nacionales que se habían desarrollado, para devolver el país a su condición de colonia informal, productora de materias primas y consumidora de productos manufacturados. El desarrollo científico y técnico sigue esperando su momento, pues el dominio informal lleva implícita la renuncia de los países a cualquier desarrollo autónomo. Por tal causa, la región ha permanecido atada a un círculo vicioso –similar a la maldición de Sísifo– que, hasta el momento, solo Cuba ha podido romper, aunque, como hemos apuntado, la singularidad de la isla, última colonia de España en obtener la independencia formal, amerita un estudio particularizado que escapa a los propósitos de este trabajo.

XXVI. SOBRE EL ESTADO: HAZ LO QUE YO DIGO, NO LO QUE YO HAGO

Uno de los mayores mitos difundidos por los ideólogos del neoliberalismo desde el pasado siglo es que la participación del Estado en la economía de un país es sinónimo de ruina y fracaso económico. Que el Estado, como actor económico, es ineficiente y provoca desastres y que, por verdad escrita en los cielos, la economía debe quedar toda en las sabias, hacendosas y hábiles manos privadas. Bajo esa consigna, en la década de los ochenta, los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron una ofensiva mundial contra el Estado, que fue demonizado y convertido en el enemigo público número uno de la economía. Los «pontífices» del neoliberalismo fueron el presidente estadounidense, Ronald Reagan, y la primera ministra británica, Margaret Thatcher, ambos de triste memoria para una mayoría de latinoamericanos. Reagan y Thatcher resucitaron la conocida metáfora de la «mano invisible» del mercado, ideada por Adam Smith en su célebre obra *La riqueza de las naciones,* ya citada en anteriores capítulos. Reagan resumió el *diktat* en el discurso de su toma de posesión, en enero de 1981, con esta frase: «Antes se sostenía que el Estado era la solución; hoy sabemos que el Estado es el problema». Se descalificaba el legado del economista británico John Maynard Keynes –sobre el que Europa Occidental había reconstruido su economía después de la Segunda Guerra Mundial, como veremos más adelante– y se entronizaba al estadounidense Milton Friedman, fundador de la tristemente célebre Escuela de Chicago, la misma que inspiraba a los economistas del dictador Augusto Pinochet. Friedman fue asesor de Reagan y Thatcher y, en 1976, premio Nobel de Economía (a propósito de estos premios, dos de los países con mayor éxito económico en los últimos sesenta años son Corea de Sur y la República Popular China. ¿Cuántos premios Nobel de Economía han recibido los autores de tan soberbios «milagros» económicos?).

El objetivo principal de la ofensiva contra el Estado son las empresas estatales, que deben ser privatizadas siguiendo los dogmas del neoliberalismo. Una mayoría de obedientes gobiernos latinoamericanos, siguiendo el reflejo condicionado adquirido de sus antiguos amos

británicos, compiten por ser los mejores alumnos de la clase y, en procesos escandalosos de desmantelamiento de las escasas empresas y fuentes de riqueza de sus países, se apresuran a privatizar las empresas estatales. Como era de esperar, son adquiridas en masa por grandes consorcios extranjeros, en un saqueo comparable únicamente al sufrido por la región entre 1815 y 1830. Como también era de esperar, las privatizaciones provocan el colapso de las economías nacionales y el empobrecimiento general de los países. No deja de ser revelador que el país que más apura las privatizaciones es Argentina, cuya oligarquía había sido alumna aventajada de la entrega del país al Imperio británico desde el inicio mismo del proceso de independencia. El autor de aquel «argentinicidio» es el justicialista Carlos Menem, electo presidente en 1989 y, como premio, reelecto en 1995. Las privatizaciones producen despidos masivos y, con los despidos, un aumento exponencial del desempleo y subempleo. Argentina es arruinada al extremo, pues Menem privatiza desde Aerolíneas Argentinas hasta los astilleros, pasando por bancos, petroquímicas y hasta correos y telégrafos, empresa que es disuelta. Un siglo atrás, al golpe de las masivas exportaciones de carne, economistas europeos daban por hecho que Argentina era uno de los países más promisorios del mundo.

Otro tótem esgrimido por los ideólogos neoliberales para justificar las atroces privatizaciones era que, privatizando, llegaba en masa la inversión extranjera y que el aluvión de dinero fresco revitalizaría y multiplicaría las economías nacionales. No había tal cuerno de la abundancia. Los consorcios extranjeros (a los que les interesa primordialmente obtener beneficios, no el futuro de un país y su gente) buscaban las empresas que garantizaban un pronto y jugoso retorno de la inversión, como eran las de servicios básicos (agua, luz, gas), que la población seguiría consumiendo fuera cual fuera su coste; también las de telecomunicaciones, los yacimientos energéticos y bancos, que hacían posible optimar –para esos consorcios– su inversión en el país. No hubo, salvo casos aislados, inversión en sectores productivos de mediana o larga duración que permitieran ser germen de una industrialización o que hicieran posible iniciar procesos de desarrollo de la ciencia y la técnica. Era toma el dinero y corre. Así fue. Lo tomaron y salieron corriendo, dejando una estela hambre, desolación y miseria y países saqueados y, peor aún más si cabe, países endeudados.

El espasmo privatizador alcanzó también a la desarrollada Europa Occidental, aunque cualquier parecido entre las privatizaciones en Latinoamérica y las europeas será –como podrá imaginar el lector– un mera coincidencia. Como fue explicado en su momento, una de las obras más relevantes de la revolución francesa fue la creación del Estado moderno, el que, en relación simbiótica con la triunfante burguesía, hizo posible los poderosos procesos de industrialización y desarrollo que caracterizó al siglo XIX. Después de la Segunda Guerra Mundial, la situación de ruina y devastación en que quedó la práctica totalidad de países –excepto Estados Unidos, que hizo los mayores negocios de su historia sobre los escombros de Europa– convierte al Estado en el gran reconstructor y fueron poderosos consorcios estatales, una mayoría de ellos creados *ex profeso,* los que asumieron la titánica tarea de reconstruir los países, desde la reconstrucción de los servicios básicos hasta los sectores estratégicos, como las telecomunicaciones, los transportes y la reindustrialización. El listado de consorcios y empresas estatales creados es, casi, interminable, y muchas de ellas están, aún hoy, entre las grandes marcas mundiales: Deutsche Telecom, France Telecom, Telefónica, Repsol, Renault, Gas Natural, Gaz de France, Air France, Alitalia, Iberia… No podían faltar los bancos en aquel festín: Banque National de Paris, Banca Nazionale del Lavoro o las decenas de Cajas de Ahorro en España, utilizadas para financiar el desarrollo de las regiones del país. Los transportes están (y siguen estando), en su inmensa mayoría, en manos de empresas estatales. RENFE en España, SNCF en Francia o British Railways en Gran Bretaña, son algunos de estos enormes consorcios bajo control estatal, directo o indirecto.

En los años febriles de las privatizaciones en Latinoamérica, un país europeo marchaba en sentido opuesto: Francia. La patria del Estado moderno había sido pionera en promover el papel del Estado en la economía, desde los tiempos de Jean-Baptiste Colbert (1619-1683). En el siglo XX, la primera ola nacionalizadora de empresas se dio en 1936, con en Frente Popular; la segunda, tras la Segunda Guerra Mundial; la tercera es en 1982, con el gobierno socialista de François Mitterrand, que nacionaliza decenas de empresas, entre ellas 39 bancos.

El dogma privatizador llega a Europa Occidental en la década de los noventa del siglo XX, pero se tratará de privatizaciones llenas de

particularidades y con marcadas notas de nacionalismo económico, algo ausente totalmente en Latinoamérica. Una primera medida es que los gobiernos no privatizan indiscriminadamente, al estilo latinoamericano, sino que dividen las empresas en grupos, de forma que las de uno de esos grupos pueden ser privatizados casi totalmente; otras, solo parcialmente y las de un tercero, no pueden ser privatizadas. Todo ello sobre criterios de intereses estratégicos del Estado. El otro factor a señalar, es que no todos los países tienen igual fiebre privatizadora, sino que calibran lo que mejor les conviene. En la línea de hacerlo sin riesgo para los intereses del país, crean marcos legales que garanticen que las empresas a privatizar queden en manos y control nacionales, de forma que, de una u otra manera, sigan siendo empresas nacionales (una medida esencial para impedir que, por ejemplo, fueran descapitalizadas por consorcios extranjeros sin escrúpulos), pues no pocas de ellas son de tal envergadura que terminarán convertidas en empresas transnacionales. Además, privatizan con truco, como la llamada «acción de oro», puesta en práctica en 1993, en función de la cual el Estado se quedaba con entre el 5 y el 10 por 100 del valor de la empresa, pero, en función de la «acción de oro», su voto era decisivo en la empresa privatizada y tenía carácter de veto. España, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Francia, Portugal, Bélgica, etc., fueron algunos de los países que aplicaron la «acción de oro» en sus empresas. Bélgica emite dos Reales Decretos, en 1994, con base en los cuales el Ministerio de Energía belga queda autorizado a vetar cualquier venta, transferencia de instalaciones o decisiones de gestión sobre las empresas Société Nationale de Transport par Canalisations y Distrigaz, para impedir que esas operaciones «puedan poner en peligro el abastecimiento de gas natural en el país».

Las medidas de ese tipo no eran sino mecanismos para que los gobiernos pudieran mantener el control de empresas consideradas estratégicas para su economía, que es lo mismo que decir mantener el control sobre su economía. La razón es tan evidente y simple que permite dejar en evidencia la irresponsabilidad extrema –por no llamarla traición– de los gobiernos latinoamericanos, que privatizaron sin pensar, en absoluto, en los intereses estratégicos de sus países. Si, como ocurrió en Latinoamérica, las áreas estratégicas de una economía nacional están en manos de corporaciones transnacionales –corporaciones a las que solo les interesan sus propios márgenes de beneficio–, ¿cómo puede un Estado o un gobierno atender los

intereses nacionales, garantizar los derechos de su población o elaborar planes nacionales que potencien el desarrollo nacional? (Véanse, si no, los problemas tremendos que lleva años sufriendo Argentina en el abastecimiento energético, resultado de las políticas desastrosas de privatización de la época de Menem, que quebrantó el sistema nacional y dejó en manos de una empresa extranjera ese recurso vital, renacionalizado, como ya se vio, en 2012, por la presidenta Cristina Fernández, hoy vicepresidenta de Argentina.) Incluso se llegó a promover, en el afán de que las empresas privatizadas quedaran en manos nacionales, el llamado «capitalismo popular», que consistía en emitir paquetes de acciones para venderse a los ciudadanos de a pie. Las privatizaciones, por tanto, se hacen con el propósito claro de que los consorcios estatales queden, por una parte, en manos nacionales y, por otra, reservándose el Estado un peso decisivo en ellos. Privatizar, pero dejando a las empresas en casa y bajo control y supervisión de entes estatales, de forma que las empresas privatizadas sigan respondiendo a los intereses nacionales, como en buena lógica debe ser, tomando en cuenta el papel económico, pero también social, que los grandes y medianos consorcios tienen en cada país.

El papel vigilante y rector del Estado en las economías desarrolladas puede verse de mil formas y colores, para quien quiera ver, obviamente. De forma regular, los medios de comunicación dan cuenta de la intervención de los Estados en operaciones económicas que consideran pueden afectar los intereses del país, sobre todo en los casos de intentos de adquisición de empresas nacionales por consorcios extranjeros, particularmente cuando el consorcio en cuestión proviene de un país «no tan amigo», como pueden ser Rusia o China. Así, cuando en 2006 Severstal, la mayor empresa rusa del acero, quiso fusionarse con el gigante europeo Arcelor (que, a su vez, había nacido de la fusión de Aceralia de España, Arbed de Francia y Usinor de Luxemburgo), los gobiernos de estos tres países rechazaron a Severstal por consideraciones políticas, optando porque Arcelor fuera adquirida por la india Myttal, por pasar India el tamiz político. El hecho puso de manifiesto que, en la Unión Europea, siguen latiendo criterios de la Guerra Fría, que llevan a ver en Rusia un adversario potencial que no podía adueñarse de una empresa estratégica.

Caso similar fue el de la petrolera estatal china CNOCC, en su intento de adquirir la estadounidense Unocal, en 2005. El gobierno estadounidense

rechazó la oferta de compraventa, prohibiendo a la empresa china la adquisición de Unocal. En 2016, el gobierno alemán impidió que la empresa fabricante de microchips Aixtron fuera adquirida por el grupo Fujian Gran Chip Investment de China. Ese mismo año, Alemania aprobó una ley otorgando más poderes al Ejecutivo para estudiar y, en su caso, imposibilitar, inversiones no procedentes de la UE. La guerra de Donald Trump contra la china Huawei, en marcha desde 2018, es el último y más sonado ejemplo de intervencionismo estatal en el ámbito comercial y empresarial. También se produce entre socios: Bruselas vetó, en febrero de 2019, la fusión de la multinacional francesa Alstom y la alemana Siemens, por considerar que afectaría la libre competencia en el mercado ferroviario. Y así, un listado casi interminable.

No responden, estas conductas, a prácticas aisladas o puntuales, sino todo lo contrario. Son la parte visible de unas políticas hondamente enraizadas en Europa, una región donde la prosperidad de los países y el bienestar de las sociedades han estado vinculados al control de la economía con la mano férrea del Estado. El diario español El País, en un artículo titulado «Europa blinda sus empresas nacionales», del 5 de marzo de 2006, resumía así esta concepción de la política en la economía:

> En Francia lo llaman «patriotismo económico»: si una empresa extranjera intenta hacerse con una compañía de «bandera» o tomar posiciones en un mercado estratégico, adoptan las medidas económicas y legales necesarias para frenarla. La OPA [oferta pública de adquisición] de la alemana E.ON sobre Endesa y el frenazo francés a la italiana Enel han vuelto a poner de manifiesto la disposición de los gobiernos de Europa continental a controlar la entrada de capital extranjero en empresas nacionales. Alemania e Italia, ahora perjudicadas por las reacciones de España y Francia, también han tomado sus propias medidas proteccionistas, y lo mismo ha hecho Estados Unidos.

¿Cosa de la pasada década? En absoluto. En febrero de 2019, el gobierno alemán presentó un plan denominado Estrategia Industrial Nacional 2030, consistente en otorgar al Estado derechos para comprar acciones o participaciones en sectores considerados claves para la economía, de forma que el Estado garantice su control. De esa manera se podrá impedir su venta a inversores considerados no confiables o que empresas públicas de otros países pasen a controlar empresas alemanas estratégicas. El ministro de Economía, Peter Alkmaier, presentador oficial del plan, hizo mención

expresa de algunas de las compañías que serían puestas bajo «protección» del Estado alemán: Siemens, Deutsche Bank, Thyssenkrupp, así como empresas de robótica, aluminio, químicas, acero, aeroespaciales, inteligencia artificial y automovilísticas. Para resumirlo, toda la espina dorsal del poder industrial y científico-técnico alemán.



Peter Altmaier
Federal Minister for Economic Affairs and Energy

National Industrial Strategy 2030

Strategic guidelines for a German and European industrial policy

El plan de estrategia industrial de Alemania hasta 2030.

En Latinoamérica ha ocurrido todo lo contrario. En la década de los 80, pero sobre todo en la década de los 90, guiados por los reflejos condicionados adquiridos desde la independencia, gobiernos y oligarquía volvieron a sacrificar a los Estados, ofreciendo «el oro desentrañado de las montañas de los países» a los «laboriosos» extranjeros que, ayer como hoy, no están interesados en el desarrollo y fortalecimiento de los Estados latinoamericanos (y africanos y asiáticos), sino en maximizar sus beneficios y enviarlos a sus casas matrices. Es un «más de lo mismo», tan vigente hoy como hace casi doscientos años. Las privatizaciones, en Latinoamérica, solo fueron un disfraz para ocultar un nuevo y aún mayor expolio de la región, desindustrializar los países en lo poco que habían avanzado y profundizar el modelo de imperialismo informal, que hace del control de las economías el medio idóneo para mantener el control político. Las empresas nacionales, sean estatales o privadas, han sido vendidas, con escasas excepciones, a empresas extranjeras, muchas de ellas consorcios estatales privatizados (como Telefónica o Repsol), y el Estado, como actor o controlador, desaparece del escenario, dejando que las empresas extranjeras manejen a su antojo las nuevas adquisiciones y a los propios países.

En su condición de empresas extranjeras guiadas por el beneficio, su primer objetivo es recuperar la inversión realizada y garantizar la repatriación de la misma, así como la remisión de los beneficios obtenidos. A tal proceden, y el empobrecimiento de los pueblos es general. Recursos que antes iban, de una u otra forma, a las arcas de los Estados, viajan ahora a las casas matrices de las transnacionales, para hacer aún más ricos a los ricos. O simplemente las compran para luego revenderlas (Telefónica de España adquirió casi el 50 por 100 de las telecomunicaciones celulares de Centroamérica en los años noventa y entre 2018 y 2019 vendió todas sus filiales, al considerar que era mejor invertir su dinero en otros mercados).

Los gobiernos, sin peso propio ni control de las economías, se convierten más que nunca en lo que Marx llamó «consejos de administración» del capitalismo foráneo. Dejan –en nombre del libre mercado– que las transnacionales subordinen al interés privado sectores esenciales de la vida nacional, como energía, telecomunicaciones, agua o sistemas bancarios. Ilustrativo es el caso de la multinacional francesa Suez en Argentina, donde presionó cuanto pudo al gobierno para que autorizara un aumento de las tarifas del agua, privatizada durante el gobierno de Menem, aunque no

había invertido prácticamente nada en mejorar el servicio a la población. La actitud enérgica de Néstor Kirchner evitó el alza y, finalmente, en octubre 2006, el gobierno argentino rescindió el contrato de treinta años. El gobierno de Buenos Aires siguió sus pasos, quitando a Aguas del Gran Buenos Aires (AGBA) la última concesión privada que quedaba en la provincia, pasando el suministro a la empresa estatal Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA). Estos casos ilustran la relevancia del Estado en el control de los servicios básicos, imprescindible para garantizar tales servicios a la población.

Ahora comparemos el caso de Alemania con lo que ha ocurrido en México, a partir de 1994, con la entrada en vigor del TLCAN. Según la Oficina de Control de Moneda de Estados Unidos, México posee una de los porcentajes más altos del mundo en capital extranjero dentro del sector bancario, esto es, un 70 por 100. El sector refrescos lo controlan Coca Cola y Pepsi Cola hasta en un 89 por 100. Las marcas más señeras de la bebida alcohólica nacional mexicana, el tequila, está en manos de empresas extranjeras. La FAO ha advertido de los riesgos que corre México en el ámbito alimentario, al constatar que el país depende en casi un 50 por 100 de las importaciones, procedentes, casi todas, de Estados Unidos. México sería, después de Japón, el segundo mayor importador de alimentos per cápita del mundo. Según el experto Manuel Villa Issa, tomando como base los datos de la FAO, «México estaría importando en dieciocho años más del 80 por 100 de los productos que consume la población, si no se modifica de manera radical su política alimentaria». Del sector automotor queda poco que decir. Aunque el país aparece como uno de los mayores fabricantes mundiales de vehículos, son todo franquicias de multinacionales. De igual manera, el sector de maquinaria pesada está dominado, casi en su totalidad, por Estados Unidos y Japón. Con la excepción de Pemex, la economía mexicana no existe. Es una derivación de la de Estados Unidos.

¿Y qué decir de Chile, la niña bonita de Europa y Estados Unidos? Un panorama similar al de México. Las diez primeras empresas del país son todas filiales de multinacionales extranjeras, de forma que, su economía, como la mexicana, depende de empresas extranjeras. Casi todo el sector eléctrico está en manos de la empresa estatal italiana ENEL; Escondida, la mayor empresa minera chilena, es propiedad de la transnacional anglo-australiana BHP; la siguiente minera, Collahuasi, está controlada por Anglo

American (44 por 100), Glencore (44 por 100) y Japan Collahuasi Resources (12 por 100); les siguen la australiana Xstrata Copper Chile y Banco Santander. No debe extrañar, por tanto, que exista entre los poderosos del mundo tanto gozo por la forma en que los gobiernos chilenos administran la economía del país (un modelo económico que hace aguas por todos lados y que está en la base de la explosión social que vive el país desde octubre de 2019).

Como puede colegirse, las tareas pendientes son enormes. Y no se trata de ir contra la inversión extranjera, a la que tampoco conviene mitificar. Hay una que resulta imprescindible: la inversión extranjera productiva, de largo plazo, que crea fuentes de trabajo estable, transfiere tecnología y se incorpora, por eso mismo, a los procesos de crecimiento y desarrollo de un país. Hay otra que sobra, que es dañina como la peste: la inversión extranjera –o nacional– especulativa, que medra sobre las débiles instituciones de los países para obtener concesiones o contratos leoninos, que entra para extraer todos los beneficios que pueda, para luego salir huyendo, sin importarle los daños y desastres que haya podido provocar. Es la del «toma el dinero y corre», que ha padecido toda la región, especialmente países como Argentina o Venezuela, saqueados de manera inmisericorde en tiempos pasados y, lamentablemente, tan presentes como hace 50 años, 100 años, 200 años…

Se trata, más bien, de fortalecer el papel del Estado en la economía, de crear sectores nacionales fuertes y proteger los procesos de industrialización que den autonomía económica a los Estados. Lo que enseña una regla de oro: sin economía no hay soberanía y, si las empresas extranjeras controlan los grandes sectores económicos de un país, el país seguirá existiendo, pero no será soberano, ni podrá decidir sobre lo que le interesa a su pueblo y a su propia situación en el mundo.

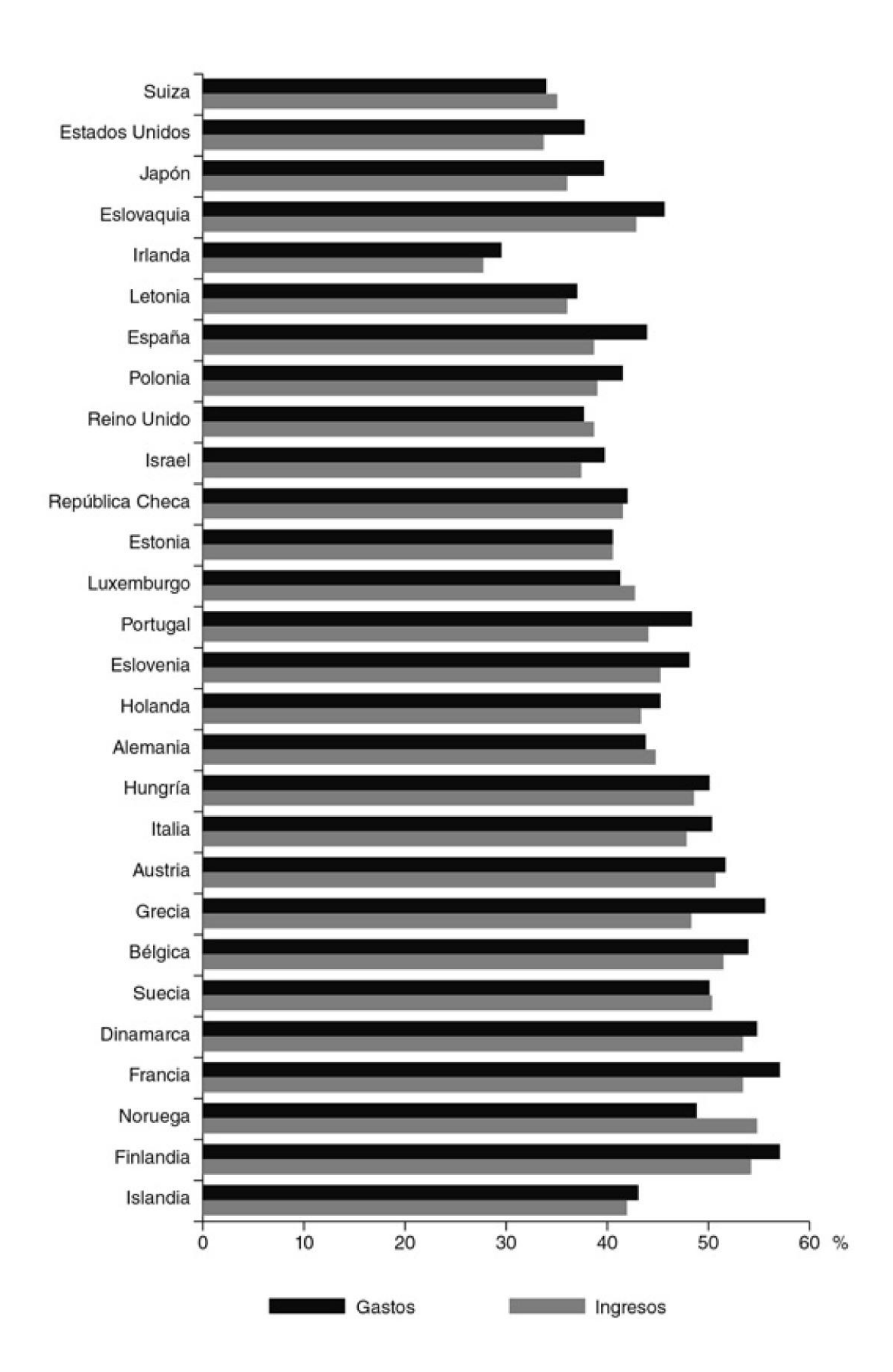
Ahora unas pocas palabras sobre el papel del Estado en la economía… de los países ricos. Ya citamos la afirmación de Ronald Reagan sobre el papel del Estado. ¿Qué hizo Reagan contra el Estado? La respuesta nos la da John Kenneth Galbraith, el reputado asesor del presidente John Kennedy, en su obra *Un viaje por la economía de nuestro tiempo:*

> Dado el papel de apoyo que representó el gasto público, el presidente Reagan fue el keynesiano más claramente comprometido desde los años de Kennedy, quizá incluso

desde el propio John Maynard Keynes. Si Keynes hubiera estado todavía vivo, se habría sorprendido bastante con sus discípulos más recientes.

Ya sabemos que Keynes fue el economista que sostuvo, por vez primera, que, en caso de crisis, los gobiernos debían estimular la demanda en la economía y que la mejor manera de hacerlo era utilizando la política fiscal o el déficit público. Que el paro no reflejaba una escasez de recursos, sino de demanda de los productos que se producían con esos recursos. Que si los salarios subían, los empresarios contratarían a menos trabajadores, pero más gente querría trabajar. Que esta contradicción la podían resolver los gobiernos con políticas económicas, estimulando la demanda, bien con bajadas de los tipos de interés, bien con devaluaciones. Fue siguiendo a Keynes que el presidente Roosevelt combatió la Gran Depresión, creando empleo con fondos públicos para que, inyectando dinero al mercado con los salarios, se reactivara la demanda y las fábricas produjeran más y etcétera. Fue eso, exactamente, lo que hizo Ronald Reagan, pese a su demonización del Estado. Pero, como comentara Galbraith, «lo que cuentan son las acciones prácticas, y el efecto estimulante de los gastos efectuados por el Gobierno [de Reagan] durante esos años no puede ponerse en duda». Que obras son amores y no buenas razones. Ahora bien, nos dice Galbraith, «el logro más evidente de la política de Reagan fue el aumento de la fortuna de los acaudalados y de los ricos, mientras los pobres quedaban abandonados». ¿Les suena de las políticas neoliberales de antes y de ahora? Este cuadro sobre el papel del Estado en la economía de los países ricos da una idea gráfica sobre la importancia decisiva que tiene en cada país:

Ingresos/gastos públicos en relación con el PIB (2015)


Suiza
Estados Unidos
Japón
Eslovaquia
Irlanda
Letonia
España
Polonia
Reino Unido
Israel
República Checa
Estonia
Luxemburgo
Portugal
Eslovenia
Holanda
Alemania
Hungría
Italia
Austria
Grecia
Bélgica
Suecia
Dinamarca
Francia
Noruega
Finlandia
Islandia
0
10
20
30
40
50
60 %
Gastos
Ingresos

Como puede verse, en todos ellos, con excepción de Irlanda, el Estado mueve cuando menos un 30 por 100 del PIB, una buena parte representa el 40 por 100 y, en el caso de Suecia, Dinamarca, Francia, Noruega, Finlandia e Islandia, el porcentaje del Estado en la economía nacional supera el 50 por 100. Estos países están –y no es casualidad– entre los más igualitarios del mundo. Sobran las palabras, salvo estas. Los países ricos, esos que controlan el FMI y el Banco Mundial, entre otros mecanismos, aplican la regla del «Has lo que yo digo, pero no lo que yo hago». Así, ellos cada vez más ricos y nuestros países cada vez más pobres y desiguales, en comparación con ellos, claro.

EMPRESAS PÚBLICAS EUROPEAS

Las mayores economías de la Unión Europea descansan en el papel rector del Estado en la economía, como evidencian estos datos:

En Francia, la Agencia de las Participaciones del Estado, administra las inversiones en 81 empresas nacionales, doce de las cuales tienen, en bolsa, un valor de 75.000 millones de euros. Las mayores inversiones públicas se encuentran en EDF, cuyo 83,5 por 100 de acciones corresponde a capital público y cuyo valor de mercado es de 28.000 millones de euros; Aéroports de Paris (ADP), con un 50,6 por 100 de capital público y un valor de 9.750 millones; Airbus, con el 11 por 100 de acciones y un valor aproximado de 9.000 millones. Hay, también, inversiones públicas en Engie, Thales, Safran y Orange, que superan los 5.000 millones de euros. Dentro de la lista de 81 compañías participadas por el Estado francés se encuentran, France Telecom –principal operador de telefonía del país–; Renault, uno de los mayores consorcios automovilísticos del mundo; Air France y, claro, en Electricité de France, la principal empresa del país en su ramo.

En Alemania, destaca la participación estatal el mayor fabricante de automóviles, el Grupo Volkswagen; en el gigante de las comunicaciones, Deutsche Telekom; en RWE, segundo productor de energía alemán; y en Salzgitter, un consorcio dedicado a la industria siderúrgica. El profesor Reint Gropp, presidente del Instituto Hall para la Investigación Económica (IWH) de Alemania, resume el papel del Estado en el sector bancario: «Los bancos públicos de ahorro tienen claras reglas de juego. Por ejemplo, para favorecer el desarrollo regional pueden prestar a empresas en su zona, pero no de otra región. El gobierno tiene representantes en estos bancos que son fundamentales en la toma de decisiones. Un principio rector de su política crediticia es el mantenimiento del empleo», expresa Gropp.

COLOFÓN CON LÁPIDA

Necesitamos bajar a los libertadores de sus inmerecidos pedestales. Solo así podremos desnudar de raíz lo que fueron y significaron los mal llamados procesos de independencia, que solo lo fueron formales. La profundidad del daño causado por las castas oligárquicas que tomaron el poder (y a las que pertenecían los supuestos libertadores) ha sido tal, que nuestros pueblos y países siguen pagando por ello. Hay que enterrar la mitología histórica para poder desenterrar la historia real, la que explica por qué nuestros países son la ruina interminable que son desde hace más de dos siglos. Es preciso enterrar a los libertadores para liberarnos nosotros. Poner fin a esa mitología histórica para empezar a construir nuestra historia, una nuestra, real y tangible, sin castas oligárquicas ni imperios funestos.

¿Podremos o seguiremos atados a las espuelas de quienes nos sumieron en el atraso, la dependencia y la miseria?

BIBLIOGRAFÍA

Abbott, E. A. *Flatland,* CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016 [trad. cast.: *Planilandia*].

Aguas, J. y Nahuelpan, H., «Los límites del reconocimiento indígena en Chile neoliberal. La implementación del Convenio 169 de la OIT desde la perspectiva de dirigentes Mapuche Williche», agosto de 2018, disponible en [https://www.researchgate.net/publication/327629125_articulo_de_investigacion_Los_limites_del_reconocimiento_indigena_en_Chile_neoliberal_La_implementacion_del_Convenio_169_de_la_OIT_desde_la_perspectiva_de_dirigentes_Mapuche_Williche].

Albert, M., *Capitalismo contra capitalismo,* Barcelona, Paidós, 1992.

Arendt, H., *Los orígenes del totalitarismo,* Madrid, Alianza, 2006.

Benedictow, O. J., *La peste negra, 1346-1353,* Madrid, Akal, 2011.

Bolaños, P., *Génesis de la intervención norteamericana en Nicaragua,* Managua, Editorial Nueva Nicaragua, 1984.

Bosch, J., *De Cristóbal Colón a Fidel Castro,* Madrid, Alfaguara, 1970.

Bustelo, P., *La industrialización en América Latina y Asia Oriental,* Madrid, Editorial Complutense, 1994.

Cameron, R., H*istoria económica mundial,* Madrid, Alianza, 3.ª reimpresión, 2003.

Cardenal, E., *El Estrecho Dudoso,* Madrid, Visor, Madrid, 2007.

Cardoso, E. y Helweg, A., *La economía latinoamericana,* México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

Casarin Barroso, J. C., «Brasil, entre los biocombustibles y el hambre», *Safe Democracy Foundation,* abril de 2007.

Castells, M., *Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial, Santiago de Chile,* Fondo de Cultura Económica, 1.ª reimpresión, 2006.

Conrad, J., *El corazón de las tinieblas,* Madrid, Alianza, 1999.

Cuadra Pasos, C., *Obras,* Managua, Colección Cultural, Banco de América, 1976.

Cheng, Ch., *La reforma agraria en Taiwán,* Madrid, Compañía China de Publicaciones, 1964.
Deutsch, K., *Análisis de las relaciones Internacionales,* México, Gernika, 1990.
Díaz del Castillo, B., *Historia verdadera sobre la conquista de la Nueva España,* Barcelona, Plaza & Janes, 1999.
Dodero, A. y Murat, I., *Argentina. Los años dorados (1889-1930),* Buenos Aires, El Milagro, 2010.
Dolores Gámez, J., *Historia Moderna de Nicaragua,* Managua, Colección Cultural, Banco de América, 1975.
Dorfman, A., *Historia de la industria argentina,* Buenos Aires, Ediciones Solar, 1.ª reimpresión, 1982.
Enzensberger, H. M., *Perspectivas de guerra civil,* Barcelona, Anagrama, 1994.
Fagerstrom, R. P., *Reseña de la colonización de Chile,* Editorial Andrés Bello, 1989.
Fazio, H., *Chile en el periodo de las vacas gordas,* Santiago de Chile, Cenda, 2007.
Fraser, R., *La maldita guerra de España,* Barcelona, Crítica, 2013.
Galbraith, J. K., *La cultura de la satisfacción,* Barcelona, Ariel, 1992.
—, *Breve historia de la euforia financiera,* Barcelona, Ariel, 1993.
Galeano, E., *Las venas abiertas de América Latina,* México, Siglo XXI, [47]1986.
García Cárcel, R.(coord.), *Historia de España. Siglo XVIII. La España de los Borbones,* Madrid, Cátedra, 2002.
González Martínez, E. y Merino Hernando, A., *Las migraciones internacionales,* Madrid, Dastin, 2006.
Guardia, M. de la, *Las Leyes de Indias,* Madrid, 1889.
Guasch, J., *Bolívar, el eterno traicionado,* Barcelona, Nauta, 1973.
Haro Tecglen, E., *Diccionario político,* Barcelona, Planeta, 1995.
Harvey, R., *Los libertadores,* Barcelona, RBA, 2002.
Heilbroner, R., *El capitalismo del siglo XXI,* Barcelona, Península, 1996.
Hobsbawn, E., *La era del Capital,* Barcelona, Crítica, 1998.
Jenkins, Ph., *Breve historia de Estados Unidos,* Madrid, Alianza, 2002.
Kenwood, A. G. y Lougheed, A. L., *Historia del desarrollo económico internacional,* Madrid, Istmo, 1995.

Klipphan, A. y Enz, D., *Tierras S.A. Crónicas de un país rematado,* Buenos Aires, Aguilar, 2006.
Landes, D. S., *La riqueza y la pobreza de las naciones,* Barcelona, Crítica, 1999.
Lucena Salmoral, M., *Rivalidad colonial y equilibrio europeo siglos XVII-XVIII,* Madrid, Síntesis, 1999.
— (coord.), *Historia de Iberoamérica,* 3 vols., Madrid, Sociedad Estatal para el Quinto Centenario, 1992.
Lynch, J., *La España del siglo XVIII,* Barcelona, Crítica, [2]1999.
Madison, A., *La economía mundial: una perspectiva milenaria,* Madrid, Mundi-Prensa, 2002
Malmberg, B., *La América hispanohablante,* Madrid, Istmo, 1996.
Mariátegui, J. C., *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana,* México, Era, 2002.
Marichal, C., *Historia de la deuda externa de América Latina,* Madrid, Alianza, 1988.
Martínez Peláez, S., *La patria del Criollo,* Editorial Universitaria Centroamericana, 1983.
Marx, K. y Engels, F., *Manifiesto comunista,* Madrid, Akal, 2004.
Mateo, L. M., «En la línea de fuego. Los negros y las políticas de negación», enero de 2015, disponible en [http://defensanacional.foroactivo.com/t9521-en-la-linea-de-fuego-los-negros-y-las-politicas-de-negacion].
Mayorga, F., «La propiedad de tierras en la colonia», *Credencial,* octubre de 2016.
Mijares, A., *El Libertador,* Caracas, Academia Nacional de la Historia/Ediciones de la Presidencia de la República, 1987.
Moreno-Sáenz, L. I.; González-Andrade, S. y Matus-Gardea, J. A., «Dependencia de México a las importaciones de maíz en la era del TLCAN», *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas* 7, n.º 1 (1 de enero-14 de febrero de 2016), disponible en [https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5369277.pdf]
Murgueitio Manrique, C. A., «El proceso de desamortización de las tierras indígenas durante las repúblicas liberales de México y Colombia, 1853-1876», *Anuario de Historia Regional y de las Fronteras* 20 (2014).

Navarro García, L. (coord.), *Historia de las Américas,* 4 vols., Madrid, Sociedad Estatal para el Quinto Centenario, 1991.

Neruda, P., *Canto General, Obras completas,* tomo I, Madrid, RBA/Instituto Cervantes, 2005.

Nishijima, S., «Desarrollo económico y política industrial de Japón», *Ribe Discussion Paper Series* 246 (diciembre de 2009), disponible en [https://www.rieb.kobe-u.ac.jp/academic/ra/dp/English/dp246.pdf].

Perriere, H., Pascual, J. I. y Cascallar, G., «Una dependencia anunciada: la influencia británica y la deuda en la formación de la economía argentina», diciembre de 2018, disponible en [https://www.laizquierdadiario.com/Una-dependencia-anunciada-la-influencia-britanica-y-la-deuda-en-la-formacion-de-la-economia].

Piqueras, R. (ed.), *La conquista de América,* Barcelona, Península, 2001.

Ramos, A., *Historia de la Nación Latinoamericana,* Buenos Aires, A. Peña Lillo editor, 1968.

Renouvin, P., *Historia de las Relaciones Internacionales,* Madrid, Akal, 1982.

Roitman, M., *Por la razón o la fuerza. Historia de los golpes de Estado, dictaduras y resistencia en América Latina,* Madrid, Siglo XXI de España, 2019.

Rostov, W. W., *Las etapas del crecimiento económico,* Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993.

Roux, J. C., «De los límites a la frontera: o los malentendidos de la geopolítica amazónica», *Revista de Indias* LXI, n.º 223 (2001).

Sánchez, G., *La Patagonia vendida: los nuevos dueños de la tierra,* Buenos Aires, Marea, 2006.

Sánchez, L. A., *Historia General de América,* Madrid, Ediciones Rodas, [10]1972.

Sanfuente, A., «La deuda pública externa en Chile entre 1818 y 1935», disponible en [http://econ.uchile.cl/uploads/publicacion/eac487bd-117e-484f-a348-440d5b1ab0b1.pdf].

Santamaría, A., «Reformas coloniales, economía y especialización productiva en Puerto Rico y Cuba», *Revista de Indias* 65, n.º 235 (2005).

Sarmiento, D. F., *Facundo, Civilización y barbarie,* México, Porrúa, 1966.

Selser, G., *El Guatemalazo,* Buenos Aires, Ediciones Iguazú, 1961.

Sichar, G., *Masacres en Guatemala,* Guatemala, Editorial Estudiantil Fénix, 2000.
Smith, A., *La riqueza de las naciones,* Madrid, Alianza, 1994.
—, *La teoría de los sentimientos morales,* Madrid, Alianza, 1997.
Smith, T., *Los modelos del imperialismo,* México, Fondo de Cultura Económica, 1984.
Taylor, P., *Geografía Política,* Madrid, Trama, 1994.
Thurow, L., *La guerra del siglo XXI,* Buenos Aires, Javier Vergara editor, 1992.
Toussaint, É., «La deuda y el libre comercio como instrumentos de subordinación en Latinoamérica desde su independencia», julio de 2016, disponible en [http://www.cadtm.org/La-deuda-y-el-libre-comercio-como].
Vilar, P., *Historia de España,* Barcelona, Crítica, 42004.
Villalobos, S. *et al., Historia de Chile,* Santiago, Editorial Universitaria, 2004.
Weber, M., *La* ética *protestante y el espíritu del capitalismo,* Madrid, Istmo, 1998.
Zepeda, J. (coord.), *Los amos de México,* México, Planeta, 2007.
Zinn, H., *La otra historia de Estados Unidos,* Hondarribia, Hiru, 21999.